

EUTOPIA-13

Revista de Desarrollo Económico Territorial - N.º 13 - junio 2018



FLACSO
ECUADOR

EUTOPIA 10

Director: Luciano Martínez Valle
Editor: Liosday Landaburo Sánchez

Comité editorial

Francisco Rhon Dávila (CAAP/FLACSO Ecuador);
Fernando Guerrero Cazar (PUCE Ecuador)
Cristina Cielo (FLACSO Ecuador)

Comité Asesor Internacional

Giancarlo Canzanelli, PNUD-ART Internacional, Bélgica
Geneviève Cortes, Université de Montpellier 3, Francia
Clara Craviotti, FLACSO, Argentina
Carmen Diana Deere, University of Florida, Estados Unidos
Arlison Favareto, Universidade do ABC, Brasil
Bert Helmsing, ISS, Países Bajos
Cristobal Kay, ISS, Países Bajos
Liisa North, York University, Canadá
Gerardo Otero, Simon Fraser University, Canadá
Juan Pablo Pérez Sáinz, FLACSO, Costa Rica
Sérgio Schneider, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Cuidado de la edición: Liosday Landaburo
Correctora de estilo: Alas Letras
Ilustración de portada: Antonio Mena
Diseño gráfico: Unidad Editorial FLACSO Ecuador
Imprenta: Editorial Ecuador

© De la presente edición:

FLACSO, Sede Ecuador

La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito, Ecuador
Telf.: (593-2) 294 6800
Fax: (593-2) 294 6803
www.flacso.org.ec
<http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/index>

ISSN: 1390 5708
Quito, Ecuador 2018
1ª edición: junio, 2018

Revista Eutopía hace parte de los siguientes índices y bases de datos

LATINDEX, Catálogo. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, de América Latina, el Caribe, España y Portugal-México
DOAJ, Directory of Open Access Journals
DIALNET
EBSCOhost Online Research Databases
ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
FLACSO-ANDES, Centro digital de vanguardia para la investigación en ciencias sociales - Región Andina y América Latina - FLACSO Ecuador
INFOBASE INDEX
ASI, Advanced Sciences Index
REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Índice

Presentación 5-7

TEMA CENTRAL

Continuidad y renovación en la acción colectiva de los ganaderos familiares del litoral noroeste de Uruguay 11-32
Virginia Courdin y Eric Sabourin

Mujeres y organización comunitaria. El caso de las palmeadoras de Tlaxiaco, Oaxaca, México 33-52
Tomás Ortega Ortega, Juan Felipe Núñez Espinoza, Verónica Vázquez García, Ivonne Vizcarra Bordi, Paola Ma. Sesia y Diego Flores Sánchez

La producción de líderes políticos situados en dos comunidades políticas mexicanas 53-70
Brenda Griselda Guevara Sánchez y Francisco Javier Verduzco Miramón

Gestión del agua en Azuay: base de la organización rural y la trascendencia hacia la incidencia nacional 71-88
Paola Pila Guzmán

Territorialidades campesinas en Loja, Ecuador: análisis de sus dinámicas organizativas a partir de tres casos 89-113
Marco Alvarado Torres

CONTRAPUNTO

Fortalecer los colectivos campesinos en los Andes ecuatorianos. Análisis desde las provincias de Chimborazo y Cotopaxi 117-133
Nasser Rebaï

ESTUDIO DE CASO

Contracercar, producir y resistir. La defensa de los bienes comunes en dos comunidades campesinas (Argentina) 137-155

Andrea Gómez Herrera, Cristián Jara, María del Huerto Díaz Habra y Ana Villalba

El rol de Emiliano como mediador: prácticas organizativas de los campesinos en los proyectos estatales 157-173

Jimena Ramos Berrondo

RESEÑAS

Germán Carrillo García

Desarrollo rural y cooperativismo agrario en Ecuador. Trayectorias históricas de los pequeños productores en la economía global 177-180

Esteban Daza

POLÍTICA EDITORIAL 181-184

Presentación

El presente número de **Eutopía** aborda el tema de los cambios y continuidades de las organizaciones rurales, un aspecto clave tanto para las estrategias de los actores sociales como para las políticas públicas relacionadas con los territorios rurales. Después de varias décadas de políticas de desarrollo rural, cabe preguntarse acerca de los aspectos que, desde una perspectiva histórica, se mantienen o bien cuáles han sufrido transformaciones relacionadas con factores tales como la modernización capitalista, la mercantilización de las economías comuneras, la ejecución de programas de desarrollo, las nuevas formas de organización política-administrativa de los territorios nacionales y la migración interna e internacional.

Durante los años 70 y 80 del siglo pasado se apostó desde el Estado y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al desarrollo rural como una estrategia para disminuir la pobreza anclada en el campo. Dentro de la arquitectura desarrollista, se consideraba central el rol de las organizaciones rurales que podrían convertirse en la contraparte privilegiada de los proyectos a implementarse. Esta “ola proyectista” que duró hasta bien entrado el siglo XXI al parecer no dio los resultados esperados, ni en el campo económico, ni en el organizativo. El predominio de la visión económica-productivista generó una espuria y coyuntural respuesta organizativa que respondía a la oferta masiva de proyectos, mientras se socavaban las ya débiles estructuras organizativas tradicionales. El resultado de esta experiencia “*top down*” fue un progresivo debilitamiento de las organizaciones de base o de segundo grado, muchas de ellas transformadas en ONG campesinas y sin la capacidad técnica para enfrentar a las políticas neoliberales que han campeado desde principios de este siglo en los territorios rurales.

La consolidación de un capitalismo agrario de corte neoliberal y la falta de apoyo del Estado han conformado un nuevo escenario en el que las organizaciones rurales se han modificado o adaptado a las nuevas reglas de juego que provienen de fuera de sus territorios e incluso del mercado global. En este contexto, cabe preguntarse sobre las características y modalidades de estos cambios o el surgimiento de otras formas organizativas más adaptadas a las nuevas condiciones económico-productivas existentes en los territorios rurales. Es preocupante que no se investigue sobre los cambios a nivel organizativo, especialmente, en el área andina. Al no disponer de estudios actualizados sobre las comunidades, con frecuencia se acepta que la organización comunitaria es un “fortín” donde se recrean las prácticas solidarias y de reciprocidad y por lo mismo, no habría sido afectada sino marginalmente

por el avance del mercado. La evidencia, al menos parcial, sobre áreas de comunidades en la sierra centro norte del Ecuador, indican al contrario, que las comunidades han sido afectadas profundamente, tanto en su organicidad interna como en sus funciones tradicionales.

En cambio, lo que se observa, mirando el conjunto de artículos presentados en este número de **Eutopía**, es que existe una variada gama de formas organizativas que responden a condiciones históricas específicas y a nuevas exigencias marcadas por las amenazas del capitalismo global. La mayoría de los artículos abordan el estudio de organizaciones que de una u otra forma responden a desafíos económicos presentes en sus territorios, mientras que las formas de organización varían desde las tradicionales hasta algunas de corte micro empresarial.

El primer artículo del Dossier analiza en base a las propuestas de Ostrom, la formación de colectivos de ganaderos familiares en el caso de Uruguay, como formas de acción colectiva. Muestra las ventajas de la formación de colectivos que surgen de forma endógena y que tienen una mayor sostenibilidad en el tiempo. Señala igualmente, el rol proactivo de las políticas públicas implementadas durante los gobiernos de izquierda que han facilitado la organización de estos productores familiares.

El segundo artículo examina el rol de las mujeres en la organización comunitaria en torno a la comercialización de las tortillas de maíz en el caso de Tlaxiaco en México. Este interesante y detallado artículo muestra la adaptación de las organizaciones de mujeres a las nuevas condiciones de mercado creadas por la globalización. Por un lado, han debido adaptarse a la elaboración de tortillas con maíz híbrido en lugar del maíz nativo, pero por otro, se han apropiado de los espacios mercantiles para la venta de tortillas, lo que significa una dinamización del mercado local.

El liderazgo político y sus efectos diferenciados en comunidades rurales de México es el tema abordado en el siguiente artículo. Entre los efectos de este tipo de liderazgo resalta la amenaza de división de la comunidad, las estrategias personales de los líderes y las respuestas que se elaboran internamente. A través de la utilización de una metodología etnográfica aplicada a los discursos de los líderes, los autores muestran los efectos diferenciados que deben enfrentar los líderes de las dos comunidades estudiadas ante la amenaza del mercado de tierras.

El siguiente artículo analiza el proceso de organización en torno al agua de consumo humano en el caso de la provincia del Azuay (Ecuador) que evoluciona desde un primer momento, en donde es importante la colaboración externa (ONG, cooperación internacional, Iglesia, etc.) a un segundo, donde es importante el apoyo del Estado y finalmente la articulación con instancias organizativas políticas a nivel nacional. El artículo final de esta sección muestra para el caso de la provincia de Loja (Ecuador) la distancia que existe entre un modelo organizativo predominante entre campesinos familiares minifundistas y que depende en gran parte de los caciques y los nuevos esfuerzos organizativos en torno a relaciones más horizontales, pero que no rebasan una dimensión local.

El artículo de la sección *Contrapunto* analiza la dependencia respecto a los insumos químicos, especialmente de pesticidas para controlar las plagas de los cultivos de hortalizas y de cultivos de papas en dos parroquias de la sierra ecuatoriana. En los dos casos, la falta de capital social no permite consolidar los “colectivos campesinos” para mejorar su situación alimentaria y ambiental, evitar el uso de los pesticidas y disminuir la dependencia de los ingresos que provienen de la producción mercantil.

Finalmente, en la sección *Estudios de caso*, se analiza las estrategias para enfrentar el despojo de bienes comunales a través del análisis de dos casos en Santiago del Estero (Argentina). Estas estrategias que adquieren la novedosa forma de “cercados materiales y simbólicos”, constituyen una respuesta frente a los conflictos por la tierra y también una modalidad de “reterritorialización” del espacio campesino. El segundo artículo de esta sección analiza el rol de los dirigentes campesinos en tanto “mediadores” en el interfaz existente entre la comunidad y los proyectos del Estado en el noroeste argentino (provincia del Chaco). A través del análisis pormenorizado del trabajo organizativo de un dirigente (Emiliano) de la Corriente Campesina Nacional, se evidencia tanto su profundo conocimiento del territorio y las necesidades de los actores sociales, así como el proceso de negociación permanente con las propuestas de desarrollo externas para impulsar las mejores opciones para los campesinos.

La variada gama de artículos de este número de **Eutopía** han sido abordados a través de metodologías cualitativas que permiten detectar las específicas respuestas organizativas que deben elaborar los productores rurales para frenar las tendencias desestructurantes de la globalización capitalista. No obstante, a pesar de la importancia estratégica de la organización rural en el caso de América Latina, todavía queda pendiente la realización de investigaciones que aborden en profundidad la estrecha relación entre los niveles organizativos, las políticas públicas y el territorio.

Luciano Martínez Valle



Tema central

Continuidad y renovación en la acción colectiva de los ganaderos familiares del litoral noroeste de Uruguay*

Continuity and renewal in the collective action of family cattle farmers of the northwest coast of Uruguay

Virginia Courdin** y Eric Sabourin***

Fecha de recepción: 5 de marzo de 2018

Fecha de aceptación: 23 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3290>

Resumen

La ganadería uruguaya ha brindado la imagen de productores independientes, aislados en explotaciones dispersas, sin organizaciones o colectivos que los agrupen. Sin embargo, es frecuente que los ganaderos familiares estén integrados a una o varias formas de colectivos de diversa naturaleza. Las transformaciones de los últimos años han desafiado a los Gobiernos de izquierda a encontrar herramientas adecuadas para aplicar políticas y apoyos diferenciales a ganaderos familiares, que permitan mejorar su competitividad y sostenibilidad. Una de ellas ha sido fomentar procesos asociativos, como eje transversal. Este estudio identifica y clasifica formas de acción colectiva existentes en el litoral noroeste del país, analizando los procesos a través de los cuales los individuos se implican en la acción colectiva. Mediante la consulta de fuentes secundarias y la realización de entrevistas, se identificaron cuatro formas de acción colectiva. Con base en ellas se observó que, para los ganaderos familiares, pasar de la acción individual a la colectiva fortalece los procesos de construcción de capital social, generando un ambiente favorable para que los involucrados mejoren sus condiciones económicas y sociales, e incluso modifiquen su situación de “debilidad” organizativa.

Palabras-chave: acción colectiva; ganadería; desarrollo rural; producción familiar

Abstract

Uruguayan cattle raising has provided the image of independent cattle farmers, isolated in scattered exploitations, without organizations or groups. However, reality shows that it is common for family cattle farmers to be integrated into one or several forms of groups of diverse nature. The transformations that have occurred in recent years have challenged left Governments to find the right tools to apply policies and differential support to family cattle farmers, which allows them to improve their competitiveness and sustainability. One of the strategies is the promotion of associative processes as a transversal axis. This study identifies and classifies existing forms of collectives in the northwest coast of the country, analyzing the processes through which individuals are involved in collective action. The identification of four types of collective action is the result of the review of secondary sources and the interviews conducted. This reveals that, for family cattle farmers, moving from individual to collective action strengthens the processes of building social capital, generating a favorable environment for those involved to improve their economic and social conditions, and even modify their organizational “weakness” situation.

Key words: cattle raising; collective action; family production; rural development

* La información presentada en este artículo ha sido generada en el marco de los proyectos INIA-FPTA 308 y ECOS (U140H), a quienes agradecemos su financiación.

** Asistente de Economía Agraria del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía (Fagro) de la Universidad de la República (Udelar). Doctoranda en Ciencias Agrarias por la Fagro-Udelar. Correo: vcourdin@fagro.edu.uy

*** Investigador CIRAD UMR ART-dev. Profesor visitante en el Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Brasilia. Correo: eric.sabourin@cirad.fr

Introducción

La ganadería en Uruguay ha sido percibida, tradicionalmente, como un sector individualista y desorganizado, en el que las actividades colectivas parecen desarrollarse de forma aislada y solo entre algunos productores (Larrambebere 2009). Sin embargo, si se considera la alta vulnerabilidad externa de las explotaciones familiares en cuanto a factores que inciden en el beneficio económico (condiciones climáticas, variaciones de precios, políticas sectoriales, etc.) y aspectos sociales de su desarrollo (acceso a los recursos básicos: educación, salud, electricidad, vivienda, etc.), no debería sorprender el interés de los productores por articularse colectivamente e involucrarse en múltiples formas asociativas.

Se entiende por acción colectiva la acción o serie de acciones que realiza un grupo de individuos para alcanzar un objetivo o interés común (Ostrom 2000). Por tanto, si se piensa en los quehaceres cotidianos de la vida rural, la experiencia empírica demuestra la existencia de una acción colectiva en la ganadería, particularmente en la familiar, donde la ayuda entre “vecinos” forma parte del cotidiano (en tareas como yerras, esquilas, alambrados, etc.). La carencia en el país de estudios referidos a la acción colectiva de ganaderos familiares¹ motivó este estudio, en el entendido de que posibilita no solo el desarrollo y la viabilidad del sector, sino el mantenimiento del tejido rural, de forma dinámica y vital para su subsistencia.

La noción de colectivos o formas de acción colectiva refiere a la capacidad de un determinado número de personas de autoorganizarse o desarrollar una acción conjunta, ya sea formal o informal, con o sin estatutos. Esta investigación se focaliza en la ganadería familiar del litoral noroeste del país, procurando identificar y clasificar las formas de colectivos existentes, así como analizar los procesos a través de los cuales los individuos se implican en la acción colectiva. Dicha contribución favorecería la comprensión de estas estrategias, para mejorar las intervenciones públicas y privadas orientadas a promover el desarrollo rural sustentable.

De acuerdo con la teoría, al pasar de la acción individual a la colectiva se fortalecen los procesos de construcción de capital social, entendido como un conjunto de recursos que poseen los individuos, que facilita la cooperación (Ostrom y Ahn 2003). Ello genera un ambiente favorable para que los involucrados mejoren sus condiciones económicas y sociales, e incluso modifiquen su situación de “debilidad” organizativa. Sin embargo, para que exista acción colectiva no basta con que los individuos estén organizados o asociados de manera conjunta, con base en un objetivo común (Olson 1992). Según Ostrom (2000), son necesarios procesos de reconocimiento mutuo, de confianza, de reciprocidad y construcción de una identidad común, que son parte de lo que ella llama los atributos de los actores. En su trabajo sobre la gestión de los sistemas colectivos de riego, Ostrom identifica

1 Los estudios que existen están vinculados mayormente a la lechería.

tres procesos de construcción de la acción colectiva y del capital social: la delegación de poder y de responsabilidad, el aprendizaje y la capacidad de adaptar nuevas reglas (Ostrom 1992).

En este artículo se parte de las categorías de Ostrom (1992, 2000) para caracterizar las formas de acción colectiva entre los ganaderos familiares. La recogida de datos incluyó el análisis de fuentes secundarias (documentos institucionales y material de divulgación) con el fin de elaborar un listado de colectivos, y la realización de entrevistas para profundizar en la caracterización de cada colectivo. Primero, fueron realizadas 30 entrevistas a informantes calificados² (sobre todo, técnicos de instituciones agropecuarias con mayor presencia o acción en el territorio, técnicos privados, técnicos privados vinculados a los programas y proyectos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –MGAP–, y productores referentes reconocidos por su trayectoria). Por último, fueron entrevistados 50 representantes de los colectivos identificados. Su selección tuvo en cuenta tres aspectos: i) el conocimiento del territorio, ii) la vinculación con colectivos y iii) la perspectiva de género y los perfiles etarios. A partir de la información recolectada, se elaboró una tipología, basada en el reagrupamiento de casos en función de la asociación y el ordenamiento de las variables reveladas.

El artículo se divide en tres partes. La primera trata el contexto y los antecedentes de organización de productores. La segunda presenta la tipología y los cuatro tipos de formas de acción colectiva: 1) colectivos básicos; 2) colectivos integrales; 3) colectivos económicos y 4) colectivos productivos. La tercera parte analiza y discute los resultados, a la luz de las nuevas dinámicas institucionales y productivas en Uruguay.

En este artículo se parte de las categorías de Ostrom (1992, 2000) para caracterizar las formas de acción colectiva entre los ganaderos familiares.



El contexto y su evolución

En Uruguay, las formas asociativas vinculadas a la producción familiar son de larga data. Los primeros antecedentes (a comienzos de 1900), buscaban superar las restricciones y desafíos que planteaban los mercados agropecuarios. Posteriormente, comenzaron a atender los desafíos de los procesos de modernización tecnológica, que podían tener consecuencias

² Su elección tuvo en cuenta tres aspectos: i) el conocimiento del territorio, ii) la vinculación con colectivos y iii) la perspectiva de género y los perfiles etarios.

excluyentes para la producción familiar, por sus exigencias de escala y capital. También, a afrontar la articulación para ganar poder negociador o competitividad frente a otros actores empresariales, y a incorporar una creciente agenda de temas vinculados al desarrollo rural (Programa FIDA MERCOSUR CLAEH 2014). Dentro de ellas, la Comisión Nacional de Fomento Rural ha jugado un rol clave, no solo como reivindicadora de la producción familiar; sino como red de organizaciones de base, ubicadas en todo el territorio nacional, que ha fomentado la integración de los productores familiares de todos los sectores productivos (excepto el arroz), procurando mejorar su calidad de vida.

En la ganadería, particularmente, han sido poco utilizadas las estrategias colectivas, como herramienta para superar las limitantes estructurales de los factores productivos y desarrollar ventajas competitivas (Courdin 2013). En política pública, una de las experiencias que promovió colectivos fue el Convenio de Cooperación Técnica entre el MGAP y GTZ³ en la década de los 90, que pretendió desarrollar una estrategia de abordaje al rezago en el desarrollo de los productores ganaderos de menor tamaño (Dabezies 2001). Para ello, se impulsó la formación de grupos de pequeños y medianos ganaderos, que contaron con asistencia técnica y capacitación. Entre las experiencias de los grupos se diferencian dos tipos de actividades: i) referidas a la compra de insumos y venta de productos, que tuvieron resultados de alto y rápido impacto, pero que se agotaron en sí mismas; y ii) de compra y uso común de bienes de capital y de sistemas productivos, con resultados variados, de impacto menos directo, pero más duradero y acumulativo.

Posteriormente, en los inicios del siglo XXI, el MGAP también ejecutó tres programas. Entre otros objetivos, buscaron tributar al desarrollo de la producción ganadera familiar. Estos fueron: i) el Programa Uruguay Rural (PUR), que promovió la inserción en las cadenas productivas; ii) el Programa de Producción Responsable (PPR), que fomentó un manejo integrado de los recursos naturales, conservando la diversidad biológica de manera económica y ambientalmente viable y iii) el Programa Ganadero (PG), que procuró integrarlos a las cadenas de producción a través de la competitividad, la integración a los mercados y el mejoramiento de la sustentabilidad de la producción familiar. Estos programas pretendieron, además, fortalecer la formación o sostenibilidad de las instituciones de productores rurales, a fin de mantener el trabajo colectivo como modalidad de acción local. Estos antecedentes muestran la diversidad de los procesos de acción colectiva en la ganadería familiar.

3 GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) es una sociedad de responsabilidad limitada sin fines de lucro, del Gobierno de la República Federal de Alemania. Realiza cooperaciones para el desarrollo en diversas partes del mundo.

La producción familiar y las nuevas políticas públicas

Durante las últimas dos décadas, el país ha registrado cambios en su base económica, productiva, social y cultural, como consecuencia de los efectos de la dinámica de la globalización económica seguida por el sistema capitalista mundial. Entre ellos destaca una reestructuración del campo, a causa de la extranjerización y concentración de la propiedad, de la expansión de algunas actividades (agricultura y forestación) y de los cambios derivados de la intensificación productiva, que han tenido como factor común el incremento del precio de la tierra. Estas transformaciones han sido de gran magnitud y han ocurrido en un corto período de tiempo, modificando el peso relativo de las actividades, la estructura agraria, la organización y el tipo de empresas, la tecnología aplicada, el uso del territorio, etc. (Arbeletche, Courdin y Oliveira 2007; Rossi 2010; Vassallo 2011).

En consecuencia, creció el proceso de exclusión de la producción familiar, con la desaparición de predios y productores, donde la ganadería ha sido el rubro más afectado (Morales *et al.* 2011). Sin embargo, este sector de productores no solo es importante en el país desde el punto de vista social, por tratarse del más numeroso (MGAP 2013), sino que también lo es desde su perspectiva económica; ya que representa un porcentaje sustancial de la fuerza de trabajo asalariada (Juncal 2012); y si bien el volumen de producto comercializable es pequeño, en su conjunto, contribuye a la dinámica productiva y económica del país (Piñeiro 2008).

De acuerdo con el último Censo General Agropecuario de 2011, el 62% de los productores eran familiares, explotaban el 15% de la superficie agropecuaria total y el 49% de la tierra en régimen de propiedad. De ellos, las dos terceras partes eran ganaderos productores de carne u ovinos (Tommasino *et al.* 2014). Según información de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, en octubre de 2016 existían 20 671 explotaciones familiares registradas y 33 268 productores familiares registrados (4405 registrados en el litoral norte). El rubro más destacado es la ganadería (52% de las unidades productivas) (MGAP 2017).

En este marco, los Gobiernos de izquierda que asumen a partir de 2005 han enfrentado el desafío de encontrar instrumentos idóneos para efectivizar la aplicación de políticas diferenciales para la producción familiar (Figari, Rossi y González 2008). Esto ha llevado a que en el país se apliquen políticas de desarrollo rural, que además de tener enfoque hacia la promoción de nuevas iniciativas de negocios, la disminución de la brecha tecnológica y la mejora en la capacitación de los productores y técnicos, la apertura de nuevos mercados, etc., consideraron los servicios básicos de las comunidades (salud, educación, etc.), las organizaciones sociales y las actividades de comercialización no directamente vinculadas a la producción agropecuaria. Fue así como el MGAP reasumió un rol protagónico en el diseño y la ejecución de estas políticas públicas para la producción familiar, básicamente a través de programas y proyectos, por medio del cofinanciamiento de organismos internaciona-

les como el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, que han posibilitado apoyos diferenciales. La base de estos programas ha residido en tres tipos de acciones: i) créditos diferenciados o subsidiados, individuales o colectivos, ii) apoyo a la adopción de tecnologías con prestación de asistencia técnica, y iii) capacitación y promoción de la organización (gremial, asociativa o cooperativa) (Sabourin *et al.* 2015).

Podría considerarse que esta estrategia institucional responde, por un lado, a la necesidad de incorporar a las estrategias de desarrollo rural los procesos asociativos como eje transversal de las políticas, con el motivo de que la integración (horizontal y vertical) de los productores familiares permite participar en la generación y en la asignación del excedente (Vassallo 2001). Por otro lado, responde a un requisito de las instituciones financieras internacionales, que sostienen que la participación de los beneficiarios objetivos es un elemento indispensable para el éxito de los proyectos de desarrollo, ya que los transforma en sujetos activos, en lugar de agentes pasivos de su propio desarrollo (Rodríguez Bilella 2005).

Tipología de colectivos de ganaderos familiares

El litoral noroeste de Uruguay abarca 49 295 km², el 28% del área nacional. Comprende el 11% de la población total del país, de la cual solo el 12% se atribuye a población rural total. Asimismo, esta zona abarca el 16% de las explotaciones agropecuarias del país (tabla 1).

La actividad productiva de la región ha sido históricamente representativa de la ganadería extensiva, con predominancia de suelos de baja aptitud pastoril y dominada por la producción de carne y lana. Sin embargo, durante las últimas décadas los grandes cambios sufridos en su matriz productiva han disminuido fuertemente la ganadería y el peso relativo de la producción ovina dentro de esta, a causa del proceso de la concentración de tierra y de

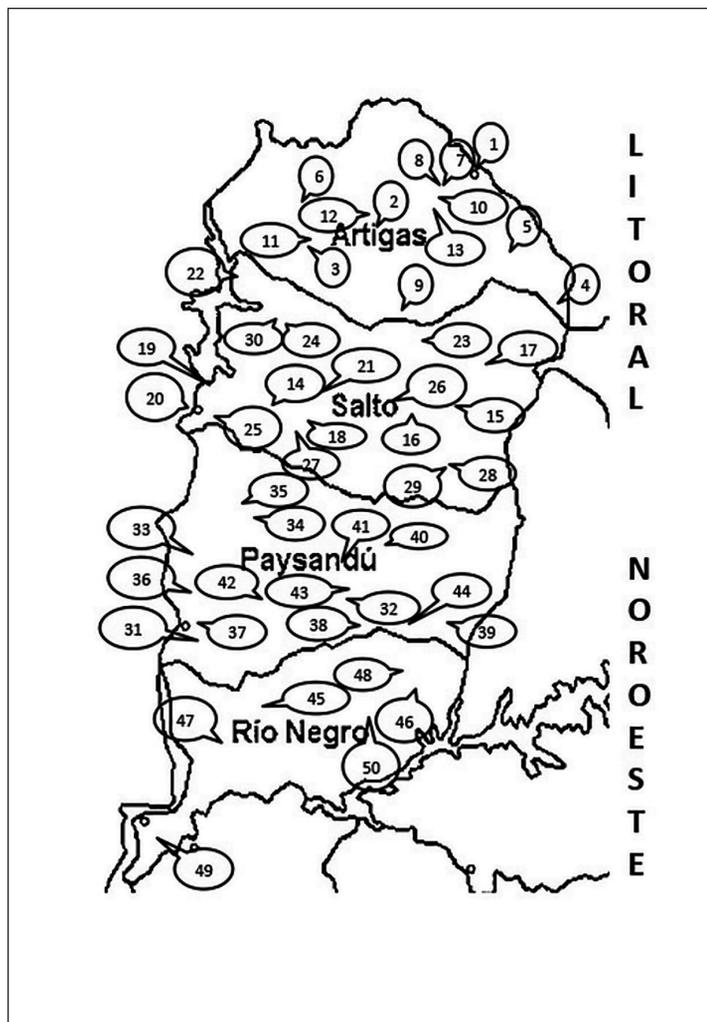
Tabla 1. Superficie, población y número de explotaciones del litoral noroeste, según departamento

	Superficie (km2)		Población total		Población rural		Número de explotaciones	
		%		%		%		%
Artigas	11 928	7	73 378	2	3524	2	1843	4
Salto	13 922	8	124 878	4	7849	4	2185	5
Paysandú	14 163	8	113 124	3	4364	2	1978	4
Río Negro	9282	5	54 765	2	5212	3	1072	2
TOTAL litoral noroeste	49 295	28	366 145	11	20 949	12	7078	16
TOTAL nacional	176 215	100	3 286 314	100	175 613	100	44 781	100

Fuente: adaptado de INE (2011).

la intensificación productiva. Mediante el relevamiento realizado entre febrero y agosto de 2017, para la identificación de los colectivos⁴ de ganadería familiar en la región, se constató la existencia de 50 en total (mapa 1).

Mapa 1. Localización de los colectivos de ganaderos familiares en el litoral noroeste



4 Vale la pena destacar que del relevamiento fueron excluidas las cooperativas CALSAL en Salto, CALPA, en Artigas, COPAGRAN, en Paysandú y Río Negro, por considerarlas empresas económicas que, en su esencia, tienen otros fines, vinculados a aspectos comerciales. También se excluyó a los grupos CREA, pertenecientes a la Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA), que tienen como propósito ayudar a los productores a mejorar los resultados económicos y financieros de sus empresas, a partir de los recursos disponibles en sus establecimientos. Estos no involucran a ganaderos familiares (existen cuatro grupos ganaderos y tres agrícolas-ganaderos en la región estudiada).

Referencias

ARTIGAS	SALTO	PAYSANDÚ	RÍO NEGRO
1. Asociación Agropecuaria de Artigas	14. SFR Estación Itapebí	31. SFR Colonia Porvenir	45. Sociedad Rural de Río Negro
2. Sociedad de Fomento Rural (SFR) Colonia José Artigas	15. SFR Basalto Ruta 31	32. SFR Colonia Juan Gutiérrez	46. SFR Este de Río Negro
3. SFR Cabellos	16. SFR Vera y Cañas	33. SFR Guaviyú	47. SFR San Javier Offir
4. SFR Masoller	17. Asociación Fomento Mataojo Grande	34. SFR Santa Kilda	48. Liga de Trabajo de Algorta
5. SFR Catalán	18. SFR Colonia Antonio Rubio	35. SFR Santa Blanca	49. SFR Tomas Berreta
6. Liga de Trabajo de Tomas Gomensoro	19. SFR Colonia Gestido	36. SFR Las Delicias-Arroyo Malo	50. Grupo El Arranque
7. Grupo Guaviyú	20. Asociación Agropecuaria de Salto	37. Asociación Rural y Exposición Feria de Paysandú	
8. Grupo Topador	21. Asociación Fomento Rural de Valentín	38. Liga de Trabajo de Guichón	
9. Grupo El Rejunte	22. SFR Belén	39. Liga de Trabajo de Merinos	
10. Grupo La Esperanza - Carleza	23. Sociedad rural Guaviyú de Arapey	40. Cooperativa Dayqué	
11. Grupo Cabelleros	24. SAUPA	41. Grupo Ruta 26	
12. Grupo Colonia Artigas	25. Asociación Civil Grupo Parada Viña	42. Grupo Paso de los Carros	
13. Grupo el Entrevero	26. Cooperativa Manuel Oribe (CAMANO)	43. Grupo Tierra para Todos	
	27. Grupo San Diego-Itapebí	44. Grupo Nuevo Amanecer	
	28. Grupo Nuevo Horizonte		
	29. Grupo Arerunguá		
	30. Cooperativa Agraria La Huella (CALAHUE)		

Fuente: elaboración propia.

Salto cuenta con la mayor cantidad de colectivos, dispersos en todo el territorio; lo cual se asocia directamente con la cantidad de explotaciones familiares del departamento (70% del total) y con el predominio del rubro en el territorio. Mientras que Paysandú y Artigas, si bien le siguen en número, presentan distribuciones menos uniformes. En el caso de Artigas, es reflejado por el menor número de explotaciones de pequeña escala vinculadas a la ganadería, debido al incremento de explotaciones de mayor dimensión, dado por la expansión del rubro en otros departamentos.

En Paysandú, la expansión de actividades como la agricultura y la forestación ha determinado una menor existencia de explotaciones ganaderas de pequeña escala. Río Negro es el departamento con menor cantidad de colectivos y grandes vacíos en varias zonas del territorio. Esto se explica por la gran superficie ocupada por los rubros que también afectan a Paysandú, los cuales determinan una fuerte competencia intrasectorial, por lo que las pequeñas explotaciones ganaderas se han visto perjudicadas. Con base en la información brindada por los informantes calificados, se definieron variables objetivas que reflejan datos cuantitativos y cualitativos de cada colectivo, a través de los cuales se los pudo caracterizar (tabla 2).

Tabla 2. Variables objetivas para la caracterización de colectivos

Variable	Categorías	Descripción
Antigüedad	< a 10 años	Considera el tiempo de existencia del colectivo. Las categorías intentan reflejar la influencia de las políticas públicas dirigidas al sector a partir de 2005.
	entre 10 y 50 años	
	> a 50 años	
Origen	Promovido	Describe si el colectivo ha surgido a partir de la motivación propia de los integrantes o a través de la promoción de factores externos como las políticas públicas.
	Endógeno	
Función	Político-reivindicativa	Hace referencia a la función que cumple, según las declaraciones de los referentes y no la que figura en los estatutos de cada forma de colectivo.
	Económico-productiva	
	Técnico-productiva	
	Mixtas	
Integrantes	Asalariados rurales	Considera dos aspectos a través de los cuales se pudiera visualizar la magnitud del colectivo; por un lado, la cantidad de integrantes o afiliados y por otro, el tipo de integrantes.
	Productores familiares	
	Productores agropecuarios	
	Heterogéneas	
Grupos de referencia	Productores agropecuarios	Alude al grupo sobre el cual tiene representatividad. Pretendió visualizar claramente los beneficiarios a los que apunta.
	Productores familiares	
	Sociedad	
Cobertura	Zonal	Indica el alcance territorial del colectivo.
	Departamental	
Funcionamiento	Tipo de actividades (impulsadas, no impulsadas, combinadas)	Pretende comprender la dinámica de las formas de acción colectiva.
	Participación (general, en diversas actividades; de directivos, en reuniones; de integrantes, en recambio de autoridades)	
Toma de decisiones	Directiva	Distingue cómo se da el proceso de la toma de decisiones en los colectivos.
	Directiva ampliada	
	entre todos	
Recursos	Económicos	Refleja la posesión de los diferentes recursos de cada colectivo.
	Físicos	
	Humanos	
Vinculación con el medio	Inserción en redes sociales	Muestra cuán articulado está el colectivo con el medio que lo rodea.
	Acuerdos institucionales	

Fuente: elaboración propia.

La combinación y reducción de estas variables posibilitó la clasificación de los colectivos, destinada a construir la tipología, como conjunto reducido de categorías exhaustivas. La estructuración del análisis permitió diferenciar cuatro grupos de colectivos (tabla 3), que se describen a continuación.

Tabla 3. Clasificación de los colectivos de ganaderos familiares del litoral noroeste

BÁSICOS	Asociación Agropecuaria de Artigas
	Asociación Agropecuaria de Salto
	Asociación Rural y Exposición FERIA de Paysandú
	Sociedad Rural de Río Negro
	Liga del Trabajo de Tomás Gomensoro
	Liga del Trabajo de Guichón
	Liga del Trabajo de Merinos
	Liga del Trabajo de Algorta
	Asociación Fomento Rural de Valentín
INTEGRALES	SFR Colonia Artigas
	SFR Cabellos
	SFR Catalán
	SFR Masoller
	SFR Belén
	SFR Antonio Rubio
	SFR Colonia Gestido
	SFR Estación Itapebí
	SFR Basalto Ruta 31
	SFR Vera y Cañas
	SFR Matajojo Grande
	Sociedad Rural de Guaviyú de Arapey
	SFR Colonia Porvenir
	SFR Guaviyu
	SFR Colonia Juan Gutiérrez
	SFR Las Delicias-Arroyo Malo
	SFR Santa Kilda
	SFR Santa Blanca
	SFR Este de Río Negro
	SFR Tomás Berreta
SFR San Javier Offir	

Tabla 3. (continuación)

ECONÓMICOS	Grupo Guaviyu
	Grupo El Entrevero
	Grupo La Esperanza/Carlesa
	Grupo El Rejunte
	Grupo El Rumbo
	Grupo Cabelleros
	Asociación Civil Grupo Parada Viña
	Cooperativa Manuel Oribe
	Grupo San Diego-Itapebí
	Grupo Nuevo Horizonte
	Grupo Arerunguá
	SAUPA
	CALAHUE
	Grupo Paso de los Carros
	Grupo Dayque
	Grupo Nuevo Amanecer
	Grupo Tierra para Todos
	Grupo Ruta 26
Grupo El Arranque	
PRODUCTIVOS	Grupo Colonia Artigas

Fuente: elaboración propia.

Colectivos básicos

Son aquellos con mayor grado de formalización institucional, que defienden y promocionan los intereses generales de sus asociados, pero con beneficios al conjunto del colectivo que reúne similares condiciones. Desarrollan principalmente actividades reivindicativas que representan los rasgos distintivos de su acción colectiva. También desarrollan otras actividades, de tipo secundario, como capacitación y formación, actividades económico-productivas, servicios de gestión, etc. Están representados por colectivos de larga trayectoria, que poseen un número significativo de afiliados (entre 100 y 200), en los cuales, además de productores rurales, figuran otros integrantes de la sociedad. Tienen mayor disponibilidad relativa de recursos, tanto físicos como económicos y humanos, que les posibilita autosustentarse y autogestionarse. En muchos casos, los recursos son utilizados como bienes públicos por la comunidad (por ejemplo, las sedes son usadas para eventos sociales e incluso, para actividades benéficas, con fines de recaudar fondos para instituciones no rurales).

La participación de sus asociados en las actividades es baja a media, y sobrellevan dificultades importantes en el recambio de autoridades. El proceso de toma de decisiones

se da dentro de la directiva. Generalmente, este tipo de colectivos tiene una baja o nula participación en las Mesas de Desarrollo Rural (MDR), ámbitos de diálogo e intercambio entre actores del territorio, considerando que no son espacios de debates para problemáticas que aquejan al sector agropecuario, lo cual constituye el interés principal de dichos colectivos. Frecuentemente sus intereses y demandas son canalizados por otras vías, de mayor influencia política, utilizando en muchos casos prácticas sociales de presión sobre

el Estado. En menor grado tienen actitudes de colaboración en torno a temáticas técnicas o problemas específicos (como infraestructura –caminería rural–, sanidad y tecnología).

Todos estos colectivos están integrados predominantemente por productores familiares, y nuclean entre 50 y 100 asociados.



Colectivos integrales

Son los que abarcan multiplicidad de fines: sociales, productivos, económicos y de servicios, con intereses integrales. Habitualmente están circunscriptos a temas o cuestiones específicas y benefician con exclusividad a sus asociados directos. En el litoral noroeste nuclean a todas las Sociedades de Fomento

Rural (SFR) reveladas, las que, además, son organizaciones de primer grado integradas a la CNFR (organización de segundo grado). Además de combinar la acción gremial con la promocional, están abocados a la búsqueda del desarrollo social y económico del territorio en el que están insertos o al que representan. Esto hace que tanto su función como la mayoría de sus actividades sean de tipo mixto. Generalmente, tratan las siguientes cuestiones: político-reivindicativas, como la defensa de los intereses de la producción familiar; económico-productivas, con el objetivo de mejorar o adaptar los sistemas de producción; técnico-productivas, proporcionando espacios para el intercambio de información y sociales, para favorecer una mejor calidad de vida en el medio rural.

Todos estos colectivos están integrados predominantemente por productores familiares, y nuclean entre 50 y 100 asociados. Por lo general, poseen buena disponibilidad de recursos físicos y situaciones diversas en los recursos económicos, desde colectivos que manifiestan solvencia con recursos propios hasta otros, en el extremo opuesto, que tienen dificultades con recursos externos. Respecto a la antigüedad y el origen, el espectro también es amplio: existen SFR con más de 50 años de trayectoria y otras que no alcanzan los cinco años. El proceso de toma de decisiones generalmente se da a nivel de la directiva. Tienen una buena participación en las MDR, y consideran que las políticas públicas implementadas en los últimos años han favorecido las dinámicas internas de las

SFR, promoviendo cambios estructurales en las estrategias organizativas, redefiniendo funciones y ampliando los campos de acción. Eso ha permitido fortalecer la relación con los asociados a partir de incrementos en las capacidades técnicas y desarrollar actividades de promoción, servicios e, incluso, comercialización, procurando dar respuestas más específicas a situaciones locales o intereses de sus asociados. Sin embargo, aún existen dificultades en la participación, sobre todo a nivel del recambio de integrantes en las directivas. Esos colectivos tienen una fluida vinculación con el medio, interactúan tanto con organizaciones/instituciones de alcance local como nacional. Incluso, algunas han generado acuerdos de trabajo o cooperación.

Colectivos económicos

Si bien poseen algunas características y alcances similares a los del grupo b, tienen un fin económico específico. Estas formas de organización cubren un amplio rango de situaciones de menor o mayor formalidad y complejidad jurídica y organizacional, que van desde acuerdos informales y contratos entre personas hasta asociaciones civiles. Tienen como principal objetivo el desarrollo de emprendimientos económicos para miembros con similares condiciones socioeconómicas. Sus integrantes están motivados por la necesidad de resolver problemas emergentes y básicos, como la comercialización para generar y/o mejorar ingresos. Ejemplo de ello es la venta conjunta de animales, para lograr mejor precio, y el acceso a campos colectivos. En ciertos casos, se juntan para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida a través de la iniciativa propia o por la convocatoria de una institución pública (por medio de los Programas de Fortalecimiento Institucional del MGAP o el INC –Instituto Nacional de Colonización– para el otorgamiento de campos colectivos) o privada (empresas forestales que otorgan campo para pastoreo).

La toma de decisiones se da entre todos los miembros del colectivo. Es común que la conformación inicial del colectivo se dé con rapidez y simplicidad, generando acuerdos formales (sociedades civiles o cooperativas constituidas) e informales (grupo de productores con acuerdos “de palabra”) que facilitan la cooperación. En varios casos, encuentran limitaciones para su crecimiento organizacional, sobre todo cuando explotan recursos de uso común, ya que les cuesta conformar acuerdos: cada uno persigue su propio interés. Tienen una moderada participación en las MDR y su vinculación con el medio también es reducida. Mantienen mayor interacción con las instituciones/organizaciones que aportan al objetivo del colectivo (instituciones extensionistas como el Instituto Plan Agropecuario, para apoyo técnico a la producción).

Colectivos productivos

Tienen un fin técnico-productivo específico. Al igual que los del grupo c, muestran una diversidad de formas de acción colectiva, que van desde acuerdos informales entre un grupo de personas a grupos consolidados afiliados a una organización (como puede ser FUCREA). Abarcan asociaciones vinculadas a temas o cuestiones específicas de los involucrados (actividades productivas similares), beneficiándolos directa y exclusivamente a ellos (por ejemplo, en la mejora de los indicadores productivos y económicos de cada productor). A partir del intercambio y la discusión de información entre pares, se procura mejorar o resolver problemas de las explotaciones, buscando herramientas de trabajo adecuadas. Para ello, cuentan con asistencia técnica. Carecen de procesos claros de toma de decisiones, pero cuando los hay, se realizan con la participación de todo el colectivo. No participan en las MDR.

Análisis y discusión de los resultados

Cambios asociados con la implementación de políticas públicas

Tomar en cuenta, dentro de la tipología, el análisis de algunas de las variables incluidas en el cuadro 2 (antigüedad, origen, funcionamiento y recursos), permite un acercamiento a la incidencia de las políticas públicas aplicadas por los Gobiernos de izquierda desde 2005. Estas comprenden los cambios en el funcionamiento (enfoques y beneficiarios), en la vinculación con la institucionalidad pública (articulación interinstitucional), en las demandas que se expresan, entre otras. Ello se traduce en un crecimiento del número total de colectivos en la región, pasando de un total de 22 en el año 2005 a 50 formas de colectivos, en 2016. Se desdobra en el surgimiento de dos tipos: los colectivos integrales y los colectivos económicos, que involucran, sobre todo, a los productores familiares.

El incremento de los colectivos integrales está asociado a la CNFR, organización “madre” que representa a la producción familiar y ha procurado constituirse como actor y objeto legítimo de las políticas públicas. Por un lado, a través de los beneficios otorgados por la DGDR, que ha centrado sus acciones en tres ejes (Rossi 2010): i) el registro del productor familiar, para poder establecerlo como principal destinatario de políticas públicas; ii) el uso de la herramienta asociativa para la consolidación de la agricultura familiar y iii) la implementación de cambios de enfoque en el diseño de las políticas públicas sectoriales, en especial mediante el enfoque territorial, la participación y la coordinación con organizaciones, así como la ampliación de agenda a temas no productivos (educación, salud, energía, transporte). Esa renovación del abordaje del desarrollo rural supone utilizar nuevos instrumentos de apoyo a los colectivos. Por otro lado, se nota una fuerte participación de estos

colectivos en las MDR, a través de las cuales realizan demandas para coordinar acciones en el territorio. Así, varios de los *colectivos integrales* no surgen como nuevos, sino que son antiguas SFR revitalizadas (Torres *et al.* 2014), que vuelven a desarrollar acciones gremiales multifuncionales en el territorio.

Los *colectivos económicos* están asociados fundamentalmente con emprendimientos vinculados al acceso a la tierra, por parte del INC. En el marco de su nueva política, el INC privilegia la distribución a colectivos. En 2009 creó el Departamento de Experiencias Asociativas, para apoyar el fortalecimiento de las experiencias asociativas y sistematizar los procesos colectivos desarrollados en el marco de la institución, focalizándose en la modalidad de “nuevas formas colonizadoras”. En 2010, la zona litoral noroeste contaba con 29 experiencias colectivas en diferentes rubros (16 experiencias en Artigas, seis en Salto, cuatro en Paysandú y tres en Río Negro), las que representaban el 30% del total de experiencias asociativas del país (INC 2016). Varios estudios muestran que dichas experiencias han posibilitado a muchos productores encontrar alternativas de ingresos, a partir de la diversificación de sus actividades económicas, o creando una opción complementaria. Constituyen también oportunidades de aprendizaje individual y colectivo, de obtención de legitimidad con la representatividad, mediante relacionamientos con instituciones y en nuevos ámbitos de participación (Ferreira 2013; Repetto 2013; Rodríguez D’Avila 2013).

Para los *colectivos básicos*, las modificaciones en las políticas públicas por parte de los Gobiernos de izquierda no han provocado cambios de magnitud, ya que se trata de organizaciones formales, de larga trayectoria y con estructuras de funcionamiento establecidas. De hecho, han relegado su participación en espacios abiertos como las MDR, donde interaccionan todos los actores involucrados en el desarrollo rural, por considerar que son ámbitos en los que “no se discuten los problemas generales del agro, sino los problemas específicos de cada zona y organización” (CB3 2017, entrevista).⁵ Esta postura se explica por el mantenimiento histórico de canales directos de negociación con el Gobierno y por el hecho de que cuentan con pocos productores familiares, por lo que no son sensibles a sus problemas. Algo similar sucede con los colectivos productivos, aunque, al analizar un solo componente, no se considera que las generalizaciones puedan ser las más ajustadas para el tipo descrito.

Procesos de construcción de la acción colectiva

La tipología es una construcción teórica útil para ordenar y simplificar una realidad compleja y diversa. En este caso, facilita la comprensión del accionar de los colectivos y su relación con centros de decisión respecto a la política agraria. Las consideraciones de Ostrom y

5 Las citaciones de las entrevistas serán diferenciadas de acuerdo con el colectivo (CB: *colectivo básico*; CI: *colectivo integral*; CE: *colectivo económico*; CP: *colectivo productivo*) y el número de la entrevista, que no necesariamente se corresponde con el listado de los colectivos.

Ahn (2003) sobre el capital social como elemento constitutivo de la acción colectiva permiten afirmar que en los cuatro tipos existen colectivos con diversas formas de capital social: participación, compañerismo, confianza, funcionamiento en redes, compartir las mismas instituciones y normas. Eso les ha permitido generar acción colectiva e, incluso, solucionar los problemas que de ella surgen, como el oportunismo individual o los intereses opuestos a la generación de acuerdos. Al analizar cada uno de los modos de coordinación propuestos por Ostrom (1992) para la construcción de la acción colectiva, se observan diferencias y similitudes entre colectivos y dentro de cada tipo.

En el caso de la delegación de poder y responsabilidad, se observa que los *colectivos básicos* y los *integrales*, dado su estatuto jurídico formal, por estar afiliados a instituciones de mayor grado, desarrollan estrategias de funcionamiento que, sin importar su antigüedad y su trayectoria, logran casi de forma inmediata definir roles, asignar responsabilidades y distribuir tareas. De hecho, por estatuto deben inicialmente conformar una comisión directiva, una comisión fiscal, comisiones temáticas, etc. Estos factores colaboran a que el colectivo defina pronto los objetivos, establezca reglas de funcionamiento y determine el proceso de toma de decisiones, que le permitirá planificar y ejecutar sus actividades. Esto es facilitado también por la interacción frecuente entre los individuos, el intercambio de información y la coordinación en el manejo de los recursos, que favorece la confianza (Ostrom y Ahn 2003). Los productores tienen tendencia a darle menos legitimidad a un dirigente informal en un grupo sin estatuto jurídico, como sucede en algunos *colectivos económicos*. De hecho, para asumir poder o responsabilidad, importa el perfil del líder o dirigente, su carisma y sus recursos políticos personales, su experiencia anterior de asociacionismo, su nivel educativo/cultural, su trayectoria en la producción o en actividades comunitarias, al contrario de productores principiantes en la actividad, o que son nuevos en la zona.

En los *colectivos económicos* nuevos, este modo de coordinación toma más tiempo. Se debe, en parte, al hecho de que los actores carecen de una referencia institucional/organizacional, que exija determinadas formas de funcionamiento y operación, y a que muchas veces no se conocen entre ellos. De esa forma, el colectivo debe generar inter-conocimiento, mediante relaciones de tipo “cara a cara” (Ostrom 1998), que posibiliten un compromiso mutuo a través del aprendizaje, logrando reducir las asimetrías y, de este modo, construir confianza. Durante dicho proceso, algunos colectivos que han sido promovidos desde el exterior, a través de políticas públicas (INC, MGAP, CNFR) para el usufructo de un bien común (tierra o dinero), enfrentan un dilema social. Esto es, cada individuo espera limitar sus propios costos, beneficiándose al mismo tiempo de las contribuciones de otros, lo que determina una clara práctica de *free-riding* o “gorrón”, a la cual hace referencia Olson (1992). De acuerdo con este autor, resolver estos dilemas requiere la intervención de una autoridad externa, la provisión de incentivos selectivos o la privatización.

Cuando los colectivos cuentan con asesoramiento técnico a través de los proyectos del MGAP, han podido resolver el dilema, ya que el técnico externo propicia la participación

de los individuos, el intercambio de información y trata de evitar las tendencias individualistas, facilitando la construcción de confianza. Incluso, los técnicos intervienen en la definición de roles o delegación de poder: estableciendo quién debe desempeñar tal tarea o intermediando un acto eleccionario. En algunos casos, actúan como líderes, que imponen y hacen cumplir reglas, para evitar conflictos dentro del colectivo, lo cual es problemático por generar una dependencia del profesional.

Los mecanismos de aprendizaje individual y colectivo son para los cuatro tipos el factor común y clave en el desarrollo de la acción colectiva, por su carácter transversal. Entendiendo el aprendizaje como una modificación durable del comportamiento, dada por la adquisición de conocimientos o valores, tanto el aprendizaje individual como el colectivo nacen de la práctica y experiencia en común, y de la transmisión y socialización de saberes y prácticas compartidas (Sabourin 2007). Este aprendizaje por la práctica en común, por la interacción social dentro del colectivo (dado por las capacidades y motivaciones individuales), es esencial para construir una percepción común de los recursos entre sus usuarios. Los actores aprenden que movilizar recursos dentro del colectivo, como información, influencia y reconocimiento, genera ganancias tales como poder, reputación y satisfacción personal, que los favorece en el acceso a recursos, en posicionarse en redes, en generar confianza, etc. También, para la adaptación o renovación de reglas que permiten la explotación y la gestión del recurso.

Los miembros de los colectivos analizados destacan aspectos vinculados a la construcción de capacidades: “Uno aprende hasta a hablar en público” (CI14 2017, entrevista). También, a la definición de roles: “Te das cuenta quién es el más indicado para ocupar tal o tal cargo... vas aprendiendo a trabajar en grupo” (CE5 2017, entrevista). Se refieren al desarrollo de valores: “Se aprende a respetar las opiniones de los demás, a ser compañero” (CB11 2017, entrevista); a los cambios en las estrategias de funcionamiento: “Como veíamos que la gente no estaba cumpliendo, decidimos probar de otra forma” (CI33 2017, entrevista); y al manejo de los recursos: “las cuentas tienen que estar claras, si no, no funciona, hay lío” (CE47 2017, entrevista). Otro tema de las entrevistas fue la representatividad, a lo largo del tiempo, tanto a nivel individual como del colectivo, en cada uno de los tipos: “Participamos porque nos ganamos el lugar” (CI36 2017, entrevista). Según Piñeiro (2004), lo que le da unidad y coherencia al colectivo es la participación de sus miembros en algunas actividades y, sobre todo, la aceptación de un conjunto de creencias generalizadas, a las que las suele acompañar la aparición de una conciencia de grupo.

En cuanto a la capacidad de adaptar nuevas reglas, las diferencias entre los tipos de colectivo dependen, sobre todo, de su origen. En el caso de los colectivos generados de forma endógena, con base en un conocimiento previo de actores y una necesidad real (no solo creada por una oportunidad externa), el desarrollo de actitudes cooperadoras se da con mayor facilidad, logrando canalizar los intereses y generando una mayor disposición a trabajar juntos. Ello posibilita un proceso de aprendizaje “distendido”, el cual no está presionado por plazos ni exigencias externas (por ejemplo, programas institucionales que tienen plazos

para el cumplimiento de metas), sino que los actores comparten saberes comunes y generan saberes colectivos de forma espontánea. En este escenario, es menos complicado generar y, si es necesario, cambiar normas internas. La propensión al trabajo colectivo lleva a que se logren reformular las lecciones nuevas, de acuerdo con los intereses del grupo. Por ejemplo, en un colectivo integral se modificaron las reglas de uso de los recursos físicos: al principio, todos los integrantes podían utilizarlos sin control y luego, además de exigir un pago mínimo por cada recurso, se limitaba a un cupo por usuario.

Algunos colectivos básicos e integrales trabajan con reglas de funcionamiento claras y preestablecidas (estatutos). Estos procesos se han institucionalizado desde su creación, facilitando cambios regulares. Un ejemplo es la adaptación de normas con la creación de comisiones temáticas para promover la participación y generar un mayor involucramiento en la toma de decisiones. En los colectivos económicos, con el correr del tiempo, se adquiere experiencia de las prácticas compartidas en el manejo de los recursos. Así, se hace factible elaborar nuevas reglas,⁶ con base en el desarrollo de una mayor capacidad de negociación o adecuación a los diversos mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, la modificación o establecimiento de un porcentaje de retiro de las ganancias en determinado período, como estrategia para no afectar la continuidad del negocio.

Los colectivos generados o promovidos desde el exterior, a través del estímulo de las políticas públicas, en este caso, enfrentan mayores dificultades para construir reglas y, luego, para adaptar nuevas. Este último proceso está vinculado a la capacidad de autoorganización generada y al grado de confianza alcanzado. Muchos de los *colectivos económicos*, a pesar de que aún están en funcionamiento, presentan dificultades en cuanto al establecimiento de normas mínimas exigidas desde el exterior para el cumplimiento de contratos, por falta de confianza y miedo a cooperar.

Consideraciones finales

La investigación permitió demostrar que los colectivos de ganaderos familiares son numerosos, diversos y heterogéneos, de acuerdo con los fines perseguidos y las características de sus integrantes. A partir del enfoque de Ostrom, se observa que en todos ellos hay procesos de coordinación de la acción colectiva, que difieren en el grado de madurez alcanzado, de acuerdo con las trayectorias recorridas. Aquellos colectivos que surgen de forma endógena (en cualquiera de los tipos hallados), suscitados por los intereses de los propios productores, como la búsqueda de alternativas o soluciones a sus problemas, tienen un modo de interactuar socialmente que los lleva a desarrollar mayor capacidad de cooperación. Establecen procesos de aprendizaje que permiten crear y mejorar las reglas de funcionamiento, estra-

6 Reglas prácticas, que no necesariamente tienen que ser formuladas, simplemente orientan el comportamiento de los actores.

tegas de autogestión sostenibles y, por tanto, desarrollan confianza. Ello se traduce en una mayor durabilidad del colectivo en el tiempo.

En contraposición, los colectivos promovidos a partir de estímulos exteriores (políticas públicas) presentan mayores dificultades para construir la acción colectiva. Muchas veces no tienen unificado el objetivo común y les cuesta la interacción social, lo que no posibilita generar un proceso de aprendizaje y, mucho menos, establecer normas o reglas de funcionamiento. Ello puede conducir a la ruptura o reacomodo (cambio de integrantes) del colectivo en el corto plazo. Esto se acentúa cuando existe manejo o administración de un recurso colectivo (tierra o capital): genera problemas por las ventajas individuales que procura cada uno de los miembros, por lo que muchas veces es requerida la intervención externa para encontrar soluciones.

Respecto a los tipos de colectivos encontrados, no se observan diferencias relevantes en la acción colectiva de *los básicos* y *los integrales*, ya que la delegación de poder y responsabilidad es exigida por las formalidades institucionales. Al contrario, la intensidad del aprendizaje individual y colectivo y la capacidad de adaptar nuevas reglas están conectadas y son consecuencia de la interacción y cooperación social dentro del colectivo. Según Hatchuel (citado por Coudel 2009), el surgimiento de una norma común resulta de una dinámica de acción conjunta, en la que las relaciones podrían surgir porque el nuevo conocimiento lo hace posible y las nuevas relaciones recíprocas han servido de apoyo para la producción de nuevos conocimientos, por parte de cada actor. Los *colectivos económicos* son los que presentan diferencias en la construcción y coordinación de la acción colectiva, ya que muchos no logran generarla y mantenerla. En este caso, los problemas se deben a las relaciones preexistentes entre los individuos, que condicionan la interacción social a dificultades para construir reglas de funcionamiento y a la prioridad dada a los intereses individuales, procurando ganancias inmediatas.

Los procesos de acción colectiva u organización de productores constituyen agentes del desarrollo rural en los territorios, por lo cual deberían ser considerados en las políticas públicas. Los resultados de este artículo concuerdan con el trabajo realizado en Brasil por Abramovay, Magalhaes y Schroder (2010), quienes consideran que el formato de las políticas no debería “rutinizar” las prácticas participativas, sino estimular a que los colectivos se doten de capacidades necesarias para la innovación, y sus sucesos y fracasos sirvan de aprendizajes. Estas cuestiones fortalecen las iniciativas y capacidades de acción autónoma, valorando el empoderamiento y el protagonismo social, para impulsar la acción

**En contraposición,
los colectivos promovidos
a partir de estímulos
exteriores (políticas
públicas) presentan
mayores dificultades
para construir
la acción colectiva.**



colectiva y, así, generar iniciativas “sentidas” desde los territorios. Si bien la participación social depende de las relaciones de fuerza de cada país, los colectivos de productores rurales deberían participar de forma equitativa en la preparación del compromiso de dichas políticas públicas (Mercoiret y Mfou’ou 2006). Según el presente estudio, eso favorecería el acceso a recursos comunes: información, conocimiento, referencias técnicas, innovaciones y mercados específicos, es decir, elementos estratégicos para generar procesos de desarrollo sustentable.

Bibliografía

- Abramovay, Ricardo, Reginaldo Magalhaes y Monica Schroeder. 2010. “Representatividade e inovação na governança dos processos participativos: o caso das organizações Brasileiras de agricultores familiares”. *Sociologias* 12 (24): 268-306.
- Arbeletche, Pedro, Virginia Courdin y Gonzalo Oliveira. 2007. “Soja y forestación: los impactos sobre la ganadería uruguaya”. Ponencia presentada en V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 7-9 noviembre.
- Coudel, Emile. 2009. “Formation et apprentissages pour le développement territorial: regards croisés entre économie de la connaissance et sciences de gestion”. Tesis de Doctorado, Centre International d’Etudes Supérieures en Sciences Agronomiques, Montpellier, Francia.
- Courdin, Virginia. 2013. “Asociativismo: la experiencia de los productores de la Colonia “Juan Gutiérrez” en Paysandú”. *Revista Agrociencia* 17 (1): 165-174.
- Dabezies, Martín. 2001. *Experiencias asociativas de los grupos PRONADEGA*. Montevideo: MGAP-PRONADEGA.
- Ferreira, Ethel. 2013. “La nueva colonización ‘Maestro Soler: su impacto y comparación con las formas clásicas”. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.
- Figari, Mercedes, Rossi, Virginia y González, Rosario. 2008. “Los productores familiares”. En *El campo uruguayo: una mirada desde la sociología rural*, editado por Marta Chiappe, Matías Carámbula y Emilio Fernández, 83-102. Montevideo: Facultad de Agronomía.
- INC. 2016. “Emprendimientos asociativos por rubros”, <http://www.colonizacion.com.uy/content/view/2673/241/>
- INE. 2011. “Censo de Población”, <http://www.ine.gub.uy/censos-2011>
- Juncal, Agustín. 2012. “La sindicalización rural (2005-2011): el caso del grupo 22 de Consejos de Salarios”. Ponencia presentada en I Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay, 16-17 agosto.

- Larrambebere, Fernando. 2009. “Enfoque complementario: el Grupo Francia Navarro”. En *Familias y campo. Rescatando estrategias de adaptación*, editado por Hermes Morales y Francisco Dieguez, 185-195. Montevideo: Instituto Plan Agropecuario.
- Mercoiret, Marie-Rose, y Jeanot Minla Mfou’ou. 2006. “Rural Producer Organizations (RPOs), empowerment of farmers and results of collective action”. Ponencia presentada en *Paris Workshop, Rural Producers Organizations for Pro-poor Sustainable Agricultural Development*, Francia, 30-31 octubre.
- MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). 2017. “Registro de Productores/as Familiares Agropecuarios”, http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/dossier_registro_de_productores_familiares_agropecuarios_11-1-2017.pdf
- Morales, Hermes, Humberto Tommasino, Pedro De Hegedüs, Carlos Molina, Francisco Dieguez, Rodrigo García, Ramón Gutiérrez, Mónica Cadenazzi, Gustavo Ferreira, Gabriel Picos y Cecilia Santos. 2011. *Determinantes de la sustentabilidad de los productores familiares criadores: una aproximación interdisciplinaria con metodologías múltiples*. Montevideo: Instituto Plan Agropecuario. www.mgap.gub.uy/sites/default/files/multimedia/1170_Determinantes_de_sustentabilidad_de_los_productores_familiares_criadores._Una_aproximacion_interdisciplinaria_con_metodologias_multiples_2011.pdf
- Olson, Mancur. 1992. *La lógica de la acción colectiva: Bienes públicos y la teoría de grupos*. México: Limusa Noriega Editores.
- Ostrom, Elinor. 1992. *Crafting institutions for self-governing irrigation systems*. Estados Unidos: San Francisco ICS Press.
- _____. 1998. “A behavioural approach to the rational-choice theory of collective action”. *American Political Science Review* 92: 1-22.
- _____. 2000. *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ostrom, Elinor y T. K Ahn. 2003. “Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva”. *Revista Mexicana de Sociología* 65 (1): 155-233. <http://www.biblioteca.org.ar/libros/92258.pdf>
- Piñeiro, Diego. 2004. *En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina*. Argentina: Editorial CLACSO.
- Piñeiro, Diego. 2008. *El trabajo precario en el campo uruguayo*. Uruguay: CSIC-Udelar.
- Programa FIDA MERCOSUR CLAEH. 2014. “Contribución del cooperativismo al desarrollo de la agricultura familiar en el Uruguay”, <http://fidamercosur.org/claeh/images/BIBLIOTECA/2014/Documentos/Contribucion%20del%20cooperativismo%20al%20desarrollo%20de%20la%20agricultura%20familiar.pdf>
- Repetto, Carlos. 2013. “Estudio y evaluación de la Cooperativa Agraria Mundo Azul”. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.

- Rodríguez Bilella, Pablo. 2005. "Trayectorias asociativas en el marco de los programas de desarrollo rural: un análisis desde los actores". En *Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa*, editado por Roberto Benencia y Carlos Flood, 243-269. Buenos Aires: CEDERU-Editorial La Colmena.
- Rodríguez D'Avila, Héctor. 2013. "Nuevas formas de colonización: Colonia Líber Seregni". Tesis de Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.
- Rossi, Virginia. 2010. "La producción familiar en la cuestión agraria uruguaya". *Revista Nera* 13(16): 63-80.
- Sabourin, Eric. 2007. *Paysans du Brésil. Entre échange marchand et réciprocité*. Francia: Editions Quae.
- Sabourin, Eric, Torres, María de, Arbeletche, Pedro, Massardier, Gilles, Courdin, Virginia, Tourrand, Jean, Morales, Hermes. 2015. "Políticas públicas y ganadería familiar en Uruguay: los desafíos ambientales y de ordenamiento territorial". *Revista Pampa* 12 (2): 241-264.
- Sabourin, Eric, Mario Samper, Jean Francois Le Coq, Gilles Massardier, Octavio Sotomayor y Jacques Marzin. 2015. "Análisis transversal de las políticas sobre agricultura familiar en América Latina". En *Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: nuevas perspectivas*, editado por Eric Sabourin, Mario Samper y Octavio Sotomayor, 5-39. San José: IICA.
- Tommasino, Humberto, Cortelezzi, Angela, Mondelli, Mario, Bervejillo, José y María Silva. 2014. "Tipología de productores agropecuarios: caracterización a partir del Censo Agropecuario 2011". En *Anuario OPYPA*, editado por MGAP-OPYPA, 491-508. Montevideo: MGAP.
- Torres, María de, Pedro Arbeletche, Eric Sabourin, Joaquin Cardelliac y Gilles Massardier. 2014. "La agricultura familiar en Uruguay: entre dos proyectos contrapuestos". En *Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe. Balance, desafíos y perspectivas*, coordinado por Eric Sabourin, Mario Samper y Octavio Sotomayor, 275-298. Santiago de Chile: CEPAL.
- Vassallo, Miguel. 2011. *Dinámica y competencia intrasectorial en el agro. Uruguay 2000-2010*. Uruguay: CSIC-Udelar.
- _____. 2001. *Desarrollo Rural. Teorías, enfoques y problemas nacionales*. Uruguay: Publicaciones Facultad de Agronomía.

Mujeres y organización comunitaria. El caso de las palmeadoras de Tlaxiaco, Oaxaca, México

Women and community organizing. The tortilla makers of Tlaxiaco, Oaxaca, Mexico

Tomás Ortega Ortega^a, Juan Felipe Núñez Espinoza^b, Verónica Vázquez García^c,
Ivonne Vizcarra Bordi^d, Paola Ma. Sesia^e y Diego Flores Sánchez^f

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2018
Fecha de aceptación: 28 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3283>

Resumen

Las mujeres indígenas de México construyen dinámicas organizacionales que les permiten garantizar la sobrevivencia familiar. Este artículo identifica los beneficios individuales y colectivos de los procesos organizativos en los cuales se involucran las mujeres dedicadas a la elaboración de tortilla artesanal para autoconsumo y venta que integran la Unión de Palmeadoras de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, México. La información se obtuvo de mayo de 2015 a enero de 2017, a través de una estrategia metodológica mixta que involucró entrevistas, talleres, observación participante, registros de ventas a lo largo de 20 días y un censo de toda la organización. Los beneficios individuales fueron dos: la garantía de tener sitios de venta; la posibilidad del trueque en el mercado. Los beneficios colectivos fueron tres: disponibilidad diaria de tortillas artesanales, dinamización de la economía local; permanencia del oficio de palmeadora. Se concluye que el gremio se creó debido a la discriminación que enfrentan estas mujeres. Sin embargo, aún falta mucho por hacer ya que sus espacios de venta son incómodos y sus condiciones de trabajo siguen siendo precarias.

Palabras clave: comercio; maíz; mujeres indígenas; organización

Abstract

Native women in Mexico engage in organizing dynamics that allow them to provide for their families. This paper identifies the individual and collective benefits of organizational processes for the women who belong to the Unión de Palmeadoras de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, Mexico. These women make handmade tortillas for household consumption and sale. Data were obtained between May 2015 and January 2017 through a combination of fieldwork techniques: interviews, workshops, participant observation, sale registers during a 20-day period, and a census of the whole organization. Two individual benefits were identified: guaranteed selling spots; barter opportuni-

- a Estudiante de doctorado del Colegio de Postgraduados. Correo: tomas.ortega@colpos.mx
b Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados. Doctor en Sostenibilidad y Tecnología por la Universidad Politécnica de Cataluña. Correo: nunezej@colpos.mx
c Autora de correspondencia. Profesora Investigadora Titular del Colegio de Postgraduados. Doctorado en Sociología por la Universidad de Carleton. Correo: vvazquez@colpos.mx
d Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora en Antropología por la Universidad Laval. Correo: ivbordi@yahoo.com.mx
e Profesora Investigadora Titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Doctora en Antropología por la Universidad de Arizona. Correo: paolasesia@yahoo.com.mx.
f Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados. Doctor en Ecología de Sistemas de Producción Agropecuarios por la Universidad de Wageningen. Correo: dfs@colpos.mx.

ties while at the market. Three collective benefits were identified: daily availability of handmade tortillas; the mobilization of the local economy; the permanence of the *palmeadora* trade. The paper concludes that the organization was created due to the discrimination faced by these women. However, a lot remains to be done since their selling spots are inappropriate and their working conditions continue to be precarious.

Key words: maize; native women; organization; trade

Introducción

Muchas mujeres indígenas de México participan en actividades relacionadas con la siembra, procesamiento y venta de alimentos desde tiempos prehispánicos. Uno de los productos más tradicionales elaborado por ellas es la tortilla de maíz, pieza central en la dieta de todo el país. La tortilla hecha a mano tiene un nicho especial de mercado entre las personas que no pueden hacerla en casa y manifiestan una clara preferencia por alimentos poco procesados y realizados con recursos locales (Zafra 2001; Vizcarra 2001). Las mujeres que las preparan cubren esta demanda tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas, situación que las hace visibles en los mercados y en las estructuras organizativas de sus localidades. Este artículo analiza los beneficios producto de la organización de las mujeres que pertenecen a la Unión de *Palmeadoras* de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco (UPHCT), Oaxaca, la cual surgió en la década de 1990 y actualmente está conformada por 89 integrantes. El objetivo primordial de la organización ha sido mejorar las condiciones de mercado para la distribución de la tortilla artesanal. Las integrantes de la UPHCT se dedican a la elaboración diaria de tortillas hechas de maíces nativos blancos, azules, amarillos y colorados. También realizan tortillas de maíz combinadas con trigo y de trigo solo. Las tortillas se elaboran tanto para el autoconsumo como para venta.

El artículo se orienta hacia los beneficios que resultan del proceso organizativo en dos dimensiones: para las mujeres y para el municipio de Tlaxiaco. Está dividido en seis partes. La segunda después de esta introducción presenta el enfoque conceptual y metodológico utilizado en el estudio. La tercera describe el contexto histórico, social y político que dio lugar a la conformación de la UPHCT. La cuarta y quinta sección discuten los beneficios individuales y colectivos de los procesos organizativos que involucran a mujeres indígenas. Finalmente, la sexta y última sección concluye y reflexiona sobre los principales hallazgos.

Marco conceptual

El género es una construcción social que asigna responsabilidades a mujeres y hombres en el acceso y uso de los recursos, e incide en la estructuración de espacios, formas de asociación y redes sociales (Rocheleau, Slater y Wangari 2004; Rocheleau 2007). Las res-

ponsabilidades de género se expresan de manera diferenciada en el ámbito doméstico, comunitario y a escalas más amplias, interactuando con otras formas de desigualdad o diferencia social. Por un lado está la conocida tríada de ejes de desigualdad (género, clase y etnia) y por el otro, categorías que apuntan a la diferenciación entre personas (edad, salud física y mental, forma de organización familiar). Esta definición de la interseccionalidad de género adopta una perspectiva constructivista que concibe a las identidades como procesos en continua (re)producción (Chávez-Rodríguez 2016; Yuval-Davis 2006). Las desigualdades causadas por la ideología y la estructura patriarcal se agudizan con una situación económica precaria que ocasiona desgaste físico y mental. Asimismo, los pueblos originarios sufren condiciones estructurales de desigualdad, reproducidas históricamente, que conducen a procesos de racialización profundamente discriminatorios. Las mujeres indígenas se encuentran inmersas en relaciones sociales donde la clase social, la etnia-raza y el género marcan su vida cotidiana (Crenshaw 1991; Viveros 2016), desde la familia hasta los espacios públicos, incluyendo los ámbitos laborales.

En este contexto, la organización de mujeres indígenas en torno a la producción de un bien artesanal constituye una estrategia de sobrevivencia importante que coadyuva a la obtención de bienes básicos de consumo. Además, la experiencia organizativa provee de recursos para salir adelante en lo individual y lo grupal. A nivel individual, las mujeres fortalecen la valoración de sí mismas y construyen nuevos espacios y relaciones (Manzano 2001). A nivel grupal unifican fuerzas, consensan problemáticas, enfrentan desigualdades sociales, potencializan procesos de negociación con instituciones y amplían sus mercados (Manzano 2001; Zapata 2002). En el ámbito comunitario, la existencia de estas formas de organización permiten: transformar estereotipos de género; desafiar y romper normas sociales de género y etnia; impulsar el desarrollo de liderazgos femeninos; y desarrollar capacidades de negociación con otros grupos sociales. Esto favorece la transformación de roles de género, la movilidad de las mujeres entre los espacios sociales públicos y privados, la dinamización de las economías locales y sus vinculaciones más allá de sus comunidades (León 1997; Manzano 2001; Rodríguez y Diego 2002; Martínez *et al.* 2005; Vázquez y Chávez-Arellano 2012).

Específicamente en México y en contextos donde la población indígena es significativa, las mujeres movilizan en mercados y tianguis una variedad de productos cultivados, transformados y artesanales, difuminando las fronteras entre lo público y lo privado. El mercado

La tortilla hecha a mano tiene un nicho especial de mercado entre las personas que no pueden hacerla en casa y manifiestan una clara preferencia por alimentos poco procesados y realizados con recursos locales (Zafra 2001; Vizcarra 2001).



es un espacio donde los productos se venden o intercambian permanentemente, mientras que el tianguis (término que proviene del náhuatl) denota un día específico en que mujeres y hombres se reúnen para vender o intercambiar sus variados productos (Linares y Bye 2016). En ambos espacios se establecen relaciones – de intercambio y compraventa– que dinamizan las economías locales lideradas en su mayoría por mujeres, construyendo interacciones con distintos grupos sociales, recreándose sitios de encuentro y reproducción de culturas (Barreto 2011; Carranza 2012). En estos contextos las integrantes de la UPHCT distribuyen, venden e intercambian su tortilla artesanal, convirtiendo esta actividad económica en parte de su cotidianidad.

Metodología

La investigación se realizó en Tlaxiaco, municipio de la mixteca oaxaqueña con una población de 38.453 habitantes (53% mujeres y 47% hombres). El 28% habla una lengua distinta al español, siendo el mixteco la más importante. Existe un total de 9.312 hogares, 6.633 con jefatura masculina y 2.679 con jefatura femenina. En su territorio están asentadas 109 localidades, de las cuales 88% tienen un índice alto de marginación. Las actividades económicas del sector primario representan 21% de la Población Económicamente Activa (PEA) con predominio de la agricultura principalmente bajo el sistema milpa (Lazos 2012). El sector secundario representa el 23% de la PEA, enfocándose principalmente en el aprovechamiento de los bosques, mientras que el terciario representa el 56% y agrupa al comercio, transporte, comunicaciones y servicios de hoteles y restaurantes (INEGI 2010).

Las integrantes de la UPHCT provienen de 14 comunidades del municipio, 57 de ellas hablan solo español, 31 son bilingües en español y mixteco y una habla solo mixteco, aunque la mayoría (n=85) se autoadscribe como mixteca. Más de la mitad (n=47) tienen pareja, el resto (n=42) son solteras, viudas y separadas. La mitad (n=45) se consideran las proveedoras principales de sus hogares, mientras que el resto comparte esta responsabilidad con su pareja u otros integrantes de la familia. La mayoría (n=83) tiene hijos e hijas, con un promedio de cuatro por familia. Tres cuartas partes (n=64) saben leer y escribir.

El trabajo de campo se realizó entre mayo de 2015 y enero de 2017, a través de una estrategia metodológica mixta que involucró permanentemente a las integrantes de la UPHCT así como a diversos actores/as relacionadas con la producción y comercialización de maíces y leña. Durante este periodo se realizaron 36 entrevistas a palmeadoras, familiares y distribuidores locales de maíz, molineros y representantes del gremio. Los temas abordados fueron: historia de la UPHCT, oficio de palmeadora, tipos de maíces, elaboración y venta de tortillas. La información obtenida sirvió de base para la planeación y elaboración de cinco talleres donde se profundizó sobre la diversidad de maíces utilizados, costos de insumos y sitios de venta. Durante año y medio se realizó observación participante en los

sitios de venta, molinos de particulares, viviendas donde las mujeres elaboran la tortilla, espacios de toma de decisión y celebraciones comunitarias. Con el propósito de conocer especificidades relacionadas con horarios de venta, cantidades y tipos de tortillas, ganancias y características de la clientela, diez palmeadoras registraron sus actividades diarias en cuadernillos diseñados para tal fin durante un periodo de 20 días. Finalmente se aplicó un censo de donde se extrajo información que nutre los procesos organizativos, redes, sitios de venta y dinámicas de mercadeo. Los datos fueron procesados con distintos *softwares*: Atlas Ti para los testimonios; Excel para los cuestionarios; Visone para la construcción de gráficos y análisis de redes. Las integrantes de la Unión otorgaron permiso para utilizar sus nombres en los resultados de investigación.

El derecho a vender tortilla: nace la UPHCT

La población mixteca ha experimentado diversas manifestaciones de colonialismo interno a lo largo de su historia. En la época precolombina los pueblos mixtecos fueron tributarios de la gran Tenochtitlan. A partir de la invasión española fueron sometidos a la explotación de su fuerza de trabajo, sufriendo el rechazo de sus formas de organización y creencias. Durante la independencia y la formación del Estado Nación, fueron despojados de sus tierras comunales y excluidos como pueblos mixtecos. En el Porfiriato proliferaron las haciendas agudizándose el despojo de tierras y la explotación de su fuerza de trabajo para la producción de trigo y caña de azúcar (López 2007). La Revolución Mexicana de 1910 no solucionó los problemas de despojo, ya que los descendientes de españoles y mestizos adinerados siguieron ocupando las mejores tierras. Durante el siglo XX, los alimentos demandados por los pueblos mixtecos (principalmente el maíz y el frijol) fueron insuficientes para la población (Katz y Vargas 1990). Existen registros del tianguis (mercado) semanal desde la primera mitad del siglo XX y de escasez de maíz para consumo local desde los años setenta del mismo siglo (CDI 1972). La ciudad de Tlaxiaco se mantuvo como el centro clave que dominaba la región indígena circundante. Su tianguis pronto se convirtió en el centro comercial más sobresaliente, convirtiéndose en la “ciudad-mercado” de la Mixteca alta (Marroquín 1978). Esto dinamizó la movilidad de diversos productos, atrajo la participación de campesinas-nos, intermediarias-os y acaparadoras-res, e incidió en el crecimiento poblacional del municipio (CDI 2005).

En los años setenta del siglo XX existía un buen número de mujeres que vendían tortillas hechas a mano y en casa. Micaela Vázquez Bautista, palmeadora nacida en 1943, así lo indica: “nosotros a eso nos dedicamos, a las tortillas... ese fue nuestro plan de vida para ganarnos nuestro pan y así fue como yo crecí con mi mamá” (Micaela Vázquez Bautista, ex integrante de la UPHCT, 14 de agosto de 2015). Las mujeres adquirirían el grano de maíz para hacer sus tortillas, en varias comunidades de la región o en las tiendas subsidiadas de

la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) ahora inexistentes (CDI 1972). En esa década había unas 600 mujeres dedicadas a la venta de tortillas en condiciones de trabajo muy precarias: “Cuando yo empecé a nosotros nos daban una orillita de banquetta... no nos daban espacio para sentarnos, para extendernos, nosotras siempre hemos sido el patito feo de la sociedad” (Perla Rocío Ignacio Santiago, integrante de la UPHCT, 18 de julio de 2016).

La discriminación interseccional que han sufrido las mujeres durante décadas fue una de las razones para que en 1990 se agremiaran en la UPHCT, aunque bajo un modelo clientelar y corporativista que les otorgaba cierta visibilidad social y protección como sector desfavorecido a cambio de favores políticos en tiempos electorales (Audelo 2007). Lo que las mujeres buscaban al unirse era respeto de sus espacios de venta, así como detener el crecimiento de los establecimientos que comercializaban tortillas hechas con masa industrial de maíz en máquinas automáticas: “En aquella época se empezaron a instalar las tortillerías [en Tlaxiaco], esa fue la necesidad de nosotros de agremiarnos” (Perla Rocío Ignacio Santiago, integrante de la UPHCT, 18 de julio de 2016).

La formación de la organización tuvo lugar en una asamblea convocada por las autoridades y los molineros¹ del municipio. La subordinación de género como mujeres, de etnia como indígenas y de clase al ser artesanas pobres, fue evidente en esa asamblea. La mayoría de las mujeres no estaban informadas de su propósito y los molineros aprovecharon para incrementar el precio de la molienda. El reconocimiento de la organización tuvo que pasar por la afiliación (involuntaria) al partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)² a través de UNE Ciudadanos en Movimiento. Así lo cuenta Eva: “Nos citaron a una reunión en... la presidencia... decíamos, para qué nos querrán, pero fueron los molineros los que nos llevaron a esa reunión y ahí se nombró el comité” (Eva Silviana Avendaño, integrante de la UPHCT, 27 de julio de 2016). En ese momento se agremiaron 300 palmeadoras.

Beneficios de la organización para sus integrantes

Un sitio de venta. Incómodo, pero seguro

La ganancia más importante de las palmeadoras al haberse organizado fue acordar con las autoridades del municipio sus sitios de venta y distribuirlos entre ellas mismas en función de sus necesidades y horarios. Antes de esto las mujeres corrían el riesgo de ser retiradas de

1 Dueños de establecimientos de molinos dedicados a la molienda de maíz mediante pago en efectivo.

2 Partido político que gobernó México por 71 años: 1929-2000. El PRI organizó los sectores populares del país en varios brazos políticos entre los cuales se encuentra la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), organización que en 1990 adoptó el nombre de UNE Ciudadanos en Movimiento (Audelo 2007; Paolino 2009; Carmona 2018).

mala manera de las calles y esquinas de la ciudad, siendo discriminadas por ser indígenas y pobres. Así lo relata Martha F. Sánchez: “Nos trataban mal los ricos de acá... porque nos echaban agua los dueños del mercado de aquí... pero nosotros ahí estábamos vendiendo nuestro producto” (Martha F. Sánchez Hernández, ex integrante de la UPHCT, 22 de mayo de 2016). Antonia María López añade: “A mí muchas veces me quitaron mi tenate las que dicen... que... nosotras somos indias” (Antonia María López Hernández, integrante de la UPHCT, 24 de mayo de 2016).

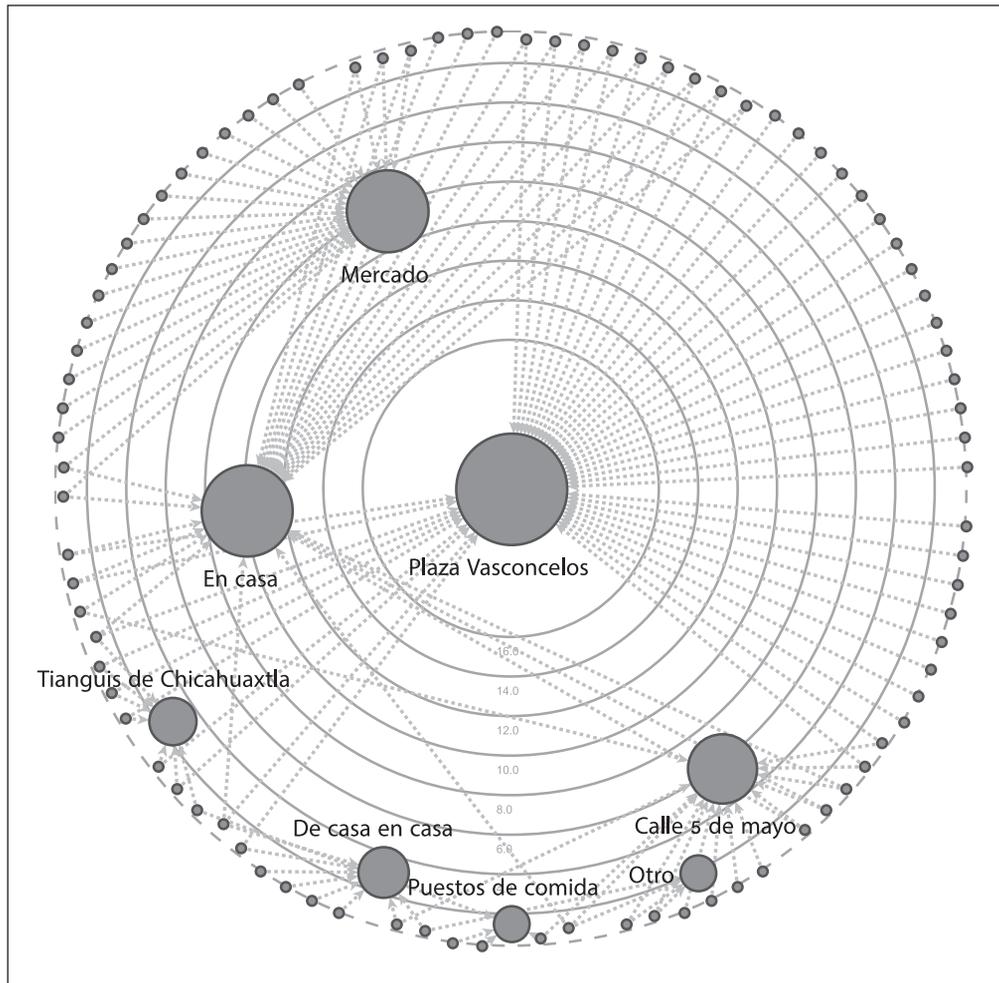
Con el acuerdo tomado con las autoridades, las integrantes de la UPHCT lograron repartirse los espacios y controlar la competencia de vendedoras furtivas hasta hoy. Para tener derechos de venta las mujeres deben necesariamente pertenecer a la organización: “Hay algunas que no están afiliadas, no las dejan entrar a vender pues” (Antonia María López Hernández, integrante de la UPHCT, 24 de mayo de 2016). Si bien estas coacciones proveen de beneficios a las asociadas, también producen segregaciones sociales, las mismas discriminaciones por las que ellas se agremiaron. Ciertamente no todas las palmeadoras de la Unión comparten este tipo de acciones por esas razones y, en lugar de confrontarse a las directivas, procuran consolidar sus puntos de venta sin causar malestares a otras mujeres no asociadas.

Así, por ejemplo, los sitios públicos de venta ubicados en el centro de Tlaxiaco, como la Plaza Vasconcelos, el Mercado Benito Juárez y la calle 5 de Mayo, se pueden considerar como espacios dominados por la UPHCT. Otros espacios son más permisibles en la convivencia con diferentes vendedoras, tal es el caso los lunes de cada semana, cuando algunas palmeadoras venden tortilla en el tianguis de San Andrés Chicahuaxtla, comunidad Triqui ubicada en la mixteca de Oaxaca. Las mujeres también venden desde su propia casa, de casa en casa, en puestos de comida o mediante entrega a particulares, puntos de venta que no dependen de la pertenencia al gremio sino de la habilidad y relaciones individuales de cada palmeadora. Ahí atienden clientela de manera individual como una estrategia que les garantiza el flujo diario de su producto. Sin embargo, como puede verse en el gráfico 1, Plaza Vasconcelos es el sitio de venta con mayor grado de centralidad. También muestra las jerarquías al interior de la organización, porque en Plaza Vasconcelos se encuentran los sitios de venta de las mujeres con mayor poder en la organización: las integrantes del comité directivo, algunas de sus parientes y las que más participan en las asambleas.

Los sitios públicos de venta ubicados en el centro de Tlaxiaco, como la Plaza Vasconcelos, el Mercado Benito Juárez y la calle 5 de Mayo, se pueden considerar como espacios dominados por la UPHCT.



Gráfico 1. Principales espacios de venta (Degree)



Fuente: elaboración propia con datos del censo.

Los sitios de venta están organizados por grupos liderados por determinadas mujeres: Plaza Vasconcelos y calle 5 de Mayo los coordina Petra Cruz González quien asigna la ubicación para cada integrante. La distribución en el interior del mercado está a cargo de Yesenia Méndez García, quien a su vez se arregla con el comité interno del mercado para ubicar los puntos de venta. El tianguis de San Andrés Chichahuaxtla se coordina en función de la puntualidad de cada palmeadora; las mujeres se acomodan de acuerdo al momento en que arriban al mercado en un espacio asignado por las autoridades de esa comunidad: “Ahí [en San Andrés Chichahuaxtla] no hay problema porque ahí nos formamos, digamos la que lle-

gó primero está adelante, segundo y así van formadas” (Antonia María López Hernández, integrante de la UPHCT, 24 de mayo de 2016).

A pesar del avance que significa tener sitios de venta definidos para todos los días de la semana, vale la pena remarcar que la distribución de los espacios sigue mostrando discriminación. Por un lado, a pesar de que las tortillas son indispensables en la comida cotidiana, al ser elaboradas y vendidas por mujeres pobres e indígenas, les asignan espacios marginales y con poca infraestructura. Sus puestos consisten en un pequeño banco de plástico colocado sobre la calle o esquina. Las mujeres con sus tenates repletos de tortillas permanecen horas sentadas esperando a la clientela a expensas del frío, calor o lluvia: “Cuando llueve... los chorros de agua [caen] encima de uno” (Micaela Vázquez Bautista, ex integrante de la UPHCT, 14 de agosto de 2015). Algunas ni siquiera pueden sentarse por falta de espacio y deben permanecer paradas. En realidad, el único beneficio de contar con un sitio de venta es que ya no pueden ser removidas como se hacía antes, como si fueran animales, lanzándoles cubetas de agua.

Por otro lado, las estructuras de los mercados tienden a modernizarse al ir incorporando nuevos productos tratando de ofrecer una lógica económica urbana en las vendimias. En estos reacomodos, las palmeadoras no son incluidas ya que sus cuerpos racializados asociados a las tortillas artesanales no encajan en estas lógicas, quedando nuevamente excluidas del proceso y marginadas en los espacios de venta.

Tortilla como “moneda” de cambio: la práctica del trueque

Como ya se mencionó, el mercadeo de tortillas tiene lugar en sitios públicos; estos intercambios no siempre tienen valor monetario, en muchos casos se practica el trueque, utilizado por familias campesinas para mover su producción y complementar su dieta (Linares y Bye 2016). Las localidades de la mixteca oaxaqueña, ubicadas en distintos pisos ecológicos, enriquecen la diversidad de productos que convergen en el tianguis de Tlaxiaco muchos de ellos son alimentos que se consumen con las tortillas. Además de sus aportes energéticos, éstas representan un bien común altamente valorado, pero no en términos económicos sino en su dimensión simbólica e identitaria para la mayoría de la población mexicana.

De aquí que la tortilla sea un producto ampliamente intercambiable. Además de consumirse durante la estadía en los espacios de venta como taco o sola, es prácticamente un bien de cambio. El trueque se desarrolla de dos maneras: como una dinámica de comercio para la obtención de productos: “Por ejemplo, me hace falta chile, cebolla, ajo, pues digo, es lo mismo, si acabo de vender, tengo que comprar con dinero y mejor cambio y así ya” (Silvia A. López, integrante de la UPHCT, 15 de agosto de 2015); o como una alternativa cuando la tortilla no se vende: “Hay días que de plano no hay venta, entonces se tiene que cambiar” (Hermelinda López López, integrante de la UPHCT, 26 de mayo

de 2016). En ambos casos la tortilla se intercambia mayoritariamente por alimentos frescos y procesados.

A través de los cuadernillos de registro de 20 días de ventas se encontró que las palmeadoras intercambiaron un máximo de 15 veces en total. Este comportamiento muestra que el trueque es una práctica cotidiana. Los productos obtenidos son 1) hortalizas (jitomate, cilantro, chile, rábano, lechuga, papa, ajo, cebolla, brócoli, tomate verde, ejote, calabaza, pepino y nopal tierno); 2) frutas de climas tropicales (naranja, toronja, plátano, mango, ciruela, limón, lima, guayaba, piña y melón); 3) frutas de clima templado (aguacate, manzana, pera, granada, durazno y tuna) 4) productos procesados (queso, pan y semitas (tipo de pan); 5) quelites o plantas silvestres asociados al maíz en el sistema milpa (pápalo, flor de calabaza) (tabla 1). Al momento del intercambio, la tortilla conserva su valor monetario, siete tortillas por \$ 10 se cambia por \$10 de jitomate o el producto que se negocie. La gran mayoría (86,78%) de las palmeadoras considera que el intercambio es bueno para ellas. A excepción de los productos procesados, la mayoría de los alimentos que se intercambian en las plazas o mercados no tienen adquirido un saber hacer tan especializado como la elaboración de tortillas ni en técnicas de innovación femenina para mantenerlas calientes durante

Tabla 1. Productos intercambiados por tortilla

Palmeadora	No. de veces que cambió en 20 días de venta	Productos obtenidos
Luisa Gómez S.	8	Jitomate, cilantro, papálo, chile, rábano, lechuga, papa, nopal, aguacate, manzana, queso y pan
Ángela Hernández H.	1	Cilantro y nopal tierno
Margarita Reyes J.	9	Ejote, ajo, cebolla, jitomate, cilantro, brócoli, tomate verde, manzana, naranja, pera, toronja, granada, plátano, tuna
Teresa Santiago H.	3	Lechuga, nopal tierno, ejote, rábano, cilantro, mango, ciruela, pan y semita
Petra Cruz G.	11	Chile verde, chile seco, tomate verde, cebolla, nopal tierno, papa, ajo, jitomate, calabaza, limón, aguacate, manzana, plátano, lima, guayaba, tuna, piña, melón, y quelites
Lucila Zárate	1	Jitomate, tomate verde, durazno y queso
Yesenia Méndez G.	15	Cebolla, jitomate, tomate verde, ajo, lechuga, nopal tierno, calabaza, chile verde, limón y pepino
Yazmin Cano Á.	3	Cebolla, jitomate, tomate verde, chile, plátano y quelites
Adelina López L.	3	Chile, jitomate, tomate verde, lechuga, papa, nopal, plátano, tuna, durazno, quelites, pan y queso
Antonia María López	1	Jitomate, cebolla, flor de calabaza y lechuga

Fuente: información de los cuadernillos de registro, julio-agosto de 2016.

el día de venta e intercambio. Aspectos que ni las mismas mujeres toman en cuenta en la valoración de los intercambios.

Las palmeadoras intercambian con marchantas procedentes de las comunidades que pertenecen al municipio de Tlaxiaco o de otros municipios, movilizando productos recolectados y cosechados en la región mixteca; generalmente las marchantas intercambian tortillas para alimentarse durante el tiempo que permanecen en los mercados, tianguis y también para llevar a casa. Otro grupo importante de intercambio son las dueñas de verdulerías y fruterías. Al estar fuera de su casa, las mujeres desatienden sus responsabilidades domésticas, pero esta “falta” se compensa llevando alimentos a casa, cumpliendo así con los roles genéricos socialmente asignados de madre y esposa. Estos intercambios responden más a una distribución social de los alimentos entre las mujeres para beneficiar a sus familias, que a una lógica de mercado.

Beneficios para el municipio de Tlaxiaco

La disponibilidad diaria de tortilla hecha a mano con variedades de maíz nativo

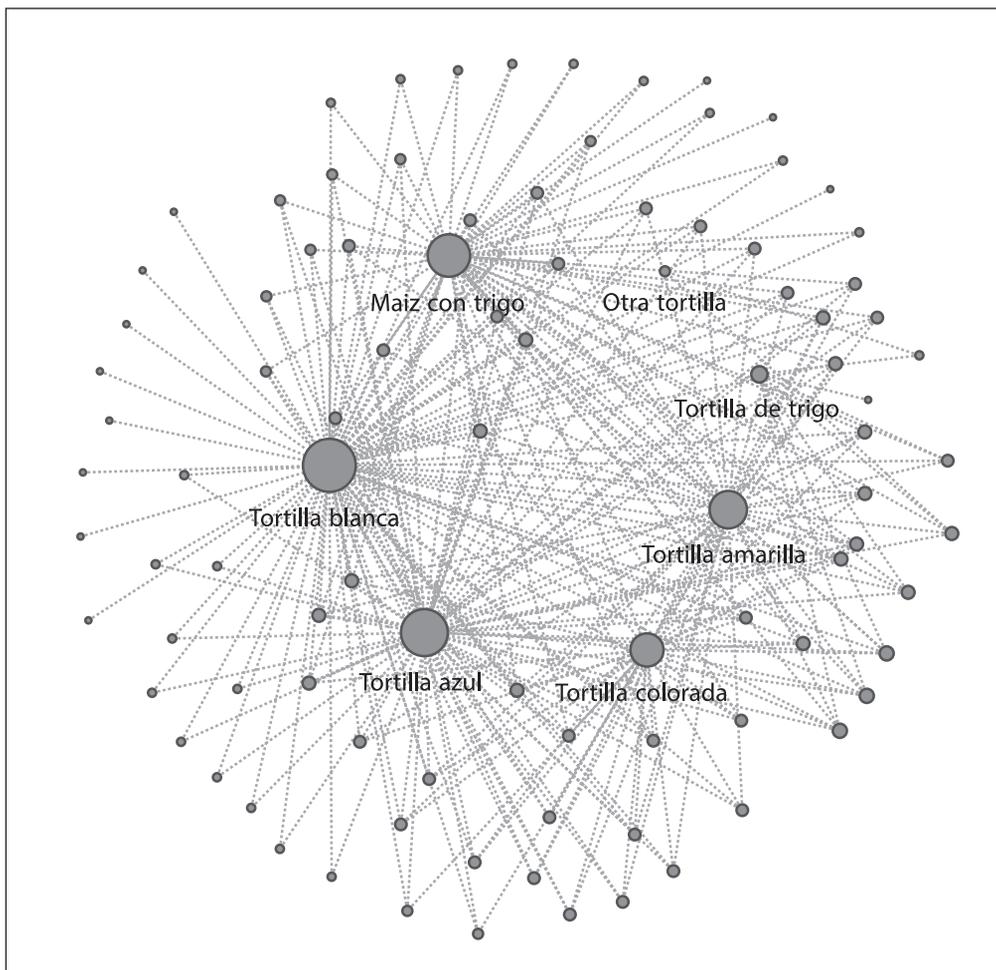
Las palmeadoras diariamente distribuyen en sus sitios de venta una variedad de tortillas blancas, azules, coloradas, amarillas, maíz con trigo y de trigo como una estrategia que amplía la posibilidad de obtener ingresos y ganar nueva clientela. La variedad tortillera estructura un diálogo cultural que se construye gracias a los conocimientos compartidos que las palmeadoras poseen respecto a la elaboración artesanal de la tortilla, preferencia de la clientela y disponibilidad de maíces.

Existe consenso entre las palmeadoras que las tortillas hechas de maíces nativos tienen mejores características de consumo: “Sale un olor bien rico de la tortilla cuando es criollo [maíz nativo]” (Lidia López Ortiz, integrante de la UPHCT, 26 de mayo de 2016). Sin embargo, su disponibilidad a lo largo del año no es constante ya que los maíces nativos producidos en la mixteca, aunque son de variados colores y razas, no son suficientes para cubrir la demanda existente en el municipio (Chávez y Diego 2011). Su escasez se agudiza en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre: “[escasea] en los últimos meses de que ya la gente ya sembró” (Germán Soriano Bautista, distribuidor de maíz nativo, 25 de mayo de 2016).

Las palmeadoras se ajustan a la disponibilidad del grano y al comportamiento de la clientela que tiende a demandar tortillas blancas, azules y de maíz con trigo (gráfico 2). La dinámica de consumo hace que los conocimientos de transformación relacionados con cada tortilla se compartan y reproduzcan cotidianamente en sitios de venta y al interior de las familias.

La tortilla de maíz blanco es la de mayor preferencia y demanda: “Llega la clientela y dice ¿tiene tortillas blancas? [Le digo] no, traje coloradas o amarillas, [te dicen] no prefiero

Gráfico 2. Tipos de tortillas (Degree)



Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

blancas... y se da la vuelta y se va a buscar blancas” (Florencia Gómez San Juan, integrante de la UPHCT, 25 de mayo de 2016). La tortilla combinada con trigo también es demandada porque visualmente se aprecia la presencia del trigo. La tortilla de maíz azul necesariamente es hecha de maíces azules nativos locales, apetecida por su sabor y para consumo con barbacoa.

La presencia de maíces blancos en el municipio de Tlaxiaco es estable a lo largo del año, porque existe toda una estructura de parte del Estado que abastece de maíces blancos híbridos de Sinaloa a través de DICONSA³. En total la empresa distribuye 400 toneladas al mes en todo el municipio. Solo en la cabecera municipal hay 10 tiendas distribuidoras

3 Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector de desarrollo social. Tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación.

(DICONSA 2016). Además, las bodegas de particulares también distribuyen maíces híbridos adquiridos en Tehuacán, Puebla. Este entorno influye para que las tortillas de maíz blanco estén siempre disponibles, aunque no sean de maíces nativos. Las palmeadoras han desarrollado técnicas para adaptarse a la elaboración de tortillas hechas con maíces híbridos ya que presentan características indeseables de la masa que dificultan su manejo durante el proceso de elaboración de la tortilla (Demol y Montserrat 2013; Ortega *et al.* 2017)

Las palmeadoras prefieren los maíces nativos, pero se ven presionadas a utilizar los híbridos debido a la escasez de nativos y al embate constante contra ellos desde la agroindustria transgénica semillera (Salgado 2011; Demol y Montserrat 2013). La mayoría señaló que cada vez es más difícil hacer tortilla con maíz nativo (56,2%), aunque hay una importante proporción que indica lo contrario (38,2%) debido a que ellas mismas pertenecen a hogares productores de maíces nativos de la región, lo que les da una cierta seguridad de abasto.

La dinamización de la economía local

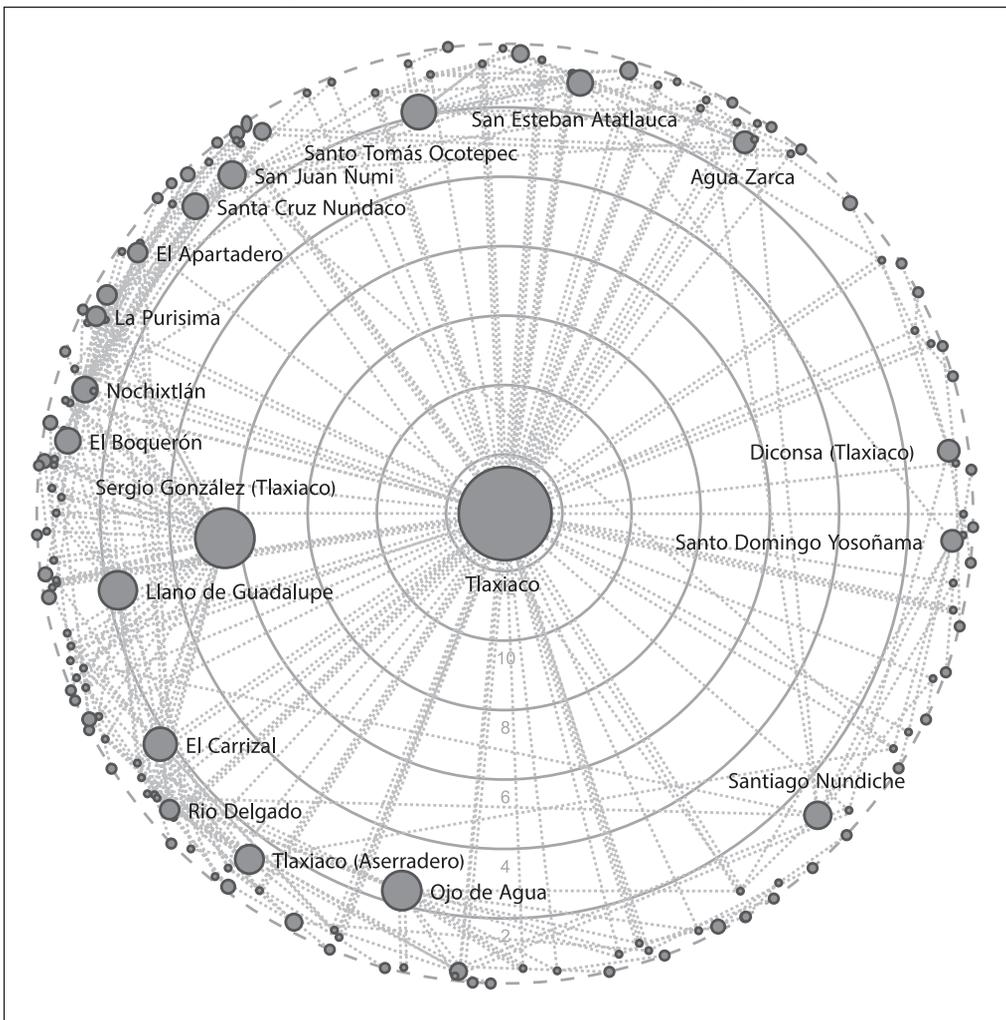
A lo largo de este trabajo se han mostrado las múltiples interacciones que las palmeadoras construyen para realizar la venta de tortillas. Con estas actividades las palmeadoras movilizan la economía local, en particular entre comerciantes que venden los insumos que ellas necesitan: distribuidores de maíz, trigo, leña y cal. Son grupos no estáticos, ni aislados, ni autónomos que se enlazan al oficio de las palmeadoras (gráfico 3). Las vinculaciones se dan a través de las transacciones económicas que las palmeadoras tejen para abastecerse de insumos: “Si vendo cuatro cajones... le saco casi \$ 500 pesos pues agarro \$ 350 para mi bulto de trigo” (Florencia Gómez San Juan, integrante de la UPHCT, 25 de mayo de 2016).

Tlaxiaco es el principal centro de aprovisionamiento de todos los insumos. Ahí se obtienen maíces nativos de campesinas-nos y distribuidores locales, maíces híbridos de distribuidores particulares y DICONSA, leña a través de aserraderos de particulares, trigo y cal de distribuidores particulares. Por ejemplo, Sergio González es un distribuidor importante que provee maíces híbridos de distintas calidades. Las palmeadoras frecuentemente se surten ahí porque eligen el maíz que mejor se acomoda a sus necesidades (gráfico 3).

Las palmeadoras se vinculan con distribuidoras-es de distintas comunidades locales y regionales. San Esteban Atlatlahuca, Santo Tomás Ocotepec, Llano de Guadalupe, Ojo de Agua, Río Delgado y El Boquerón proveen principalmente leña y maíces nativos (de mayor a menor importancia). Santa Cruz Nundaco, El Carrizal, El apartadero y La Purísima (de mayor a menor importancia) son importantes proveedores de leña. San Juan Ñumi, Santiago Nundiche y Santo Domingo Yosofñama son importantes proveedores de maíces nativos. Agua Zarca provee de maíces nativos e híbridos mediante DICONSA. Particularmente Nochixtlán y Santo Tomás Ocotepec son otros municipios de la mixteca oaxaqueña que abastecen de maíz híbrido y trigo (gráfico 3).

Las palmeadoras a través del tiempo han fortalecido sus vínculos sobre todo con campesinos y leñeros. Esto les ha permitido desarrollar estrategias de pago para abastecerse de sus insumos. Un ejemplo son los campesinos con quienes cubren el costo en pagos fraccionados: “Cuando los campesinos nos venden su maíz, a veces no tenemos para pagarle luego, entonces le decimos déjeme lo trabajo [hago tortillas para vender] y ya viene usted dentro de ocho días y ya le doy su dinero” (Petra Cruz González, presidenta de la UPHCT, 13 de agosto de 2015). La misma dinámica se repite con distribuidores de leña. El desarrollo de vinculaciones con diferentes grupos sociales les permite abastecerse de los insumos fundamentales para seguir reproduciendo el oficio.

Gráfico 3. Red de proveedores de maíz nativo, híbrido, trigo y leña (Indegree)



Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

La permanencia de un oficio pertinente y necesario

Las mujeres venden tortillas por la necesidad apremiante de comprar alimento para su familia: “no tuve leche en mi pecho para mi niño cuando nació y tuve que vender tortillas para comprarle” (Juana Ayala Rojas, integrante de la UPHCT, 14 de julio de 2016). También para apoyar la educación de hijos e hijas: “Pues no había dinero para nuestros útiles escolares, pues mi mamá fue cuando empezó a moler” (Hermelinda López López, integrante de la UPHCT, 26 de mayo de 2016). Algunas palmeadoras consideran la venta de tortillas un buen negocio además de que les gusta: “Porque me gustó y se vendía bien la tortilla” (Margarita Cruz González, integrante de la UPHCT, 10 de julio de 2016). La elaboración de tortilla también asegura su disponibilidad diaria para consumo de la familia y el acceso a otros alimentos: “Con el dinero de la venta me surto de frutas y verduras” (María del Carmen Santiago, integrante de la UPHCT, 16 de julio de 2016).

Pero hay dos motivos para vender tortilla más allá de la necesidad económica. El primero es que se trata de un oficio que se trasmite entre generaciones de mujeres, que se aprende por el simple hecho de ser la hija de una palmeadora: “porque mi mamá vendía y me mandaba a vender” (Josefina Reyes Santiago, integrante de la UPHCT, 22 de julio de 2016). La mayoría de las palmeadoras aprendieron a hacer tortillas artesanales a la edad de ocho años, principalmente de la mamá (n=67) u otras mujeres de la familia (n=8). Asimismo, 56 mujeres señalaron tener familiares de sexo femenino que se han dedicado a la venta de la tortilla artesanal, siendo nuevamente la mamá la más común. Segundo, se trata de una actividad que genera ingresos sin trastocar el sistema patriarcal que establece que la principal función de una mujer es cuidar a su familia. La venta de la tortilla es una actividad socialmente aceptada por seguir cuidando a su familia mediante la generación de ingresos. La comercialización es vista como una extensión del papel de madres para conseguir sustento o “ayudar” a su marido (Seligmann 2001).

El oficio de palmeadora permite construir distintas formas de ayuda intrafamiliar que se implementan en cinco etapas: obtención de los insumos, cocción de maíz con cal, molienda, elaboración de tortilla y venta. Durante cada etapa se involucran varios integrantes de la familia debido a las cantidades de tortillas que se preparan diariamente. Esta dinámica establece una red de relaciones al interior de la familia y al mismo tiempo muestra el nivel organizacional sobre el cual se desarrolla el oficio. Las primeras involucradas son las hijas (46,7%), seguido de otras familiares de sexo femenino (29,4%), el esposo (12,9%) y otros familiares masculinos (11,2%) (tabla 2). Esto denota la responsabilidad y participación femenina en las distintas actividades del oficio, la transferencia intergeneracional de conocimientos y responsabilidades y la solidaridad entre familiares femeninas.

Tabla 2. Integrantes de la familia involucradas-os en el oficio

Parentesco	Porcentaje
Hijas	47
Otras familiares femeninas (mamá, hermana, nuera, cuñada, empleada y otra)	29
Esposo	13
Otros familiares masculinos (hijo, papá, nieto y sobrino)	11

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Los pocos esposos que participan en la elaboración de tortillas realizan todo tipo de actividades. El esposo de Luisa “ayuda igual a la hora que yo me paro, él se para a moler el nixtamal [maíz cocido con cal] (Luisa Gómez San Juan, integrante de la UPHCT, 25 de mayo de 2016). También el hijo de Florencia: “Mi hijo me ayuda a tortear, cuando está mi esposo pues él me ayuda a tortear, y ya ellos me lo van pasando y yo lo voy extendiendo en mi mano y lo pongo en el comal y las voy volteando” (Florencia Gómez San Juan, integrante de la UPHCT, 25 de mayo de 2016). Esta ayuda es importante porque aligera el trabajo de una actividad exclusivamente femenina (La Jornada del Campo 2018), aunque no deja de percibirse como “ayuda” y más bien obedece a las escasas opciones laborales para varones. Algunos de ellos reconocen que los ingresos femeninos son más estables: “Cuando él no tiene trabajo yo tengo que sustentar la casa” (Florencia Gómez San Juan, integrante de la UPHCT, 25 de mayo de 2016). Esto evita los conflictos: “Él... no se enoja porque está consciente que uno está trabajando... dice... si yo no traigo dinero a la casa tampoco exijo porque no estoy trabajando” (Florencia Gómez San Juan, integrante de la UPHCT, 25 de mayo de 2016). Pero también es cierto que la elaboración y venta de tortillas lleva consigo un proceso de legitimación patriarcal que no causa conflictos en la distribución de responsabilidades ni de roles de género, tanto al interior de los hogares como de las comunidades.

Conclusiones

Este artículo exploró los beneficios colectivos de la organización de mujeres indígenas de clase trabajadora, el sector más desfavorecido de la sociedad mexicana por las desigualdades de clase, etnia y género. La UPHCT surgió por el interés de asegurar espacios de venta y clientela, al tiempo que las autoridades del municipio utilizaron una estrategia patriarcal y clientelar para sumar votos para el partido que gobernó al país durante todo el siglo XX, reproduciendo así las desigualdades sociales resultantes de la interseccionalidad (mujer, indígena y pobre) en beneficio del partido gobernante.

Frente a los embates neoliberales para seguir preservando el gusto por las tortillas artesanales, las mujeres que las elaboran y venden encuentran formas legítimas para ganarse la vida y contribuir al sustento familiar. Al organizarse encuentran algunos beneficios, entre

los de tipo individual se identificaron: la estabilización y respeto de los puntos de venta; la posibilidad de intercambiar tortilla por productos necesarios en casa. Con el primer beneficio se garantizó la disponibilidad de espacios públicos con amplia concurrencia de clientela y marchantas. Con relación al segundo, las mujeres ganan en autonomía y contribuyen a la diversificación de la dieta familiar. A través del trueque las mujeres movilizan productos elaborados y cosechados en otras regiones, fortaleciendo relaciones más justas e igualitarias entre distintas mujeres y personas que tienen presencia pública en el mercado de Tlaxiaco.

Los beneficios colectivos fueron tres: la disponibilidad de tortillas hechas con distintas variedades nativas de maíz para la población de Tlaxiaco; la dinamización de la economía local; y la permanencia de un oficio pertinente y necesario para el municipio. Con relación al primero, las palmeadoras abastecen diariamente de hasta seis tipos de tortillas los siete días de la semana. La variedad de tortillas amplía su posibilidad de obtener ingresos monetarios. Además, su elaboración cotidiana permite que los conocimientos de transformación del grano se sigan conservando y reproduciendo. Segundo, las palmeadoras son importantes movilizadoras de la economía local debido a la variedad de insumos que necesitan para el desarrollo su oficio. Esto permite que se vinculen con diversos grupos sociales existentes en la región. Tercero, el oficio de palmeadora se consolida como indispensable para el municipio y para las mujeres que lo practican de generación en generación, debido no sólo a la captación de ingresos monetarios constantes, sino también a la importante herencia cultural que se trasmite de madres e hijas.

Se concluye que la labor organizativa ayuda a las mujeres en términos de visibilidad, reconocimiento, autonomía y permanencia. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para superar las desigualdades y discriminaciones de las mujeres indígenas, ya que los espacios de venta son incómodos y las condiciones de trabajo son precarias. Es necesario que las mujeres transiten hacia la formulación de demandas de género no solo al interior de sus familias y de la organización, sino hacia las relaciones que dominan en las estructuras de gobiernos locales. Se trata de nuevas formas de doble y triple valoración: del trabajo femenino y su saber hacer, de la preservación del consumo de tortillas artesanales y a su vez con implicaciones en la defensa de los maíces nativos, y de la sabiduría que poseen para posicionar estas estrategias femeninas ampliamente legitimadas, en las agendas de seguridad y soberanía alimentarias.

Bibliografía

- Audelo, Jorge. 2007. "Organizaciones sociales y partidos políticos en Oaxaca". *Política y cultura* 27: 57-74.
- Barreto, Magali. 2011. "The mayan indigenous women of Chiapas: LekilKuxlejal and food autonomy". *Development* 54 (4): 485-489. <http://dx.doi.org/DOI:10.1057/dev.2011.96>

- Carmona, Doralicia. 2018. "Memoria política de México", <http://www.memoriapolitica-demexico.org/Efemerides/2/28021943.html>
- Carranza, Tzinnia. 2012. "Tianguis indígena: The solidarity economy and indigenous women in México". *Development* 55 (3): 393-396. <http://dx.doi.org/DOI:10.1057/dev.2012.56>
- CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). 1972. *Documental IÑOSAVI*. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). 2005. *Tlaxiaco raíces de una gran ciudad*. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- Chávez, José, y Prisciliano Diego. 2011. "Familias campesinas y variación fenotípica de poblaciones nativas de maíz en la región de Tlaxiaco, Oaxaca". *Desarrollo, Ambiente y Cultura* 1(1): 27-38.
- Chávez-Rodríguez, Libertad. 2016. "La importancia de la interseccionalidad en la vulnerabilidad social ante eventos hidrometeorológicos extremos en Yucatán México". En *Transformaciones ambientales e igualdad de género en América Latina. Temas emergentes estrategias y acciones*, editado por Margarita Velázquez, Verónica Vázquez, Ana De Luca y Dulce Sosa, 19-42. Cuernavaca: UNAM.
- Crenshaw, Kimberle. 1991. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color". *Stanford Law Review* 43 (6): 1241-1299.
- DICONSA. 2016. "Así lo hace Diconsa (transportación de maíz)", <https://www.gob.mx/diconsa/archivo/multimedia?idiom=es&page=6>.
- Demol, Céline, y María Montserrat. 2013. "Consumir lo lejano. La pérdida de la soberanía alimentaria en Oaxaca". En *Mujeres (in) visibles: género, alimentación y salud en comunidades rurales de Oaxaca*, editado por Sara Pérez y Mabel García, 41-78. California: UDA, Publicaciones URV.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2010. "Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 Oaxaca", <http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princiresult/oax/20principalesresultados-cpv2010.pdf>
- Katz, Esther, y Luis Vargas. 1990. "Cambio y continuidad en la alimentación de los mixtecos". *Anales de Antropología* 27: 15-51.
- La Jornada del Campo. 2018. "Voltear la tortilla". *Suplemento de La Jornada* 125, febrero. <http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/delcampo.html>
- Lazos, Elena. 2012. "Conocimiento, poder y alimentación en la mixteca oaxaqueña: tareas para la gobernanza ambiental". En *Gobernanza ambiental*, coordinado por Mina Kleiche-Dray, 1-39. Buenos Aires: CLACSO ENGOV.
- León, Magdalena. 1997. "Empoderamiento en la teoría y práctica del feminismo". En *Poder y empoderamiento de las mujeres*, compilado por Magdalena León, 1-26. Santa Fe de Bogotá Colombia: TM Editores.

- López, Francisco. 2007. *La consolidación del estado nacional y la lucha de los pueblos por su autonomía*. México: MC Editores.
- Linares, Adelmira, y Robert Bye. 2016. "Traditional markets in Mesoamerica: a Mosaic of History and Traditions". En *Ethnobotany of Mexico Interactions of people and plants in Mesoamerica*, editado por Rafael Lira, Alejandro Casas y José Blancas, 151-178. New York: Springer Science+Business Media. [http://dx.doi.org/ DOI 10.1007/978-1-4614-6669-7](http://dx.doi.org/DOI.10.1007/978-1-4614-6669-7)
- Manzano, Lily. 2001. "Las artesanas de la casa de la noche: análisis de una experiencia de trabajo con mujeres artesanas". En *De la tradición al mercado microempresas de mujeres artesanas*, coordinado por Paloma Bonfil y Blanca Suárez, 37-70. México: GIMTRAP.
- Marroquín, Alejandro. 1978. *La Ciudad Mercado (Tlaxiaco)*. México: Instituto Nacional Indigenista.
- Martínez, Luz, Zapata, Emma, Alberti Pilar y Rufino Díaz. 2005. "Género y poder en tres organizaciones rurales de la región lagunera". *Revista Mexicana de Sociología* 2 (67): 271-319.
- Ortega, Tomás, Vázquez, Verónica, Flores Diego y Juan Núñez. 2017. "Agrobiodiversidad, género y soberanía alimentaria en Tlaxiaco, Oaxaca". *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas* 18: 3673-3684.
- Paolino, Philip. 2009. "La posición del PRI en la política mexicana". *Política y gobierno* 16 (2): 321-348.
- Rocheleau, Dianne, Thomas-Slyter Bárbara y Esther Wangari. 2004. "Género y ambiente: una perspectiva de la ecología política feminista". En *Miradas al futuro hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género*, compilado por Verónica Vázquez y Margarita Velásquez, 341-420. México: PUEG/CRIM/CP.
- Rocheleau, Dianne. 2007. "Paisajes políticos y ecológicas de Zambrana Chacuey: el legado de Mamá Tingo". En *Las mujeres y las políticas del lugar*, editado por Wendy Harcourt y Arturo Escobar, 83-96. México: UNAM.
- Rodríguez, Verónica y Diego Quintana. 2002. "Paradojas conceptuales de género en procesos de cambio de mujeres indígenas y campesinas en el medio rural", <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/mobile/13/rodriguez.html>
- Salgado, Álvaro. 2011. "Diversidad erosión y contaminación genética del maíz nativo en México". En *Biodiversidad, erosión y contaminación genética del maíz en América Latina*, editado por María Manzur, 17-40. Broederlijk Delen.
- Seligmann, Linda. 2001. *Women Traders in Cross-Cultural perspective mediating identities, marketing wares*. Stanford California, USA: Stanford University Press.
- Vázquez, Verónica y María Chávez-Arellano. 2012. "Entre lo público y lo privado. Mujeres gobernando municipios de Tlaxcala, México". *Ra Ximhai* 8 (1): 83-99.
- Viveros, Mara. 2016. "La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación". *Debate feminista* 52:1-17. <https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005>

- Vizcarra, Ivonne. 2001. *Entre el taco mazahua y el mundo: la comida de las relaciones de poder, resistencia e identidades*. México: UAEMEX. Zafra.
- Yuval-Davis, Nira. 2006. "Intersectionality and Feminist Politics". *European Journal of Women's Studies* 13 (3): 193-209. <https://doi.org/10.1177/1350506806065752>
- Zapata, Emma. 2002. *Las mujeres y el poder: contra el patriarcado y la pobreza*. México: Plaza y Valdés.

La producción de líderes políticos situados en dos comunidades políticas mexicanas

The production of situated political leaders in two Mexican political communities

Brenda Griselda Guevara Sánchez* y Francisco Javier Verduzco Miramón**

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2018

Fecha de aceptación: 10 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3287>

Resumen

En este escrito reflexionamos sobre las condiciones históricas que influyeron para que en dos espacios geográficos, organizativos y económicos distintos existan importantes similitudes en la producción de complejos liderazgos agrarios. Por un lado, la comunidad agraria de Zirahuén en Michoacán, nos centraremos en la figura política de Marcos Paz Calvillo; por el otro el ejido de Campos, Colima con Armín Núñez Meza. Estas organizaciones son analizadas como comunidades políticas perennes, en las cuales su propia historia y las biografías de los sujetos estudiados estuvieron en constante producción y disputa. Con base en nuestros resultados etnográficos proponemos la noción de liderazgos políticos situados, cuyo rango de influencia depende, en gran medida, de los objetivos, espacios, públicos y condiciones históricas específicas de sus respectivas formaciones.

Palabras clave: comunidad; comunidad política; discursos; ejido; líderes políticos situados

Abstract

This paper analyzes the historical conditions that allowed two very different geographic, organizational and economic spaces to develop important similarities in the production of complex agrarian leaderships; on one hand, the agrarian community of Zirahuén in Michoacán, centered in the political figure of Marcos Paz Calvillo; on the other, the Campos ejido in Colima with its leader, Armín Núñez Meza. These organizations are examined as perennial political communities in which local history and the biographies of the subjects studied emerged through an ongoing process of production and dispute. Based on our ethnographic results we propose the notion of situated political leadership in these communities; the degree of influence exerted by such leaderships depends largely on the objectives, spaces, publics and specific historical conditions of their respective formation.

Key words: community; ejido; political community; situated political leaders; speeches

* México. El Colegio de Michoacán A.C. Correo: brendague68@hotmail.com

** México. El Colegio de Michoacán A.C. Correo: socio100_@hotmail.com

Nuestros¹ resultados etnográficos

La comunidad agraria de Zirahuén, Michoacán

Marcos Paz Calvillo fue el dirigente de la comunidad agraria de Zirahuén por casi cuatro décadas –1980 a 2010– murió en 2011. Tuvo varios cargos de representación dentro de esta organización y durante la década de 1990 fue presidente de bienes comunales en dos

ocasiones. Paz reunía dos características que en ese momento eran indispensables en un líder comunal: estar dispuesto a “sufrir por la comunidad” y tener facilidad de palabra para relacionarse con diversos activistas políticos, miembros de otras comunidades indígenas y defender las demandas de sus representados ante distintas dependencias públicas.

En el año 2009, durante una de las charlas que Brenda sostuvo con Paz, éste le habló de una de sus experiencias de secuestro; cuando a su casa llegaron cuatro judiciales y, sin una orden de aprensión, lo llevaron a Uruapan...

– Aquí por los dedos me metían agujas, esto en una cárcel clandestina de aquí de Uruapan [Michoacán, México] para que me hiciera confeso y luego me metieron en una pila del río Cupatitzio [...] y luego la

electrizaban y luego me echaban tehuacán con chile por las narices y ni así, y las agujas y ni así; ¡échenle cabrones ahora que me tienen amarrado! No [...] Fue una tortura dura, no crea que ha sido una lucha fácil...

– ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado? [Le preguntó Brenda]

– Nada más un día, de cómo a las ocho [de la mañana] a las diez [de la noche], me dejaron libre porque llegó Capiz con toda la gente de la comunidad y tomaron allí afuera...

En sus argumentos, Paz destacó: 1) su sufrimiento al sentir el dolor por la “tortura”; 2) su valentía pues no “ha sido una lucha fácil”; 3) que contaba con el apoyo decidido de Efrén Capiz;² y 4) el respaldo de toda “la comunidad”. A través de su narración se colocó como un líder que defendió a la “comunidad” y “luchaba” por los recursos naturales que le pertenecían, por lo que se le consideraba un “líder”. A simple vista, los aspectos que

1 Con el uso del pronombre *nosotros* nos estamos refiriendo a Brenda y Javier.

2 Efrén Capiz fue el coordinador general de la UCEZ, desde la fundación de ésta en 1979 hasta la muerte de éste en 2005. Paz fue uno de los hombres más cercanos a este líder agrario. Ello ocasionó en buena medida que después de la muerte de Capiz, Paz adquiriera una importancia relevante al interior de dicha organización, hasta su muerte seis años después

contenían este discurso no estaban en disputa y eran elementos constantes de este tipo de narrativas. Sin embargo, Albino Saucedo —uno de los hombres del círculo político de Paz y Capiz— dos veces presidente del consejo de vigilancia entre finales de la década de 1980 y mediados de la de 1990—, en agosto de 2012, le argumentó a Brenda un Marcos Paz más complejo:

Cualquier cosita iba y platicaba con él [Marcos], porque estuve como cuatro años como consejo de vigilancia. Pero casi los tres años me metieron al bote por andar de entremetido [...] pero él sí pues defendía, Marcos, y ayudaba a la gente. Él arreglaba [...] Decían que había agarrado mucho dinero y yo nunca vi [...] Nomás yo si cuando estaba Marcos yo me sentía bien seguro porque aquel le valía, aquel como si nada. Nos metían a la cárcel y aquel cante y cante allá en la cárcel y me daba ánimos porque a nadie han metido.

Albino centró su narración en dos aspectos: tratar de legitimar el liderazgo de Marcos al decir que “él sí defendía [...] él sí arreglaba”; y al mismo tiempo produjo su propio protagonismo en torno a la relación cercana que tenía con él y las veces que estuvo en la cárcel “por andar de entremetido”. Es decir, por ser uno de los comuneros más activos en las acciones políticas que emprendían, defender las fracciones de tierras que reivindicaban como parte de sus bienes comunales y que particulares externos tenían en usufructo. En este sentido, no tener miedo de ir a la cárcel era lo que diferenciaba a él y Marcos de otros comuneros: “a nadie han metido [a la cárcel]”. Aunque, conforme avanzó la entrevista, Albino produjo un Marcos parcialmente distinto:

Porque Marcos en parte ayudaba y en partes no [...] No, han sido medios fregados, no crea. Conmigo casi no, pero han sido bien malos con la gente [él y su esposa, Salud Padilla]. Des-pensas le mandaban camionetas y sólo a mí me daba una y allí se las ruyían todas las ratas por no darle a la gente [...] Yo agarre dos veces de las huertas como 14 mil pesos que me daban de las huertas y cada rato estaban que vente que ya vamos a los toros y él con toda su familia.³ A veces me les escondía [...] Ya le digo “es que sabes que, Marcos un día va a haber problemas, pues es que yo estoy gastando el dinero así nomás en la gasolina para ir a los toros”.⁴

Aquí resulta interesante analizar comparativamente estos dos fragmentos de una misma entrevista. En el primero, Albino produjo su relación con Marcos bajo el pronombre de *nosotros*, que le permite figurar como uno de los comuneros más activos en la “lucha comunal”; pero en el segundo produjo a Marcos como *otro* que “en parte ayudaba y en parte no”, así como el particular provecho que éste obtenía de los ingresos generados por los bienes comunales. En estas prácticas, Albino participaba un tanto obligado, pues “a

3 A mediados de 1990 sembraron de manera comunal una huerta de durazno en el Cerrito Colorado.

4 Con “ir a los toros” se refieren a los jaripeos que frecuentemente organizan en Zirahuén o en otras localidades, por lo regular con motivo de la celebración de una fiesta patronal.

veces me les escondía”, y trataba de hacer entender a Marcos sobre los conflictos intracomunales que podían provocar.

Otros comuneros fueron más radicales en sus críticas. En el 2010, durante una conversación que Brenda tuvo con Bulmaro Cuíriz, entonces presidente del comisariado de bienes comunales, éste se mostró contrario a vender la tierra, argumentando que otros comuneros sí lo hacían. Para darle un ejemplo habló de una situación social presenciada en 1991, misma que nombró “la toma del aserradero”. A decir de él, se trataba de un grupo de comuneros que habían sido desconocidos porque habían “traicionado a la comunidad”.

En octubre de 1991, un grupo de comuneros encabezados por Fermín Casias, secretario del comisariado de bienes comunales, y Natividad Rodríguez, tomaron las instalaciones del aserradero comunal recién fundado. Hasta entonces estos comuneros eran parte del círculo de confianza creado por Paz y Capiz⁵, pero esta acción les costó la expulsión de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), la organización indígena-campesina más importante del estado de Michoacán entre 1980 y 2010. Así, la organización quedó dividida en dos grupos abiertamente confrontados: los autodeterminados miembros de “la verdadera comunidad”, encabezados por Paz y Capiz; y “la otra comunidad”, denominado por estos mismos líderes agrarios, cuya dirigencia la llevó Casias y Rodríguez. Sin embargo, ante dependencias como el Registro Agrario Nacional (RAN), los integrantes de la *otra* seguían siendo legalmente reconocidos como miembros de la comunidad de Zirahuén. Cuando Brenda conversó con Cuíriz en 2010 le comentó que:

Son como unos 30 [...] Esos otros eran de aquí, con Marcos pues mismo. Mire aquí la comunidad como en el 90 solicitó un aserradero comunal y lo hicieron. Entonces ya de allí estuvo como un año trabajando y luego ya de allí salieron las desconfianzas de la misma gente [...] Y pues Marcos nunca les hizo un corte de caja, nada, y por eso se le empezaron a voltear. Ya luego, luego empezaron a jalar gente ellos pa’ llá y los que quisieron se fueron con ellos y los que no pus acá quedamos. Y por lo mismo de que Marcos así ha hecho las cosas. Por eso que vamos a estar ahí trabajando pa’ hacer rico a una persona y que quien sabe qué [decían Rodríguez y Casias]. Y se fueron [...] Y no porque sean derechos ni nada, yo pienso que iban con envidias. Tanto les daba envidia que Marcos agarrara dinero acá. También ellos agarraban dinero, pues igualmente porque ellos son los que están vendiendo la tierra. Agarran los lotes que pa’ gente que tienen necesidad de un lote. Así se fueron agarrando y le dan a toda la gente y ya luego con el tiempo les van quitando, les van quitando, y luego les venden a otras gentes y así se van vendiendo, se van vendiendo. Allí es en donde no estamos de acuerdo con ellos pues, también.

Para Cuíriz los integrantes del grupo de Casias y Rodríguez eran “los otros”, quienes no se quedaron “con Marcos”, mientras que ellos pertenecían a un segundo conjunto que, por

5 Archivo personal de Efrén Capiz Villegas, Morelia, Michoacán, 13 de junio de 1991, sin foja.

el contrario, decidieron quedarse con él. Los *otros* decidieron habitar un espacio distinto siguiendo “otra” lógica de pensar la comunidad⁶. En sí, fueron dos comunidades que coexistieron en un mismo tiempo y en espacios similares, pero también diferentes.

De manera simultánea, Cuíriz deja entre ver no sólo una crítica a los de “la otra”, que “agarraban tierras y vendían”, sino, de manera directa, hacia las acciones de Marcos, “así hacía las cosas [...]. La gente piensa que sí trabaja en la comunidad porque es el que sabe hablar”. En esta frase destaca la importancia de la retórica para que Marcos fuera reconocido por distintos públicos (la gente) como líder comunal. Además, deja ver dos interpretaciones dispares sobre los que sucedía en “la comunidad”: una cosa era lo que “la gente piensa” —los adherentes a las distintas organizaciones sociales que lo apoyaban—, y otra, lo que pasaba en realidad, “Marcos no trabajaba”.

En este sentido, Bulmaro aseguró que él se encargaba de organizar a los comuneros para realizar distintas actividades, desde reforestar hasta asistir a una marcha. A diferencia de Albino, que produce su protagonismo a partir de la cercanía con Marcos, Cuíriz trata de legitimar sus acciones a partir de compararse y separarse de Marcos, como parte de un *nosotros*, pero también como *otro* que no “trabajaba”, que sólo sabía “hablar” y dándole más valor a sus acciones concretas que a los recursos discursivos de Marcos. Sin embargo, Bulmaro estaba consciente de los alcances e importancia de la retórica de Marcos y era precisamente en el mismo espacio, en el espacio del discurso, donde el primero trataba de contrarrestar el liderazgo del segundo.

Gracias a la reconfiguración de las alianzas y los conflictos, a partir de diciembre del 2014 Brenda pudo entrevistar a Fermín Casias. Él aseguró que llevaron a cabo la “toma del aserradero” porque no estuvieron de acuerdo con la forma en que Marcos Paz lo estaba administrando. A decir de Casias, Marcos estaba utilizando las ganancias que este aserradero generaba para su beneficio personal, rehusándose a entregarles un corte de caja como había asegurado Bulmaro cuatro años antes. Pero en estos discursos hay una diferencia importante: no hace alusión a la venta de tierras que, a decir de Bulmaro, Casias y su grupo llevaban a cabo. En sus argumentos los que vendían las tierras a propietarios fuereños fueron los *otros*, Marcos y Capiz.

En los argumentos de Bulmaro y Casias tenían que ver específicamente con la desaprobación de vender tierra comunal y aprovechar de forma particular los “bienes de la comunidad”. Para ambos, quien llevara a cabo esta práctica “traicionaba” a la comunidad y lo hacía indigno de formar parte de ella. El asunto aquí era ¿quién la “traicionó”? ¿alguno de los dos comuneros estaba mintiendo? o, en alguna medida y a partir de Foucault (1992 [1970]), ¿era precisamente la verdad histórica lo que estaba en disputa?

6 Marcos y otros líderes agrarios eran producidos en las distintas narrativas como espacio y tiempo.

El ejido de Campos, Colima

“Yo pienso que vamos para atrás y lo que va pasar es que el ejido se va acabar, ya hasta se olvidaron de los héroes que fueron Zapata”. Fue la frase textual enunciada por Armín Núñez Meza durante la entrevista que Javier sostuvo con él en febrero de 2013. Desde el pronombre *yo*, Núñez proyectó su propia experiencia de vida y *estatus* como autoridad citada y citable que se alimentaba de *otros* para legitimar su posición dominante y, a la vez, distinguirse de los ejidatarios restantes.

Desde una perspectiva situacional, el “vamos para atrás” es el retroceso hacia una condición que se tenía solucionada.

No obstante, temporalmente también implica una regresión.



En la narrativa, Armín Núñez cruzó su ubicación particular dentro de una red política enmarcada por el sistema corporativista que, hasta el año 2000, dio legitimidad al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI, fundado en 1929) a lo largo y ancho de México. En sus argumentos construyó un conjunto de alianzas a través de las cuales buscó legitimar su liderazgo dentro y fuera del ejido. Entre las décadas de 1960 y 1980 ocupó la presidencia del comisariado ejidal en dos ocasiones, fue diputado local (1973-1976), Delegado Municipal por el PRI (1976-1979) y por la Confederación Nacional Campesina⁷(CNC, 1979-1982).

En su razonamiento gramatical colocó el acento en un presente agrario complejo, el cual contrapone con una carga de pasados y futuros. Desde una perspectiva situacional, el “vamos para atrás” es el retroceso hacia una condición que se tenía solucionada. No obstante, temporalmente también implica una regresión. Ambos tienen mayor sentido cuando traemos la figura de Emiliano Zapata al análisis. En estos argumentos, el héroe idolatrado por Núñez remite hasta la Revolución Mexicana de 1910, pasaje histórico en el que esta figura ha sido vinculada como uno de sus principales orquestadores. Los motivos: expropiar las tierras de los grandes terratenientes y devolverlas a los campesinos para su subsistencia. Para entonces, los primeros poseían dicho recurso, pero eran los segundos quienes la trabajaban. Entonces, para Armín el ir “para atrás” era situarse de nuevo en un momento donde las tierras del ejido de Campos estaban en manos de quienes no las trabajan.

Por otra parte, la imagen grisácea en retroceso del ejido no era individual, si no la sumatoria de un conjunto de *yo*s que forma un *nosotros*. Así, lo refirió con el uso del “vamos”, el cual permite identificar una totalidad de personas: los ejidatarios de Campos. Si

7 Organización mexicana adherida al PRI desde su fundación en 1938. Su presencia está vinculada al reparto de la tierra procedido de la Reforma Agraria de 1917. Parte de su accionar político fue incorporar a los líderes locales y trabajadores agrícolas como audiencia para legitimar el régimen priista que caracterizó al país.

bien Armín Núñez se auto-posicionó como miembro del grupo ejidal, también se mostró separado de quienes “se olvidaron de los héroes que fueron Zapata”; los *otros*, quienes ya no recuerdan cómo debería de ser un ejidatario. En cambio, su *yo* aún conserva las bases ideológicas de su formación agraria.

En sus argumentos, Armín produjo un *otros* indefinido (sin nombre y apellido) que le permitió diferenciarse de aquellos que no se identificaban con sus ideales agraristas y por eso eran capaces de vender la tierra. A su vez, esto le facilitó colocarse en un nivel coherente con la Revolución Mexicana, en particular con la Reforma Agraria de 1917, y desde ahí trató de legitimar la pertinencia de su liderazgo. Así lo dejó entrever cuando refirió que la tierra “era una cosa sagrada, porque un ejidatario tenía inmunidad. La tierra ejidal era inembargable, imprescriptible e inalienable”, según lo estipulaba el artículo 27 constitucional reformulado en el año antes mencionado. Es decir, la comercialización de estas parcelas para él era una práctica moralmente incorrecta, cualidades que infundió en sus hijos.

Sin embargo, en la asamblea ejidal de 31 de agosto de 2015 Javier tuvo la oportunidad de presenciar una discusión entre Armida, hija mayor de Armín Núñez, con Toribio Justo, entonces presidente del Comisariado Ejidal. El motivo fue la disputa por 25 hectáreas planas idóneas para el aprovechamiento portuario de Manzanillo, México y, por lo tanto, de alto valor económico, mismas que tres meses antes (31 de mayo) el resto de ejidatarios habían autorizado para que Edgar, hijo menor de Toribio, presidiera el juicio en contra de “Los Cárdenas”.⁸

–“aportar 4 mil pesos y dos lotes para cada compañero ejidatario por esa permuta, que si los sumamos es un billetón” [dijo Toribio].

–“Toribio, que sean diez por ejidatario”, [comentó uno de los presentes].

–“Miren, acuérdense de aquellos que me acompañaron a sacar a “Los Cárdenas”, que no fueron todos. A la hora que nos repartan la lana todos queremos, pero a la hora de ponernos allá en frente no todos van”. [Fue la frase con la que Enrique Fernández, ejidatario y asesor jurídico del comisariado ejidal, contra argumentó]

–“Que sean cinco mil pesos y dos lotes, Toro”, [interrumpió Margarito Tovar y al mismo tiempo una serie de murmullos resonaron en tono de reproches a la propuesta planteada inicialmente].

–“¡Cinco! Aceptadas ya los cinco, no hay discusión, que sean cinco. Entonces aprobado”, [comentario con el que Toribio concluyó la cuestión y todos los presentes, sin excepción, validaron la permuta].

8 “Los Cárdenas” son una familia encabezada por Benjamín, un posesionario legalmente reconocido ante las autoridades agrarias, pero así entre el núcleo ejidal de Campos. Cabe señalar que han sido por lo menos dos ocasiones en los que ésta persona ha sostenido altercados violentos y juicios jurídicos con distintos ejidatarios.

Para Enrique Fernández, entre los ejidatarios el derecho a la tierra se legitimaba según quien más se hubiera arriesgado, un aspecto que a su parecer era importante que los presentes tomaran en cuenta, ya que ellos sólo emitirían su voto para aprobar la propuesta. Sin embargo, para Armida este argumento y la permuta no tenían validez. Ella cambiaba “diez hectáreas allá arriba por una de acá abajo”. A su entender los cinco mil pesos y el par de lotes notificados no tenían punto de comparación con “los más de 20 millones de pesos” que valdría la propiedad que en la asamblea anterior había quedado a nombre de Edgar Justo.

El tabulador de la discusión entre Armida y Toribio era el valor económico de las hectáreas en disputa. La oferta de Armida por cambiar diez hectáreas cerriles por una en la planicie llevaba implícito el contrastante valor económico entre ambas propiedades, dado el potencial industrial y portuario de la planicie. De manera general cada ejidatario se estaba disputando sus propios intereses.

Lo anterior contrastó de forma radical con los posicionamientos que Armín había argumentado tenían en su familia. A decir de él, la venta era una práctica moralmente reprochable, aunque no así la compra. “Yo las compro, pero para el trabajo, no para negociar”. En un mismo discurso, adopta dos significantes distintos alrededor de la comercialización de las tierras en el ejido de Campos: la inmoralidad de quien vende y, a la vez, la validez para comprar. Es decir, el *otro* es el que incurrió, *yo* no. Por el contrario, mí actuar podría evitar que las propiedades caigan en manos de personas que no valoran la tierra como *yo*. No obstante, en el ejemplo anterior para su hija el valor de la tierra estaba en la capacidad de negociar con ella.

En estas contradicciones, ¿cómo debería de ser un ejidatario según Armín Núñez? La figura heroica de Emiliano Zapata le permitió construir no sólo al prototipo de ejidatario que lucha por la tierra, sino también nos lleva a la historia hegemónica de México: la Revolución Mexicana de 1910, un momento donde el acceso a la tierra estuvo en disputa. Un escenario que contrasta con las condiciones analizadas por Javier en su trabajo de campo (2012-2015), en las que la compra-venta de tierras era una práctica cotidiana.

A decir de Horacio Archundia, Cronista Oficial de Manzanillo y Director del Archivo Histórico Municipal, el que la construcción de la Regasificadora⁹ haya sido en Tepalcates, área perteneciente al ejido de Campos, les dio a los ejidatarios la posibilidad de encajarse sus fracciones de tierra, pues los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa promotora del proyecto, tuvieron que comprar 126 hectáreas a razón de un millón trescientos mil pesos por cada una de ellas. “Por eso en Campos quienes vendieron se hicieron millonarios”. Situación de la que la familia Núñez fue una de las más beneficiadas al vender cuarenta hectáreas y otras tantas para la Gasera Zeta¹⁰.

Al igual que Horacio, otros ejidatarios también aseguraron que en estas transacciones Armín fue protagonista. Sin embargo, en la conversación que este líder ejidal sostuvo con

9 La Regasificadora en un proyecto multinacional enfocado al almacenamiento, conversión y distribución de gas natural.

10 Gas Zeta es una empresa privada de capital mexicano. En el 2004 comenzó la instalación de 20 tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo (LP) en tierras del ejido de Campos.

Javier omitió dicha participación. Entonces, ¿no se suponía que para Armín la tierra era inembargable?, ¿por qué esta actividad comercial no tuvo cabida en su autobiografía? Las posibles respuestas son complejas, por ello los invitamos a que las reflexionemos en el siguiente apartado.

Diálogo entre nuestros resultados etnográficos

Núñez y Paz reivindican la tierra desde un principio moral, mientras al interior de ambas organizaciones era apreciada a partir de su valor económico y no necesariamente por una “esencia cultural étnica”, como lo asegura Lomnitz-Adler (1995) cuando habla de “cultura local coherente”. Entonces, ¿por qué en los discursos de ambos líderes omitían estas prácticas comerciales a pesar de que otros ejidatarios y comuneros aseguraban que Paz y Núñez fueron protagonistas o intermediarios para que estas ventas fueran posible?, ¿qué implicaciones políticas tenían dichas transacciones en la producción de sus liderazgos? Este tipo de reivindicaciones fueron las que nos llevaron a reflexionar juntos sobre la compleja producción de liderazgos.

Nuestros resultados etnográficos son consecuencia de momentos coyunturales en los que accedimos a distintas fuentes. En el caso de Brenda fueron dos periodos distintos: el primero entre el 2005 y 2010, años en que predominó el liderazgo de Marcos Paz. El otro, cuando éste estaba siendo seriamente cuestionado e incluso confrontado con otras versiones sobre “lo que pasó en la comunidad” (2012-2017). En ellos Brenda observó los cambios y permanencias durante y después del fallecimiento de Paz (en 2011), lo que Hartog (2007) llama “la muerte del rey”. Este estudioso dice que, después de dicha muerte, se abre un periodo de caos que dura hasta que se restablece el orden (2007, 51, 53-54). Las últimas estancias de trabajo de campo Brenda las realizó en medio de este caos. En él, varios comuneros se estaban disputando la corona y otros ser parte de los más cercanos a ésta.

Armín Núñez fue clave para que la Central Termoeléctrica “Manuel Álvarez Moreno” se construyera en tierras del ejido de Campos a finales de la década de 1970. Años más tarde, esta iniciativa encareció la tierra y, como consecuencia, también aumentó la especulación para la comercialización de este recurso. Al mismo tiempo, comenzaron los reproches en su contra por la degradación agrícola que, a decir de algunos ejidatarios, era consecuencia de la contaminación que esta infraestructura generó. Este fue el escenario con el que Javier se encontró en agosto del 2012 que comenzó su trabajo de campo.

Ambos hicimos trabajo etnográfico en momentos coyunturales, en los cuales los liderazgos de Paz y Núñez, que por décadas habían predominado, estaban siendo seriamente cuestionados. De manera simultánea, otros ejidatarios o comuneros estaban tratando de legitimar sus posicionamientos para fortalecer sus propios liderazgos y adquirir el poder de decisión al interior de sus respectivas organizaciones. En este ambiente conflictivo también

estaba en disputa lo que “realmente pasó” en ambas organizaciones, pues era fundamental para tratar de legitimar tanto los liderazgos y como derechos a los recursos naturales y económicos en disputa. Por ello nos parece pertinente preguntarnos ¿qué hay de peligroso en el hecho de que las gentes hablen y de que sus discursos proliferen indefinidamente? (Foucault [1970] 1992, 5)

Para responder a este tipo de cuestionamientos echamos mano de dos herramientas analíticas: las producciones históricas y los discursos históricos. Siguiendo a Mario Rufer (2010), estas nos permitieron “analizar las dimensiones políticas que subyacen en las luchas por las interpretaciones y re-evaluaciones del pasado”. Ello nos fue útil para reflexionar sobre la forma en que los distintos grupos e individuos recurrieron a acontecimientos pasados y, a su vez, los adaptaron y transformaron según sus condiciones sociales presentes y proyecciones futuras. Es en estas situaciones donde lo que Rufer llama “gestionar el pasado” se transforma en un medio político utilizado por los distintos grupos. De manera interrelacionada entendemos por discursos históricos un recurso invertido en símbolos, mismos que han sido transmisibles, desplazados, producto y productores de las condiciones en las que cada uno de los sujetos ha estado inmerso (De Certeau [1975] 2006, 33, 27-28).

Las contradicciones en los argumentos que hemos citado, proponemos, fueron debido a que en ellos coexistieron dos discursos divergentes y que al mismo tiempo se condicionaban de manera mutua. El primero tenía que ver con “luchar y sufrir por su organización, nunca traicionarla y conservar su territorio”. Este era sobre todo dirigido a públicos externos con los que intentaban producir puentes de diálogo con relación a la reivindicación de sus derechos agrarios; sobre todo ante activistas políticos, académicos y burócratas agrarios. Mientras que en el segundo era a nivel sobre todo local y tenía que ver con las disputas por el acceso a beneficios concretos, tales como la madera, tierra, lago, apoyos económicos y capacidad de toma de decisión al interior de estas organizaciones.

Estos discursos los analizamos como cronotopos que, siguiendo a Bajtín (1986, 269), literalmente significan tiempo-espacio. “El tiempo aquí se condensa, se concentra y se hace artísticamente visible; el espacio, en cambio, se intensifica, se asocia al movimiento del tiempo, de la historia”. Estos dos tipos de discursos o cronotopos eran producto de tiempos y espacios específicos, que estaban en constante producción. Por ejemplo, Marcos Paz produjo una línea teológica de la vida comunal que fue interrumpida con la llegada de los españoles, a la cual aspiraban volver. Para ello apelaba a la antigüedad, “a los tiempos inmemoriales”, en donde podían hacer uso de las tierras ubicadas en Zirahuén de manera libre y en común, tiempo ideal que fue interrumpido por estos “enemigos” externos. En su narrativa pasado, presente y futuro se entremezclaban y condicionaban de manera compleja. Por su parte, para Armín “el principio de la comunidad” estaba centrado en el “tiempo revolucionario, cuando por medio de la lucha fueron expropiadas las tierras de los grandes terratenientes y devueltas a los campesinos para su subsistencia. En dicho momento los primeros tenían la posesión de las mismas, pero eran los segundos quienes la trabajaban.

En ambas narrativas el pasado está vinculado con el sufrimiento e impedimento de acceso a una fracción de tierra que estaba en manos de los españoles y los hacendados. Sin embargo, también había un pasado más reciente que le dio acceso a este recurso, el cual, para el caso de Zirahuén, tuvo que ver con una reivindicación étnica, mientras para Campos con un reconocimiento institucional al campesino, pero el enemigo es el mismo: *el externo*. Vender la tierra significaba traicionar este segundo pasado, en donde les fue devuelto el usufructo de este recurso, es decir, se les hizo justicia. Mientras que en la cotidianidad la venta de tierras era una práctica presente.

Proponemos que con este tipo de argumentaciones Paz y Núñez trataban de legitimar sus liderazgos y, por consiguiente, el poder de toma de decisión y control sobre los recursos naturales en disputa. Esta batalla la daban en lo que Benveniste (1997, 184) llama “el presente del discurso”. En él intentaban transmitir la seguridad de que ese tiempo era “verdadero”, incuestionable, al igual que sus demandas culturales y territoriales.

El primero de los discursos tiene que ver con la comunidad y el segundo con el capitalismo. Para Chatterjee, la comunidad ha sido disciplinada por el Estado-nación, y, al hacer contrapeso a esta disciplina, los integrantes de una comunidad apelan a un *nosotros* primordial fundado en diferentes tipos de solidaridades o pasados comunes. Esta definición es muy importante en su obra porque entiende a la comunidad como un residuo o el remanente del Estado-nación capitalista. Es decir, la comunidad surge a razón de todo aquello que fue excluido de los paradigmas de los estados nacionales contemporáneos. Los excluidos forman comunidades o se involucran con ellas a partir de la constatación de un poder que los margina. Para ella, “la comunidad se extiende como aquello que queda al margen del dominio capitalista y que se ofrece como un espacio de agenda para el subalterno” (Chatterjee 2008 14-15).

A partir de la propuesta de Chatterjee (2008, 13), en la que el Estado debe de reconocer la vigencia de la sociedad política, dándole algunos derechos que van más allá de la legalidad¹¹, es que analizamos al ejido de Campos y la comunidad de Zirahuén como comunidades políticas. Al igual que Yeh (2015) creemos que estar en la circulación gramatical del

En ambas narrativas el pasado está vinculado con el sufrimiento e impedimento de acceso a una fracción de tierra que estaba en manos de los españoles y los hacendados.



11 Esta antropóloga argumenta que el Estado no ha logrado articular a la sociedad en su conjunto, ni el bien común. Por eso, para ella, es más apropiado que utilicemos el término de sociedad política como una alternativa a la noción de sociedad civil, pues nos asegura que el Estado no ha logrado recular a toda la sociedad sino a grupos de gente censada de acuerdo a sus diferencias. Para ella, la sociedad política es la conquista fragmentada de los derechos (Chatterjee 2008, 12)

nosotros es el sello particular de la membresía en un mundo social arraigado. Dicho término evoca la imagen de una comunidad política que comparte ciertos rasgos en común y los convierten en parte o no de la misma.

Estas comunidades políticas eran en sí cronotopos donde condensaban diferentes tiempos-espacios, según el objetivo de las narraciones y, en otras ocasiones o a la vez, eran producto de un mismo tiempo lineal. Como nos recuerda Bajtín (1986, 270), el cronotopo es producto de condiciones históricas específicas, a partir de ellas “se elaboran sólo determinadas formas del reflejo artístico del cronotopo real”.

Además, en la estructura de estas narraciones influyen las condiciones históricas en las que está ubicado su creador. Es decir, su presente discursivo (Hartog 2007; Benveniste 1997).

No es que un cronotopo desapareciera para dar lugar a otro, más bien coexistieron de manera compleja y hacían funcionar a estas dos organizaciones como comunidades políticas. El conflicto entre ellos, y con otros, provocaba que dicha organización estuviera en constante transformación. Pero, a su vez, las reivindicaciones de corte esencialista ayudaban a legitimarse, a dar la batalla jurídica y sumar un valor agregado al momento de mercantilizar la tierra. Nos explicamos mejor, el primero de los cronotopos era esencial para la existencia de estas dos organizaciones, pero se reflejaba, sobre todo, hacia públicos externos

y en los documentos que –para y en no pocas ocasiones con la ayuda de estos– elaboraban. Mientras que, a través del segundo, se disputaban de manera particular quienes tenían derecho a formar parte de ellas y a los beneficios que ello conllevaba.

Echando mano de los argumentos de Friedrich (1991), proponemos que los líderes de los que nos hemos ocupado estaban basados en grupos predominantes que tejían alianzas tanto fuera como al interior de sus respectivas organizaciones, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, aunque Marcos y Armín utilizaron la fuerza y la segregación al interior de la comunidad, también lograron legitimar sus discursos a través de su habilidad retórica. Así lograron tener puntos de comunicación con activistas y algunos burócratas. Esto es la capacidad de producir en sus discursos una historia teológica que les permitió articular los tiempos de la comunidad con sus liderazgos.

Según lo que argumenta Lomnitz-Adler, este tipo de intelectuales tienen la tarea de producir síntesis de la cultura íntima. Para este estudioso, “los intelectuales deben también quedar ubicados en la dialéctica espacial de la producción cultural”. Al igual que este antropólogo, también consideramos que estos líderes eran productores de coherencia

Estas comunidades políticas eran en sí cronotopos donde condensaban diferentes tiempos-espacios, según el objetivo de las narraciones y, en otras ocasiones o a la vez, eran producto de un mismo tiempo lineal.



comunal (Lomnitz-Adler 1995, 290-291). Pero, a diferencia de él, nosotros no creemos que fuera necesariamente para el consumo local sino para el extra-local; eran más bien líderes políticos situados. Pues su grado de influencia tenía que ver según el espacio y los públicos a los que se dirigiera. Por ejemplo, Marcos Paz aparecía como el líder hegemónico entre los integrantes de la UCEZ y demás aliados. Sin embargo, para los miembros de la llamada “la otra comunidad” su retórica y liderazgo no tenía validez alguna.

Los discursos que hemos analizado son memorias formuladas desde el presente de su emisor, mismas que estaba influidas por las interpretaciones tanto propias como de otros públicos, sobre lo acontecido en los distintos pasados y los planes futuros, tanto particulares como de “la comunidad”. En este sentido, concordamos con Boyer (2001, 173-174) cuando asegura que eran pequeños grupos los que dominaban los vínculos políticos e informativos entre el pueblo y el mundo exterior. Desde este nivel de comunicación articulaban la identidad cultural que, a nivel local, adquirió múltiples matices que entraban en abierta contradicción con lo que estos líderes difundían ante distintos públicos externos.

En contraparte ambos líderes produjeron lo que De Certeau llama “lugares comunes”, por medio de ellos trataban de influir en los posibles públicos (2000, XXIV), esperaban que aprobaran estos argumentos, los reivindicaran y fortalecieran; rechazando a su vez o incluso condenando a la contraparte acusada, estaban intentando educarlos y desde allí conjuraban los poderes y los peligros del mismo discurso (Foucault 1992 [1970], 4-5). Además, consideramos que para que les fuera posible articular un argumento coherente, y tratar de convencer a distintos escuchas de la legitimidad de sus reivindicaciones, apelaban a un principio de verdad (Alonso 1988).

Sus relatos eran necesarios para reivindicar su protagonismo y la pertinencia de su liderazgo; ellos tenían todos los requisitos necesarios para el tipo de liderazgo en sus respectivas organizaciones. Para Comaroff y Comaroff, este tipo de producciones son indispensables para legitimar acciones y narraciones de quien las emite, pero son cualquier cosa menos inocentes, pues es la propia representación por medio de la cual se mide el mundo (1992: 25-26). En ella “se inscribe una voluntad en términos de razón” que debe legitimarse, para lo que es necesaria una autoridad que lo haga creíble dentro de un medio ambiente específico. A esto, De Certeau le llama “hacer historia” ([1975] 2006, 19-20, 22).

Lomnitz-Adler (1995, 292), retomando a Gramsci, en su obra: *Las Salidas del laberinto*, plantea tres tipos de intelectuales: los orgánicos que “poseen una legitimidad tanto interna como articuladora”; los tradicionales que “son estrictamente internos”; y, finalmente, los provisionales que son articuladores y su existencia “depende de una necesidad externa incipiente para conexiones con grupos e instituciones internamente débiles o inexistentes”. Según nuestros resultados etnográficos, Paz y Núñez no lograron la total articulación de su liderazgo con sus otros compañeros, pues protagonizaron fuertes conflictos con algunos de ellos. Ello fue causa directa, aunque no única, para que existieran conflictos. En este sen-

tido no podríamos definirlos como intelectuales orgánicos en los términos que lo plantea Lomnitz-Adler, pero tampoco tradicionales ni “estrictamente internos” y mucho menos provisionales.

Por otro lado, en la obra de Friedrich, un líder era quien podía llevar un arma y, en momentos de tensión, solían participar en los asesinatos de miembros del grupo contrario. Así, para ser considerado líder incluía las características de 1) el número de hombres que había matado o tratado de matar; 2) las circunstancias en las que portaba un arma y; 3) ser defensor de un cacique (Friedrich 1991, 296). Además, tenían en común el deseo de dominar a otros y de poseer los puestos y símbolos de poder económico y político. Este antropólogo nos asegura que esta actitud se manifiesta en tres características: *la ambición, la envidia y el egoísmo* (Friedrich 1991, 260).

Para el caso de Campos y Zirahuén no era tan distinto, aunque no llegaron al asesinato, sus miembros obtenían prestigio al demostrar su disponibilidad de enfrentarse a los “contrarios”, ya fueran compañeros, empleados gubernamentales o propietarios privados. Las nociones de liderazgo que proponen Lomnitz-Adler (1995) y Friedrich (1991) fueron de utilidad para reflexionar sobre los personajes clave de los que nos hemos ocupado. Sin embargo, en sus respectivos textos construyen una biografía única de los líderes que analizaron.

En cambio, nosotros proponemos que uno de los aspectos que ha estado en disputa en las dos comunidades políticas ha sido precisamente la argumentación de las biografías propias y ajenas. Además, estos liderazgos eran causa y consecuencia de un complejo campo social, en el cual una localidad y cada sujeto ocupa una posición particular y específica. El discurso de Paz, Cuíríz, Armín y el resto de comuneros y ejidatarios fue producto de este tipo de campo (Roseberry 1998), en el que los distintos proyectos del Estado-nación interferían de manera importante. En este caso intentaron hacerle contrapeso al referirse a él como el que los estaba oprimiendo. Sin embargo, muchas veces sus acciones trascendían estas posiciones, pues de forma cotidiana se relacionaban con otros sujetos tanto de manera individual como colectiva, marcados por tensiones características del mismo campo social (Roseberry 1998, 96-97). Por ello, preferimos el término de *líderes políticos situados*, ya que el grado de influencia de cada uno de ellos dependía del lugar en el que estaban ubicados y el público al que se dirigieron.

Conclusiones

A pesar de haber varias décadas entre el trabajo de Friedrich y el nuestro, ubicamos importantes semejanzas: el deseo por la tierra y “la ambición política por controlar a otros” (Friedrich 1991, 18) entre los sujetos y grupos con los que trabajamos. Desde esta lógica, en un primer plano pareciera que para el tejido de la red de apoyos internos y, hasta cierta medida

externos, las lealtades entre ellos se traducían en privilegios. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a una fracción de tierra, cargos de representación o comisiones especiales y apoyo económico de diversos programas gubernamentales.

Por ello defendemos que lo que define a la comunidad política son los supuestos compromisos pragmáticos contraídos con el ideal de comunidad y ejido, así como las formas de valorar e identificarse con las tierras; rasgos caracterizados por la determinación conjunta y solidaria de intereses en común, que supera la mera coexistencia de intereses individuales. Este tipo de reivindicaciones hicieron posible la existencia de la comunidad política y al mismo tiempo el acceso a beneficios de manera individual de cada uno de sus miembros.

Sin embargo, a partir de la comunidad unida creaban puentes de diálogo con personajes claves para que el ejido y la comunidad pudieran existir, aunque en la cotidianidad de sus integrantes dichos principios no tuvieran efecto y apelaran a diferenciarse de sus compañeros, del *otro* que había vendido fracciones de tierra. En esta misma lógica colocaron las categorías sociales de “lucha” y “traición” como esenciales en la constitución de grupalidades. La primera siempre adjudicada al *yo* y al *nosotros*, mientras que recurrían a la segunda para separarse del contrario. En estas interpretaciones valorativas, un mismo individuo podría haber “luchado por la comunidad”, mientras que para otros la “traicionó”.

¿En qué medida grupos externos a estas organizaciones, incluyéndonos, han influido en estas interpretaciones valorativas?, ¿qué implicaciones tiene en el análisis de nuestros resultados etnográficos que después difundimos en nuestros trabajos académicos? La literatura ha sido uno de los principales medios para la reproducción de figuras heroicas como Zapata y la difusión, legitimación, reinterpretación y fortalecimiento de las reivindicaciones agrarias. Andrés Molina Enríquez (1909), Guillermo Bonfil Batalla ([1980] 2005), Arturo Warman (1972; 1976; 1980) John Womack (1969) son algunos de los intelectuales que han defendido los derechos a la tierra de quienes fueron desposeídos de ésta junto con sus ascendientes; un punto no menos importante, dado que posiblemente ahí radican las formas en que tratan de legitimar la pertinencia de sus liderazgos. Así, proponemos que estas características no solo son de Paz o Núñez sino también en buena medida de los líderes agrarios que reivindican este tipo de ideales: “la tierra es de quien la trabaja”. Es decir, estos dos personajes no eran Zapata, ni nosotros los estudiosos que hemos hecho mención, pero pasamos a convertirnos en un medio para legitimar las propias historias que nos contaron.

Las características generales de los personajes clave se desdibujaron y los matices fueron cada vez más predominantes. A nuestro entender, los conflictos internos en este tipo de organizaciones son habituales, pero esto choca con las construcciones idealistas que nosotros los investigadores adoptamos, reinterpretamos, difundimos e incluso reinventamos. En otras palabras, nuestros resultados etnográficos no chocan con lo que los ejidatarios y comuneros eran, sino con las ideas construidas desde la academia y el activismo sobre comunidad y ejido.

Para Bensa (2016, 15-16, 42-43), la antropología adquirió prestigio mediante la producción de trabajos que privilegian las regularidades concebidas como sistemas que obedecían a reglas generales, las cuales forman sistemas simbólicos dotados de una eficacia propia. Para él, este tipo de clasificaciones sólo confirman la idea de una realidad social estática. Por eso, propone entender la realidad social como un proceso. En este sentido, nos asegura que el lenguaje está anclado en el contexto de enunciación, la identidad del narrador y un amplio dominio de las circunstancias.

Sin embargo, es más cómodo, y en este sentido concordamos con Escalona (2013), “reconocer una condición humana común” y hacerla aplicable en diversos contextos, que comenzar a reflexionar sobre la condición humana de cada uno de nosotros. Por ello, estamos de acuerdo con Segato cuando argumenta que, pareciera que el pensamiento antropológico “ha asumido que la existencia de la diversidad no es meramente un hecho, sino un problema a ser resuelto”, hasta eliminarla o convertirla en un común denominador humano (2016, 6).

Al igual que Segato, nosotros tampoco pretendemos construir verdades últimas de cómo dos estudiosos distintos llegan a las mismas conclusiones en dos espacios geográficos, organizativos y económicos. El escribir juntos permitió tener resultados etnográficos que no sólo muestran lo que pasó en Zirahuén, sino también a cientos de kilómetros en Campos, dos sitios con condiciones históricas que pudieran parecer muy distintas, pero no lo son. El ejido se supone una construcción institucional y la comunidad una construcción cultural, pero al final de cuentas estamos hablando de seres humanos complejos. A diferencia de Lomnitz-Adler (1995), nosotros no aseguramos que encontramos la esencia cultural de los sujetos de estudio y que la actitud conflictiva entre ellos esté siempre presente. En cambio, argumentamos que en las condiciones en que hicimos trabajo de campos sobresalía la disputa por los liderazgos, membresía y recursos naturales. Ante esta complejidad, no nos pareció suficiente preguntarnos por la coherencia cultural, hablar de “grupos íntimos” o “campesinos indígenas” como lo hizo Lomnitz-Adler (1995, 304). En cambio, es más pertinente analizar la pluralidad de los personajes en una comunidad política, tal como lo hicieron Friedrich (1991, 14) y Chatterjee (2008).

Bibliografía

- Alonso, Ana María. 1988. “The Effects of Truth: Re-Presentations of the Past and the Imagining of Community”. *Journal of Historical Sociology* I (1): 33–57.
- Bonfil Batalla, Guillermo. [1980] 2005. “Historias que no son todavía historia”. En *Historia ¿para qué?*, coordinado por Carlos Pareyra, Luis Villoro, Luis González, José Joaquín Blanco, Enrique Florescano, Arnaldo Córdova, Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, Adolfo Gilly y Guillermo Bonfil Batalla, 227-245. México, D.F: Siglo veintiuno.

- Bajtín, Mijaíl. 1986. *Problemas literarios y estética*. La Habana: Arte y literatura.
- Bensa, Alba. 2016. *El fin del exotismo. Ensayos de la antropología crítica*. México, D.F.: El Colegio de Michoacán y Secretaría de cultura.
- Benveniste, Émile. 1997. *Problemas de lingüística general*. México D. F.: Siglo XXI.
- Boyer, Christopher. 2001. "La revolución inventada: Salvador Sotelo y el papel del intelectual local en el Michoacán Posrevolucionario". En *Estudios Michoacanos IX*, coordinado por Martín Sánchez Rodríguez y Cecilia A Bautista, 169-195. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán.
- Comaroff John, y Jean Comaroff. 1992. "Ethnography and the Historical Imagination". En *Ethnography an the Historical Imagination*, coordinado por John Comaroff y Jean Comaroff, 3-48. Boulder, CO: Westview Press.
- Chatterjee. 2008. *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*. Argentina: CLACSO y Siglo XXI.
- De Certeau, Michel. 2000. *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*. México, D.F.: Universidad Iberoamericana.
- _____. [1975] 2006. *La escritura de la historia*. México, D.F.: Universidad Iberoamericana.
- Escalona, José Luís. 2013. "¿Por qué la antropología sigue atrapada en el tema de la identidad étnica? Hacia una antropología de la producción de la diferenciación". En *Identidades diversas, ciudadanías particulares*, coordinado por Jorge Uzeta, 135-160. Zamora, Michoacán.: El Colegio de Michoacán.
- Friedrich, Paul. 1991. *Los príncipes de Naranja. Un ensayo de método antropológico*. México, D.F.: Grijalbo.
- Foucault, Michel. [1970] 1992. *El orden del discurso*. Buenos Aires: Tusquets Editores.
- Hartog, François. 2007. *Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias de tiempo*. México, D.F.: Universidad Iberoamericana.
- Lomnitz-Adler, Claudio. 1995. *Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano*. México, D.F.: Editorial Planeta.
- Molina Enríquez, Andrés. 1909. *Los grandes problemas nacionales*. México: imprenta de A. Carranza e hijos.
- Roseberry, William. 1998. "Cuestiones agrarias y campos sociales". En *Las disputas por el México rural*, editado por Sergio Zendejas y Pieter de Vries, 73-97. Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacán.
- Rufer, Mario. 2010. "Memoria sin garantías: usos del pasado y política del presente". *Anuario de Investigación*: 107-140. https://kupdf.com/embed/rufer-mario-memoria-sin-garantiaspdf_59d1893408bbc5db646870b2.html?sp=0
- Segato, Rita, 2016, "Una paradoja del relativismo: el discurso racional de la antropología frente a lo sagrado". En *(In) Disciplinar. La investigación: Archivo, trabajo de campo y escritura*, coordinado por Frida Gorbach y Mario Rufer. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana y Siglo XXI.

- Warman, Arturo. 1972. *Los campesinos. Hijos predilectos del regimen*. México, D.F.: Editorial Nuestro Tiempo.
- _____. 1976. *Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el estado nacional*. México, D.F.: La Casa Chata.
- _____. 1980. *Ensayos sobre el campesinado en México*. México, D.F.: Nueva imagen.
- Womack, John. 1969. *Zapata y la revolución mexicana*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Yeh, Rihan. 2015. “La calle es un río”: el público de los (narco)corridos como “el pueblo”. *Revista colombiana de antropología* 51: 79-107. <https://doi.org/10.22380/2539472X28>

Gestión del agua en Azuay: base de la organización rural y la trascendencia hacia la incidencia nacional

Water management in Azuay province: base of rural organization and its significance nationwide

Paola Pila Guzmán*

Fecha de recepción: 4 de marzo de 2018
Fecha de aceptación: 26 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3288>

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo la organización social para la gestión del agua de consumo humano ha conservado la identidad comunitaria del territorio rural en el Azuay y ha sido la base para que esta organización rural localizada trascienda hacia el nivel nacional a través de sus líderes y sus discursos. Se parte del concepto de territorio como producto de la acción de los seres humanos y sus dinámicas que devienen en procesos sociales, culturales, económicos y políticos que adquieren dimensiones simbólicas tales como la identidad territorial y la concepción de lo comunitario. La metodología usada para el levantamiento y análisis de la información fue cualitativa, lo que permitió analizar los discursos de los sujetos y sus significados con base en entrevistas y grupos focales, generando evidencia de que la gestión del agua evolucionó desde un estado tradicional aislado, hasta un estado de organización local con incidencia nacional. Esto ha permitido llevar las características de lo comunitario hacia la organización de tercer grado. Se puede decir que la gestión del agua puede ser la base del mantenimiento de la organización rural, sin que ello implique ubicarse únicamente en dicha esfera, sino trascender hacia la presencia organizativa y política nacional.

Palabras clave: comunitario; gestión del agua; organización rural; territorio

Abstract

The aim of this article is to analyze how the social organization for management of water intended for human consumption has maintained the community identity of the rural territory in Azuay and has been as well the basis for the transcendence of this rural organization to the national level through the presence of community leaders and their discourse. The article assumes the territory as a result of human actions carried out through dynamics that become social, cultural, economic and political processes and acquire symbolic dimensions such as territorial identity and the conception of the community. The qualitative methodology that has been used for the gathering and analysis of information, made it possible to examine the discourses of the subjects and their meanings based on interviews and focal groups, generating evidence that water management has evolved

* Ecuador. Licenciada en Gestión Social por la Universidad de Cuenca, Magister en Desarrollo Local y Territorial por Flacso-Ecuador. Actualmente es directora de la Licenciatura en Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca y Coordinadora Académica de la Maestría en Género, Desarrollo, Salud Sexual y Reproductiva en la misma universidad. Sus líneas de investigación son género, territorio, desarrollo, agua y medio ambiente, identidades y violencia. Correo: paola.pilag@ucuenca.edu.ec

from a traditional isolated state to a state of local organization with nationwide significance. This has made it possible to bring the community characteristics to a third-grade organization. As a conclusion, we propose that water management not only may be the basis for the maintenance of rural organization, which shall not imply remaining in this area, but also is able to transcend to the national political and organizational presence.

Key words: community; rural organization; territory; water management

Introducción

Los territorios rurales de la provincia del Azuay cuentan con una rica historia relacionada con la organización comunitaria para la gestión de recursos hídricos, como el agua de consumo humano y de riego. Dicha historia podría ser el sustento objetivo para una serie de procesos socio-políticos de organización en los niveles locales y su trascendencia hacia el nivel nacional. Este análisis se sustenta en la reconstrucción de una serie de procesos hidrosociales (Boelens *et al.* 2016) que llevaron a los territorios rurales de Victoria del Portete y Tarqui a posicionarse como referentes locales y nacionales tanto en la gestión del recursos hídricos como en la incidencia política para la defensa del agua.

La literatura que trata la temática de la gestión del agua y su relación con la construcción social del territorio es abundante. A nivel latinoamericano, autoras como Ávila (2003) han desarrollado variadas propuestas para el análisis de la gestión del agua con base en los conflictos, pues considera que el agua es un recurso estratégico y político, por lo tanto su acceso y control es fuente de poder y conflictos entre los actores, quienes le dan una valoración material y simbólica (Ávila 2003, 88). Una segunda entrada se basa en el análisis de las formas de gestión social del agua. Kreimann (2013) plantea que la gestión del agua con base territorial puede analizarse a partir del protagonismo de uno de estos tres actores: el Estado, el mercado o la sociedad civil. La autora analiza de manera puntual a la organización social comunitaria para la gestión del agua, considerando que el agua es un “bien común” y alrededor de esta se construyen y desarrollan normas comunes para lograr un uso sostenido de este recurso, que es compartido (Kreimann 2013, 44). Estas normas comunes podrían ser la base para el mantenimiento de una identidad propia ligada a la gestión del agua, contrastando con los modelos estatales o mercantiles. Sobre agua y organización socio-política el autor que más destaca por su importancia en aportes para el análisis de las relaciones de poder con base en la administración del agua es Karl Wittfogel (1957) quien analizó las relaciones despóticas del agua basadas en la gestión por escasez, las cuales legitiman el poder de quién las mantiene bajo su dominación, de esta forma, el Estado o la instancia que administra el recurso puede ser promotor de relaciones inequitativas. En la misma línea de Kreimann, y en contraste con Wittfogel, Shiva (2003) propone la existencia de sociedades basadas en la gestión colectiva del agua, lo cual implica una responsabilidad descentralizada en niveles locales para el acceso seguro al agua por parte de las poblaciones.

Esta forma de gestión, describe la autora, es un modelo previo a la mercantilización, y ésta última es el producto de la puesta en marcha de programas de organismos internacionales y gobiernos. El efecto adverso de este proceso es la destrucción del tejido social y la escasez por el manejo centralizado del agua (Shiva 2003).

Para Yacoub, Vos y Boelens (2016) los territorios son producciones hidrosociales, esto implica que el agua está intrínsecamente asociada a procesos ecológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, por lo tanto la sociedad y la naturaleza son coproducidas en medida en que los procesos socioecológicos –en escalas de tiempo y espacio– generan estructuras, instituciones y significados enmarcados en relaciones de poder (Yacoub, Vos y Boelens 2016, 2). Narváez (2007, 13) plantea que el agua es un elemento constituyente del hábitat de los sujetos, por lo que la presencia del agua en los territorios es determinante en la consolidación del tejido social a través de su gestión y, a la vez, es base para la construcción social del territorio; lo cual genera identidad, organización y sentido de pertenencia. Gómez (2006, 94) afirma que la gestión del agua y el territorio están indisolublemente ligadas y reconoce al territorio como “ámbito de relación de los hombres, como marco y expresión material de la vida social, como capital natural y como soporte de relaciones medioambientales”.

Boelens y Guevara-Gil (2010) analizan la gestión colectiva rural del agua en la zona Andina y describen las formas de gestión a nivel local, problematizando los efectos de las decisiones neoliberales tomadas por los gobiernos en estos países. Concluyen que la forma más adecuada de gestión del agua es la que asegura el respeto a los criterios locales de autogestión y la que acata la normatividad local campesina e indígena, que tiene bases de identidad e historia territorial. En Ecuador, Granda, Dubly y Borja (2014) estudian la complejidad y diversidad de aspectos implicados en la gestión del agua; destacan la importancia de la dimensión cultural del agua y recogen el valor de los conocimientos ancestrales como parte del acervo e identidad del territorio nacional. El estudio denominado “La gestión del agua en el Ecuador” analiza la importancia del agua y la define como base de la cohesión social de los territorios campesinos dentro del territorio ecuatoriano (Camaren 2012). En el caso específico del Azuay, Bonilla (2013, 5) analiza los procesos sociales a nivel territorial rural y define que éstos han desarrollado una dinámica propia de gestión del agua producto de una realidad biofísica que “da cuenta de que el agua de este territorio hasta cierto punto es socialmente producida”.

Boelens y Guevara-Gil (2010) analizan la gestión colectiva rural del agua en la zona Andina y describen las formas de gestión a nivel local, problematizando los efectos de las decisiones neoliberales tomadas por los gobiernos en estos países.



**Como es notorio,
la gestión del agua
ha sido ampliamente
trabajada como elemento
para la producción
social del territorio
y la generación de
identidades locales.**



este marco, los actores son quienes territorializan el espacio a través de mecanismos evidenciados en infraestructuras, usos y procesos sociales por lo que territorio podría definirse como “el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas” (Scheibling 1994 en Giménez 2005, 9). Haesbaert (2013) realiza varios aportes para la conceptualización del territorio, entre ellos, su diferencia con el concepto de espacio. Este autor define al espacio como el resultado de la apropiación o dominación de la naturaleza por parte de los sujetos, así el territorio es una dimensión que se configura a partir del análisis de las relaciones de poder en este espacio natural–social; por lo tanto, los procesos de territorialización se diferenciarían a partir del carácter de la apropiación de los actores, si se da de forma predominantemente utilitaria y funcional, o predominantemente simbólica–cultural (Giménez 2005,10).

Schneider y Peyré (2007) siguiendo esta línea argumentativa, toman como punto de partida los conceptos de trabajo, energía e información; los dos primeros relacionados con las acciones y estructuras concretas desarrolladas por parte de los actores. En cuanto a la información, la definen como acciones y estructuras simbólicas, tales como la construcción de identidades y significantes compartidos y dinámicas sociales, económicas, políticas y

son: analizar la gestión comunitaria del agua; definir qué elementos de dicha gestión pueden actuar como base de la permanencia de una identidad territorial comunitaria; identificar cuáles son las relaciones entre la organización rural de gestión del agua, la identidad territorial comunitaria y la organización social en el nivel nacional.

Marco teórico

Se parte de la discusión del concepto de territorio como “el producto de una acción conducida por un actor que se apropia concreta o abstractamente de un espacio” (Raffestin 1933 en Blanco 2007, 42). En

culturales propias de los actores. Estas tres categorías están divididas de manera metodológica para efectos de objetivación de la realidad, sin embargo en los territorios están configuradas de forma dialéctica e indisoluble.

Para Chiavassa, Ensabella y Deón (2017) el proceso de apropiación conlleva identidades que pueden denominarse como territorialidades, las cuales están inscriptas en un proceso mutable y dinámico, en el que se definen momentos y configuraciones territoriales. Si se toma como base el proceso simbólico-cultural de apropiación, la identidad territorial resulta una categoría propia para el análisis de las dinámicas sociales presentes en determinado espacio, sin embargo es necesario dejar sentado que la localidad no es la única variable que configuraría la identidad, ya que pueden existir varias referencias territoriales al mismo tiempo para un mismo sujeto o grupo (Haesbaert 2013, 18). Para los fines de este artículo, se toma como base la influencia de la gestión del agua como actividad territorializadora con base localizada, sin dejar de lado las influencias externas que la organización rural haya podido recibir en diferentes momentos.

Se puede caracterizar a la identidad como un conjunto de prácticas significantes y significativas que dotan de sentido a las vidas y trayectorias de sujetos y grupos (Arfuch 2002 en Sassone 2007) que tienen su base en el sentido de pertenencia social – territorial y encuentran su corolario cuando los habitantes han logrado incorporar a su sistema cultural propio los símbolos, valores y aspiraciones (Giménez 2005). La identidad territorial puede cimentarse en la apropiación basada en la historia o la tradición (Giménez 2005), como parte del modo subjetivo de existencia de la cultura (Bourdieu, Chartier y Darnton 1985 en Giménez 2005) con base en las representaciones sociales y *habitus* desarrollados por los actores que territorializan el espacio y le dan valor simbólico al sustento físico, a las estructuras y al paisaje en general. Se puede vincular, por lo tanto, el concepto deterritorialización a partir del gasto de trabajo y energía, que generan y se generan a través de información en forma de símbolos y valoraciones dadas culturalmente a los elementos producto de esta actividad humana desarrollada por los actores, deviniendo en identidades relativas al territorio que no son más que las representaciones sociales de los sujetos hacia su espacio habitado.

Como se ha revisado, los actores son los protagonistas de los procesos de producción del territorio. Para Mazurek (2006) existen cinco diferentes tipos de actores: a) personas o individuos; b) grupos territoriales o a-territoriales; c) actores socioeconómicos; d) Estado y sus representantes; e) actores extra-territoriales o supranacionales. El análisis del papel que desempeñan a nivel individual, su interdependencia y el contexto de las relaciones de poder en el que se desenvuelven, son de imperativo análisis para las investigaciones sobre territorio. En este artículo se tomarán como base las relaciones entre los grupos territoriales, el Estado, actores socioeconómicos y los actores extraterritoriales. El primer actor hace referencia a la organización rural de gestión del agua y a la iglesia, el segundo al Municipio de la ciudad de Cuenca, el tercero a la empresa minera, y el cuarto a la cooperación internacional.

Método

El diseño metodológico usado para el estudio fue de carácter cualitativo, además de la revisión de fuentes secundarias. Se levantó información en dos poblaciones rurales del Azuay: Victoria del Portete y Tarqui, debido a que comparten un sistema comunitario de agua que abastece alrededor de 3.000 familias y que cuenta con alrededor de 50 años de existencia. Se diseñaron dos entrevistas semiestructuradas para conocer aspectos importantes sobre la gestión del agua y su historia. La primera entrevista fue aplicada a actores territoriales (líderes, ex dirigentes, autoridades actuales, representantes de organizaciones).

Las temáticas abordadas en las entrevistas estuvieron relacionadas con la narración histórica de transformaciones territoriales, imaginarios alrededor del agua en el territorio, relaciones entre actores, intereses de los actores y su vinculación con la gestión del agua. La segunda entrevista fue realizada a los individuos involucrados directamente con la organización de gestión del agua; se indagó sobre los intereses y objetivos de la organización, relaciones con otros actores (relaciones de poder implícitas y explícitas), composición de los integrantes de la organización, producción y distribución de infraestructura, problemas en la administración y operación del sistema de agua de consumo humano. Se realizaron 16 entrevistas, a 7 hombres y 9 mujeres con base en la técnica de “bola de nieve”, a través de la cual se agrega a un grupo de individuos todas aquellas personas con las que tienen relación y viven o conocen una problemática social (Beaud 1983, 187), en esta técnica “se comienza con un pequeño número de personas, *se gana* su confianza y a continuación *se pide* que nos presenten a otros” (Polsky 1969 en Taylor y Bogdan 1994, 41) por lo que las primeras personas entrevistadas fueron informantes potenciales que luego colaboraron con la identificación de otros individuos que podían brindar información sobre la temática estudiada.

Se realizaron dos grupos focales con mujeres representantes de organizaciones de base de las dos poblaciones. El guion para el desarrollo del grupo focal estuvo estructurado con base en las guías de entrevista, tomando como base la ausencia de información. Además se realizó la validación de la información recolectada en el mapeo comunitario. Para dicho mapeo se contó con la presencia de tres hombres líderes comunitarios, una mujer joven de la población de Victoria del Portete y una geógrafa. Se recorrieron alrededor de 15 kilómetros en los territorios de las dos poblaciones para la identificación de hitos, lugares y dinámicas locales. Para contrastar los testimonios y los resultados del levantamiento de información en campo, se realizó un exhaustivo trabajo de revisión de fuentes secundarias. Las fuentes consultadas fueron artículos y libros de historia del Azuay, tesis de pregrado y postgrado sobre el territorio analizado, registros de los usuarios del Sistema Comunitario de Agua de Victoria del Portete y Tarqui, y datos del censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, INEC (2010).

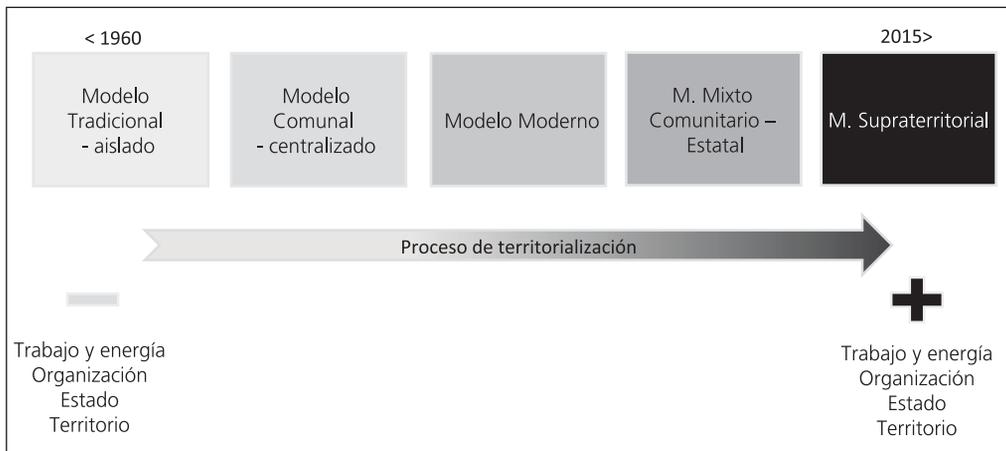
Resultados

Victoria del Portete y Tarqui son dos poblaciones rurales de la Provincia del Azuay, ubicadas al sur de Ecuador. Dichas poblaciones cuentan con características propias, producto en parte, de la historia de la gestión del recurso hídrico. El agua como elemento constituyente del entramado de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, adquiere en este territorio una importancia trascendental.

Al realizar una aproximación a los procesos hidroútiles¹ que se han desarrollado en el territorio y que devienen en procesos hidrosociales de producción territorial, se puede detallar que las narraciones de los pobladores ubican a partir de la década de 1960 el inicio de la organización basada en la gestión del agua. Un momento inicial al cual se puede denominar tradicional-aislado, fue cuando la administración del agua estuvo ligada a la forma natural de obtención, es decir a través de la recolección desde ríos, riachuelos y pozos. En este momento las actividades de recolección no devienen en formas organizativas, sino que se basan en las relaciones familiares y de cercanía a las fuentes.

Un primer momento de la organización rural, al cual se le denominará como comunal-centralizado, se dio a partir de la intervención de actores extraterritoriales², específica-

Figura 1. Proceso de territorialización a partir de la gestión del agua



Fuente: elaboración de la autora.

- 1 Procesos hidroútiles (PHU) hace referencia a todos los procesos antrópicos sobre el agua, los cuales le dotan de valor de cambio (Wittfogel 1957). Como se puede apreciar en este documento, la noción de hidrosocial podría bien explicar los procesos de organización social y ecológica en el espacio, sin embargo el concepto "hidroútil" demarca las acciones humanas que convierten al agua en un valor de cambio que podría ser mercantilizado.
- 2 Actores extraterritoriales son los agentes que no pertenecen al territorio y que sin embargo tienen algún tipo de influencia sobre éste. Como se planteó en el marco teórico, en este trabajo haremos referencia a la Cooperación Internacional presente en el territorio a partir de los años 60.

mente de la cooperación internacional estadounidense. Con el apoyo de Cuerpo de Paz³, se construyeron pozos de reserva de agua de consumo humano y llaves comunitarias en los centros de las poblaciones. A partir de los procesos físicos de mejora de la calidad del agua para el consumo y la centralización del abastecimiento, los pobladores iniciaron el proceso antrópico de gestión del recurso hídrico.

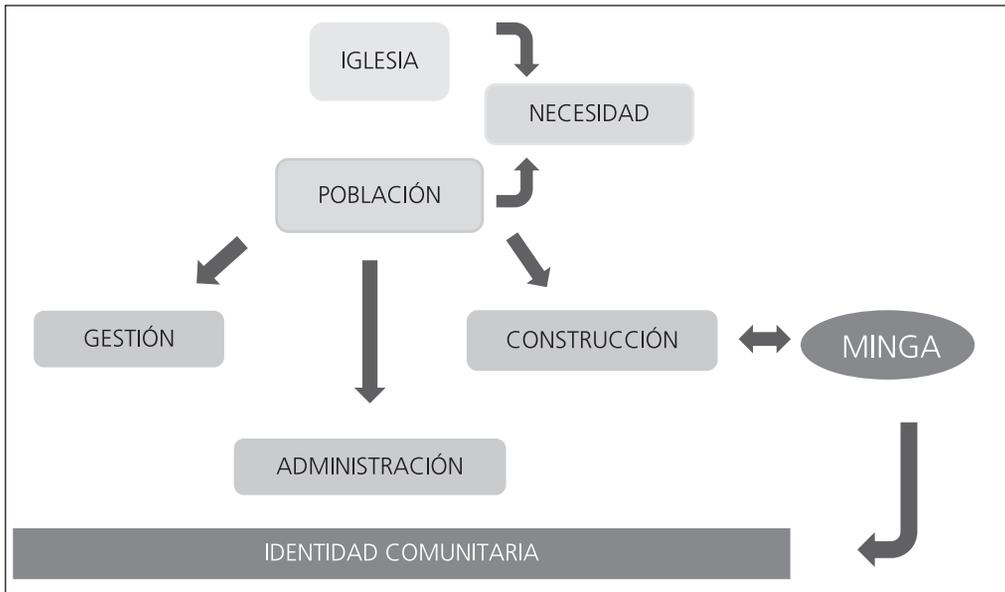
El paso de aproximadamente una década produjo el deterioro de los pozos de reserva de agua, tanto en su capacidad de abastecimiento como en la calidad del agua almacenada, lo que condujo al abandono de este modelo y dio paso a un proceso de modernización. En la década de 1970 los pobladores motivados por el párroco de la iglesia de Tarqui realizaron las gestiones necesarias para la construcción de un sistema de redes de distribución domiciliaria de agua para la dotación del servicio de forma continua, al cual se le puede denominar como *Modelo Moderno*. Quizá, este fue el momento más importante para hallar una conexión entre la identidad comunitaria y la organización social.

En la figura 2 se puede observar a la iglesia como un actor territorial-local que motivó a la población para la gestión con actores estatales tales como el Municipio de la ciudad de Cuenca, y extraterritoriales como la cooperación internacional, en este caso organizaciones como CARITAS y CARE. Al contar con una respuesta positiva por parte de los actores para el financiamiento de la obra de construcción del sistema, la población se hizo cargo del trabajo de excavación, colocación de tubería y de llaves en los domicilios. El trabajo de los pobladores de Victoria del Portete y Tarqui fue realizado en aproximadamente dos años; en 1974 se inauguró el primer sistema comunitario de agua de consumo humano. Se puede plantear que esta organización rural surgió como producto de la necesidad de gestión del agua, sin embargo el vértice a partir del cual aflora la identidad se da en la forma de trabajo colaborativo para la construcción de la infraestructura, es decir, en la Minga.

La minga aparece como una forma colectiva de trabajo en la cual se involucra el conjunto de los sujetos que serían beneficiarios del servicio de agua. Puede ser considerado como un elemento de cohesión social que tiene el objetivo de mejorar las condiciones materiales y objetivas de la localidad, con base en elementos espirituales–subjetivos como la cooperación, la solidaridad y el sentido de pertenencia al territorio. Estos componentes se hacen presentes tanto en el momento del trabajo como en la alimentación y el descanso. La minga además podría entenderse como un elemento político del accionar del comunitarismo, y económico, debido a que la ejecución del trabajo se basa en el gasto de la energía de las y los comuneros por largos períodos, aunque su valoración no es monetaria, sino social: quienes no colaboran en esta actividad, son excluidos de los beneficios (figura 2). El gasto de energía a través del trabajo, como ya lo exponía Schneider & Peiré (2007) deviene en infraestructura y esta a su vez en representaciones sociales y simbólicas; estos componentes identitarios del territorio producido son claramente identificables en la dinámica de la minga aquí expuesta.

3 Cuerpo de Paz es parte de la cooperación estadounidense para el desarrollo. Está presente en Ecuador a partir del año 1962.

Figura 2. Relación entre la identidad territorial y la organización social para la gestión del agua



Fuente: elaboración de la autora.

La construcción del sistema comunitario de agua tuvo como protagonistas a 260 usuarios aproximadamente, quienes debieron cumplir con 30 días de trabajo⁴. Al finalizar las excavaciones y la colocación de tubería se contabilizaron más de 15 kilómetros de infraestructura construida en medio de terreno que iba desde los 2.600 msnm (metros sobre el nivel del mar), hasta los 3.890 msnm. La infraestructura de este primer sistema comunitario contó con una vida útil de 30 años. Los beneficiarios que al inicio fueron un total de 260 familias rurales, llegaron aproximadamente al doble de la proyección en la primera década: según Guzmán y Novillo (1977) a aproximadamente 3.000 personas como beneficiarias del servicio de agua (260 familias por un promedio de 4 personas por familia). A la par de la existencia de la infraestructura, la organización social para la gestión del sistema estuvo a cargo de: resolver temas relacionados con las peticiones de ingreso de nuevos miembros, contar con planes de contingencia para problemas técnicos y entre los beneficiarios, y desarrollar estrategias para mantener las dinámicas identitarias de lo comunitario. Entre estas últimas se pueden enumerar las asambleas periódicas, la elección de representantes y las convocatorias a mingas para el mantenimiento de la infraestructura (Pila 2015, 73).

Para el año 2005 el sistema de tuberías y el caudal para el abastecimiento habían colapsado. Por ello la organización liderada por sus representantes buscaron apoyo del Estado en el Municipio de Cuenca a través de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua

⁴ 260 usuarios multiplicadas por 30 días de trabajo cada uno, da un total de 7800 días laborados en total. Se diferencia usuarios de beneficiarios ya que los primeros son las personas que constan en la lista del sistema comunitario, como las “cabezas de hogar”; los segundos son aquellas personas que forman parte del hogar que hace uso del agua de consumo.

Potable y Alcantarillados de Cuenca, ETAPA. La comunidad y su accionar autónomo en el territorio tomó contacto con la institucionalidad. Así el Estado intervino con la planificación técnica y el diseño de la readecuación para la ampliación de la redes de distribución. Nuevamente, como en la etapa de modernización, la organización rural planteó que la contraparte sería la mano de obra para el trabajo con el modelo de minga comunitaria. Este modelo mixto comunitario-estatal duró alrededor de 5 años en los cuales se edificó la planta comunitaria de agua hasta el año 2008, y se ampliaron las redes de distribución hasta el año 2010. Si bien en la década de 1970 se contaba con alrededor de 1.000 beneficiarios, para el año que finalizó la readecuación calculaba alrededor de 7.000 beneficiarios, en tanto que en el registro de la organización se podía identificar a 1.700 usuarios.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, INEC, para el año 2010 la población total de estos territorios era de 15 715 personas, quienes se abastecían del servicio de agua público-comunitaria en un 49%. Según datos obtenidos en esta investigación, el 44% de la población accede al agua a través de redes del sistema rural comunitario aquí estudiado; y el 4% de la población restante sería parte de 15 sistemas comunitarios de gestión de agua en Victoria del Portete y 25 en Tarqui. Estos últimos sistemas, con modelos más familiares o centralizados en los barrios, tomaron como referente la experiencia previa de gestión eficiente del agua (Bonilla 2013, 40).

Hasta aquí se ha revisado la historia de la organización rural para la gestión del agua, la infraestructura como base material y objetiva del apareamiento y mantenimiento de esta organización, así como el trasfondo de la forma comunitaria en la realización del trabajo. Un quinto y último momento identificado se basa en la transformación de la organización rural de la gestión de agua en una organización de defensa y resistencia hacia la explotación minera, así como en la conexión entre la organización local-territorial y las organizaciones nacionales de tercer grado.

Modelo supraterritorial: transformaciones y alcance de la organización rural comunitaria

El sistema comunitario para la gestión del agua tiene aproximadamente 50 años de existencia en el territorio. El conjunto de sistemas comunitarios de gestión de agua de consumo humano de Victoria del Portete y Tarqui formaron una organización de alcance y representación provincial denominada UNAGUA. Tanto el Sistema Comunitario como UNAGUA son parte de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, instancia que fue creada en el año 1993.

UNAGUA tiene entre sus principales actividades la asesoría legal para la creación de nuevos sistemas comunitarios de agua, la defensa del agua ante actividades lesivas y actividades de formación y capacitación. La FOA es una instancia que potencializa a las acti-

vidades rurales-territoriales a nivel provincial, de esta forma se convierte en un *pívol* entre lo territorial-rural y lo nacional “en el 93 se fundó la organización y ahora somos parte de la Ecuarunari, gracias a las luchas, a nuestra presencia y actividad en la lucha social y a la capacidad de liderazgo” (Lasig, UNAGUA Ecuador, 2015). La ECUARUNARI, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, es la instancia más antigua e importante que forma parte de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

La relación entre estas instancias organizativas tiene un hilo conductor, el agua. Los campesinos e indígenas de Ecuador han estado en procesos de movilización desde los años 80 del siglo pasado y entre sus principales demandas se pueden identificar: los derechos de plurinacionalidad, la autodeterminación y la territorialidad (Ramírez 2011, 74), en este último principalmente los asuntos relativos al agua y la postura antiextractivista. La gestión autónoma del agua por parte de los pueblos indígenas y campesinos, que por abandono del Estado en las décadas anteriores al 2000 estuvieron marcados por las formas comunitarias de administración, fueron la base para la generación de pequeñas células organizativas en los territorios rurales que luego a través de organizaciones provinciales llegaron al nivel de participación nacional. En este contexto, el caso estudiado no es la excepción.

Hasta el año 2013 el Sistema Comunitario de Agua estaba representado por Carlos Pérez, quien a su vez fungió como presidente de UNAGUA. Hasta antes del 2013, Carlos Pérez también fue presidente de la FOA; a partir de este año se encargó la dirección de la FOA al señor Lauro Sigcha, y la vicepresidencia a la señora Miriam Chuchuca. En el año 2013, después de un largo recorrido en los movimientos sociales indígenas y campesinos del Azuay como activista antiminerero, Pérez fue elegido en asamblea como Presidente de la ECUARUNARI.

Las condiciones sociopolíticas para que este hecho pueda concretarse fueron las intensas disputas en el territorio rural entre el Sistema Comunitario de Agua y el Estado, las cuales nacen a partir del interés en el oro del subsuelo de Quimsacocha, Tres Lagunas (en su traducción al castellano), lugar donde se encuentran las fuentes de agua que alimentan las redes de distribución de agua. A partir de la década de 1990, actores socioeconómicos como las transnacionales mineras COGEMA y IM GOLD realizaron actividades de exploración en la zona alta de la cuenca que alimenta los caudales para la planta de agua del sistema comunitario, los resultados de estos primeros acercamientos dieron como resultado el hallazgo de 350 mil onzas de oro (Pérez 2012, 72). La posible explotación del mineral y los impactos en el agua, trajo consigo la activación de la movilización indígena-campesina de los territorios de Victoria del Portete y Tarqui.

Como se puede observar (Figura 4) en el año 2010 hay un total de cuatro movilizaciones protagonizadas por socios y beneficiarios del sistema de agua, en los dos años siguientes, las movilizaciones bajan en número, sin embargo en intensidad son superiores a las del año 2010. En el mes de marzo de 2010, aproximadamente 3000 personas se movilizaron

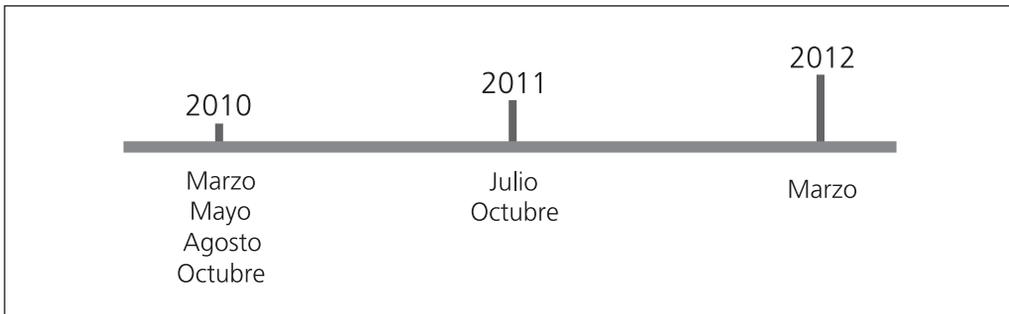
Figura 3. Relación local-nacional de las organizaciones



Fuente: elaboración de la autora.

en Cuenca demostrando su protesta ante la Ley Minera (El Tiempo 2010). En el mes de mayo, el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del Portete y Tarqui demandan la inconstitucionalidad de la Ley Minera, dicha demanda fue desechada días después. Como respuesta al tratamiento de la petición, el 4 de mayo los comuneros bloquearon las vías de salida hacia sur de la provincia del Azuay (Pérez 2012). En agosto, se cerraron las vías del sur de Cuenca por parte de comuneros como respuesta a la propuesta de Ley de Aguas presentada en la Asamblea Nacional del Ecuador (Pérez 2012). Finalmente, en octubre se realizó una marcha masiva para la colocación de la “Virgen de las Aguas de Quimsacocha” con una ceremonia espiritual indígena y con una misa católica (Ecuarunari 2010). De esta forma se recordó la importancia espiritual de las fuentes de agua y la identidad local religiosa como componentes para la resistencia social.

Figura 4. Movilizaciones en Victoria del Portete y Tarqui 2010 – 2012



Fuente: elaboración de la autora.

En el año 2011, las movilizaciones no son tan numerosas, sin embargo el nivel de la conflictividad puede considerarse más elevado. El 4 de julio se militarizó la planta de agua del Sistema Comunitario, esta acción fue llevada a cabo por la Empresa Municipal de agua de Cuenca, ETAPA; alrededor de 30 militares armados rodearon las instalaciones en Victoria del Portete pidiendo que se desaloje por parte de comuneros y comuneras (El Universo 2011). Como respuesta a esta acción del Estado en favor de los intereses por adueñarse de las instalaciones y de la gestión del agua, los integrantes del sistema permanecieron dos días en vigilia. El 6 de julio, después de negociaciones entre instituciones de defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Cantonal de Cuenca y representantes comunitarios, el Sistema Comunitario toma nuevamente el control de la planta de agua (Pérez 2012, 170).

Estas acciones llevadas a cabo por el Estado y sus instituciones tuvieron como antecedente el acercamiento de las empresas mineras al territorio y a los actores locales, aquí se puede identificar una cercanía entre los actores estatales y socioeconómicos. En el mes de octubre de este mismo año, se llevó a cabo la Consulta Comunitaria sobre la explotación minera en las fuentes de agua de Quimsacocha. Los asistentes a la consulta fueron 1077 usuarios del Sistema Comunitario. Esta fue la primera consulta comunitaria realizada en Ecuador, considerada inconstitucional por el Estado a pesar de ser un derecho de los pueblos de acuerdo al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT.

En el mes de marzo del año 2012 se da una de las movilizaciones más grandes ocurridas en Ecuador después de los años 90. La Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos fue un evento de carácter nacional que tuvo como objetivo recorrer los territorios amenazados por proyectos mineros. La marcha inició el 3 de marzo en El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, pasó por Victoria del Portete y Tarqui en la provincia del Azuay, y llegó a Quito el 21 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua que se celebra el 22 de marzo (El Universo 2012). Solamente en el Azuay se contabilizaron alrededor de 33.000 personas, y el total de marchantes en todo el país fue de 70.000 (Ortiz 2016, 51).

Estos acontecimientos dados entre el año 2010 y 2012 pusieron al líder del Sistema Comunitario de Agua en la palestra pública nacional, fue reconocido por los movimientos sociales indígenas y campesinos como el líder y defensor del agua ante las amenazas mineras. El resultado fue que en el año 2013 se eligió a Carlos Pérez Guartambel, indígena campesino del Azuay, como nuevo presidente de la Ecuarrunari, reelegido en el 2016.

Estas acciones llevadas a cabo por el Estado y sus instituciones tuvieron como antecedente el acercamiento de las empresas mineras al territorio y a los actores locales.



Discusión y conclusiones

En este artículo se han encontrado elementos que permiten identificar cómo la organización social para la gestión del agua de consumo humano ha mantenido su identidad comunitaria en los territorios rurales de Victoria del Portete y Tarqui de la Provincia del Azuay, y ha sido la base para la trascendencia de esta organización local hacia el nivel nacional. El elemento aglutinador central, como se extrae del estudio, es el agua. Con base en los resultados obtenidos en el proceso de investigación se pueden identificar elementos objetivos tales como: que el trabajo y la energía convertidos en infraestructura (Schneider y Peyré 2007) son la base para la construcción de representaciones sociales (Giménez 2005) como la identidad comunitaria, que parten de la apropiación simbólico cultural de los espacios (Haesbaert 2013) de estas dos poblaciones a través de dinámicas sociales generadas por prácticas como las mingas, las decisiones colectivas asamblearias, la gestión autónoma de recursos, la permanencia de sus organizaciones, las acciones políticas y la trascendencia de sus líderes hacia niveles nacionales.

El agua, como naturaleza en sí, constituye el hábitat de los sujetos, quienes desarrollan tejido social para su gestión, para su defensa o para su producción y reproducción social (Bonilla 2013). En los territorios rurales estudiados, la organización social ha sido creada con el objetivo de producir las condiciones objetivas para abastecer de líquido vital al territorio; de la misma forma la organización ha permanecido en el tiempo con el objetivo de gestionar social y técnicamente la distribución del agua. En los últimos años, es visible que la gestión trasciende sus fronteras hacia el protagonismo político basado en la defensa del agua y del territorio ante amenazas extractivistas.

Si bien el planteamiento de Ávila (2003) propone el estudio del agua a partir del conflicto por ser un recurso estratégico y de manejo político, las valoraciones dadas por los actores también devienen de una significación social diferenciada (Kreimann 2014). El Estado y la empresa minera a pesar de visibilizar al agua como un valor de uso, le dotan de un valor de cambio y un precio. El valor de uso se realiza en la dotación del servicio de agua a través de un actor mixto, la Empresa Municipal (Estado–actor socioeconómico), y con la posible actividad minera. Sobre el valor de cambio y la dotación de un precio, este no cubriría los procesos hidroútiles, sino que sería definido a partir del interés despótico del Estado (Wittfogel 1957). Es en este contexto donde la dimensión política del agua se hace presente.

Las características propias de la dominación y el poder se evidencian en los procesos de pugna y es ahí donde se genera el nicho para el apareamiento, formación y trascendencia de los líderes del sistema comunitario de agua. El accionar político se da a partir de la presencia de amenazas a las representaciones simbólico–sociales que se generaron históricamente sobre las estructuras físicas, y la resistencia parte de la defensa inmediata a estas estructuras, tomando luego dimensiones más amplias, como la organización a nivel provincial y nacional. La gestión comunitaria y autónoma del agua es uno de los componentes

del discurso de las organizaciones indígenas y campesinas de tercer grado, ya que, como lo explica Ramírez (2011), el derecho a la plurinacionalidad, a la autodeterminación y al territorio son las grandes demandas que agrupan a las demás problemáticas.

La dimensión cultural de la gestión del agua hace referencia al respeto de los conocimientos propios de los territorios, los cuales generan identidad a partir de la valoración de la experiencia en las prácticas como la autogestión y la generación de normatividad local. En este estudio se puede evidenciar como la identidad, que se basa en las prácticas comunitarias para la generación de infraestructura y organización social, es determinante en la consolidación del tejido social y la construcción del territorio con base en un sentido de pertenencia (Narváz 2007). La organización colectiva de gestión del agua, las mingas comunitarias, las asambleas y la participación directa, son la base para la cohesión social de este territorio rural (Granda Dubly y Borja 2014; Shiva 2003; Camaren 2012). Se puede inferir entonces que la valoración simbólica dada por los usuarios y beneficiarios del sistema de agua, ha construido una identidad en tanto territorio hidrosocial (Yacoub, Vos y Boelens 2016).

Entre algunas conclusiones finales del estudio se puede mencionar que una de las bases para la permanencia de la identidad territorial-comunitaria en la gestión del agua es el trabajo de construcción de infraestructura a través de la modalidad de minga. Los sujetos al ser parte de este proceso, le otorgaron una valoración, le dieron significado y, por lo tanto, convirtieron a este proceso antrópico en parte de su identidad como una representación social propia. La minga basada en principios como el compromiso, solidaridad, colaboración y pertenencia, propios de este tipo de actividad comunitaria andina, configuró una filiación grupal asentada en el territorio de Victoria del Portete y Tarqui, apartando de su dimensión social y cultural de valoración a toda acción lesiva contra el agua.

La organización social de gestión del agua fue previa a la construcción de la infraestructura. La organización nació con la identificación de la necesidad, permaneció y organizó el trabajo y en lo posterior se mantuvo para la gestión social y técnica. Existe una relación dialéctica entre trabajo, energía e información (Schneider y Peyré 2007) que resulta en los modos objetivo y subjetivo de existencia (Bourdieu, Chartier y Darnton 1985) de los sujetos en el territorio.

El legado de más de 50 años de la organización social y de la infraestructura ha logrado mantener el lazo comunitario basado en el agua. A partir de las amenazas extractivistas en las fuentes desde las cuales el sistema se abastece del líquido, la organización adquirió un nuevo rol y protagonizó la defensa del territorio ante la actividad minera. Dicha actividad dio paso al accionar público del sistema a través de sus líderes, quienes con el bagaje de conocimientos adquiridos en la organización rural-territorial, incursionaron en la vida política ecuatoriana a través de instancias nacionales. Se puede interpretar que la organización rural comunitaria de gestión del agua ha sido la condición para la trascendencia hacia el nivel nacional no solo de sus líderes, sino de la experiencia, identidad y preceptos territoriales basados en el mantenimiento de su autonomía sobre el territorio.

Bibliografía

- Ávila, Patricia. 2003. “De la hidropolítica a la gestión sustentable del agua”. En *Agua, medio ambiente y desarrollo en el siglo XXI*, editado por Patricia Ávila, 41–53. México: El Colegio de Michoacán y la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
- Beaud, Jean Pierre. 1983. “El muestreo”. En *Investigación social: de la problemática a la recopilación de datos*, compilado por Gauthier Benoit. Sainte-Foy: Universidad de Quebec.
- Blanco, Jorge. 2007. “Espacio y Territorio: elementos teóricos - conceptuales implicados en el análisis geográfico”. En *Geografía nuevos temas, nuevas preguntas*, editado por María Victoria Fernández Caso y Raquel Gurevich, 37-64. Buenos Aires: BIBLOS.
- Boelens, Rutgerd, y Armando Guevara-Gil A. 2010. “Derechos colectivos al agua en los países andinos: Una reflexión regional”. En *Lo colectivo y el agua: entre los derechos y las prácticas*, editado por Bustamante, 23 - 50. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Boelens, Rutgerd, Jaime Hoogesteger, Erik Swyngedouw, Jeroen Vos y Philippus Wester. 2016. “Hidrosocial Territories: a political ecology perspective”. *Water internacional* 41: 1-14.
- Bonilla, Omar. 2013. “Agua y Minería en Quimsacocha”. Tesis de maestría en Desarrollo Territorial Rural, Flacso sede Ecuador.
- Bourdieu, Pierre, Roger Chartier y Robert Darnton. 1985. “Diálogo a propósito de la historia cultural”. *Archipiélago: cuadernos de crítica de la cultura* 47: 41–58.
- Camaren. 2012. *La gestión del Agua en el Ecuador*. Quito: Consorcio Camaren.
- Chiavassa, Sergio, Beatriz Ensabella y Joaquin Deón. 2017. “Territorialidades en conflicto y acciones colectivas: las luchas por el agua en Sierras Chicas, provincia de Córdoba, Argentina”. *Revista Agua y Territorio* 10: 43-57 <http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/3608/2956>
- Ecuarunari. 2010. “Bendición y colocación de la virgen de las aguas de Kimsacocha”, <http://ecuachaski.blogspot.com/2010/09/bendicion-y-colocacion-de-la-virgen-de.html>
- El Tiempo. 2010. “Antimineros e indígenas marchan hoy”. 3 de marzo. <http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/227242/antimineros-e-indigenas-marchan-hoy>
- El Universo. 2011. “Protesta por militarización del planta de agua”. 4 de julio. <https://www.eluniverso.com/2011/07/04/1/1447/protesta-militarizacion-planta-agua.html>
- _____. 2012. “Marcha por el agua, la vida y la dignidad avanza hacia Quito”. 21 de marzo de 2012. <https://www.eluniverso.com/2012/03/21/1/1355/movilizacion-toma-ultimas-resoluciones-previo-ingreso-quito-ante-mira-policia.html>
- Giménez, Gilberto. 2005. “Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural”. *Revista Trayectorias*, VII, 17: 8–24.
- Gómez, José. 2006. *Agua, Territorio y Economía ¿Es posible una relación sostenible?* Granada: Ambientalia.

- Granda, Alicia, Alain Dubly y Germania Borja. 2004. *Agua, vida y conflicto: panorama social del agua en el Ecuador*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Guzmán, José, y Novillo, I. 1977. “Estudio Socio-económico de la Parroquia Victoria del Portete”. Tesis para obtener el grado de economista en la Universidad de Cuenca-Ecuador.
- Haesbaert, Rogério. 2013. “Del mito de la Desterritorialización a la multiterritorialidad”. *Revista Cultura y Representaciones Sociales* 15: 9-42. <http://www.culturays.org.mx/index.php/CRS/article/viewFile/401/401>
- INEC. 2010. “Censo de Población y Vivienda”, <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/>
- Kreimann, Rosibel. 2013. “Los comités de agua y saneamiento y la gestión social de un bien común en Nicaragua. Los casos de las CAPS de El Edén y Chompipe”. *Revista Agua y Territorio* 2: 34-47. <http://revistaselectronicas.ujae.es/index.php/atma/article/view/1342/1122>
- Mazurek, Hubert. 2006. *Espacio y Territorio. Instrumentos Metodológicos de Investigación Social*. La Paz: U-PIEB.
- Narváz, Esperanza. 2007. “Asentamientos humanos, agua y territorio”. Tesis de maestría en Hábitat – Estudios de la Vivienda, Universidad Nacional de Colombia.
- Ortiz, Santiago. 2016. “Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”. *Revista Letras Verdes* 19: 45-66. <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/1958/1456>
- Pérez, Carlos. 2012. *Agua u Oro. Quimsacocha, la resistencia por el agua*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- Pila, Paola. 2015. “Inscripción territorial de la identidad hídrica: la reterritorialización a partir de la gestión del agua”. Tesis de maestría en Desarrollo Local y Territorial, Flacso–Ecuador.
- Ramírez, Franklin. 2011. “Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)”. En *Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI*, compiladores Julián Rebon y Massimo Modonesi, 69–106. Buenos Aires: CLACSO.
- Sassone, Susana. 2007. “Migración, territorio e identidad cultural: construcción de “lugares bolivianos” en la Ciudad de Buenos Aires”. *Revista Población de Buenos Aires* 4 (6): 9-28.
- Schneider, Sergio, e Iván Peyré. 2007. “Territorio y enfoque territorial”. En *Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio*, compilado por Mabel Anzanal, Guillermo Neiman y Mario Lattuada, 71 – 102 . Buenos Aires: CICCUS.
- Shiva, Vandanna. 2003. *Las guerras del Agua: privatización, contaminación y lucro*. Madrid: Siglo XXI.
- Taylor, Steven J. y Robert Bogdan. 1994. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

Wittfogel, Karl. 1957. *Despotismo Oriental*. Madrid: Guardarrama.

Yacoub, Cristina, Jeroen Vos y Rutgerd Boelens. 2016. Territorios Hidrosociales y minería en Cajamarca, Perú. Monitoreos ambientales como herramientas políticas”. *Agua y Territorio* 7: 163-175. <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/2971/2385>

Territorialidades campesinas en Loja, Ecuador: análisis de sus dinámicas organizativas a partir de tres casos

Peasant territorialities in Loja, Ecuador: analysis of its organizational dynamics from three cases

Marco Alvarado Torres*

Fecha de recepción: 6 de marzo de 2018

Fecha de aceptación: 22 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3301>

Resumen

En la provincia de Loja, al sur de Ecuador, desde de los años 90 del siglo pasado, varias familias campesinas han creado organizaciones locales que impulsan territorialidades alternativas como la producción ecológica, finanzas solidarias, gestión comunitaria del agua, defensa de territorios ancestrales, empoderamiento de mujeres, entre otras. Este trabajo se pregunta de qué manera se estructuran estas experiencias, y a partir de la construcción participativa de sociogramas, analiza las dinámicas internas de tres organizaciones, y sus interacciones con otros actores. Se encuentra que estas territorialidades, más que simples prácticas de producción o gestión, son complejas trayectorias de subjetivación política.

Palabras clave: agricultura campesina; autonomía; contra-hegemonía; Loja; modernización, organización; territorialidad

Abstract

In the province of Loja, located south of Ecuador, since the 90s of the last century, several peasant families have created local organizations through which promote alternative territorialities, how ecological production, solidarity finance, community management of water, defense of ancestral lands, empowerment of rural women, amongst other activities. This paper asks how these experiences are structured, and from participatory elaboration of sociograms, analyzes the internal dynamics of three organizations, and its interactions with other actors. These territorialities are more than simple practices of production, or management, these are also complex phats of political subjectivation.

Key words: peasant agriculture; autonomy; counter-hegemony; Loja; modernization; organization; territoriality

* Ecuador. Ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Loja y maestro en Desarrollo Territorial Rural de FLACSO-Ecuador. Estudiante de Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina (CLACSO, FLACSO-Brasil). Correo: maalvaradofl@flacso.edu.ec

Introducción

En la provincia de Loja, ubicada al sur de Ecuador, fronteriza con Perú, desde los años 90 del siglo pasado, cientos de familias campesinas han creado varias organizaciones que impulsan diversas iniciativas relacionadas con la producción ecológica, finanzas solidarias, gestión comunitaria del agua, defensa de territorios ancestrales, apoyo al liderazgo de las mujeres, entre otras. Los resultados de estas experiencias son diversos: algunas son exitosas, mientras que otras se encuentran en reflujos. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de sus dinámicas. Por esto, el presente trabajo parte de las siguientes interrogantes: ¿de qué manera se estructuran estas territorialidades?, ¿qué actores intervienen? y ¿qué interacciones las dinamizan y prescriben su curso?

Para responder, presentamos un análisis comparativo de los procesos de tres organizaciones de segundo grado, que atraviesan por momentos distintos en sus dinámicas internas.¹ Por medio de sociogramas, elaborados mediante investigación-acción participativa, se exploran sus relaciones de poder y conflictos internos, y con los demás actores que coexisten en sus territorios. Se trata de un ejercicio inductivo, cuyo propósito es dilucidar los patrones de interacción que son comunes en la estructuración de estos procesos. El artículo se organiza en seis partes: luego de la presente introducción, se repasa el marco teórico que subyace el análisis; en la tercera parte se presenta la metodología; luego se explican los resultados más relevantes; en quinto lugar se discuten los hallazgos y; en la sexta parte se exponen las reflexiones finales.

Marco teórico

Contexto general

Latinoamérica es escenario de encuentros y desencuentros entre varias visiones sobre el desarrollo rural, entre ellos, los de organizaciones campesinas e indígenas que articulan diversas demandas agrarias, étnicas, ecológicas y culturales (Hidalgo 2014). En consecuencia, cuestiones como el acceso a la tierra, control de los recursos naturales, soberanía alimentaria, derechos colectivos, derechos y condiciones de vida de la gente en el campo, entre otras, (re)cobran importancia e imponen a los estudios rurales nuevos desafíos teóricos, políticos y de interpretación (Hidalgo 2014; De la Tejera *et al.* 2010). Frente a esto, varios autores proponen un abordaje que sitúa el conflicto como objeto de indagación (Rubio 2006; Schneider y Peyré 2006; Favareto y Schroder 2007; Baudel 2010; Mançano 2012). En esta línea, se sostiene que la raíz de los diversos conflictos agrarios que ocurren en América Latina, está en los procesos de expansión del capital sobre la agricultura y sus secuelas

¹ Agradezco a las organizaciones participantes; y a la profesora María Fernanda López, tutora de la tesis de Alvarado (2016), que es la fuente principal del presente trabajo.

socio-ambientales, como consecuencia de la consolidación de un régimen agroalimentario corporativo, de escala global (Elizalde y Thayer 2013; Yumbra 2011).

Esta contradicción se establece desde mediados del siglo XX, con la imposición de la modernización capitalista de la agricultura, como narrativa hegemónica de desarrollo rural. El discurso modernizante, que subyace a todos los modelos de desarrollo rural aplicados en Latinoamérica desde entonces, apuesta por consolidar el carácter capitalista del régimen de producción agrícola, difundiendo un modelo de producción utilitarista, con itinerarios técnicos promovidos desde el norte (Gómez y Pérez 1979), bajo la promesa de acabar por esta vía, con el hambre y pobreza rurales, mejorando la competitividad campesina (Guerrero 1992). Empero, contrariamente a sus promesas, la modernización ha configurado un régimen agroalimentario caracterizado por una creciente diferenciación social y tecnológica, entre las agro-empresas capitalistas que ostentan una creciente concentración de poder (Rodríguez 2010), la pequeña agricultura campesina, que pierde autonomía productiva y entra en riesgo de quedar fuera de la producción (Chiriboga 2010), y la población en general que acusa persistentes problemas de hambre, malnutrición y asume las externalidades ambientales. En síntesis, un régimen agroalimentario desconectado de la agrobiodiversidad, los ecosistemas y la cultura (De Schutter 2010).

Frente a este escenario, los campesinos latinoamericanos plantean diversas territorialidades contrahegemónicas, que cuestionan la narrativa modernizante y reivindican sus itinerarios, producciones y culturas; resistiendo así, las estrategias del capital que buscan a imponer la heteronomía y homogeneización de sus territorios, para subsumirlos a sus procesos de acumulación (Santos 1993):

Iniciativas algunas que buscan crear una economía rural basada en el respeto a los campesinos y a la tierra, sobre la base de la soberanía alimentaria, y de un comercio justo [...] que buscan asegurar un desarrollo rural incluyente, que reconozca la importancia de la contribución de las mujeres en la producción de alimentos [,] que demandan una reforma agraria auténtica que devuelva sus territorios a los pueblos indígenas, y que les otorgue a los campesinos sin tierra y a los agricultores pequeños la propiedad y el control de la tierra que trabajan. Inicativas, por último, de revalorización de los territorios, de agregación de valor a la producción en pequeña escala, de agroecología, de valorización de las culturas endógenas y de la vida rural (Elizalde y Thayer 2013, 3).

**El discurso modernizante,
que subyace a todos
los modelos de desarrollo
rural aplicados en
Latinoamérica desde
entonces, apuesta por
consolidar el carácter
capitalista del régimen
de producción
agrícola.**



Territorio, territorialidad y organización campesina en una perspectiva relacional

Abordaremos los territorios rurales, como sistemas dinámicos, conflictivos y estructurados jerárquicamente (Favareto y Schroder 2007), donde los agentes asumen posiciones y disposiciones diferenciadas alrededor de la disputa por la apropiación y utilización del medio socio-ecológico (Díaz 2012). Las posiciones de los actores, es decir, sus niveles de poder, están dados el control de recursos económicos, políticos y/o simbólicos que ostentan (dinero, acceso a tierra, autoridad, fuerza, información, reconocimiento, etc.), y la habilidad de utilizarlos para influir en otros. Por otra parte, la disposición a actuar de un agente frente a una situación concreta, se explica por los intereses y/o valores que defienden (Chevalier y Buckles 2009).

En la perspectiva de alcanzar las mejores posiciones posibles dentro del territorio, los actores movilizan recursos, gestionan alianzas y conflictos; es decir, despliegan territorialidades. Las territorialidades de las organizaciones campesinas son tan diversas como son sus proyectos sociales; pero pueden definirse como comportamientos colectivos orientados a influir sobre los recursos y personas de la comunidad, a fin de procurar su reproducción socio-cultural (Alvarado 2016). Las territorialidades campesinas se concretan por medio de una red compuesta por dos tipos de interacciones: la interioridad, es decir, las relaciones entre y dentro de las organizaciones rurales locales, y; la exterioridad, “que vincula la organización local con espacios y actores externos, entre los que destacan el mercado, los movimientos sociales, destinos migratorios, centros educativos, el Estado y las instituciones de desarrollo” (Laguna 2011, 1).

A su vez, la interioridad de las comunidades campesinas andinas, está constituida por dos tipos de interacciones: la reciprocidad, como estrategia contingente de las familias ante posibles eventualidades adversas, o ante actividades que rebasen sus propios esfuerzos; y el conflicto o tensión permanente entre las familias, los dirigentes y las directivas (cabildos, consejos de gobierno, etc.), que busca limitar el poder de los líderes, para asegurar la cohesión sociocultural del grupo, a través de la redistribución del poder (Sánchez-Parga 1984). En esta línea, un factor de salud de las organizaciones, es la creación de redes horizontales de comunicación y reflexión en su interioridad, que permitan gestionar la reciprocidad y el conflicto. La horizontalidad se entiende entonces, como un patrón de interacción, que reproduce espacios de socialización favorables a la redistribución del poder, apuntalando la cohesión sociocultural (Max-Neef 1986).

Subalternidad, contrahegemonía y autonomización: subjetivación política campesina

Por hegemonía, entendemos el proceso de dominación intersubjetiva de un grupo sobre el conjunto de la sociedad (Gramsci 1999). La contraparte de la hegemonía, es la subalter-

nidad, que es el proceso de subjetivación política que resulta de experimentar la subordinación. Los grupos subalternos son aquellos sobre los que se ejerce hegemonía. La subalternidad constituye el punto de partida de todos los procesos de conflicto y emancipación (Modonessi 2010).

Los grupos subalternos se mueven entre la aceptación y el cuestionamiento de la dominación, pues la subalternidad es un proceso movido por la correlación de fuerzas “entre la colonización hegemónica impulsada desde las clases dominantes y la autonomización sostenida por las clases subalternas” (Modonessi 2010, 39). Esta tensión, contribuye a configurar las disposiciones a actuar de los sujetos subalternos, construyéndolos como sujetos políticos (Modonessi 2010).

Cuando las disposiciones de los sujetos subalternos se mueven hacia la autonomía, entran en conflicto con la hegemonía y construyen contrahegemonía. Entonces, por contrahegemonía se entiende el conjunto de estrategias subalternas que desafían la hegemonía. O, desde otra mirada, una estrategia contrahegemónica es aquella con la que los grupos subalternos, en procura de su autonomía, disputan el control (económico, político y/o cultural) a los actores hegemónicos. El éxito de la contrahegemonía, da lugar a la autonomización, es decir, al proceso de subjetivación que resulta de experimentar la emancipación (Modonessi 2010). En síntesis, basados en el contexto general –esbozado en líneas anteriores–, se puede afirmar que una estrategia territorial campesina, adquiere el *status* de territorialidad contrahegemónica, cuando las disposiciones a actuar que le subyacen, implican un cuestionamiento al discurso dominante de la modernización capitalista; lo cual, los construye como sujetos políticos antagonistas, que disputan la influencia sobre el territorio a los agentes que la promueven.

Metodología

Contexto territorial de la agricultura campesina en Loja

La provincia de Loja tiene una orografía predominantemente montañosa, en medio de la cual apenas destacan pocos valles aluviales, pequeños y profundos (Ospina *et al.* 2011). Por su ubicación geográfica en los Andes Bajos, es climáticamente inestable y propensa a sequías o excesos de lluvias. Además, acusa importantes problemas ambientales: escasez de agua, desertificación, fuertes niveles de erosión, pérdida de agrobiodiversidad, entre otros (Ramón 2014). A estas condiciones se suma una estructura socio-económica muy desigual: es la quinta provincia más desigual en Ecuador en cuanto al acceso a tierras, con un Gini de 0,769 (Alvarado y Vandecandelaere 2011), que es herencia del sistema de haciendas anterior a la Reforma Agraria, que no logró revertir la concentración, y no resolvió las necesidades de tierra de los pequeños campesinos.

Loja además, es la segunda provincia más desigual en distribución del ingreso, con un Gini de 0,534 (Wong 2013). Sus niveles de pobreza rural alcanzan el 65,4% (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 2016), en parte, debido a que por su situación fronteriza, la crisis económica de fin de siglo XX y la posterior dolarización degradaron la situación de miles de familias productoras, afectando su poder de compra y su competitividad frente a los productores peruanos (Pastre y Waroquiers 2003).

Los intentos de modernizar la agricultura local luego de la Reforma Agraria chocaron con los límites ecológicos y geográficos locales.



Los intentos de modernizar la agricultura local luego de la Reforma Agraria chocaron con los límites ecológicos y geográficos locales: tuvieron efectos moderados solo en los pequeños valles aluviales con riego, y unas pocas zonas de piedemonte con buenos suelos (Hollenstein *et al.*, 2011), en los que se concentraron la mayor parte de los recursos hasta convertirlo en enclaves de monocultivos comerciales (maíz, maní, caña de azúcar, arroz y hortalizas). Mientras tanto, las zonas de montaña –la inmensa mayoría–, quedaron relegadas, desvalorizadas y los campesinos obligados a optar “entre la migración o la riesgosa producción estacional de café, maíz, maní, fréjol, caprinos y vacunos” (Ospina *et al.* 2011, 4).

Este contexto, alienta un proceso crónico de emigración de la población rural, que pone en riesgo la reproducción de las agriculturas campesinas locales (Gondard 2004), en contraste con la creciente tendencia de la población a asentarse en zonas urbanas² (Alvarado y Bustillos 2013). Bajo estas condiciones, el campesinado lojano adolece de una fuerte debilidad en su tejido social. Los factores estructurales y los desajustados intentos de modernización agraria, hacen parte de una trayectoria de desarrollo caracterizada por la fractura continua y sistemática de los recursos sociales y culturales de los campesinos/as, que han acelerado su transición –iniciada con la conquista española–, desde un modo de producción comunitario, hacia un modelo de organización más de tipo familiar disperso, subordinado a estrategias de desarrollo exógenas (Alvarado 2016). En síntesis, las organizaciones campesinas objeto de este trabajo, agrupan fundamentalmente familias que practican agricultura de montaña, que deben lidiar con un contexto territorial donde la crisis ambiental, la desigualdad estructural y el desajuste de socio-ecológico de la modernización agraria, amenazan permanentemente su capacidad de reproducción.

2 Con una tasa del 1,2% en el período 2001-2010, Loja es la cuarta provincia con menor crecimiento demográfico en el país. En contraste, es la segunda con mayor crecimiento urbano, con un 10,2% de incremento en el mismo período (Wong 2013).

Proceso metodológico

Los resultados de este trabajo se obtuvieron mediante Investigación-Acción Participativa. Se elaboraron sociogramas en talleres con dirigentes y socios/as de las tres organizaciones. Los resultados y la reflexión desarrollada por los/las participantes, se triangularon con entrevistas semi-estructuradas, observación no participante y revisión de fuentes secundarias. El sociograma permite representar un espacio social de forma gráfica. Por su intermedio, podemos referir un territorio como un esquema reticular, representando en un plano cartesiano a los actores y sus redes de relaciones de poder (Alberich 2008).

La elaboración de los sociogramas consistió en identificar los actores territoriales y ubicarlos en el plano cartesiano, según sus niveles de poder (posiciones) y afinidad (disposiciones a actuar en referencia a la territorialidad de cada organización); para luego representar el tipo de relaciones que mantienen entre sí (débiles, estables, fuertes/de colaboración o conflicto). Con estos insumos, se identificaron los conjuntos de acción; es decir, los grupos de actores que convergen, ya sea por la similitud de sus posiciones, de sus disposiciones, y/o por las relaciones que mantienen.

Este trabajo sintetiza parte de la investigación desarrollada por Alvarado (2016), que estudia los casos del Comité de Gestión y FEPROCOL (Federación Provincial de Comunas del Pueblo Palta de Loja), y la complementa con el ejercicio desarrollado durante una escuela de formación campesina coorganizada por OCMECUC (Organización Cantonal de Mujeres Emprendedoras Campesinas y Urbanas de Calvas) y la ONG Ayuda en Acción, con la facilitación del mismo autor, en 2017.

Los casos de estudio

El Ex-Comité Cantonal de Gestión para la Administración de las Cuencas de los Ríos Catamayo- Playas (Comité de Gestión)

El Comité de Gestión fue una organización del cantón Paltas, creada en el año 2005 como resultado de la movilización campesina que promovió el proyecto “Sembrando Agua”, iniciativa liderada por la ONG Comunidades y Desarrollo Local (COMUNIDEC) y apoyada por una amplia coalición de actores locales y organismos de desarrollo, con el propósito de afrontar el problema crónico de escasez de agua que sufre el cantón, a través de recuperar el sistema ancestral de manejo de la humedad, potenciándolo con técnicas y conocimientos modernos (Ramón 2014). La territorialidad del Comité de Gestión se relaciona con la gestión comunitaria del agua, mediante una estrategia que combinaba la recuperación del discurso mítico ancestral sobre el manejo de la humedad y el territorio, la producción ecológica, la educación ambiental y la incidencia política.

Sus organizaciones de base se denominaron “Comités de Microcuena”, ya que actuaron a nivel de tales unidades territoriales en el cantón (Alvarado 2016). En 2016, el Comité de Gestión se disolvió y sus integrantes conformaron una nueva organización de primer grado con similares fines. Se trata de una experiencia de recuperación exitosa, luego de superar un período de crisis interna y reflujo.

La OCMECUC

Es una organización de segundo grado de reciente ascenso, creada en el cantón Calvas en el año 2015, como resultado de la decisión que toman varias organizaciones de primer grado, con trayectorias más largas, de articularse en red. Su territorialidad se estructura en torno a la promoción de los derechos y el liderazgo emergente de las mujeres, mediante la educación, el emprendimiento y la incidencia política, partiendo desde la revalorización de sus raíces y saberes campesinos (EA, facilitador ONG Ayuda en Acción, marzo de 2018).

La FEPROCOL

Es una organización de segundo grado con cobertura provincial. Además es filial de la Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (ECUARUNARI) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Está dirigida por un consejo de gobierno o cabildo, igual que sus organizaciones de base: las comunas, entidades poseedoras de territorios de raíz ancestral. FEPROCOL fue creada en el año 2003, por iniciativa de un grupo de profesionales activistas del movimiento indígena –que entonces vivía una intensa dinámica organizativa–, provenientes de varias comunas. Su territorialidad se estructura en torno a la defensa, recuperación y legalización de los territorios ancestrales del pueblo Palta de la provincia de Loja, y el ejercicio de la autonomía política, jurídica y administrativa para sus habitantes (Guamán *et al.* 2010). Actualmente atraviesa una crisis profunda que amenaza su viabilidad.

Resultados

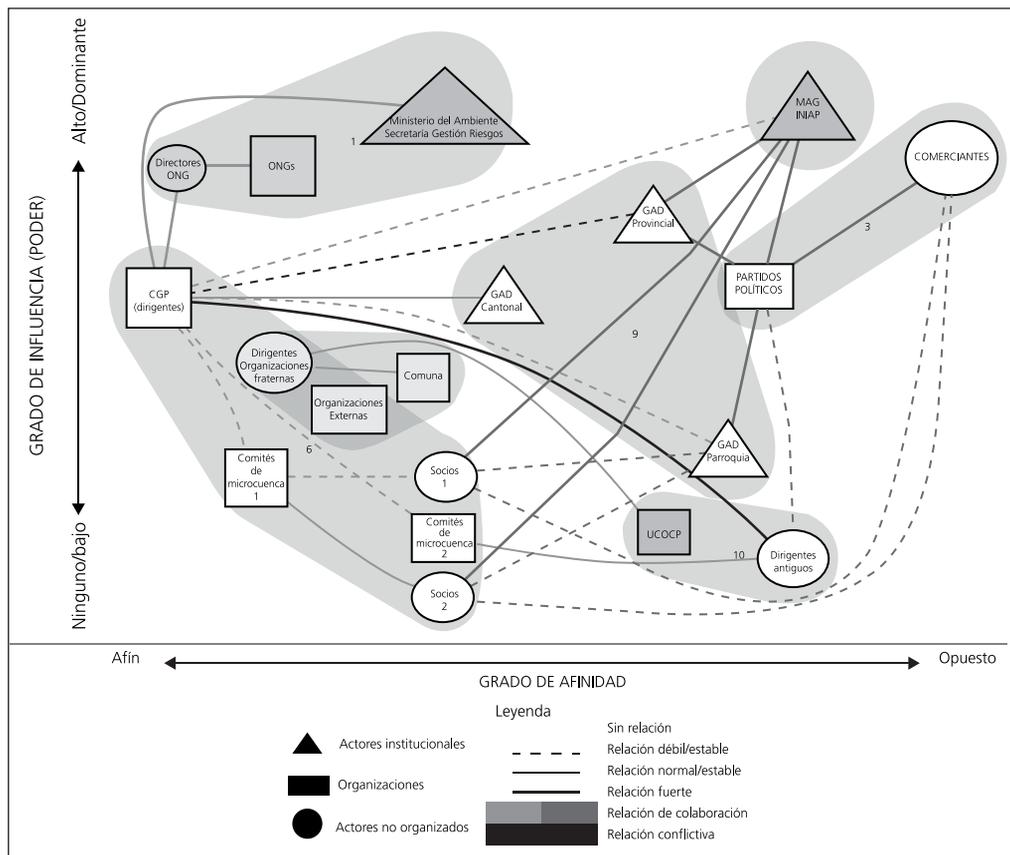
La red del Comité de Gestión. Exterioridad

En el sociograma del Comité de Gestión (figura 1) se identificaron cuatro conjuntos de acción externos: en primer lugar, una coalición conformada por varias ONG e instituciones públicas a las que consideraron con altas posiciones de poder, sea porque disponen de

recursos económicos provenientes de proyectos ambientales, derechos humanos y/o desarrollo comunitario, así como alta legitimidad y/o autoridad política. Es un conjunto considerado afín, ya que es la continuación de una convergencia que se gestó desde 2002, con el proyecto Sembrando Agua, y que ha dotado al Comité de Gestión desde sus orígenes, de recursos, información y reconocimiento, sosteniendo su accionar.

Luego se identificó un conjunto de actores extraterritoriales, conformado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), e instituciones adscritas a esta entidad, como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Los participantes asignaron a estos actores, altos niveles de poder (económico y autoridad) y una disposición opuesta al Comité de Gestión, porque a través de estrategias como por ejemplo, el “Plan Semillas de Alto Rendimiento” (Plan Semillas), promueven un modelo agrícola dependiente de insumos y semillas externas, contrario a su propuesta de producción ecológica.

Figura 1. Sociograma del Comité de Gestión



Fuente: El autor. Investigación colaborativa en Alvarado (2016).

El tercer conjunto de acción, está conformado por actores locales particulares, especialmente comerciantes y políticos, frecuentemente relacionados entre sí. Los participantes consideraron a estos actores como opuestos, por fomentar relaciones clientelares o la apropiación del trabajo campesino a través de la usura e intermediación.

El último conjunto de acción en la exterioridad está conformado por los gobiernos locales (GAD provincial, municipal, parroquiales), que aunque fueron considerados distintos en sus posiciones de poder, según su escala, fueron caracterizados por su disposición indiferente frente a la territorialidad de la organización. De hecho a través del sociograma, se pudo dilucidar que su (in)disposición está dada por la fuerte influencia que ejercen otros actores, como el MAG, y principalmente, los actores locales particulares. De allí que, incluso se destacó que en varios de los GAD persiste una visión paternalista y clientelar, que es causa de relaciones débiles e incluso conflictivas con las organizaciones. En síntesis, los gobiernos locales se encuentran en medio de una tensión entre las organizaciones y aquellos actores.

Clarifica esto, el hecho de que, al momento del estudio, el Comité de Gestión mantenía un desencuentro con el GAD provincial: durante el 2009, en una tentativa de cooptar a la organización con fines electorales, algunos funcionarios de aquella institución entregaron semillas a los campesinos mediante un crédito. Aquella gestión se realizó desordenadamente, haciendo imposible el seguimiento a los beneficiarios. Por ello, las autoridades subsiguientes del GAD provincial, endosaron la deuda en su conjunto al Comité de Gestión. Esta se volvió impagable y bloqueó el flujo de recursos de cooperación hacia la organización, desatando una fuerte crisis interna, que persistió hasta 2014.

Interioridad

A nivel interno, el Comité de Gestión identificó cuatro conjuntos de acción (figura 1). En un primer lugar, la organización representada por su directiva (CGP), las organizaciones de base (comités de microcuena) y las familias base del Comité de Gestión (Socios). Los participantes señalaron que la organización en su conjunto tiene un nivel de poder entre medio y alto, ya que cuenta con reconocimiento y su dirigencia se relaciona con actores que apoyan su territorialidad (el primer conjunto de acción en la exterioridad).

Las relaciones dentro de la organización se caracterizaron como débiles, pero en proceso de recuperación, pues estaba superando una crisis interna –que se explicará más adelante. De hecho, se señaló que al momento del taller, la horizontalidad se limitaba a algunas mingas y talleres de capacitación puntuales, aunque se estaban concentrando esfuerzos en fortalecer estas actividades, así como la recolección y comercialización organizada de vainillo, como sostenes de la dinámica interna. Cabe destacar que las disposiciones de la base social de la organización (comités de microcuena y socios), eran ambiguas entre la afinidad y la indiferencia, fundamentalmente por dos razones: la crisis

organizativa previa y el consecuente reflujo de la horizontalidad y; la competencia con actores externos a la organización considerados indiferentes u opuestos, por la influencia sobre las bases.

Un segundo conjunto de acción, está conformado por organizaciones campesinas afines (organizaciones externas, comuna) y sus dirigentes de organizaciones fraternas. Si bien las relaciones con este conjunto fueron considerados débiles, el vínculo principal radica en que tienen una base social compartida. El tercer conjunto de actores está conformado por ex-dirigentes de la organización, considerados opuestos y dirigentes de otras organizaciones, considerados diferentes. Se señaló que existe una relación conflictiva con este conjunto, el cual se puede resumir como una disputa entre el grupo liderado por quien dirigió la organización desde su conformación y hasta el año 2009, momento en que surge el conflicto con el GAD provincial anteriormente señalado, y un grupo emergente de líderes, que se forman como tales al calor de la dinámica organizativa promovida por el proyecto “Sembrando Agua”.

A partir de que el GAD Provincial transfiere la deuda al Comité de Gestión, esta organización entró en una crisis económica y organizativa que puso en tela de juicio al grupo dirigente inicial. El cuestionamiento fue encabezado por el grupo emergente de líderes, que termina asumiendo la dirigencia y la gestión de la crisis, mientras que los integrantes del grupo inicial, quedaron fuera de la organización o relegados a posiciones marginadas. Los participantes del taller, señalaron que el liderazgo inicial fomentó la formación de grupos de clientela, –lo que llamaron “grupismo”–; esto afectó la forma de administrar los recursos de la organización y la distribución de los beneficios entre los socios. Frente a ello, insistieron en que el “grupo directivo nuevo” apelaba a fortalecer las mingas, la formación/capacitación de los socios y la gestión de recursos de cooperación.

La red de la OCMECUC

Exterioridad

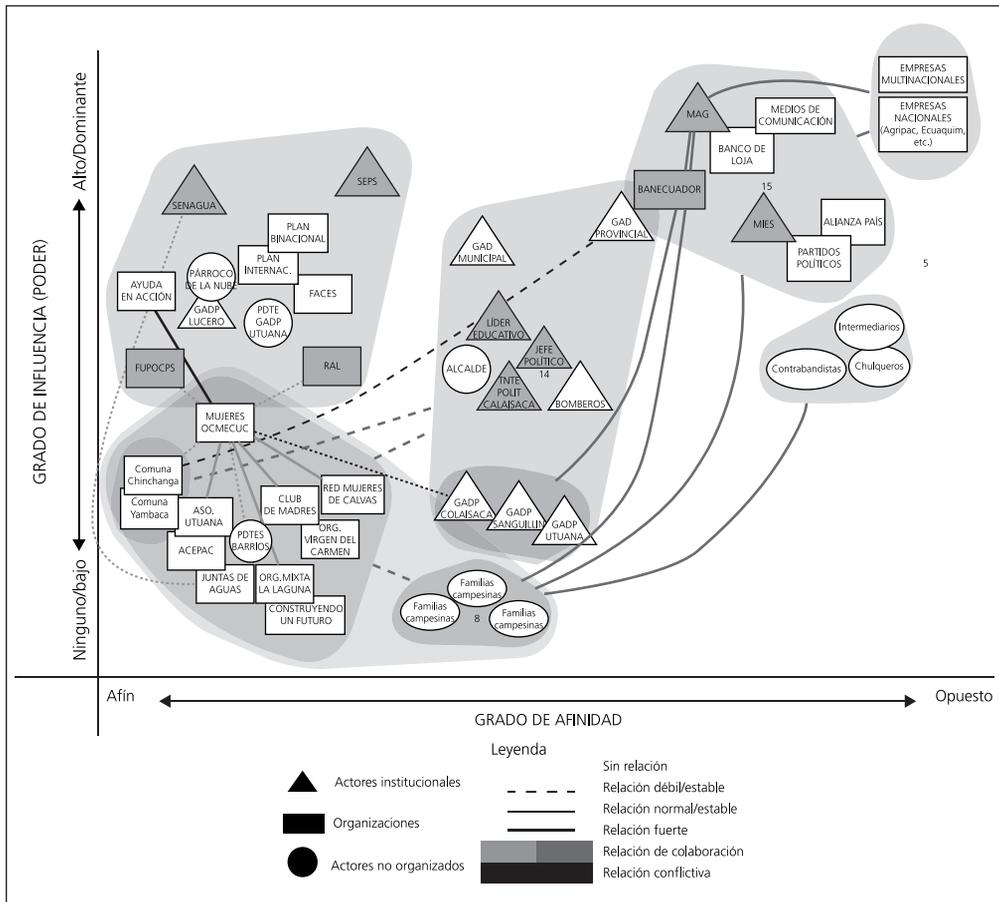
En la OCMECUC se identificaron cinco conjuntos de acción externos (figura 2). En primer lugar, ubicaron a un diverso grupo de actores conformado por ONG, instituciones públicas y organizaciones campesinas externas a su territorio. Este conjunto es diverso en su composición e intereses (gestión ambiental, economía solidaria, desarrollo comunitario, algunos gobiernos parroquiales, etc.), y sus niveles de poder oscilan entre medios y altos; pero comparten una disposición afín a la territorialidad de OCMECUC. La relación con este conjunto es facilitada por la intervención de la ONG “Ayuda en Acción”.

Un segundo conjunto de actores está constituido por gobiernos locales de distinta escala (GAD) y representantes locales del Estado Central (tenientes, jefes políticos). De similar for-

ma que el Comité de Gestión, en OCMECUC caracterizaron a estos actores por su disposición ambigua y porque suelen mantener relaciones débiles y en ocasiones conflictivas, con las organizaciones; a causa de la persistencia de visiones paternalistas e intereses particulares. En esta línea, se identificó un tercer conjunto, compuesto por actores con intereses económicos o políticos considerados opuestos: intermediarios, contrabandistas, chulqueros (usureros), a quienes se caracterizó por ostentar mediana influencia, pero también por mantener relaciones estables (comerciales, financieras, políticas) con las familias campesinas.

En un cuarto conjunto de acción se ubicó a los actores que representan el poder (económico, político, cultural) a nivel nacional: instituciones públicas, financieras, partidos políticos y medios de comunicación. Se caracterizó a estos actores por su elevado nivel de poder, su interacción permanente con las familias campesinas y por sus disposiciones tendientes hacia la oposición frente a la territorialidad de la OCMECUC. Destaca en este

Figura 2. Sociograma de la OCMECUC



Fuente: El autor. Investigación colaborativa (2017).

conjunto el MAG, del que se señaló que si bien tiene una presencia importante en territorio y una asistencia frecuente a las organizaciones, buena parte de sus esfuerzos buscan difundir paquetes externos y agro-tóxicos, en alianza con grandes empresas. Por esta razón, se señaló que el MAG tiende más hacia una disposición opuesta a la soberanía alimentaria, que forma parte de la territorialidad de OCMECUC. Siguiendo este razonamiento, se identificó un quinto conjunto de acción, conformado por agro-empresas privadas, nacionales y transnacionales, opuestas a la territorialidad de la OCMECUC, con posiciones de poder muy elevadas debido a sus recursos económicos, tecnológicos y políticos, con los cuales, tienen fuerte capacidad de influir sobre los varios actores del conjunto que representa el poder nacional.

Interioridad

La OCMECUC se compone de tres conjuntos de acción en su interioridad (figura 2). Primero, el conjunto conformado por sus organizaciones de base y lideresas; quienes, si bien fueron caracterizadas con posiciones de poder bajas, se consideró que por la densidad de sus relaciones de horizontalidad, consiguen una mayor influencia combinada a través de la OCMECUC. Un segundo conjunto de actores está conformado por organizaciones con las que mantienen relaciones fraternas (aunque débiles), como las comunas. Un tercer conjunto, está integrado por las familias campesinas del territorio; es decir, por la base social, que fue caracterizada por su disposición ambigua, que resulta de la tensión entre la influencia que ejercen las organizaciones (considerada débil), y la que ejercen los distintos conjuntos de acción que son parte de la exterioridad.

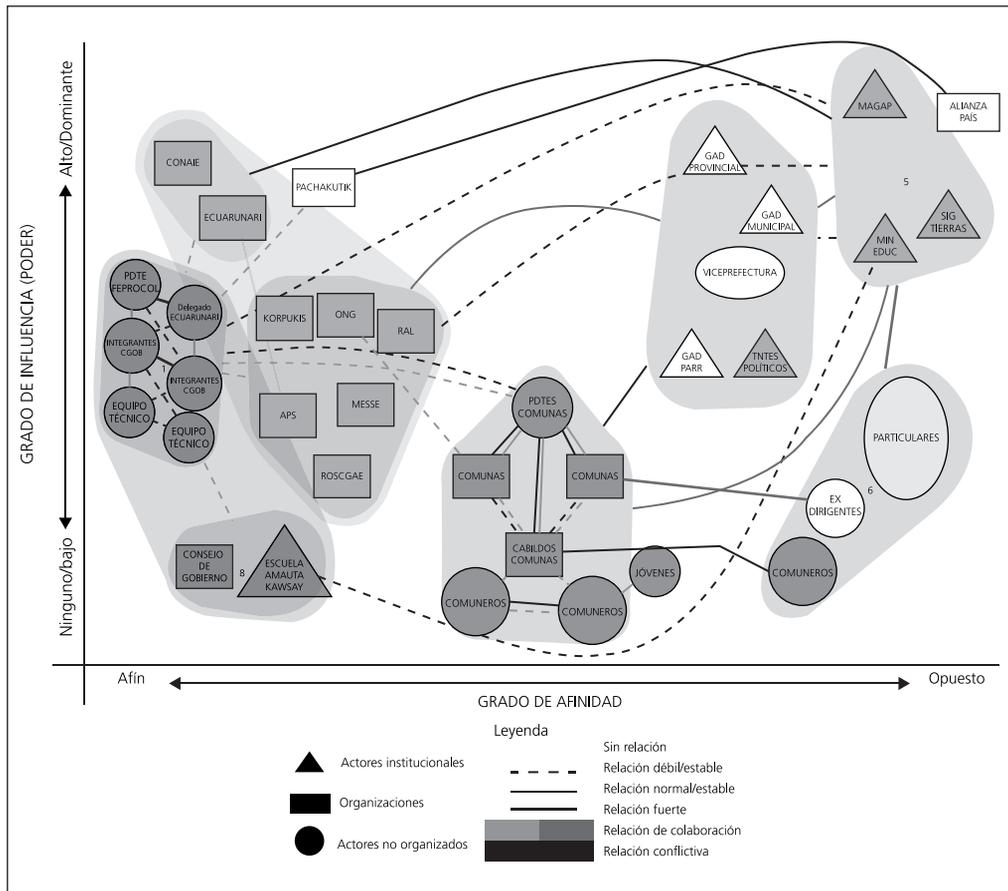
La red de la FEPROCOL

Exterioridad

En el sociograma de FEPROCOL (figura 3), se identificaron cuatro conjuntos de acción externos. En primer lugar, un grupo compuesto principalmente por organizaciones campesinas e indígenas, nacionales y provinciales, consideradas afines y con posiciones de poder entre medias y altas. Se trata de un conjunto con el que FEPROCOL comparte actividades de participación política dentro del movimiento indígena –actualmente debilitado– y formación de líderes en diversos temas (derechos colectivos, agroecología, medicina ancestral, etc.). También ubicaron de forma genérica, a las ONG en este conjunto de actores externos afines. Al momento del taller, FEPROCOL mantenía relaciones débiles con este conjunto de acción. Tampoco mantenían ningún proyecto con ONG.

Esto no fue así siempre. El nacimiento de FEPROCOL tuvo lugar al calor de la intensa dinámica que mantuvo el movimiento indígena ecuatoriano hasta finales de la pasada década. Esta coyuntura permitió que sus promotores canalicen recursos, cooperación y contactos en apoyo a la creación y sostenimiento de FEPROCOL como expresión local del movimiento indígena. No obstante, a partir de 2008, el creciente distanciamiento entre CONAIE y ECUARUNARI, y el Gobierno de Rafael Correa, se tradujo en la cooptación o cierre de instituciones como el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) (Lalander y Ospina 2011). Del CODENPE, provenía la mayor parte de recursos e información que sostenían el funcionamiento de FEPROCOL (estudios, proyectos, asesoría jurídica, capacitación, etc.), y su cierre significó un duro revés para esta organización, pues cortó la principal arteria que alimentaba su dinámica, debilitando tanto su cohesión interna, como su articulación con los actores de este primer conjunto.

Figura 3. Sociograma de la FEPROCOL



Fuente: El autor. Investigación colaborativa en Alvarado (2016).

El segundo conjunto de acción corresponde a los gobiernos y autoridades locales de distinta escala (GAD, tenientes políticos, Viceprefectura). Los actores de este grupo tienen distintos niveles de poder, pero comparten una disposición ambigua entre la indiferencia y la oposición. Fueron además, percibidos como agentes que compiten con los cabildos comunales por la autoridad territorial, pese a que algunos comuneros participan en algunos cargos dentro de estas entidades. Destacan en este conjunto de acción, los GAD Municipales, percibidos como actores con elevadas posiciones de poder y disposiciones tendientes hacia la oposición.

La interacción entre las comunas y los GAD Municipales tiene dos facetas: por un lado, una relación asistencialista/clientelar, por medio de la cual los comuneros suelen gestionar servicios (dotación de agua, mantenimiento vial, etc.). Por otro, existe un conflicto de intereses entre ambos actores: a varios municipios les interesa que los campesinos tengan escrituras individuales, a fin de poder recaudar impuestos prediales; pero legalmente las comunas son territorios indivisibles, están prohibidas escrituras particulares dentro de sus territorios, y sus socios están exentos del pago de impuesto predial. No obstante, este tributo constituye una fuente de ingresos importante para los GAD Municipales; así que, mientras más extensa y numerosa es una comuna, significa que menos campesinos deben pagarlo, afectando sus recaudaciones. Se reportaron eventos donde funcionarios municipales animaban a comuneros, a que reclamen la división de sus territorios y la escrituración de sus predios.

El tercer conjunto de acción está conformado por instituciones estatales nacionales. Entre ellas destacan el MAG y entidades adscritas, a quienes se consideró como actores con altos niveles de poder (por sus recursos económicos y autoridad) y opuestos a la FEPROCOL. La interacción MAG-FEPROCOL es conflictiva y tiene tres facetas. Primeramente, de forma similar que el Comité de Gestión y OCMECUC, en FEPROCOL percibieron que en esta entidad predomina una visión utilitarista de la agricultura, contrapuesta a la territorialidad de la organización.

En segundo lugar, consideraron que el Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS), adscrito al MAG, es “un enemigo que quiere privatizar la tierra de las comunas” (FEPROCOL, taller, mayo de 2015). Esta percepción se debe a que el trabajo de SIGTIERRAS, consistente en generar información geográfica sobre los predios rurales, devela fuertes intereses y presiones sobre las tierras comunales, por ejemplo de poseedores que siendo o no comuneros, quieren

No obstante, este tributo constituye una fuente de ingresos importante para los GAD Municipales; así que, mientras más extensa y numerosa es una comuna, significa que menos campesinos deben pagarlo, afectando sus recaudaciones.



obtener escrituras privadas sobre ellas; o algunos GAD-Municipales con intereses de mejorar su recaudación de impuestos prediales. Así pues, con la presencia de SIGTIERRAS, han aflorado con fuerza diversos conflictos que enfrentan las comunas, exponiendo sus debilidades para asumir la gestión y defensa colectiva del territorio. Por ejemplo, se ha visibilizado que varios cabildos no tienen capacidad para distribuir equitativamente los derechos de usufructo de la tierra entre los comuneros, existiendo incluso abusos de algunos dirigentes, que han aprovechado posición para acaparar tierras a favor suyo, de familiares, o para venderlas a terceros; cuando existen comuneros minifundistas o sin tierra.

La tercera característica es una competencia entre el MAG y FEPROCOL por la influencia sobre las comunas de base y sus dirigencias. Hasta antes de 2005, con la Ley de Comunas (República del Ecuador, 1937, Ley de Organización y Régimen de las Comunas, Codificada al 2004), el MAG tenía la atribución de aprobar las comunas y sus estatutos, y otorgar asesoramiento, financiamiento, y reconocimiento legal a sus cabildos. Se trataba de una relación paternalista que, en la práctica se limitaba a procedimientos burocráticos y toma de posesión de los cabildos. Pero, con el ascenso del movimiento indígena a finales del siglo pasado y la consecuente creación de instituciones como el CODENPE, las comunas adquieren un mayor margen de autonomía del MAG y se potencia un liderazgo interno que estimula la dinámica de la FEPROCOL, que enlaza a las comunas de base con este organismo, en torno a la gestión de diversos temas (derechos colectivos, conflictos de tierras, saberes ancestrales, etc.).

No obstante, con el posterior debilitamiento y desaparición del CODENPE, producto del distanciamiento entre el movimiento indígena y el Gobierno de Correa, FEPROCOL pierde poder de gestión, que se profundiza cuando el gobierno mediante un acuerdo ministerial devuelve el tutelaje de las comunas de base al MAG (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 2014). El último conjunto de acción en la exterioridad está conformado por actores económicos y políticos con intereses particulares, considerados opuestos. Entre ellos constan campesinos no comuneros y otros propietarios, con los que las comunas generalmente tienen conflictos; actores político-partidistas; comerciantes; etc.

Interioridad

En la FEPROCOL se identificaron tres conjuntos de acción internos (figura 3). El primero, opera a nivel directivo y está conformado por los dirigentes del consejo de Gobierno y técnicos de apoyo. Durante este estudio, este conjunto vivía un fuerte conflicto entre dos grupos, que se disputaban el control de la FEPROCOL; lo que impedía el normal funcionamiento del Consejo de Gobierno.

Los grupos en conflicto estaban liderados por el presidente de FEPROCOL y el delegado de ECUARUNARI respectivamente. Es decir, por los dirigentes más visibles en

la organización. A ellos, se adscribían los demás integrantes del Consejo de Gobierno y algunos técnicos. Ambos líderes competían por obtener reconocimiento, tanto a nivel de interioridad, como en la exterioridad.

En la interioridad, intentaban poner a su favor a los cabildos de las comunas de base. Para ello, apoyándose en su bloque aliado dentro del Consejo de Gobierno, organizaban visitas a las comunas de base y cabildeaban con sus dirigentes u otras personas influyentes en ellas, comprometiéndose a las diligencias de sus cabildos. Para responder a estos compromisos –y ante la actual ausencia del CODENPE–, su estrategia en la exterioridad, consistía en recurrir a eventos organizados por actores considerados afines, y a vínculos clientelares con algunos actores políticos, intentando obtener reconocimiento público y algunos recursos (especialmente apoyo técnico y jurídico). Las disputas caciquiles son parte de la dinámica de FEPROCOL desde sus inicios. La polarización entre grupos dirigenciales, termina resolviéndose en cada congreso de la organización (máxima instancia de autoridad, similar a asamblea general), con la consolidación de uno de los líderes, mientras el otro, deslegitimado, queda proscrito, y su grupo es marginado.

El segundo conjunto de acción corresponde al sub-espacio de las comunas, base social de la FEPROCOL. Se compone de actores individuales y colectivos, con bajas posiciones de poder, y cuyas disposiciones se mueven entre la afinidad e indiferencia. Si bien, la dinámica de las distintas comunas lojanas es diversa y compleja, es posible mencionar algunos aspectos generales relacionados con este trabajo. Las familias comuneras practican una agricultura de subsistencia, articulada a los mercados de forma subordinada a comerciantes urbanos locales (Guamán *et al* 2010). Sus relaciones de trabajo recíprocas y la propiedad comunitaria de la tierra persisten, pero están en franco retroceso debido a la monetización, la fuerte emigración, el aumento de los precios relativos de la mano de obra (en comparación con los precios de los productos agrícolas), y el cambio de itinerarios técnicos (Alvarado 2016).

Formalmente, en las comunas lojanas, la autoridad máxima es su asamblea general y luego de esta, un cabildo comunal (o consejo de gobierno) electo en la asamblea. Los cargos de representación en el cabildo son mayoritariamente ostentados por hombres que frecuentemente superan los 50 años. La participación de las mujeres es poca y generalmente en el cargo de secretarías. No se observa participación de personas con menos de 30 años. La figura de los cabildos no suele tener mucho poder y no va mucho más allá de su designación formal. En la mayoría de las comunas, el ejercicio del poder y la representación se concentran en el presidente del cabildo, también llamado gobernador o personero.

En la mayor parte de las comunas, existe alta conflictividad interna por la distribución de las tierras. En las comunas con disputas más fuertes, existen grupos que juegan un papel activo a favor de la fragmentación territorial y la escrituración individual de los predios. De hecho, la mayor parte de las comunas están parceladas y fragmentadas. Este es uno de los problemas que más ocupa a los cabildos, dejando otras gestiones inherentes a su territoria-

lidad, relegadas a planos secundarios. Además, existe una identidad ancestral sumamente débil. Consecuencia de todo esto, la cohesión sociocultural es muy frágil y el modo de producción comunitario está muy fracturado.

En este contexto, se identifica un tercer conjunto de actores en la interioridad: comuneros, dirigentes y ex-dirigentes considerados opuestos, por mantener conflictos con los cabildos actuales, o relativos a la distribución de los derechos sobre la tierra. En síntesis, la interioridad de la FEPROCOL se caracteriza porque las disputas caciquiles, la debilidad socio-cultural de las comunas, y la pérdida de apoyo de instituciones como el CODENPE a raíz de la coyuntura política, han puesto a esta organización en una crisis profunda que amenaza su viabilidad.

Discusión

Patrones de interacción en la exterioridad de las organizaciones campesinas

Con el análisis comparativo de los casos estudiados, se identifica la presencia de cuatro tipos de interacciones en la exterioridad de las organizaciones campesinas lojanas. Al primero, lo denominaremos “redes externas de apoyo”. Es un *pool* de actores diversos compuesto por ONG, organizaciones campesinas-indígenas, universidades, redes de migrantes y/o, entidades públicas nacionales o internacionales, que promueven varios proyectos de sostenibilidad ambiental, desarrollo local o promoción de derechos. Sus interacciones con las organizaciones campesinas locales, pueden contribuir a que estas densifiquen su horizontalidad. En los tres casos, se encontró que es un actor (COMUNIDEC, Ayuda en Acción y CODENPE, respectivamente), el que ejerce el papel de gestor de este conjunto, constituyéndolo en una coalición afín a la territorialidad campesina.

El segundo tipo, que denominaremos “redes externas de dominación”, está conformado por actores extraterritoriales con disposiciones opuestas a las territorialidades campesinas. Si bien en este conjunto, el actor más visible fue el MAG, se trata de una poderosa coalición de entidades públicas y empresas privadas (nacionales y transnacionales), que promueven la modernización capitalista, mediante políticas públicas de difusión de paquetes tecnológicos externos, y la articulación subordinada de los productores al mercado y los complejos agroindustriales.

Un tercer conjunto, que denominaremos “redes locales de dominación”, está constituido por actores locales con intereses económicos o políticos particulares y opuestos a las territorialidades estudiadas (grandes y medianos propietarios, dirigentes políticos, intermediarios, usureros, etc.). Estos, juegan un papel clave en la integración subordinada de las familias campesinas a espacios como los mercados, los gobiernos locales y a las estrategias de desarrollo promovidas por los otros conjuntos de acción, pues establecen relaciones de

clientelismo político, intermediación comercial, acaparamiento de recursos (como la tierra o el agua), usura, entre otras interacciones, en diversos ámbitos de la vida campesina. Finalmente, están los gobiernos locales. En este trabajo encontramos que estas entidades comúnmente no cuentan con una agencia propia en relación al tema campesino en general, o a alguna de sus territorialidades en particular. Su (in)disposición, reflejada en los sociogramas, resulta de la tensión entre los demás conjuntos de acción.

Patrones de interacción en la interioridad

En la interioridad de las organizaciones campesinas lojanas, coexisten de forma conflictiva tres tipos de interacciones: liderazgos de tipo caciquil, que pueden articularse a relaciones de horizontalidad, o a relaciones de dominación (patriarcales, clientelares). La persistencia de las disputas caciquiles es una importante característica de las organizaciones campesinas lojanas actuales. Quizás, esto es herencia de la forma ancestral, precolonial, de organización local en señoríos étnicos (Aguirre 2011), que persiste de modo inconsciente incluso en las organizaciones más modernas. Es un interesante tema en el que podrían profundizar futuros estudios.

Mientras tanto, subrayamos la necesidad de abordar los procesos específicos de cada organización, partiendo del análisis del liderazgo caciquil en correspondencia con el funcionamiento de la interioridad, en cada contexto particular (Sánchez-Parga 1984). En otros términos, proponemos un método de análisis orientado a comprender la interacción entre los líderes, las redes de dominación que colonizan la organización y las redes de horizontalidad que construyen contrahegemonía.

Con este razonamiento, en este trabajo encontramos que si la organización cuenta con una horizontalidad débil, los caciques, a fin de sostenerse, pueden favorecer la articulación de la organización con relaciones de dominación provenientes desde la exterioridad (asistencialistas, paternalistas). Así, ocurre la colonización de la interioridad por medio de la cooptación de los caciques y la reproducción de una dinámica “vertical”, que favorece interacciones internas de tipo patriarcal o clientelar. En cambio, si la organización cuenta con redes de horizontalidad saludables, se estimula la evolución hacia liderazgos menos autoritarios. En este sentido, las experiencias de OCMECUC y el Comité de Gestión, en contraste con la de FEPROCOL, enseñan la importancia de potenciar la participación de mujeres y jóvenes como factor que favorece la viabilidad de las organizaciones.

Mientras tanto, subrayamos la necesidad de abordar los procesos específicos de cada organización, partiendo del análisis del liderazgo caciquil en correspondencia con el funcionamiento de la interioridad, en cada contexto particular (Sánchez-Parga 1984).



Dinámica de estructuración de las territorialidades campesinas

Las territorialidades campesinas lojanas parten desde un escenario inicial de débil cohesión sociocultural –anteriormente descrito– y cursan un proceso de estructuración que consta de tres momentos. El primero ocurre cuando actores de la exterioridad (sean de las redes de apoyo o de dominación) canalizan hacia el territorio, información y recursos (públicos, privados, de cooperación internacional, etc.), en el marco de sus propias estrategias de desarrollo. Allí, las familias campesinas, en un principio se supeditan a los objetivos de estos agentes, con el fin de acceder a sus recursos.

De esta convergencia, nacen o se re-dinamizan procesos organizativos. No obstante, en esta fase inicial, su dinámica se adscribe a los objetivos trazados por los actores externos. Es decir, que la organización opta por la aceptación de la subalternidad como estrategia de desarrollo. Cuando la relación se entabla con las redes externas de apoyo, los recursos e información que estas proveen, pueden instaurar un entorno favorable a la creación o rehabilitación de relaciones de horizontalidad, sean estas tradicionales de la comunidad, o provenientes de la exterioridad moderna (mingas, intercambios de semillas o saberes, etc.). Como consecuencia, la organización empieza a imprimir una territorialidad específica (de producción agroecológica, defensa del territorio, gestión del agua, finanzas solidarias, etc.).

A partir de estas primeras experiencias, incubadas bajo estrategias de desarrollo externas, la organización empieza a moverse desde la aceptación de la subalternidad hacia la autonomía, iniciando un segundo momento, caracterizado por el conflicto interno; pues la (re)densificación de la horizontalidad da origen a una contradicción entre estas relaciones repotenciadas y aquellas de dominación preexistentes. En otros términos, el estímulo a las redes de horizontalidad, empodera a varias familias campesinas, constituyéndolas en antagonistas, que entablan disputa con aquellas que operan a su favor las redes de dominación. Por ejemplo, se cuestiona el flujo de recursos a través de formas clientelares o el liderazgo emergente de mujeres exige espacios en la dirección del grupo. En ese momento, la territorialidad adquiere un status contra-hegemónico.

Si bien la disputa con la dominación puede abarcar diversos ámbitos en la interioridad, el conflicto suele concentrarse en torno a la distribución de los recursos económicos (dotaciones, insumos, información) que circulan hacia la organización. No obstante, la disputa se resuelve en el ámbito político, al activar una disputa entre dirigentes (caciques) y sus grupos adscritos, por controlar la organización. En consecuencia, la organización se polariza. En parte, de modo inconsciente, uno de los caciques y su grupo, se respalda principalmente en las redes de dominación sometidas a cuestionamiento (por ejemplo, el “grupismo”), defendiendo su conservación; mientras el otro, se decanta por defender las redes de horizontalidad reconstituidas.

El tiempo en que esta tensión se convierte en motor central de la dinámica de la organización, depende de la correlación de fuerzas, pudiendo tardar años en resolverse, o

no hacerlo y dividir/atomizar la organización. Un efecto secundario de la resolución, es la marginación o expulsión de los dirigentes que encabezan el grupo desfavorecido en la disputa. No obstante, la resolución parece que nunca es completa, solo pierde centralidad y se desplaza a un estado de latencia.

Posteriormente, la organización llega a un tercer momento; si el conflicto se resuelve a favor de las nuevas interacciones (horizontalidad), el resultado es la reproducción endógena de la territorialidad campesina. Así, las redes de horizontalidad mueven a los campesinos hacia la autonomización. Si en cambio, las redes preexistentes de dominación son más fuertes y el conflicto se resuelve a su favor, estas se reafirman y el proceso organizativo decae con la destrucción de las nuevas formas de interacción, la degeneración progresiva hacia una relación asistencialista entre la organización y los conjuntos de apoyo externos; y consecuentemente, en la apropiación corporativa de sus recursos a favor del grupo adscrito al cacicazgo “conservador” y finalmente, el abandono de la estrategia. Así, las familias campesinas regresan a su estado inicial subalterno.

Organizaciones campesinas y estrategias modernizantes: contradicción entre capital y trabajo

Actualmente, la principal estrategia de los actores de las redes externas de dominación consiste en relacionarse con las familias campesinas, a través de políticas públicas con carácter difusionista y asistencialista; procurándose, bajo un antifaz participativo, la intermediación de las organizaciones y los gobiernos locales, especialmente parroquiales. La combinación entre esta forma de interacción, con las prácticas clientelares de algunos actores económicos o políticos de redes locales de dominación, y algunos caciques y sus grupos en las organizaciones, integran una red de dominación que coloniza las bases de las organizaciones campesinas.

Por su composición, los recursos e información que provienen desde las redes externas y locales de dominación, incentivan la alianza capital/terra, en detrimento de la relación tierra/trabajo. Es decir, promueven itinerarios y narrativas que inhiben las redes de horizontalidad, destruyendo el tejido social, y atomizando a las familias.³ En consecuencia, las estrategias modernizantes empujan a los campesinos a abandonar sus estrategias sociales y “migrar” hacia prácticas clientelares o asistencialistas como estrategia contingente. Esto explica, que varios proyectos de desarrollo, que ponen excesivo énfasis en la asistencia o transferencia de dotaciones, no logran resultados sostenibles. De hecho, los campesinos generalmente confluyen en ellos, en primera instancia —como lo anotamos anteriormente—, con el fin de obtener recursos para la reproducción de sus unidades familiares, adscribiendo sus organizaciones o comunidades a los objetivos de estos proyectos solo hasta obtenerlos, para luego volver a dispersarse.

3 Por ejemplo, la introducción de herbicidas en las chacras, significó un fuerte golpe a la práctica de las mingas (Alvarado y Bustillos 2013).

En consecuencia, es difícil que las organizaciones campesinas logren un desarrollo autónomo bajo estrategias orientadas a consolidar el carácter capitalista de la producción, como por ejemplo, el Plan Semillas impulsado por el MAG. Por más esfuerzos de fortalecimiento asociativo que realicen, bajo aquella égida, es muy probable que las organizaciones involucradas funcionen de forma precaria, pues las familias no densifican su horizontalidad, dispersándose en sus fincas en cuanto reciben algún beneficio material. En realidad, se trata de una consecuencia lógica advertida por Baudel (2010), pues el objetivo es únicamente, modernizar la producción con fines de acumulación, no las condiciones de vida de los agricultores.

Reflexiones finales

Las territorialidades campesinas que hemos abordado son más que simples prácticas de producción o gestión; son complejos procesos de subjetivación política. En la medida en que las organizaciones densifican su horizontalidad, las familias que participan en ellas cobran conciencia de su condición subalterna, conflictúan con las estructuras y agentes de dominación, y cuestionan la naturaleza de la modernización capitalista. Estas territorialidades son medios para afirmar su autonomía económica, política y su cultura.

No obstante, los éxitos de estas iniciativas se limitan solamente a algunos espacios locales (parroquias, cantones), quedando aún pendiente el desafío de estimular su escalamiento a nivel provincial, en la perspectiva de (re)construir al campesinado lojano como sujeto histórico. A nuestro criterio, esto requiere de un proceso de gestión de redes, que: 1) motive la formación de redes externas de apoyo estables, con estrategias de desarrollo que promuevan intencionalmente el fortalecimiento de la horizontalidad de las organizaciones; 2) estimule la ecología de saberes, entre los actores que conforman las redes externas de apoyo y las organizaciones campesinas lojanas; 3) genere una propuesta productiva, ambiental y socio-política, con énfasis en la revalorización de la agricultura de montaña, cuyos contenidos sean sentipensados partir de las territorialidades con resultados exitosos, y; 4) gestione la construcción de coaliciones transformadoras (Chiriboga 2010), con el peso específico necesario para disputar el sentido del desarrollo rural a la narrativa hegemónica, y “torcer” las trayectorias territoriales locales, hacia entornos más favorables a los itinerarios, producciones y cultura campesinos.

Bibliografía

- Aguirre, César. 2011. *Estudio Socio-Histórico de la Comuna Numbiaranga*. Loja: Documento no publicado.
- Alberich, Tomas. 2008. “IAP, redes y mapas sociales: desde la investigación a la intervención social”. *Portularia. Revista de Trabajo Social* 8: 131-151.

- Alvarado, Marcela, y Anaïs Vandecandelaere. 2011. “Tenencia de la tierra e inequidad en el acceso a la tierra”. En *Tierra urgente*, editado por Fernando Hidalgo y Michel Laforge, 51-79. Quito: SIPAE/La Tierra.
- Alvarado, Marco. 2016. “¿Chazos vs alcanfores? Conflicto, poder y territorialidades contra-hegemónicas de la agricultura campesina en la provincia de Loja”. Tesis de Maestría, FLACSO-Ecuador.
- Alvarado, Marco, y Daniel Bustillos. 2013. “Transformaciones agrarias y diferenciación campesina en Centro Loja a partir de la Reforma Agraria”. Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja.
- Baudel, María. 2010. “A sociologia rural na América Latina: produção de conhecimento e compromisso com a sociedade”. *ALASRU* 5: 17-44
- Chevalier, Jacques, Daniel Buckles. 2009. “SAS2: Guía para la Investigación Colaborativa y la Movilización Social”, http://www.cesso.cl/wp-content/uploads/2014/02/SAS2_Guia.pdf
- Chiriboga, Manuel. 2010. “Dinámicas Territoriales Rurales en América Latina”. *Revista Eutopía* 1: 51-68.
- De la Tejera, Beatriz, Susana Aparicio, Fernando Guerrero, Ángel Santos, y César Ramírez. 2010. “Acercamiento a los proyectos en disputa”. *ALASRU* 5: 7-16
- De Schutter, Olivier. 2010. “Informe del relator especial sobre el derecho a la alimentación”, http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/A-HRC-16-49_sp.pdf
- Díaz, Alicia. 2012. “Actores y efectos diferenciados de la modernización y globalización en territorios locales de Paraguay”. Tesis de doctorado, Universidad de Granada.
- Elizalde, Antonio, y Luis Thayer. 2013. “Ruralidad y campesinado: ¿categorías: en extinción o realidades en proceso de transformación?”. *Polis* 34. <https://journals.openedition.org/polis/8717>
- Favareto, Arilson, y Mónica Schroder. 2007. “Do território como ‘ator’ ao território como ‘campo’: uma análise da introdução da abordagem territorial na política de desenvolvimento rural no Brasil”. Ponencia presentada en el *XLV Congreso de la Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural*, Universidad Estadual de Londrina, Londrina, 22-25 de julio.
- Gondard, Pierre. 2004. “Pistas para la investigación de los cambios en el uso del suelo y paisajes vegetales en la Región Sur”. En *Memorias del Seminario-Taller. Hacia una imagen compartida de la Región Sur del Ecuador*, editado por Abya Yala y CIADLR-UNL, 87-112. Quito: Abya Yala/CIADLR-UNL.
- Gómez, Gerson, y Antonio Pérez. 1979. “El proceso de modernización de la agricultura latinoamericana”. *Revista de la CEPAL* 8:57-77.
- Gramsci, Antonio. 1999. *Cuadernos de la cárcel*. Puebla: Ediciones Era/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Guamán, Francisco, Sinda Castro y Tania Guamán. 2010. *Delimitación Territorial de 14 comunas ancestrales del Pueblo Palta*. Loja, Ecuador: FEPROCOL/CODENPE.

- Guerrero, Trotsky. 1992. *Modernización agraria y pobreza rural en el Ecuador*. Loja: Universidad Nacional de Loja.
- Hidalgo, Francisco. 2014. "Contextos y tendencias de las agriculturas en Latinoamérica actual". En *Agriculturas campesinas en América Latina, propuestas y desafíos*, editado por Francisco Hidalgo, François Houtart y Pilar Lizárraga, 67-86. Quito: IAEN.
- Hollenstein, Patrick, Pablo Ospina y José Poma. 2011. "Territorios Rurales y Globalización: La fragmentación territorial de la provincia de Loja". Ponencia presentada en *SEPIA XIV*, Piura, 23-26 de agosto.
- Laguna, Pablo. 2011. "Mallas y Flujos. Acción colectiva, cambio social, quinua y desarrollo regional indígena en los Andes Bolivianos". Disertación doctoral, Wageningen University and Research Centre.
- Lalander, Rickard, y Pablo Ospina. 2011. "Movimiento Indígena y Revolución Ciudadana en Ecuador". *Cuestiones Políticas* (28) 48: 13-50 http://www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr/opalc/files/movimiento_indigena_y_revolucion_ciudadana.pdf
- Mançano, Bernardo. 2012. "Disputas territoriales entre el campesinado y la agroindustria en Brasil". *Cuadernos del Cendes* 29 (81): 1-22 http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/article/view/3992/3818
- Max-Neef, Manfred. 1986. *La economía descalza. Señales desde un mundo invisible*. Estocolmo/Buenos Aires/Montevideo: Editorial Nordan.
- MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca). 2014. "MAGAP confiere nombramientos a cabildos de las comunas de Santa Elena", <http://www.agricultura.gob.ec/magap-confiere-nombramientos-a-cabildos-de-las-comunas-de-santa-elena/>
- _____. 2016. *Política Pública Agropecuaria 2015-2025. Parte II. Especialización Productiva Ecuatoriana: Contrastes y diferencias territoriales según zonas de planificación y agendas políticas por zona*. Quito: MAGAP.
- Modonesi, Massimo. 2010. *Subalternidad, antagonismo, autonomía: marxismos y subjetivación política*. Buenos Aires: CLACSO.
- Ospina, Pablo, Diego Andrade, Sinda Castro, Manuel Chiriboga, Patrick Hollenstein, Carlos Larrea, Ana Larrea, José Poma, Bruno Portillo y Lorena Rodríguez. 2011. *Dinámicas económicas territoriales en Loja, Ecuador: ¿crecimiento sustentable o pasajero?* Santiago de Chile: Rimisp.
- Pastre, Olivier, y Carl Waroquiers. 2003. *Un diagnóstico agrario del cantón Espíndola: crisis del minifundio en los andes ecuatorianos*. Loja: Universidad Nacional de Loja/Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas y Populares de Espíndola.
- Ramón, Galo. 2014. *Sembrando agua para la vida: resiliencia campesina y adaptación al cambio climático*. Quito: COMUNIDEC/PACC-MAE/PNUD/Plan Internacional/Comité de gestión de las cuencas de Paltas.
- Rubio, Blanca. 2006. "Exclusión rural y resistencia en América Latina". *ALASRU* 4: 1-28.

- Sánchez, José. 1984. "Estrategias de supervivencia". En *Estrategias de supervivencia en la comunidad andina*, José Sánchez-Parga, Manuel Chiriboga, Galo Ramón, Andrés Guerrero, Jhon Durston, y Ana Crivelli, 9-57. Quito: Caap
- Santos, Milton. 1993. "Los espacios de la globalización". *Anales de Geografía de la Universidad Complutense* 13: 69-77.
- Schneider, Sergio, e Iván Peyré. 2006. "Territorio y enfoque territorial: de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales". En *Desarrollo rural: organizaciones, instituciones y territorio*, organizado por Mabel Manzanal, Guillermo Neiman y Mario Lattuada, 71-102. Buenos Aires: Ciccus.
- Wong, Sara. 2013. *Dinámicas territoriales en Ecuador: Desarrollos claves en el período 2001-2011*. Santiago de Chile: Rimisp.
- Yumbra, María. 2011. "Encadenamiento agroalimentario: ¿solución sustentable del desarrollo rural o consolidación del poder agroindustrial?". *Revista Eutopía* 2: 115-134.

Entrevistas, comunicaciones y talleres

EA, facilitador ONG Ayuda en Acción, marzo de 2018.

FEPROCOL, taller, mayo de 2015.



Contrapunto

Fortalecer los colectivos campesinos en los Andes ecuatorianos. Análisis desde las provincias de Chimborazo y Cotopaxi

Strengthen the peasant collectives in the Ecuadorian Andes. Analysis from the provinces of Chimborazo and Cotopaxi

Nasser Rebaï*

Fecha de recepción: 5 de marzo de 2018
Fecha de aceptación: 10 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3299>

Resumen

Desde hace 30 años, los territorios rurales de los Andes ecuatorianos han sido afectados por un proceso de “modernización” agrícola. Mientras que las especializaciones productivas y el uso masivo de pesticidas químicos tuvieron efectos nefastos en el medioambiente, el declive de las prácticas colectivas y la desestructuración de los grupos campesinos reforzaron la vulnerabilidad social y económica de la agricultura familiar. En este artículo, se pretende ilustrar esta situación crítica a partir de los resultados de trabajos de campo llevados en las provincias de Chimborazo y de Cotopaxi. Un análisis específico permitirá mostrar en qué medida la generalización del uso de plaguicidas constituye un factor clave de la vulnerabilidad de los territorios rurales en la sierra ecuatoriana. Luego, se abrirá una discusión acerca de la necesidad de promover o de fortalecer los colectivos campesinos a fin de poner en marcha proyectos de territorios sostenibles.

Palabras clave: Andes; colectivos campesinos; territorios rurales

Abstract

For thirty years, the rural territories of the Ecuadorian Andes have been affected by a process of agricultural “modernization”. While the productive specializations and the massive use of chemical pesticides had disastrous effects on the environment, the decline of collective practices and the disorganization of peasant groups reinforced the social and economic vulnerability of family farming. This article aims to illustrate this critical situation by basing on the results of fieldworks carried out in the provinces of Chimborazo and Cotopaxi. A specific analysis will show to what extent the generalization of the use of pesticides is a key factor of the vulnerability of the rural territories in the Ecuadorian highlands. Then, a discussion will be opened about the need to promote or strengthen the peasant collectives in order to bring out projects of sustainable territories.

Keywords: Andes; peasant collectives; rural territories

* Geógrafo. Doctor de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Investigador asociado del laboratorio PRODIG (París). Correo: nass.reb@hotmail.fr

Introducción

Nos interesamos en la vulnerabilidad de los agricultores familiares inducida por las plagas y por el uso masivo de pesticidas químicos.



En las últimas décadas, varios estudios señalaron que las relaciones de solidaridad y de reciprocidad constituían históricamente la base del funcionamiento social de las comunidades campesinas andinas (Alberti y Mayer 1974; Mayer 2002; Ferraro, 2004; Lyle 2017). Otros trabajos indicaron, además, que la colaboración entre agricultores, por el medio de intercambios de trabajo o de tareas colectivas, tenía efectos positivos sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria de los hogares rurales (Martínez 2002; Lyle y Smith 2014; Walsh-Dilley 2017). No obstante, en lo que concierne los Andes ecuatorianos, desde hace 30 años, políticas liberales de “modernización” del sector agrícola que valorizan un modelo de producción capitalista y el crecimiento de los cultivos intensivos afectaron las prácticas campesinas.

Así, diferentes trabajos pusieron de relieve que el auge agro-industrial había provocado la proletarianización de los agricultores familiares y, entonces, una desestructuración de las comunidades campesinas (Korovkin 2005; Martínez 2015). Pero, además, otros

autores señalaron que la promoción por los poderes públicos de sistemas productivos caracterizados por un uso masivo de pesticidas químicos había llevado a niveles de contaminación ambiental muy altos con consecuencias graves para la salud de los agricultores (Sherwood y Paredes 2014). Sin embargo, una investigación reciente, llevada en la *sierra* ecuatoriana señaló que el control de plagas estaba relacionado con las dinámicas sociales de las comunidades campesinas y que una coordinación entre agricultores permitiría reducir el uso de químicos y alcanzar al mismo tiempo niveles de producción agrícola, que podrían satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones campesinas (Rebaudo y Dangles, 2011).

Entonces, en este artículo nos proponemos analizar los factores que limitan la cooperación entre agricultores y el Manejo Integrado de Plagas (MIP) – entendido como “la integración coordinada de métodos múltiples y complementarios para eliminar las plagas de manera segura, rentable y respetuosa del medioambiente¹” (Parsa *et al.* 2014, 3889) – y ver, en retorno, en qué medida esta situación agrava su inseguridad económica y alimentaria. Desde nuestro punto de vista, este análisis se justifica aun más que la tendencia “modernizadora” del sector agrícola nacional se ha mantenido durante los últimos años (Martínez Godoy 2015; Clark, 2017). En efecto, a pesar de un discurso que pone de relieve el “Buen Vivir”,² y de una nueva

1 “[...] the coordinated integration of multiple complementary methods to suppress pests in a safe, cost-effective, and environmentally friendly manner”.

2 O *Sumak Kawsay* en kichwa. Este concepto, que encuentra sus raíces en la cosmovisión andina, ha sido el pilar principal

constitución que concede gran importancia a la soberanía alimentaria nacional y a los Derechos de la Naturaleza, el ex mandatario Rafael Correa (2007-2017) no ha logrado poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo rural en el país. Por eso, en la segunda parte del artículo, se propone abrir la reflexión hacia la necesidad de promover o de fortalecer los colectivos campesinos a fin de poner en marcha proyectos de territorios sostenibles.

Metodología

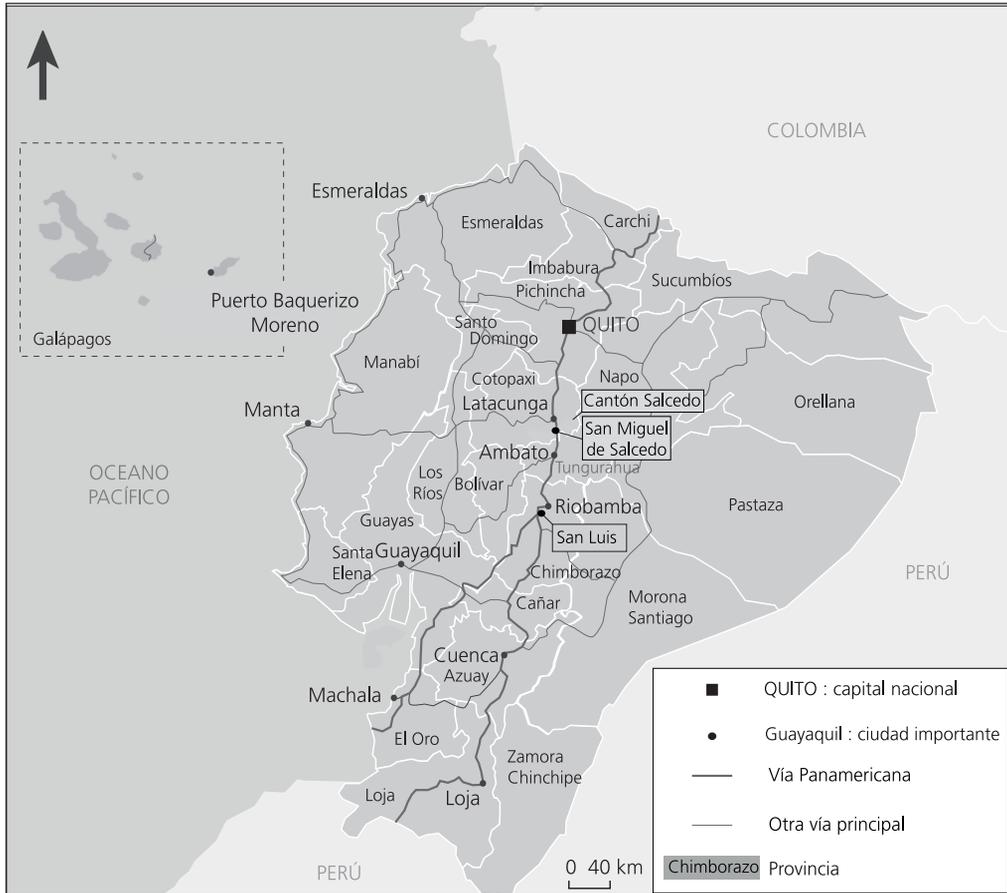
En el marco del programa MAN-PEST (2012-2015), del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), nos interesamos en la vulnerabilidad de los agricultores familiares inducida por las plagas y por el uso masivo de pesticidas químicos. Nuestro análisis se centró en la parroquia San Luis, altamente especializada en la producción de frutas y hortalizas, y caracterizada por la micro-propiedad. Ubicada a siete kilómetros de Riobamba (150.000 habitantes), en la provincia de Chimborazo, tenía 12.002 habitantes al momento del último censo de población (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INEC 2010). Además, llevamos un trabajo de campo en el cantón Salcedo, ubicado a 15 kilómetros al sur de Latacunga (10.000 habitantes) en la provincia de Cotopaxi (mapa 1). Para ser más precisos, llevamos nuestra investigación en la parte oriental del cantón Salcedo, en la denominada parroquia San Miguel de Salcedo, que tenía 31.315 habitantes al momento del último censo de población (INEC 2010) y que constituye una de las cuencas de producción de papa más importantes de la sierra ecuatoriana (Rebaï *et al.* 2016).

Concretamente, realizamos 13 entrevistas con líderes campesinos, representantes políticos locales y funcionarios del Ministerio de Agricultura (MAGAP), para discutir de manera general sobre las prácticas agrícolas y sobre las estrategias campesinas de control de plagas en estas dos zonas. Luego, con el apoyo de las autoridades locales, llevamos 12 encuestas con agricultores – 6 en San Luis y 6 en Salcedo – con quienes discutimos sobre las características de sus explotaciones, de la diversidad de sus ingresos y de sus estrategias para luchar contra las plagas. Finalmente, realizamos preguntas más abiertas acerca de la evolución reciente de las prácticas agrícolas en sus localidades y sus relaciones con los otros actores (sus vecinos, las instituciones públicas, los vendedores de insumos químicos) que permitieron ampliar las discusiones que tuvimos con los agricultores de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo.

Así, nuestro trabajo de campo nos ha permitido integrar dos niveles de análisis de las dinámicas sociales y agrícolas de nuestras dos zonas de estudios. Desde un punto de vista

de la “Revolución Ciudadana” llevada por Rafael Correa durante sus años de Gobierno. Se utilizó en el discurso oficial como una herramienta retórica importante para expresar una voluntad de romper con la ideología capitalista y de dar mayor importancia al bienestar social y ambiental de la población.

Mapa 1. Ubicación de las zonas de estudio



Fuente: Instituto Geográfico Militar. Realización cartográfica: N. Rebaï.

qualitativo, las entrevistas y las preguntas abiertas que hicimos a los diferentes actores encontrados nos han permitido entender sus diferentes percepciones de los cambios recientes de sus territorios. En cuanto a la dimensión más cuantitativa de nuestra investigación, las encuestas realizadas con los agricultores familiares en San Luis y Salcedo nos han permitido conseguir informaciones precisas acerca de su situación económica y alimentaria actual. Obviamente, cabe precisar, que por el número reducido de explotaciones que estudiamos, los datos económicos presentados en este artículo no pueden pretender servir a la construcción de una base de informaciones estadísticas generales sobre nuestras dos zonas de estudio. Sin embargo, se debe subrayar también que los resultados de las encuestas que llevamos en San Luis y Salcedo completan una suma ya importante de informaciones producidas en los últimos años acerca de las características económicas de las unidades de producción familiar en la sierra ecuatoriana (Rebaï 2014; 2017). Por eso, consideramos

que los datos presentados en este texto ayudan a ilustrar aún mejor la situación actual del campesinado en esta región.

Las consecuencias de la “modernización” de los sistemas de producción en las provincias de Chimborazo y de Cotopaxi

Si la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) (2001 y 2016) recuerda frecuentemente que la lucha contra las plagas es una prioridad para reducir la inseguridad alimentaria de las poblaciones rurales en los países del Sur, en la región andina, estudios recientes señalaron que el uso masivo de pesticidas químicos tenía una eficiencia limitada y un costo ambiental muy elevado (Sherwood 2009; Kroschel *et al.* 2012). En este contexto, tratamos de entender porque los agricultores de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo no desarrollaban estrategias de MIP.

Un uso masivo y costoso de pesticidas químicos

Tanto en San Luis como en Salcedo, los dirigentes que encontramos nos explicaron que, aunque los agricultores discutían de plagas, no solían colaborar para luchar en contra de ellas. En los últimos años, en el contexto liberal “modernizador”, mientras que los servicios públicos de apoyo a la agricultura reducían y que los pequeños comercios de insumos agrícolas llegaban al campo, las prácticas de los agricultores de nuestras dos zonas de estudio evolucionaron poco a poco. En la provincia de Chimborazo, el cambio ha sido incluso más radical. Mientras que hace 40 años el campo riobambeño era todavía uno de los principales graneros de la sierra ecuatoriana (Huttel, Zebrowski y Gondard 1999), a fines de la década de 1980, la renovación por parte del Estado del sistema de riego de Chambo-Guano, con el apoyo de la FAO y la Unión Europea, para promover el desarrollo de cultivos de hortalizas, transformó la periferia rural de Riobamba en una cuenca hortícola de casi 6.000 hectáreas.³ Por eso, hoy, miles de invernaderos de tomates y parcelas de coles, de zanahorias y de lechugas estructuran el paisaje agrario (imagen 1).

3 En realidad, el proceso de cambio se inició antes. Entre 1955 y 1980, la implementación en Ecuador de un modelo “desarrollista” (Deler 2007) favoreció la construcción de diferentes sistemas de riego bajo la autoridad de la Caja Nacional de Riego. Así, el sistema Chambo-Guano contribuyó a cambiar la dinámica productiva en el campo riobambeño en donde, durante los años 1960 y 1970, las hortalizas remplazaron los cereales poco a poco (Gondard 1976). Así, fue solamente a partir de la década de los 1980, cuando se realizó la renovación del Chambo-Guano, como lo precisamos en el texto, que los cambios agrarios en la periferia rural de Riobamba fueron más importantes y más rápidos.

Imagen 1. Entre invernaderos y huertos: visión del paisaje agrario en San Luis en 2016



Fuente: N. Rebaï.

Así, y aunque en el pasado, los agricultores de San Luis y de Salcedo realizaban rotaciones de cultivos y dejaban descansar sus parcelas de manera alternada para limitar el crecimiento y la diseminación de plagas, como se lo hacía en toda la región andina (Morlon 1992; Poinso 1999; 2006), los dirigentes entrevistados nos indicaron que, durante los últimos 30 años, el uso masivo de pesticidas se había generalizado en las fincas familiares. Mientras avanzamos en nuestro trabajo de campo, constatamos que los agricultores de San Luis y de Salcedo disponían de ingresos importantes para comprar regularmente insumos químicos. En el Chimborazo, aunque las fincas que estudiamos solo tenían una extensión promedio de 1,1 hectáreas, la producción intensiva de diferentes variedades de hortalizas y de frutas permitía a las familias campesinas sacar ingresos suficientes para poder invertir un promedio de 368 dólares mensuales en pesticidas químicos, o sea, el equivalente del salario mínimo legal en Ecuador en esta época. En la parte oriental del cantón Salcedo, la superficie promedio de las fincas, de 4,5 hectáreas, permitía a los agricultores tener parcelas de papas de 0,5 a 1 hectárea (imagen 2), mientras en la mayoría de las localidades rurales de la sierra ecuatoriana las extensiones dedicadas a los tubérculos en las unidades de producción campesinas quedan frecuentemente marginales (Huttel, Zebrowski y Gondard 1999; Rebaï 2012).

Imagen 2. Importancia de la papa: visión del paisaje agrario en la parte oriental del cantón Salcedo en 2015



Fuente: N. Rebañ.

Además, las explotaciones de Salcedo dedicaban el 60% de sus tierras a los pastos y forrajes que les permitían criar vacas y sacar ingresos lecheros relativamente importantes, sin contar los salarios extra-agrícolas y las ventas de animales menores (cerdos, borregos, cuyes), que terminaban de complementar los ingresos familiares globales. Así, en 2014, mientras que el precio promedio de la papa era de 17,3 dólares en la feria de Salcedo (MAGAP 2015), las explotaciones estudiadas pudieron sacar un ingreso promedio de 622,4 dólares mensuales. Es en este contexto que podían gastar entonces, según nuestros cálculos, un promedio de 470,5 dólares en pesticidas químicos para el cultivo de una hectárea de tubérculos.

Una falta patente de apoyo institucional

Entonces, cuando preguntamos a los agricultores de San Luis y de Salcedo porque no colaboraban para poner en marcha una estrategia de MIP con el fin de reducir sus costos de producción, varios de ellos nos contestaron que, ante todo, no sabrían cómo hacer, porque nunca los técnicos del MAGAP les habían capacitado para ello. Luego, la mayoría de ellos admitieron que de todas maneras les parecía “más fácil” comprar pesticidas químicos, aunque los vendedores les orientaban frecuentemente hacia productos inadaptados a sus necesidades por un desconocimiento compartido de las plagas.⁴ Los agricultores

⁴ En efecto, como lo observamos, y como lo ha mostrado un estudio reciente sobre productores de chocho en las provincias de Chimborazo y de Cotopaxi (Mina *et al.*, 2017), es muy frecuente que los agricultores no conozcan las plagas que

de San Luis y de Salcedo insistieron también sobre el hecho de que “no [había] interés” en reducir el uso de insumos químicos porque, en los mercados, los intermediarios no privilegiaban los productos agroecológicos y que querían, al contrario, vegetales “bien calibrados y sin defectos”.

Por su lado, los actores institucionales que entrevistamos nos explicaron que les parecía difícil que los agricultores cambien sus prácticas porque “[tenían] fe en los químicos”. A continuación, cuando abordamos con ellos la cuestión de la influencia de los intermediarios, quienes obligaban a los pequeños productores a usar pesticidas químicos, estos mismos actores nos respondieron que lo que importaba en prioridad a los campesinos era acceder al mercado para “sacar ingresos rápidamente”. Entonces, para ellos, la reducción del uso de insumos químicos o la valorización de producciones agro-ecológicas no era una prioridad, ya que el acceso libre de los agricultores familiares al mercado de Riobamba y a la feria de Salcedo constituía ya una forma de apoyo a las explotaciones campesinas. Así, constatamos que más allá de la falta de presencia de poderes públicos en el campo, la ausencia de intervención institucional en los mercados urbanos, en particular para limitar la influencia de los intermediarios sobre los campesinos, contribuía también al mantenimiento de sistemas productivos costosos y contaminantes en San Luis y en la parte oriental de Salcedo.

Una situación alimentaria y ambiental alarmante

En definitiva, la investigación que llevamos en San Luis y en la parte oriental de Salcedo indica que diferentes factores contribuyen a limitar la colaboración entre agricultores para el MIP. Pero, además, cabe precisar que los territorios que estudiamos se encuentran verdaderamente atrapados en “círculos viciosos de vulnerabilidad” (Becerra 2012, 4). En efecto, tanto en Chimborazo como en Cotopaxi, las compras de arroz, de fideos y de materias grasas (aceites y mantecas), pero además de maíz, de leguminosas y de tubérculos (en San Luis), de hortalizas y de frutas (en Salcedo), sobrepasan, según nuestras encuestas con los agricultores, 250 dólares mensuales por familia. Aunque la situación económica de las explotaciones parecía menos crítica que familias anteriormente estudiadas en la provincia del Azuay, en donde las remesas representaban la mayor parte de los ingresos regulares de los hogares rurales (Rebaï 2014; 2017), este dato indica sin embargo una vulnerabilidad alimentaria bastante grande.

En Salcedo, los años en que el precio de la papa está bajo, la cobertura de las necesidades alimentarias de las familias campesinas, obligadas de mantener sus gastos elevados en pesticidas químicos, puede ser gravemente afectada. En San Luis, mientras que los agricultores sacan regularmente créditos para construir nuevos invernaderos, o para comprar

afectan sus cultivos. Por consecuencia, eso lleva a los vendedores de insumos químicos, quienes son ante todo comerciantes y no expertos en plagas, a orientarles hacia la compra de cualquier pesticida.

muy pequeñas parcelas,⁵ el reembolso de sus deudas, además de sus compras de insumos químicos, puede afectar también su seguridad alimentaria y eso mientras que sus ingresos agrícolas pueden estar muy bajos si los intermediarios de Riobamba no les compran sus producciones. En resumen, se puede notar que en el contexto actual, una gran parte del esfuerzo producido por los agricultores que estudiamos en Chimborazo sirve para “alimentar” a los bancos privados y a los vendedores de insumos químicos.

Además, los dirigentes campesinos que entrevistamos en San Luis nos indicaron que a pesar del uso de pesticidas químicos, las plagas no habían parado de aumentar mientras que crecían también las superficies dedicadas a la horticultura en la zona. En este contexto, los agricultores familiares solo aumentaron la frecuencia de sus tratamientos químicos y la toxicidad de sus productos, empeorando constantemente la contaminación su territorio. En Salcedo, la gente que entrevistamos nos confirmó que el uso de plaguicidas era de la misma manera muy importante, pero además, en ambas zonas los agricultores nos señalaron que no tomaban precauciones particulares para protegerse al momento de manipular los pesticidas, lo que nos permitió acordar de los estudios llevados en la sierra ecuatoriana que señalaban los problemas de salud de los campesinos debidos a los contactos repetidos con los insumos químicos (Yanggen, Crissman y Espinosa 2003; Cole *et al.* 2007).

Se puede notar que en el contexto actual, una gran parte del esfuerzo producido por los agricultores que estudiamos en Chimborazo sirve para “alimentar” a los bancos privados y a los vendedores de insumos químicos.



Una población campesina desunida lleva a perspectivas de cooperación muy limitadas

Entonces, si se observa tanto en San Luis como en Salcedo, el deterioro del medioambiente y de la salud de los agricultores, en estas mismas zonas, la “modernización” de los sistemas productivos llevó al hecho de que se imponga el carácter individual de las prácticas campesinas. Así, constatamos que si los intermediarios mantenían los agricultores familiares en una situación de subordinación, ninguna iniciativa colectiva parecía surgir para cambiar eso. Al tratar de entender porque los campesinos no se organizaban para vender colectivamente sus producciones y para pedir a los poderes públicos inter-

5 Cabe subrayar que cinco de los seis agricultores que estudiamos habían comprado al menos un terreno entre 2002 y 2013 y que habían gastado, por ello, 14.500 dólares para lotes cuya extensión promedio era de 2.122 m². Además, cuatro de ellos debían rembolsar entre 700 y 1.550 dólares sobre periodos que iban de 10 a 15 meses.

venciones a su favor, los agricultores de San Luis y de Salcedo nos contestaron que la unión para la comercialización de los productos no presentaba una ventaja real porque, con el acceso libre al mercado de Riobamba y a la feria de Salcedo, no eran obligados a entrar en una dinámica colectiva que tendría sus limitaciones (reuniones, negociaciones, pérdida de capacidad de iniciativa colectiva, etc.). Sin embargo, y es una paradoja, ellos nos señalaron también que sus ingresos agrícolas eran insuficientes porque los intermediarios, además de imponer el uso de pesticidas, fijaban precios muy bajos, lo que no les permitía sacar grandes beneficios.

Nos parece importante subrayar que la ausencia de apoyos públicos en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo ha sido determinante.



Desde entonces, nos parece importante subrayar que la ausencia de apoyos públicos en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo ha sido determinante porque, además de favorecer la generalización de prácticas agrícolas costosas y contaminantes, por ella, la población campesina de estas zonas no se ha beneficiado de intervenciones que le hubieran permitido fortalecer sus capacidades de organización y de acción colectiva. Eso hubiera permitido, por ejemplo, que los agricultores se movilizan para no sufrir de la ley de los intermediarios, que se asocien para el transporte de sus producciones y así reducir sus costos⁶ y, sobre todo, para que adquieran y compartan conocimientos técnicos para desarrollar

sistemas de producción menos costosos y contaminantes. Pero, al final, el hecho de que las elecciones individuales se hayan impuesto en las prácticas agrícolas en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo, deja pensar que la resolución de problemas para la cual la cooperación entre agricultores sería indispensable podría ser muy difícil a medio plazo.

Promover y fortalecer los colectivos campesinos para el desarrollo sostenible de los territorios rurales

Dada la situación económica y alimentaria crítica de los agricultores familiares de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo, y debido a los altos costos ambientales que resultan de la existencia de sistemas productivos “modernos”, pensamos que el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad entre agricultores familiares podría

6 En San Luis, entre los seis agricultores que encuestamos, solo uno tenía su propio vehículo. Los otros solían gastar un promedio de 125 dólares mensuales para llevar sus productos a Riobamba mediante la contratación de transportistas. Si las entrevistas que realizamos confirmaron que esta situación correspondía a la tendencia general en la localidad, el tema del transporte nos confirmó así que las estrategias individuales que se desarrollaron en nuestra zona de estudio implicaban costos financieros muy elevados.

tener efectos positivos y ser la base de nuevos proyectos de territorios rurales sostenibles. Por eso, consideramos que para cambiar la situación de los territorios estudiados y de muchos otros en la sierra ecuatoriana, se debería hacer la promoción de los colectivos campesinos, lo que permitiría reubicar a los agricultores familiares en el centro de las dinámicas que atraviesan el campo, en una verdadera perspectiva de “nueva ruralidad” (Rosas-Baños 2013).

Colectivos campesinos para reforzar las capacidades de los agricultores familiares

En los últimos años, la noción de empoderamiento – entendida como el aumento del poder y de la autonomía de las personas y de los grupos sociales que se encuentran en situación de discriminación y de dominación (Friedman 1992; Bacqué y Biewener 2013) – ha sido el objeto de un uso muy importante en el marco de planes y de políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión, en particular en los países en desarrollo (Bebbington *et al.* 2007; Calvès 2009). Ante todo, el empoderamiento implica que los grupos sociales adquieran habilidades para organizarse mejor a fin de innovar y de participar a las tomas de decisión que les conciernen. Así, la idea de empoderamiento sostiene implícitamente la construcción de un capital social – definido como la “red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados”⁷ (Bourdieu 1980, 2) – que permita a los grupos adquirir capacidades de poner en marcha iniciativas a fin de mejorar la situación en la cual se encuentran (Sen 1999).

Volviendo a nuestro estudio de caso, pensamos que la formación o que el reforzamiento de colectivos – entendidos como una noción genérica que hace referencia a un grupo de individuos quienes cooperan a fin de llevar una acción común para defender, organizar o valorizar su territorio (Raimbert y Rebaï 2017) – permitiría consolidar el capital social de los grupos campesinos y contribuir así a su empoderamiento y al mejoramiento de sus prácticas agrícolas. De hecho, varios estudios llevados en América Latina (Tonneau *et al.* 2009; Raimbert y Rebaï 2017), mostraron que los campesinos que participaban a un mismo proyecto y que integraban estructuras colectivas, formales o informales, y de tamaños variables, tenían más facilidades para intercambiar y tomar decisiones a favor de la evolución de sus prácticas agrícolas y de sus territorios.

En lo que concierna la sierra ecuatoriana, y más precisamente la provincia del Azuay, la formación de asociaciones de productores agroecológicos a partir del inicio de los años 2000 facilitó la integración comercial de centenas de agricultores (Rebaï 2010). Pero, más allá de compartir gastos de transporte para ir al mercado, lo original fue que, en el campo, los agricultores tomaron la iniciativa de organizarse en pequeños grupos informales de 6 o 10 personas a fin de realizar tareas colectivas en sus fincas y de compartir informaciones

7 “[...] réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance”.

acerca de sus cultivos o de técnicas originales de trabajo que les garantizaban producciones e ingresos regulares (Rebaï 2014).

Estrategias para reforzar los colectivos campesinos y favorecer cambios de prácticas en el campo

Así, lo interesante en el caso del Azuay fue constatar que la intervención de instituciones públicas a favor de la construcción de colectivos formales fue un elemento clave para que los agricultores familiares adquirieran conocimientos acerca de la agroecología. Pero, además, fue un factor decisivo para que construyan un capital social que les llevó a organizarse informalmente con el fin de aplicar estos nuevos conocimientos y de cambiar colectivamente sus prácticas agrícolas mediante la realización de trabajos comunes. Entonces, mientras que los dirigentes y que los campesinos que encontramos en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo deploraban globalmente la ausencia de relación con los servicios del Estado, intervenciones más frecuentes en estas dos zonas permitirían reforzar la aptitud de los agricultores a colaborar entre ellos. Eso podría llevar a la formación de colectivos de trabajo para implementar estrategias de MIP, sin que la propiedad de los medios de producción, en particular la de la tierra, sea un límite para la coordinación de los agricultores y la innovación colectiva. En este contexto, la presencia de investigadores, en una lógica de “investigación-acción”, permitiría apoyar a las instituciones públicas y a los agricultores a definir mejor los problemas de las unidades de producción y las estrategias más pertinentes que se podrían utilizar para resolverlos, como se lo ha visto en diferentes países en desarrollo (Tonneau, Piraux y Coudel 2011; d’Aquino y Bah 2014; Perroton *et al.* 2017). Así, se podría redefinir la relación entre el campesinado y los poderes públicos que ha desaparecido durante las últimas décadas de políticas de “modernización” del sector agrícola nacional y crear las condiciones de una verdadera democracia participativa en el campo.

Desde un punto de vista más técnico, la organización de talleres parecidos a los *farmers field schools* (Van den Berg y Jiggins 2007) podría llevar al hecho de que la ayuda mutua y la coordinación entre agricultores se vuelvan sistemáticas y, entonces, que la formación de colectivos de trabajos se concrete más frecuentemente en el campo. En este punto, la realización en los Andes ecuatorianos de escuelas de campo focalizadas en el aprendizaje del MIP tuvieron resultados muy interesantes y señalaron así que el desarrollo de nuevos sistemas agrícolas sostenibles debía pasar en prioridad por la movilización de los grupos campesinos (Sherwood, Shut y Leeuwis 2012).

Conclusión

El análisis en este texto ilustra hasta qué punto el proyecto “modernizador” del sector agrícola en Ecuador afectó y sigue afectando los territorios rurales en la región andina. Si al llegar en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo, los invernaderos o las parcelas de tubérculos que observamos dejaban imaginar territorios rurales dinámicos, en realidad, por el medio de las entrevistas y de las encuestas que llevamos, pudimos caracterizar la situación de vulnerabilidad económica, alimentaria y ambiental de los agricultores familiares en estas mismas zonas. Observamos que si los agricultores de San Luis y de la parte oriental del cantón Salcedo pudieron desarrollar y mantener cultivos comerciales a lo largo de las últimas décadas, tuvieron que recurrir a compras masivas y costosas de insumos químicos para eso.

Nuestro estudio señala que desde hace 30 años, la falta de intervención pública en el medio rural ha llevado al hecho de que los agricultores desarrollen estrategias individuales y que se vuelvan dependientes de comerciantes de insumos químicos para tratar del problema de las plagas en sus explotaciones. De la misma manera, nos dimos cuenta de que en los mercados urbanos el carácter limitado de la acción política había contribuido al hecho de que los intermediarios puedan obligar a los agricultores familiares a usar pesticidas químicos. Así, desde San Luis y la parte oriental del Cantón Salcedo, constatamos que la ideología liberal se había materializado al provocar la dominación de los campesinos por actores privados poco concernidos por la cuestión ambiental. En realidad, observamos en estas zonas lo que Chonchol (1996) definió como la “modernización conservadora” del campo latinoamericano, caracterizado desde la época colonial por la explotación capitalista de los recursos naturales y la subyugación del campesinado. Otra ilustración de la situación crítica de los territorios en San Luis y en la parte oriental del cantón Salcedo es que en la actualidad los agricultores deben aprovisionarse en el mercado para alimentarse, pero con el riesgo de disponer de pocos recursos económicos debido al hecho de que sacan frecuentemente beneficios reducidos por tener costos de producción elevados.

Entonces, si las plagas constituyen un problema importante para los agricultores que estudiamos, constatamos que por las características actuales de sus territorios no parecía posible que desarrollen estrategias de MIP a medio plazo. De hecho, nuestro estudio puso de relieve la necesidad de repensar el marco de la acción pública y las estrategias de desarrollo rural en las provincias andinas del Ecuador. Así, desde nuestro punto de vista, promover o fortalecer los colectivos campesinos debería ser una prioridad. En efecto, con los apoyos de instituciones públicas y de investigadores, los colectivos campesinos podrían contribuir a la adopción de prácticas innovadoras para el mejoramiento de los sistemas productivos y la protección del medio ambiente, además de facilitar la participación de los agricultores familiares en la gobernanza de sus territorios.

Obviamente, todo eso podría tomar bastante tiempo. Se sabe que muchos factores como las migraciones campesinas (Rebañ 2014; 2017), la proletarianización de la población rural (Mar-

tínez 2015; 2017), o los conflictos entre campesinos, debido a la coexistencia a nivel local de grupos políticos o religiosos distintos, podrían alterar el capital social de los colectivos y limitar entonces la colaboración entre agricultores. Sin embargo, promover nuevos sistemas de cultivos diversificados que limitarían naturalmente el crecimiento y la diseminación de plagas y proporcionarían mayores niveles de seguridad alimentaria para los agricultores (Lewis *et al.* 1997; Oyarzun *et al.* 2013), es una prioridad para los Andes ecuatorianos, y aun más, en un contexto de cambio global (Perez *et al.*, 2010; Rebaudo y Dangles 2015).

Por eso, creemos que las autoridades públicas deberían favorecer el empoderamiento de los colectivos campesinos en esta región –y en el resto del Ecuador– con el fin de poner en marcha proyectos de territorios rurales sostenibles, que permitirían satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales y de valorizar sus prácticas socio-culturales sin afectar el medioambiente (Raimbert y Rebaï 2017). De hecho, pensamos que se podría alcanzar este objetivo mientras que en las tres últimas décadas, en los Andes ecuatorianos, las movilizaciones campesinas a favor de un cambio de modelo de desarrollo rural indicaron la capacidad de organización de los agricultores familiares (Giunta 2014). Así, al apoyar a los colectivos campesinos, se podría poner en marcha un verdadero modelo revolucionario para el campo y acercarse más de los objetivos del “Buen Vivir”.

Bibliografía

- Alberti, Giorgio, y Enrique Mayer. 1974 *Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos*. LIMA: IEP.
- Aquino, Patrick d', y Alassane Bah. 2014. “Multi-level participatory design of land use policies in African drylands: A method to embed adaptability skills of drylands societies in a policy framework”. *Journal of Environmental Management* 132: 2017-219.
- Bacqué, Marie-Hélène, y Carole Biewener. 2013. *L'empowerment, une pratique émancipatrice*. París: La Découverte.
- Bebbington, Anthony, David Lewis, Simon Batterbury, Elizabeth Olson y Shameem Siddiqi. 2007. “Of Texts and Practices: Empowerment and organizational Cultures in World bank-funded rural Development Programmes”. *Journal of Development Studies* 43 (4): 597-621.
- Becerra, Sylvia. 2012. “Vulnérabilité, risques et environnement: l'itinéraire chaotique d'un paradigme sociologique contemporain”. *VertigO* 12 (1). <http://vertigo.revues.org/11988>
- Bourdieu, Pierre. 1980. “Le capital social. Notes provisoires”. *Actes de la recherche en sciences sociales* 31 (1): 2-3.
- Calvès, Anne-Emmanuèle. 2009. “Empowerment: généalogie d'un concept clé du discours contemporain sur le développement”. *Revue Tiers Monde* 200 (4): 735-749.

- Chonchol, Jacques. 1996. *Sistemas agrarios en América Latina: de la etapa prehispánica a la modernización conservadora*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Clark, Patrick. 2017. "Neo-developmental and 'via campesina' for rural development: Unreconciled projects in Ecuador's Citizen's revolution". *Journal of Agrarian Change* 17 (2): 348-364.
- Cole, Donald, Stephen Sherwood, Myriam Paredes, Luz Helena Sanin, Charles Crissman, Patricio Espinosa y Fabián Muñoz. 2007. "Reducing Pesticide Exposure and Associated Neurotoxic Burden in an Ecuadorian Small Farm Population". *International Journal of Occupational and Environmental Health* 13 (3): 281-289.
- Deler, Jean-Paul. 2007. *Ecuador: del espacio al estado nacional*. Quito: UASB/IFEA/CEN.
- Ferraro, Emilia. 2004. *Reciprocidad, don y deuda. Formas y relaciones de intercambios en los Andes de Ecuador: la comunidad de Pesillo*. Quito: FLACSO-Ecuador/Abya Yala.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Giunta, Isabella. 2014. "Food sovereignty in Ecuador: peasant struggles and the challenge of institutionalization". *Journal of Peasant Studies* 41 (6): 1201-1224.
- Gondard, Pierre. 1976. "Zonas agrícolas de la sierra". *Boletín del Instituto Panamericano de Geografía e Historia – Sección nacional del Ecuador* 9-10: 1-7.
- INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 1974. *III Censo de Población*. Quito: INEC.
- _____. 2010. *VII Censo de Población*. Quito: INEC.
- Huttel, Charles, Claude Zebrowski, y Pierre Gondard. 1999. *Paisajes agrarios del Ecuador*. Quito: IRD/IFEA/PUCE.
- Korovkin, Tanya. 2005. "Creating a Social Wasteland? Non-traditional Agricultural Exports and Rural Poverty". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 79: 47-67. DOI: <http://doi.org/10.18352/erlacs.9662>
- Kroschel, Jürgen, Norma Mujica, Jesús Alcazar, Verónica Canedo, y Octavio Zegarra. 2012. "Developing integrated pest management for potato: experiences and lessons from two distinct potato production systems of Peru". En *Sustainable Potato Production: Global Case Studies*, editado por Zongqi He, Robert Larkin y Wayne Honeycutt, 419-450. Berlín: Springer.
- Lewis, Joe, Joop van Lenteren, Sharad Phatak y James Tumlinson. 1997. "A total system approach to sustainable pest management". *PNAS* 94 (23): 12243-12248.
- Lyle, Henry. 2017. "Volver a Nuestras Raíces: the reemergence and Adaotation of Traditional Forms of Andean Reciprocity". *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 22 (3): 419-437.
- Lyle, Henry, y Eric Smith. 2014. "The reputational and social network benefits of prosociality in an Andean community". *PNAS* 111 (13): 4820-4825.
- MAGAP (Ministerio de Agricultura). 2015. *Reporte de precios por mercado y por producto*. Información no publicada.

- Martínez, Luciano. 2017. "Agribusiness, Peasant Agriculture and Labour Markets: Ecuador in Comparative perspective". *Journal of Agrarian Change* 17 (4): 680-693.
- _____. 2015. *Asalariados rurales en territorios del agronegocio: flores y brócoli en Cotopaxi*. Quito: FLACSO-Ecuador.
- _____. 2002. *Economía política de las comunidades indígenas*. Quito: ILDIS/Abya-Yala/OXFAM/FLACSO-Ecuador.
- Martínez Godoy, Diego. 2015. "Entre economía social y economía popular: confusiones y desaciertos políticos en el Ecuador del Buen Vivir". *Eutopía* 7: 147-161.
- Mayer, Enrique. 2002. *The Articulated Peasant: Household Economies in the Andes*. Boulder: Westview Press.
- Morlon, Pierre. 1992. *Comprendre l'agriculture paysanne dans les Andes centrales. Pérou-Bolivie*. París: INRA.
- Oyarzun, Pedro, Ross Borja, Stephen Sherwood, Vincente Parra. 2013. "Making sense of agrobiodiversity, diet, and intensification of smallholder family farming in the Highland Andes of Ecuador". *Ecology of Food and Nutrition* 52 (6): 515-41.
- Perez, Carlos, Claire Nicklin, Olivier Dangles, Steven Vanek, Stephen Sherwood, Stephen Halloy, Karen Garrett, Gregory Forbes, 2010. "Climate Change in the High Andes: implications and adaptation strategies for small-scale farmers". *The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability* 6: 71-88.
- Perroton, Arthur, Michel de Garine-Wichatitsky, Hugo Valls-Fox, Christophe Le Page. 2017. "My cattle and your park: codesigning a role-playing game with rural communities to promote multistakeholder dialogue at the edge of protected areas". *Ecology and Society* 22 (1). <https://doi.org/10.5751/ES-08962-220135>
- Poinsot, Yves. 2006. "Les enjeux géographiques d'un impératif agronomique majeur: le repos du sol". *Annales de géographie* 648: 154-173.
- _____. 1999. "L'incidence géographique des risques agricoles. Une formulation théorique à partir de cas andins et africains". *Revue de Géographie Alpine* 87 (3): 31-50.
- Raimbert Céline, y Nasser Rebaï. 2017. "Collectifs et développement durable des territoires ruraux en Amérique latine". *EchoGéo* 42 : 1-25. <http://journals.openedition.org/echogeo/15131>
- Rebaï, Nasser. 2017. "Vulnerabilidad de la agricultura familiar y de los territorios rurales en los Andes ecuatorianos. Un análisis desde la provincia del Azuay". *Ecuador Debate* 100: 167-177.
- _____. 2014. "Mutaciones de la agricultura familiar y retos para el desarrollo territorial en los Andes del Ecuador". *Ecuador Debate* 93: 123-140.
- _____. 2012. *A chacun son chemin. Une analyse de la redéfinition des stratégies paysannes et des dynamiques territoriales dans le contexte migratoire des Andes équatoriennes*. Tesis de Doctorado en Geografía, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- _____. 2010. "Agricultura comercial y resistencia territorial: un análisis de las relaciones campo-ciudad en la provincia del Azuay". *Eutopía* 1: 69-81.

- Rebaï, Nasser, François Rebaudo, Julien Rebotier, y Olivier Dangles. 2016. “Logiques paysannes, production agricole et lutte contre les ravageurs des cultures à Salcedo dans les Andes équatoriennes. Stratégies individuelles ou collectives ?”. *VertigO* 16 (3): 22. <http://journals.openedition.org/vertigo/18240>
- Rebaudo, François, y Olivier Dangles. 2015. “Adaptive Management in Crop Pest Control in the Face of Climate Variability: an Agent-Based Model Approach”. *Ecology and Society* 20 (2): 13. <https://www.ecologyandsociety.org/vol20/iss2/art18/>
- _____. 2011. “Coupled information diffusion–pest dynamics models predict delayed benefits of farmer cooperation in pest management programs”. *PLOS Computational Biology* 7 (10): 10. <http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1002222>
- Rosas-Baños, Mara. 2013. “Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: Economía Ambiental y Economía Ecológica”. *Polis* 34: 15. <http://polis.revues.org/8846>
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sherwood, Stephen. 2009. *Learning from Carchi: agricultural modernization and the production of decline*. Wageningen: Wageningen University.
- Sherwood, Stephen, y Myriam Paredes. 2014. “Dynamics of Perpetuation. The Politics of Keeping Highly Toxic Pesticides on the Market in Ecuador”. *Nature and Culture* 9 (1): 21-44.
- Sherwood, Stephen, Marc Schut, Cees Leeuwis. 2012. “Learning in the Social Wild: Encounters between Farmer Field Schools and Agricultural Science and Development in Ecuador”. En *Adaptive Collaborative Approaches in Natural Resources Governance: Rethinking Participation, Learning and Innovation*, editado por Hemant Ojha, Andy Hall, Rasheed Sulaiman, 102-137. Londres: Routledge.
- Tonneau, Jean-Philippe, Marc Piraux y Emilie Coudel. 2011. “Quelles innovations territoriales dans des territoires marginalisés au Nordeste du Brésil ?”. *Cahiers Agricultures* 20 (3): 235-240.
- Tonneau, Jean-Philippe, Marc Piraux, Emilie Coudel, y Sergio Guilherme de Azevedo. 2009. “Evaluation du développement territorial comme processus d’innovation et d’institutionnalisation: le cas du Territoire du Alto Sertão do Piauí e Pernambuco au Nordeste du Brésil”. *VertigO* 9 (3): <https://vertigo.revues.org/9207>
- Van den Berg, Henk, y Janice Jiggins. 2007. “Investing in Farmers – The Impacts of Farmer Field Schools in Relation to Integrated Pest Management”. *World Development* 35 (4): 663-686.
- Walsh-Dilley, Marygold. 2017. “Theorizing Reciprocity: Andean Cooperation and the reproduction of Community in Highland Bolivia”. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 22 (3): 514-535.
- Yanggen, David, Charles Crissman y Patricio Espinosa, eds. 2003. *Los plaguicidas: impactos en producción, salud y medio ambiente en Carchi, Ecuador*. Quito: CIP/INIAP/Abya-Yala.



Estudio de caso

Contracercar, producir y resistir. La defensa de los bienes comunes en dos comunidades campesinas (Argentina)

Counter-enclose, produce and resist. The defense of the common goods in two peasant communities (Argentina)

Andrea Gómez Herrera*, Cristián Jara**, María del Huerto Díaz Habra***y Ana Villalba****

Fecha de recepción: 3 de febrero de 2018
Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3171>

Resumen

Las diversas manifestaciones de resistencia frente al despojo de bienes comunes son la contracara de los cercamientos capitalistas. Estas expresiones de acciones colectivas abarcan una amplia batería de estrategias por parte de las comunidades rurales. Muchas de estas manifestaciones podrían ser interpretadas como contracercamientos (físicos o institucionales). En este marco, nos preguntamos cuáles son las modalidades que asumen las luchas campesinas que establecen nuevas fronteras para el control de bienes comunes en Santiago del Estero (noroeste de Argentina). Para responder a este interrogante abordamos dos casos: el diseño de una reserva campesina en Ojo de Agua y el encierro ganadero comunitario de El Hoyo. Los orígenes de ambas experiencias están ligados a los conflictos por la tierra y las intervenciones de agentes estatales. La argumentación se estructura a partir de los datos construidos durante el trabajo de campo que incluyó registros de observación y la realización de entrevistas en profundidad. Esto permitió explorar el repertorio de acción colectiva, de readecuación de legislaciones vigentes y re-funcionalización de recursos emanados de programas estatales. Asimismo, presentamos evidencias de cómo operan las políticas cotidianas en torno al control de los bienes comunes y las tensiones que atraviesan a estos procesos.

Palabras clave: bienes comunes; contracercamiento; encierro ganadero; reserva campesina; Santiago del Estero

* Argentina. Licenciada en Sociología, Doctoranda en Ciencias Agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires. Becaria Doctoral del CONICET. Correo: andreagh90@gmail.com

** Argentina. Doctor en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán. Investigador Asistente del CONICET. Correo: cristianjara_cl@hotmail.com

*** Argentina. Licenciada en Relaciones Internacionales, Doctoranda en Ciencias Agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires. Becaria Doctoral del CONICET. Correo: mariadelhuertodh@gmail.com

**** Argentina. Licenciada en Sociología, Doctoranda en Ciencias Agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires. Becaria Doctoral del CONICET. Correo: ani.villalba89@gmail.com

Abstract

The various manifestations of resistance against the plundering of common goods are the other side of the capitalist enclosures. These expressions of collective actions encompass a broad battery of strategies on the part of rural communities. Many of these manifestations could be interpreted as counter-enclosure (physical or institutional). In this context, we ask ourselves what are the modalities that assume peasant struggles which set new borders for the control of common goods in Santiago del Estero (NW Argentina). To answer this question, we address two cases: the design of a peasant reserve in Ojo de Agua and the community livestock enclosure of El Hoyo. The origins of both experiences are linked to conflicts over land and the interventions of state agents. The argumentation is structured from the data constructed during the fieldwork that included observation records and conducting in-depth interviews. This allowed to explore the repertoire of collective action, of readjustment of current legislation and re-functionalization of resources arising from state programs. Likewise, we present evidence of how everyday policies operate around control of the Commons and the tensions that go through these processes.

Key words: counter-enclosure; common goods; peasant reserve; livestock enclosure; Santiago del Estero

Introducción

Una de las formas de territorialización del capital ha sido el cercamiento de tierras y recursos comunales. Los análisis de Karl Marx sobre la acumulación primitiva y Rosa Luxemburgo sobre la lucha contra las economías naturales, como mecanismo inherente a la reproducción de las relaciones capitalistas a escala mundial, dieron cuenta de ello. Harvey (2004), bajo el concepto de acumulación por desposesión, advirtió sobre las modalidades contemporáneas de privatización y mercantilización de bienes públicos y comunes. Los nuevos cercamientos (Midnight Notes Collective 2012) apuntan a extender y a refundar la propiedad privada en espacios y ámbitos que hasta entonces habían quedado fuera del alcance de la explotación capitalista. Una de las aristas de estos procesos es el aumento de la presión sobre los recursos naturales para privatizarlos y especular con su escasez (Borras y Franco 2010).

Las diversas manifestaciones de insubordinación y resistencia frente al despojo de bienes comunes son la contracara de los cercamientos capitalistas. Estas expresiones de acciones colectivas abarcan una amplia batería de estrategias por parte de los distintos grupos sociales en lucha. Muchos de estas manifestaciones podrían ser interpretadas como contracercamientos, término empleado por Borras y Franco (2012) para designar los modos en que los pueblos de trabajadores buscan resistir a los procesos políticos que perpetúan el estado inequitativo de las cosas o tienden a la reconcentración de la tenencia y el control de la tierra.

Retomando lo planteado por Peluso y Lund (2011), que destacan el rol de campesinos en los establecimientos de nuevas fronteras por el control de la tierra, advertimos la ne-

cesidad de extender el uso del término contracercamiento para referenciar las prácticas de control de bienes comunes mediante el establecimiento de cercos físicos o institucionales alrededor de ciertos recursos para asegurar el acceso de determinada población.

La reinscripción de América Latina en el esquema de la división internacional de trabajo, como oferente de territorios para la extracción de recursos naturales (Soane 2012), ha dado un nuevo impulso a esta ola de cercamientos de bienes comunes que se encontraban, en muchos casos, bajo control exclusivo de poblaciones campesinas e indígenas. En Argentina, las formas de penetración del capitalismo en los territorios son diferenciales. Mientras que en la región pampeana el desarrollo de las relaciones capitalistas alcanzó a casi la totalidad de los sectores productivos estableciendo la preminencia de la propiedad privada, en las regiones extrapampeanas se observa que el desarrollo capitalista convive con formas de propiedad y producción no necesariamente capitalista, lo cual imprimió otras dinámicas a la estructura agraria que intentaremos dar cuenta a lo largo del artículo.

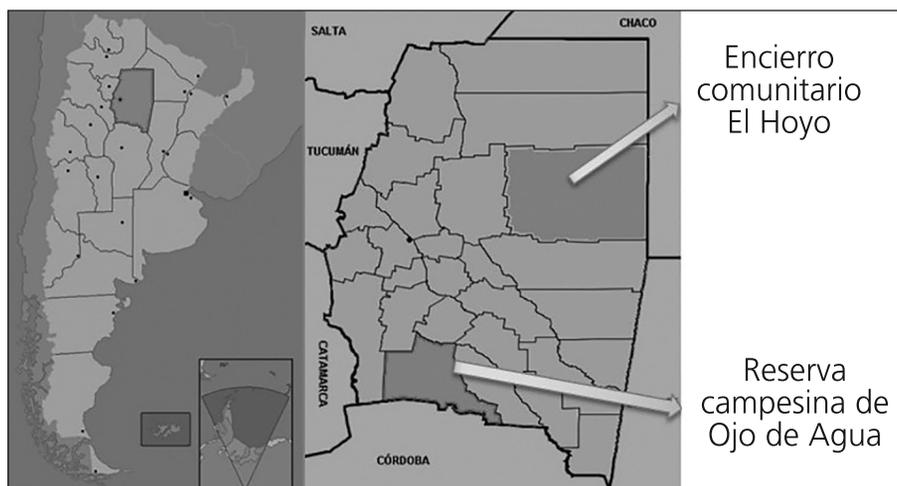
En Santiago del Estero, una provincia del noroeste del país, los cercamientos de las tierras rurales favorecieron la concentración y el avance sobre las áreas de ocupación campesina e indígena. Esto condujo a la agudización de la conflictividad rural, no siempre vinculadas a la expansión de la frontera agro-ganadera y forestal, sino también a la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la ausencia de resistencia organizada en muchas comunidades, condiciones aprovechadas por algunos abogados, escribanos y rentistas para el negociado de tierras (Díaz Habra 2016). En este marco, nos preguntamos cuáles son las modalidades que asumen las luchas por la defensa y el control de bienes comunes en Santiago del Estero ante los procesos contemporáneos de privatización y mercantilización. Para responder a este interrogante abordamos dos casos: el diseño de una reserva campesina en Ojo de Aguay el encierro ganadero y comunitario de El Hoyo (mapa 1).

La reserva campesina de Ojo de Agua constituye una experiencia encaminada a la construcción de un espacio protegido sobre los recursos naturales y una estrategia para defender los derechos a la tierra de las familias rurales poseedoras con ánimo de dueño. El proyecto, iniciado en 2012, prevé actividades productivas de bajo impacto y la valorización de la riqueza del territorio (bosques nativos, paisaje, arte rupestre, fuentes de agua dulce y forma de producción campesinas). Comprende una superficie de 25 mil hectáreas donde habitan 200 familias.

En Santiago del Estero, una provincia del noroeste del país, los cercamientos de las tierras rurales favorecieron la concentración y el avance sobre las áreas de ocupación campesina e indígena.



Mapa 1. Ubicación de los casos en el mapa de Argentina y de Santiago del Estero



Fuente: elaboración propia.

Esta experiencia constituye una respuesta a un conflicto de tierra que tuvo su momento de máxima tensión en 2003 cuando un empresario cerró el acceso a fuente de agua a los campesinos de la zona. Si bien en Argentina no existe una figura jurídica denominada reserva campesina, este diseño surge de un acuerdo entre diferentes instituciones (como el Registro de Poseedores, la Secretaría de Derechos Humanos, la Mesa de Tierra y la Dirección de Bosque) apelando al marco normativo de la Ley Nacional de protección de los Bosques Nativos 26.331. Las actividades productivas que se realizan en la reserva son ganadería, extracción forestal y se ofrecen servicios turísticos. Asimismo, es posible identificar bienes que controlan de manera comunal como las áreas de pastoreos, caminos, cisterna y maquinaria agrícola.

Por su parte, el encierro ganadero de El Hoyo es una experiencia que se sitúa en el departamento Moreno (a 170 km de la ciudad capital de Santiago del Estero, de difícil acceso por falta de infraestructura vial). Allí se presenta un modo de organización de la producción basado en la posesión comunitaria de la tierra y la fuerza de trabajo colectiva. Cuarenta familias rurales poseedoras con ánimo de dueño que residen en este paraje han conformado tres grupos, cuyo número de miembros oscila entre 11 a 13 socios para emprender de manera asociativa la cría de ganado bovino orientada a su venta en destete. La significatividad del caso reside en la redefinición de los usos de los recursos comunes en una superficie de 10 mil hectáreas que surge para frenar los intentos de desalojos impulsados por empresarios. A diferencia de la Reserva, en la que la delimitación de los cercos familiares intenta encuadrarse en un ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que se observa en el encierro ganadero de El Hoyo es que los campesinos lograron avanzar de forma comunal en el alambrado perimetral total.

Teniendo en cuenta las particularidades de ambas experiencias, consideramos que su análisis conjunto se torna significativo al menos por dos aspectos. En primer lugar, los orígenes de ambas experiencias están ligados a los conflictos por la tenencia de la tierra y las intervenciones de agentes estatales en parajes cuyos poseedores¹ hacen uso compartido de bienes naturales como la tierra, el monte y el agua para el desarrollo de sus prácticas productivas. En segundo lugar, estas iniciativas resultan del despliegue de estrategias orientadas a establecer cercados materiales y simbólicos del patrimonio común de estas poblaciones rurales para frenar el despojo.

La argumentación se estructura a partir de los datos construidos durante el trabajo de campo de investigaciones en curso. Por lo tanto, la recolección y análisis de información incluyó, registros de observación y la realización de entrevistas en profundidad a pobladores rurales, extensionistas y funcionarios públicos que intervinieron en ambas experiencias. En primera instancia abordamos los elementos que tornan inteligible la problemática de la conflictividad agraria ligada a la lucha por la tierra en Santiago del Estero. Seguidamente, identificamos elementos del contexto en términos de hostilidades y oportunidades en las que se engendran las prácticas organizativas de los pobladores rurales en torno a los bienes comunes. Después, centramos el análisis en el repertorio de la acción colectiva para la readecuación de legislaciones vigentes y re-funcionalización de recursos emanados de programas estatales a partir de los vínculos entre pobladores rurales y técnicos estatales. Por último, presentamos evidencias de cómo operan las políticas cotidianas en torno al control de los bienes comunes en la conformación de la reserva campesina y el encierro ganadero comunitario.

Conflictividad agraria en Santiago del Estero: entre hostilidades y oportunidades

Existe una confluencia de elementos, de carácter estructural y coyuntural, que configuraron el contexto en el que tiene lugar la conformación de la Reserva Campesina de Ojo de Agua y el encierro ganadero comunitario en el departamento Moreno. Entre ellos se destacan los siguientes: 1) la conflictividad por la tenencia de la tierra ligada a la estructura agraria; 2) las particularidades de los territorios donde residen las familias en términos de calidad de los servicios ecosistémicos, condiciones agroecológicas y dotación de infraestructura (vial, de servicios y social); 3) el surgimiento de organizaciones de base campesina en defensa del derecho a la tierra; y 4) la presencia de agentes estatales, que participaron en el diseño y ejecución de estas iniciativas de contracercamiento.

1 En el artículo N°1909 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Argentina reconoce que existe posesión “cuando una persona por sí misma o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”. Asimismo, en el artículo N°1928 reconoce como actos posesorios “la cultura, la percepción de frutos, el amojonamiento o impresión de signos materiales, mejoras, exclusión de terceros y en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga”.

Con respecto a la estructura agraria de Santiago del Estero, está caracterizada por una acentuada desigualdad en la distribución de la tierra, una fuerte presencia de explotaciones agropecuarias (EAPs) sin límites definidos² y la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra (Paz y Jara 2014). Según los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del año 2002, el 75,89% de la superficie total de tierras se encuentra bajo el control de las explotaciones agropecuarias mayores a 1000 hectáreas, que representan el 9,79 % del total provincial, lo que sería un claro indicio de concentración de las tierras rurales. A su vez, las explotaciones sin delimitación precisa representan el 51,70% del total de EAPs en la provincia durante el año 2002. Generalmente, estas últimas son tierras privadas, indivisas o bienes fiscales, ocupadas en muchos casos por campesinos e indígenas, cuyas formas de producción están basadas principalmente en el desarrollo de la ganadería extensiva, donde la cría a monte abierto es una práctica productiva extendida de estos sujetos que hacen un uso compartido de la tierra que poseen (Paz y Jara 2014). La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, como en gran parte de las provincias del noroeste Argentino, se refleja en situaciones como la ausencia de títulos que permitan acreditar la propiedad de la tierra por parte de los ocupantes (Paz 2013).

Las disputas en torno al control de la tierra se agudizaron con procesos que favorecieron la concentración de tierra. Entre ellos, la expansión de la frontera agro-ganadera y forestal (ligada a la territorialización del agronegocio en Santiago del Estero) se llevó a cabo mediante diversos mecanismos que incluyen la adquisición de tierras por parte de empresarios e inversionistas (muchos de ellos provenientes de provincias vecinas) en el mercado inmobiliario y su incorporación a la producción capitalista, lo que implica cambios en el uso del suelo mediante la transgresión de los permisos de desmonte. También la compra y venta en el mercado inmobiliario de tierras ocupadas por poblaciones con derechos posesorios sobre ella y la apropiación ilícita de tierras fiscales y comunidades campesinas mediante la emisión de títulos de propiedad falsos.

No obstante, advertimos que el desplazamiento forzoso de campesinos e indígenas también está ligado al accionar de oportunistas que aprovechan las situaciones de inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra para re-ocupar y re-apropiarse de áreas de ocupación, principalmente, campesina e indígena (Díaz Habra 2016). Todos estos procesos implicaron el ejercicio de violencia institucional y para-institucional mediante diversas formas de coacción directa e indirecta a los poseedores que atentaron con su derecho a la tierra. Ante estos procesos de cercamiento surgieron contra-movimientos al despojo que se expresan en diferentes modalidades de insubordinación y resistencia desplegadas por campesinos e indígenas a partir de la segunda mitad de la década de 1980 (Durand 2006). La lucha

2 En Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos define a las explotaciones agropecuarias sin límites definidos como aquellas explotaciones que se caracterizan por tener límites imprecisos o carecer de ellos, es decir, que las parcelas que la integran no están delimitadas y por lo general están formadas por unidades mayores y bajo distintas modalidades de tenencia tales como: campos comuneros, comunidades indígenas, parques nacionales, tierras fiscales y privadas.

por la tierra ha sido el modo de recreación política de campesinos y pueblos originarios (Domínguez 2009). Diversos trabajos se ocuparon de abordar las dimensiones ecológicas (Jara 2014) y las dimensiones jurídicas de esas luchas respecto al derecho a la tierra y el territorio en particular por el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra (Barbetta 2014).

Una de las experiencias más conocidas es el surgimiento del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) en 1990. Su aparición significó un punto de quiebre, ya que la problemática de los desalojos adquirió mayor visibilidad, favoreció al desarrollo de una conciencia de derecho y una acción consecuente por parte de los campesinos. Sin embargo, se advierten diversos factores limitantes para el efectivo reconocimiento y ejercicio de los derechos posesorios de campesinos. Entre ellos, se puede mencionar la falta de acceso a los recursos técnicos y económicos para regularizar su situación ante la ley a partir del juicio de usucapión y el desconocimiento sobre los derechos posesorios protegidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Frente a estos procesos, el Estado asume diferentes y contradictorias tomas de posición que se expresan en las diversas modalidades de intervención. Mientras que, por un lado, puede impulsar un ordenamiento territorial mediante acciones como redistribución de tierra, promoción de nuevos asentamientos humanos, demarcación de espacios o áreas protegidas como parques nacionales; por otro, manipula los marcos jurídicos y el monopolio del uso de la fuerza para facilitar los procesos de apropiación de las tierras fiscales en pocas manos. Históricamente, en Santiago del Estero hubo escasas y fragmentadas acciones desplegadas desde algunas agencias del Estado para mejorar las condiciones de los pequeños productores y ninguna iniciativa de resolver la problemática de la tenencia precaria de la tierra o reconocer los derechos posesorios de campesinos e indígenas. Recién en el año 2005, tuvo lugar la conformación de la Mesa Provincial del Tierras en la que participaban organizaciones de base campesina, ONG's promotoras de desarrollo rural y representantes del gobierno provincial con el objetivo de diseñar líneas de acción para el tratamiento de la problemática de tierra.

Desde el seno de este espacio inter-institucional se impulsó la creación mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial el "Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra", que estaría a cargo de brindar asistencia técnica y jurídica para lograr la regularización su tenencia de la tierra. Asimismo, se planteó la necesidad de crear el "Comité de Emergencia", órgano que intervenía en los conflictos de tierra para acompañar a las familias campesinas involucradas en los mismos. Todo ello no fue suficiente para ofrecer una solución de fondo a los conflictos en el espacio rural, ya que no implicaron cambios profundos en la estructura agraria respecto a la distribución desigual de la tierra y la regularización de las situaciones de inseguridad jurídica en la tenencia con criterios de sustentabilidad ambiental y justicia social. Por tanto, garantizar el derecho a la tierra al campesinado local sigue siendo una materia pendiente y los dos casos que se analizan en

este artículo constituyen iniciativas socio-organizativas innovadoras de lucha por la tierra donde se identifican grietas en el marco legal y en las políticas públicas que requirieron la acción colectiva de los campesinos, la articulación con agentes estatales y la puesta en marcha de diseños productivos que permitan afianzar los derechos posesorios pero respetando la lógica de la economía campesina.

El repertorio de la acción colectiva en defensa de los bienes comunes

Frente a la conflictividad en torno a la tierra, campesinos e indígenas suelen buscar la regularización de su situación de tenencia precaria mediante distintos canales institucionales autorizados. Van Dam (2007) distingue tres formas de defensa de la tierra: la vía administrativa, que implica la inicialización de un trámite solicitando el reconocimiento del título de propiedad de la tierra; la vía jurídica, mediante el juicio de usucapión para la obtención del título perfecto; y la vía política, mediante acciones que interpelen a las agencias estatales con sus demandas de manera pacífica y dentro de los marcos de la legalidad. Cabe destacar que en Argentina durante la última década y a partir de la sanción de la Ley de Emergencia de Propiedades Comunitarias para Comunidades Indígenas,³ muchos grupos étnicos se han amparado en este marco legal para evitar los desalojos de las tierras que ocupan.

Sin embargo, pensamos que existen otros modos de lucha por la tierra que se engendran y operan en los intersticios de lo instituido (Jara, Gutiérrez y Hoffman 2016). En este sentido, cabe recuperar el concepto de resistencia legítima planteado por O'Brien (1996). Dicho concepto permite dilucidar aquellas formas innovadoras del uso de leyes, políticas y otros valores oficialmente promovidos, desplegadas por los sujetos involucrados en la lucha por la tierra. Con este concepto, el autor hace referencia a una forma de contienda popular que opera parcialmente dentro las normas oficiales, aunque no exenta de tensiones, que supone el hábil uso de convenciones culturales prevalentes y una afirmación de los canales de inclusión existentes, pero que dependen de cierto grado del acuerdo con una estructura de dominación.

En esta dirección, los dos casos de estudio que seleccionamos son significativos dado que constituyen una forma de resistencia al cercamiento de los bienes comunes, frenando el despojo y reafirmando el control sobre la tierra, pero sin emprender acciones colectivas beligerantes o confrontativas. Cabe destacar que nos distanciamos de un concepto de los comunes como una cosa que se tiene y con existencia *per se* para entenderlos como “cualquier acción (política) colectiva en relación a bienes, servicios, espacios, territorios impregnadas

3 La “Ley de Emergencia de Propiedades Comunitarias para Comunidades Indígenas”, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en el año 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica y que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u otro organismo provincial competente y aquellas preexistentes por el término de cuatro años.

derechos y obligaciones para los sujetos implicados” (Montesinos Linares y Campanera Rieg 2017: 200-201). Desde esta perspectiva la gestión comunal, es una acción política colectiva y creadora tendiente a generar normas respecto al compartir los bienes. Tanto los pobladores del encierro ganadero de El Hoyo como los de la Reserva de Ojo de Agua (tabla 1) encuentran en su vinculación con agentes estatales las oportunidades de frenar los desalojos en los marcos normativos del derecho posesorio, la Ley Nacional de Bosques Nativos y un amplio espectro de programas de desarrollo rural de alcance nacional y provincial.

La reafirmación de la posesión sobre la tierra comunal en la Reserva Campesina de Ojo de Agua

La zona de estudio abarca parte del sistema de las Sierras de Ambargasta, que se encuentra en el departamento Ojo de Agua, al suroeste de la provincia de Santiago del Estero. Estas sierras tienen una altitud máxima de 500 metros sobre el nivel del mar, de clima subtropical continental con una marcada amplitud térmica diaria. Es un área irrigada por pequeños arroyos, pero con escasas precipitaciones. En consecuencia, es una región con serios déficits hídricos.

Tabla 1. Presentación breve de las experiencias analizadas

Características principales	Encierro ganadero de El Hoyo	Reserva campesina
Extensión en hectáreas	10 mil has.	25 mil has.
Cantidad de familias	40	200
Conflictos de tierra	2004 (con empresario Santafesino) y 2012 (con empresario local).	2003 (empresario que cerró acceso a fuentes de agua).
Actores promotores de la experiencia	Secretaría de Agricultura de la Nacional, DUFINOC y Mesa de Tierra de Figueroa.	Registro de Poseedores, Secretaría de DDHH, Mesa de Tierra de Ojo de Agua, Comité de Emergencia y Dirección de Bosque
Estrategia de contracercamiento	Alambrado perimetral y ejecución de proyectos productivos para consolidar posesión.	No hay alambrado perimetral. Enmarcando en la ley 26331 como zona roja.
Actividades productivas	Ganadería vacuna, caprina y extracción forestal	Ganadería vacuna, caprina y extracción forestal. Artesanía y servicio turísticos.
Bienes comunes	Áreas de pastoreo y extracción, instalaciones ganaderas, aguadas, molinos, entre otros.	Áreas de pastoreo y extracción, cisterna y maquinaria agrícola.
Nivel de institucionalización	Asociación de Fomento Común.	No tiene personería Jurídica

Fuente: elaboración propia.

Los conflictos de tierras en las Sierras de Ambargasta datan de los albores del siglo XX. Uno de los principales conflictos surge cuando un empresario bonaerense de la Sociedad Rural Argentina (agrupación que aglutina a grandes terratenientes de la Pampa Húmeda) compró las tierras que actualmente abarcan los parajes del Lote 8, 9 y El Cajón. Sus principales intenciones era destinarlas a la producción de maíz, pero no logró explotarlo en grandes magnitudes, por lo que decide hipotecar los terrenos para invertir en campos de la región pampeana (Quiroga Micheo y Quiroga Vergara 2004). Dicha hipoteca no fue cancelada y los terrenos fueron transferidos a un empresario extranjero mediante un remate en la década de 1960, quien impuso entre las familias allí asentadas el pago de un alquiler por la ocupación de las tierras.

Durante muchos años, él venía a cobrarnos el alquiler de las tierras, decía que las tierras eran de la corona británica. Nos pedía lo que teníamos: plata, cabritos, vacas (...) y se lo llevaba en una camioneta (Pobladora de El Cajón, 25 de octubre de 2016).

Pese a que el empresario nunca les mostró los títulos de esas tierras y que el pago del alquiler implicaba una gran carga para los habitantes de la zona, estos terminaban accediendo a las exigencias del presunto locador, como consecuencia de su desconocimiento respecto a los derechos posesorios. Durante la década de 1990, el problema se agravó cuando aquel foráneo vendió parte de las tierras a un poblador de la zona, quien obligó a sus vecinos a desplazar las viviendas y corrales. En simultáneo con las acciones de desalojo, el Gobierno municipal de la Villa de Ojo de Agua buscó persuadir a las familias para que modificaran su domicilio a cambio de planes de contención de pobreza rural. Un poblador del Lote 9 (25 de abril de 2015) afirmaba: “Tuve que mudar mi corral. Antes lo tenía pegado a mi casa y ahora lo tengo a un kilómetro y medio”.

De esta manera, y a medida que efectuaban nuevas transacciones de compra y venta, fueron proliferando los conflictos. Hubo quienes decidieron abandonar esos terrenos, mientras que otros, no solo permanecieron allí, sino que desplegaron distintas acciones de defensa. Asimismo, las fuerzas policiales propiciaron los desalojos de las familias campesinas con amenazas, golpizas y detenciones.

Cuando nosotros íbamos a denunciar lo que pasaba en nuestras tierras, la policía no quería tomar las denuncias. La policía, lamentablemente, siempre ha jugado a favor de los que tienen poder (Pobladora del Cajón, 15 de octubre de 2016).

El punto de inflexión de los conflictos en la comarca se produjo en el año 2003, cuando un grupo de empresarios alambraron los reservorios de agua de uso común, limitando el paso y el acceso de los recursos de la población. Las restricciones de los recursos hídricos fueron claves para planificar y ejecutar una serie de acciones colectivas de autodefensa y resistencia.

Allí también intervinieron actores de distintos organismos estatales provinciales y nacionales que brindaron asesoramiento legal a las familias campesinas.

Hubo muchos vecinos que se fueron, pero nosotros quedamos, ¿a dónde me iba a ir yo? (...) Por suerte en el 2005, los de Derechos Humanos nos ayudaron, nos enseñaron como defendernos y los abogados no nos cobraron nada (Poblador del Cajón, 27 de abril de 2015).

A partir de los vínculos establecidos con técnicos y funcionarios que operan en agencias estatales de la provincia como el Registro de Aspirantes a la Regulación de la Tenencia de la Tierra y el Comité de Emergencia, comenzó a gestarse la iniciativa de conformar una Reserva Campesina. En Argentina no existe una figura jurídica de reserva campesina como en el caso de Colombia.⁴ No obstante, la formulación, promoción y ejecución del Plan de Creación de la Primera Reserva Campesina Provincial encontraron sustento en la Ley Nacional N° 26.331. En efecto, las acciones de los campesinos para resguardar y reafirmar los derechos posesorios sobre la tierra de uso común implicaron un proceso de apropiación y adaptación del marco jurídico disponible y las políticas públicas, a partir de sus relaciones con agentes estatales.

El plan de Reserva Campesina Provincial surge como respuesta para detener los continuos intentos de desalojos, sustentando sus reivindicaciones sobre el derecho a la tierra en la retórica del derecho posesorio y crear cercos institucionales a través de tácticas legales y políticas oficiales. La negociación y asistencia de las agencias estatales permitieron a los residentes de la reserva adquirir fondos para alambrar los predios de uso particular de cada familia y consensuar criterios para el uso de los espacios comunes de carácter más bien “consuetudinario”, dado que no existe un estatuto interno. En el marco de las regulaciones contempladas en la Ley de Bosques Nativos, encontraron la posibilidad de ampliar la categoría I (o comúnmente llamadas de color rojo),⁵ para no solo evitar el desmonte y la explotación de los recursos, sino también la protección contra la actividad minera en el área que abarcaba la reserva.

Reafirmación de derechos posesorios en el encierro ganadero y comunitario

El Hoyo es un paraje del departamento Moreno que se encuentra ubicado a 168 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Para llegar allí se recorren aproximadamente 50 kilómetros por caminos de tierra. Los sistemas productivos combinan la ganadería con la

4 En Colombia, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) fueron creadas mediante la Ley 160 de 1994, con el propósito de regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías campesinas en el país frente a los conflictos territoriales en el mundo rural.

5 La ley 26331, en el artículo 9° define a la categoría I (rojo) como: sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse.

actividad forestal, debido a la falta de riego, las escasas precipitaciones, las elevadas temperaturas durante gran parte del año y los suelos con baja retención de humedad, dificultan el desarrollo de la agricultura en esta zona del chaco semiárido. Estas condiciones agroecológicas junto a la insuficiente infraestructura productiva limitan los rendimientos productivos en ganadería. Asimismo, la persistencia de las prácticas de manejo a monte también incidió en la degradación de este recurso por sobrepastoreo (De Dios y Ferreyra 2011).

Las tácticas de despojo abarcaron denuncias penales en su contra por delito de usurpación, la ruptura de alambres que delimitaban la tierra en posesión, desmonte y amedrentamiento de la población con fuerzas de seguridad privada contratadas por los empresarios.



En el año 2004, una empresa de origen extraprovincial compró un campo que colinda con la tierra en posesión de las familias el paraje El Hoyo. Estos empresarios aducían poseer las escrituras de esas superficies de tierra y exhortaron a los pobladores a desalojarlas. Las tácticas de despojo abarcaron denuncias penales en su contra por delito de usurpación, la ruptura de alambres que delimitaban la tierra en posesión, desmonte y amedrentamiento de la población con fuerzas de seguridad privada contratadas por los empresarios.

A raíz de este primer enfrentamiento, los pobladores de El Hoyo también desplegaron una batería de acciones colectivas orientadas a frenar el despojo de sus tierras que incluía ‘ponerle el cuerpo a las topadoras’ y el montaje de carpas en los lugares de conflicto, como también apelar a denuncias y trámites judiciales. La vinculación con la Mesa de Tierra del departamento Figueroa⁶ y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), les permitió a

los pobladores de El Hoyo recibir asesoramiento jurídico-legal, aprehender y apropiarse de un protocolo de lucha fundado en el derecho posesorio sobre la tierra y paralizar el avance de la empresa tras conseguir que una jueza ordenara una medida cautelar que impedía continuar con el desmonte de esas superficies.

Técnicos extensionistas del ex-Programa Social Agropecuario (PSA),⁷ habían comenzado a intervenir en el paraje para superar las dificultades en el abastecimiento de agua y alentar la producción bovina, sin embargo, no permanecieron al margen del conflicto. Las propuestas de “mejorar la producción” estaban asociadas a la promoción de los derechos

6 Las Mesas de Tierras son organizaciones que tienen su origen ligado a la intervención de la pastoral social de la Iglesia Católica en poblaciones rurales, pero que en la actualidad participan además de los representantes de las comunidades eclesiales de base, organizaciones gubernamentales de extensión rural, como también delegados del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

7 El PSA comenzó a implementarse en el año 1993 bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sus destinatarios eran “productores minifundistas” y les brindaba asistencia técnica, financiera, capacitación y apoyo a la comercialización (Manzanal y Nardi 2008).

posesorios sobre la tierra. En otras palabras, al implementar mejoras productivas lograrían afianzar “la posesión” en los términos del derecho civil que considera al alambrado y las actividades productivas como indicadores del ánimo de dueño, aun en ausencia de títulos perfectos para el reconocimiento de sus derechos por parte de la autoridad administrativa y judicial.

Dado que los pobladores de El Hoyo realizaban “cría a monte” de animales, la pérdida y robo del ganado eran frecuentes. Los técnicos del PSA propusieron la conformación de “encierros ganaderos” o “potreros”. Es decir, superficies de monte destinadas a la cría de ganado bovino para lograr un mayor control del rodeo y mejorar las prácticas de manejo silvo-pastoril. El PSA preveía asistencia técnica y financiera para llevar adelante estos emprendimientos productivos asociativos. En efecto, se conformaron dos grupos que estarían a cargo de la gestión de los “potreros” localizados al sur y al norte del campo de uso comunitario.

El enfrentamiento con la empresa aconteció cuando los pobladores de este paraje trabajaban en la delimitación del “potrero sur”. Frente a la amenaza de ser despojados de esas superficies de tierra, muchos pobladores adhieren a la iniciativa de cerrar el campo comunitario para defender la tierra de posibles intentos de desalojo, como lo expresa en los siguientes testimonios:

Los empresarios avanzaban por el sur. Entonces nosotros ya veíamos que no íbamos a tener tierra: ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado dos kilómetros así y tres kilómetros para allá... después hemos hecho otro potrero para hacer posesión (Poblador de El Hoyo, socio de un encierro, 13 de agosto de 2014).

Los técnicos del PSA que intervenían en la zona sostenían que la propuesta de los encierros ganaderos se trata de una iniciativa productiva que no solo respondía a intereses económico-productivos de los pobladores de El Hoyo, sino también la necesidad de evitar el desalojo y defender la tierra que ocupan “haciendo posesión”. Asimismo, llevar adelante esta iniciativa implicaba captar los recursos emanados de distintos programas estatales, nacionales y provinciales que financiaban inversiones prediales con fines productivos. Por ejemplo, los recursos para construir los potreros en las zonas disputadas con la empresa propietaria de campos contiguos se obtuvieron mediante la formulación de proyectos que financiaban la compra de rollos de alambres para la mejora de corrales en los predios de los “productores” del paraje. Así lo pone de manifiesto un técnico con su relato:

Si vos lo planteas en esos términos (como defensa de la tierra) no te financiaban. Sin embargo, para los papeles y para la rendición, vos compras uno o dos rollos de alambre para que el chango mejore su corralito y hasta ahí nomás. Pero lo que ellos nunca se enteraban es que

esos dos rollos de alambre más los otros que tenía el vecino hacían 2 kilómetros de alambrado (Técnico del PSA de Figueroa, 23 de junio de 2016).

Con la elaboración y ejecución de los proyectos productivos, tanto técnicos extensionistas como los pobladores de El Hoyo, buscan materializar sus propios proyectos; lograr “mejoras productivas” y “afianzar la posesión”, respectivamente, frente a las amenazas continuas de desalojo. A su vez, este propósito es “dibujado” por los técnicos como una problemática productiva para obtener los recursos para enfrentar la problemática de tenencia precaria de la tierra, la cual no está contemplada en los lineamientos de intervención prescritos en los programas estatales en el marco de los que opera. En el vínculo técnicos extensionistas-pobladores rurales se gesta y desarrolla una estrategia de defensa de la tierra basada en el binomio producir-hacer posesión. Dicha estrategia se sustenta en el discurso de derecho posesorio sobre la tierra, reconocido por el Código Civil y Comercial de la Nación, promovido por las organizaciones que asumen la representación de campesinos e indígenas en sus luchas por la tierra, pero que se despliega a través del uso de recursos y las propuestas técnicas-productivas promovidas por la institucionalidad pública.

El control de bienes comunes desde las prácticas políticas cotidianas

La constitución de reserva campesina y el encierro ganadero comunitario no supuso el fin de los conflictos por el control de bienes comunes. La tierra, el monte y el agua tienen vital importancia en la reproducción social de aquellos campesinos. Como se pudo ver, a partir de las vinculaciones con los agentes estatales pudieron ampliar el acervo de bienes comunes, al mismo tiempo que permearon otras lógicas y formatos de organización, lo que devino en la transmutación de prácticas, tanto en lo productivo como en lo organizativo.

Para dar cuenta del dinamismo de la acción colectiva de los campesinos en sus luchas por el cercamiento de bienes comunes consideramos preciso centrar la mirada en las prácticas políticas cotidianas. Tria Kerkvliet (2009, 232) entiende que las políticas cotidianas involucran “personas relacionadas, obedeciendo, ajustando e impugnando normas y reglas en torno a la autoridad, la producción y distribución de recursos, aunque de manera silenciosa, rutinaria, mediante expresiones y actos sutiles que raramente son directos y organizados”. Asimismo, reconoce distintas formas de políticas cotidianas: las políticas de apoyo y conformidad; las modificaciones y evasiones y la resistencia cotidiana. En esta sección del trabajo nos ocupamos de poner evidencia cómo operan las políticas cotidianas en torno al uso, gestión, preservación y ampliación del fondo de bienes comunes, dando cuenta de sus vínculos con los agentes estatales. A partir de tres situaciones pretendemos ilustrar el modo en que distintas prácticas políticas cotidianas afectan el proceso organizativo en torno al control de bienes comunes.

Una de las problemáticas que debieron enfrentar los socios del encierro ganadero fue la degradación de pasturas implantadas debido a la sobrecarga animal. Al inicio del emprendimiento, habían acordado una carga animal de 25 vientres por socio, pero dos pobladores que tenían mayores rodeos habían incumplido este acuerdo. Asimismo, estos empleaban estacionalmente a algunos de los socios en la elaboración de carbón. Por lo tanto, encontraron escasa oposición para la incorporación de más animales, ya que quienes eran socios del encierro también se desempeñaban como sus peones durante parte del año.

La decisión de no confrontar con los socios que han infringido las reglas establecidas sobre las prácticas de manejo forrajeros de uso común sería una práctica política por parte de otros socios para mantener sus oportunidades de trabajo regular y por lo tanto una política cotidiana de apoyo silenciosa. Desde la perspectiva de Tria Kerkvielt (2009), en la sociedad campesina, las formas cotidianas de apoyo y conformidad tienen lugar en las relaciones entre personas en posiciones desiguales de estatus y clase; y entre ciudadanos y autoridades gubernamentales o estatales en sus roles en la producción, distribución y uso de recursos.

La difamación a partir de los rumores que circulan entre los vecinos sobre el comportamiento “inapropiado” de algunos socios del encierro ganadero también es una práctica política cotidiana. Las tensiones entre los vecinos se generan en torno al destino de los recursos emanados de los diversos programas estatales. Aunque se habían conformado dos grupos asociativos (uno al norte y otro al sur del paraje), las inversiones se concentraron en el encierro del sur. Esto generó el disgusto de los pobladores del sector norte. En efecto, surgió el rumor que la siembra de pasturas se efectuó en el sector al que pertenecía el presidente de la asociación y los técnicos preferían beneficiar a los socios del sur. Además, surgieron rumores sobre el robo de los fondos por parte del presidente y de los técnicos.

La emergencia y la difusión de estos rumores difamatorios son prácticas políticas cotidianas de deslegitimación del liderazgo, ya sea de algún socio del encierro o de los técnicos. El desacato de las recomendaciones técnicas en torno a las prácticas de manejo de los recursos pecuarios y forrajeros, como también la inasistencia de los vecinos del norte a las reuniones de la asociación y a las jornadas de trabajo colectivo son solo algunas expresiones de disconformidad. En el caso de la Reserva Campesina de Ojo de Agua, desde el momento de su creación oficial en 2012,⁸ hubo una amplia convocatoria de los pobladores para formar parte de las reuniones. En primer lugar, porque el presupuesto público (entre 2003-2015) destinado a la agricultura familiar fue mayor con relación a otras oportunidades. Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios y al despido masivo de técnicos en los años siguientes, la defensa a la tierra tuvo que desandar otros caminos y fortalecer desde adentro la organización. Una vez que se detuvo la amenaza de desalojo mediante la acción de autodefensa y declaración como zona de gran valor forestal en el marco de la ley 26.331, el paso siguiente fue afianzar el proceso organizativo.

8 A través de un acto constitutivo con el Gobernador de la Provincia, personal de Administración de Parques Nacionales, el Intendente de Ojo de Agua, entre otros.

Además, el hecho de contar con maquinaria de uso comunitario para los pobladores de la zona les facilitó algunas actividades como el transporte de agua o la realización del arado mediante la cooperación entre vecinos:

El tractor lo puede usar cualquiera de la zona, pero como necesitamos hacerle mantenimiento y ponerle combustible cada familia pone una pequeña cuota mensual y esa cuota depende si participas o no en la organización (Poblador del Cajón, 10 de julio de 2017).

Con los trabajos comunitarios, la organización fue resistiendo y consolidándose. En la zona, los conflictos por la tierra en su mayoría no se resolvieron por juicios de usucapión, ya que esto requiere de varios procesos administrativos y judiciales que son costosos y prolongados. Pese al reconocimiento de la Reserva Campesina por parte del Estado aun no permite una resolución definitiva, ya que como se dijo antes, la categoría de reserva campesina o propiedad comunitaria campesina no existe en el derecho argentino. Sin embargo, el proceso de apropiación o adaptación de las normas y las políticas públicas vigentes han permitido a los pobladores locales, en articulación con agentes estatales, fortalecer el control sobre los bienes comunes. Además, cuando un vecino se ve amenazado en la posesión de su predio, los miembros de la Reserva lo acompañan compartiendo sus aprendizajes en defensa a la tierra.

Tanto en la Reserva Campesina como en el encierro comunitario, se produjeron estrategias de lucha por la tierra cercanas a lo que O'Brien (1996) denominó resistencia legítima. En primer lugar, porque los mecanismos de acción colectiva operan cerca del límite de los canales autorizados. Como se mencionó antes, la Reserva de Ojo de Agua se apoya en la Ley 26.331 y los encierro en el reconocimiento de los derechos posesorios consagrados en el Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez ambas experiencias desplegaron distintas tácticas para el acceso a programas de desarrollo rural que, si bien no estaban directamente orientados a solucionar estructuralmente el problema de tierra, los campesinos y los técnicos tuvieron que adaptarlos.

En segundo lugar, la resistencia legítima tiene que ver con el empleo de la retórica de los poderosos. En los casos analizados las demandas de los campesinos frente al estado fueron sometidas a un "proceso de traducción" para poder interpelar a los agentes estatales y, de esta forma, atraer bienes y servicios a los territorios de las comunidades campesinas que estamos estudiando. En tercer lugar, la resistencia legítima aprovecha las divisiones del Estado. El Estado es un campo de disputa, un entramado complejo de correlaciones de fuerza que se cristalizan en las políticas públicas. En el caso del Estado provincial santiaguense, por un lado, promueve la explotación de los recursos mineros, forestales y apoya la expansión del agronegocio. Pero, por otro lado, también presenta espacios de las esferas gubernamentales fuertemente disputados por las organizaciones campesinas, desde donde se han podido visibilizar sus demandas sin tener una solución de fondo. En cuarto lugar, este tipo

de política cotidiana que denominamos resistencia legítima se apoya en la movilización de las comunidades. La construcción de los contracercamiento que analizamos sería imposible sin acciones colectivas de sabotajes como cortes de alambre o acciones de autodefensa para frenar el avance de los empresarios.

Conclusiones

Históricamente, una de las banderas de la lucha campesina por la tierra ha sido “desalambrar”. Sin embargo, existen experiencias donde cercar colectivamente es condición sine qua non para defender los bienes comunes. Este trabajo intenta rescatar dos experiencias de contracercamiento que están teniendo lugar en el espacio rural santiagueño. Sin embargo, hay que destacar que no se limitan a experiencias aisladas sino que ambas forman parte de la multifacética resistencia que opone el campesinado frente al acaparamiento mundial de tierra, el cual representa una de las expresiones actuales del patrón de acumulación del capital que, en un contexto de crisis energética, ecológica y alimentaria, se expande sobre territorios y bienes comunales que se encontraban fuera del circuito del capital.

Hay que resaltar los aspectos innovadores de estas luchas por los bienes comunes. El campesinado no solo se apropia, adapta y crea tecnologías en lo productivo sino también en el repertorio de acciones colectivas. En el caso de Santiago del Estero, los movimientos sociales agrarios han desplegado diferentes mecanismos para garantizar su acceso a la tierra. Además de las conocidas estrategias de autodefensa para resistir a los empresarios, los juicios de usucapión y el auto-reconocimiento como comunidades indígenas, están emergiendo otras formas de luchas como los encierros y las reservas.

Estas experiencias de contracercamientos no solo constituyen estrategias defensivas frente al proceso de desterritorialización provocado por el agronegocio para evitar el desalojo, sino que constituyen una lucha proactiva de (re)territorialización (Jara, Gutiérrez y Hoffman 2016) para consolidar el derecho de los campesinos a la tierra y demás derechos humanos. Identificar las oportunidades y las tensiones que plantean estas experiencias de contracercamiento campesino en marcha permite visibilizar ciertas lógicas y estrategias que requieren políticas públicas diferenciales; las cuales han sido claves en la pervivencia del campesinado porque evita el desarraigo y genera posibilidad de empleos en el campo a partir del aprovechamiento de los recursos endógenos, sus potencialidades ecológicas y económicas.

Bibliografía

- Barbetta, Pablo. 2014. "Aportes a la cuestión jurídica campesina en la Argentina del Agrogocio". *Revista Trabajo y Sociedad* 22: 5-14. <http://www.unse.edu.ar/trabajosociedad/22%20BARBETTA%20Cuestion%20juridica%20campesina.pdf>
- Borras, Saturnino, y Jennifer Franco. 2010. "La política del acaparamiento mundial de tierras: replanteando las cuestiones de tierras, redefiniendo la resistencia". *ICAS Working Paper Series* 001.
- _____. 2012. "¿La 'soberanía de la tierra' como alternativa? Hacia un contraceramiento de los pueblos", https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2qRyFPIaj5M-J:https://repub.eur.nl/pub/38549/metis_183597.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
- De Dios, Rubén, y Ramón Ferreyra. 2011. "La defensa de la tierra y la experiencia de los encierros ganadero de manejo comunitario en Santiago del Estero". En *Actores sociales y Espacios protegidos. Aprendizajes de experiencias rurales en el NOA*, compilado por Raúl Paz y Rubén De Dios, 63-92. Tucumán: Magna Ediciones.
- Díaz Habra, María del Huerto. 2016. "Conflictividad agraria y políticas de tierra en Santiago del Estero, Argentina: los nuevos escenarios políticos entre sujetos de lucha y agentes estatales". XIII Jornadas Nacionales y V Internacionales de Investigación y Debate "Sujetos Sociales y Territorios Agrarios Latinoamericanos", Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, Argentina, 27 al 29 de julio.
- Domínguez, Diego. 2009. "La lucha por la tierra en Argentina en los albores del siglo XXI. La recreación del campesinado y de los pueblos originarios". Tesis para optar por el grado de Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Durand, Patricia. 2006. "Desarrollo Rural y Organización Campesina en Argentina. El caso del Movimiento campesino de Santiago del Estero". Tesis para optar por el grado de doctoral en Ciencias Agropecuarias, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Harvey, David. 2004. "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión". *Social Register*: 99-129. <http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/view/14997#.WLZITQJIBIV>
- Jara, Cristian. 2014. "La dimensión ecológica de las luchas campesinas. Disputas en torno al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Santiago del Estero". *Revista Trabajo y Sociedad* 23: 389-405. <http://www.unse.edu.ar/trabajosociedad/23%20JARA%20Luchas%20Campesinas%20Ecologicas.pdf>
- Jara, Cristian, Marta Gutiérrez y Maia N. Hoffman. 2016. "Resistir produciendo. Las luchas proactivas de las organizaciones de la Agricultura familiar en el departamento Figueroa (Santiago del Estero)". *Espacio Abierto* 25 (3): 291-310. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5759135>

- Manzanal, Mabel, y María Nardi. 2008. "Modelos de intervención de los proyectos de Desarrollo Rural en la Argentina, a partir de 1995". En *El Desarrollo Rural en la Argentina, un enfoque territorial*, compilado por Alejandro Schetjman y Osvaldo Barsky, 492-525. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Midnight Notes Collective. 2012. "Los nuevos cercamientos". *Revista Theomai* 26. <http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero%2026/MNC%20-%20Los%20nuevos%20cercaamientos.pdf>
- Montesinos Linares, Lidia, y Mireia Campanera Reig. 2017. "Formas de vida, usos y apropiación de recursos. Propuestas para el estudio de los comunes contemporáneos". *Revista de Antropología Social* 26 (2): 193-216. <https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/view/57603/51881>
- O'Brien, Kevin. 1996. "Rightful Resistance". *World Politics* 19 (1): 31-55. <https://doi.org/10.1353/wp.1996.0022>
- Paz, Raúl. 2013. "Explotaciones sin límites definidos y desarrollo rural en Santiago del Estero: Hacia un ordenamiento territorial". *Revista Realidad Económica* 277: 109-128.
- Paz, Raúl, y Cristian Jara. 2014. "Censos y registros de la agricultura familiar en Argentina: esfuerzos para su cuantificación". *Eutopía* 6: 75-91. <https://doi.org/10.17141/eutopia.6.2014.1359>
- Peluso, Nancy, y Christian Lund. 2011. New frontiers of land control: Introduction, *The Journal of Peasant Studies* 38 (4): 667-681. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03066150.2011.607692?needAccess=true>
- Quiroga Micheo, Ernesto, y Ernesto Quiroga Vergara. 2004. *Crotto. Historia de una ingratitud*. Buenos Aires: Editorial Armerías.
- Soane, José. 2012. "Neoliberalismo y ofensiva neoextractivista. Actualidad de la acumulación por despojo, Desafíos de nuestra América". *Theomai* 26. <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Seoane%20-%20Ofensiva%20extractivista.pdf>
- Tria Kerkvielt, Benedict. 2009. "Everyday politics in peasant societies (and ours)". *The Journal of Peasant Studies* 36 (1): 227-243.
- Van Dam, Chris. 2007. *Tierra, territorio y derechos de los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de Salta*. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

El rol de Emiliano como mediador: prácticas organizativas de los campesinos en los proyectos estatales*

*The role of Emiliano as a mediator:
organizational practices of peasants
in state projects*

Jimena Ramos Berrondo**

Fecha de recepción: 5 de marzo de 2018
Fecha de aceptación: 26 de mayo de 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3295>

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar en qué consiste el rol del dirigente de la Corriente Campesina Nacional (COCAN) como mediador de las estructuras de poder del Estado y los criollos del Impenetrable (una región localizada en la provincia del Chaco, noreste de Argentina) durante el periodo 2012-2015. Se aplica una metodología cualitativa, que consistió en observación participante y entrevistas en profundidad. Se concluye que la COCAN lleva a cabo múltiples prácticas organizativas para resolver las problemáticas de las poblaciones rurales: implementación y gestión de proyectos estatales, negociaciones con autoridades políticas y promoción de actividades culturales y productivas.

Palabras clave: agricultura familiar; Argentina; mediador; organizaciones campesinas; práctica organizativa; proyectos de desarrollo rural

Abstract

The aim of this article is to analyze the role of the leader of the “Corriente Campesina Nacional” (COCAN) as a mediator between state agents and the “criollo” population in the “Impenetrable” (a region located in Chaco, north east of Argentina) during the period 2012-2015. A qualitative methodology is applied, using participant observation and in-depth interviews. The article concludes that the COCAN uses diverse organizational practices to solve rural community problems: implementation and management of state projects, negotiations with political authorities and promotion of cultural and productive activities.

Key words: Argentina; family farming; mediator; organizational practices; peasant organizations, rural development projects

* Esta publicación se enmarca en el PICT 2676 “Agentes estatales, campesinos e indígenas en la reconfiguración de estatalidades” y en el PIP 0247 “Las cuestiones del desarrollo, de lo indígena y de lo ambiental en la reconfiguración de lo rural”.

** Argentina. Doctoranda en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Correo: krintop@yahoo.com

Introducción

En este artículo me interesa analizar el rol del dirigente campesino como mediador y articulador de dos diferentes mundos sociales (Long 2007): el de las personas de las comunidades rurales y el de las instituciones públicas (Wolf 1956; Cowan Ros y Nussbaumer 2011). ¿Qué discontinuidades se presentan en la interfaz entre los proyectos estatales, el dirigente y las poblaciones rurales? ¿Qué tipo de prácticas organizativas utiliza para resolver las problemáticas de la población? Busco responder estas interrogantes en diálogo con otros trabajos que discuten las relaciones de poder en las intervenciones del desarrollo y la diferencia de intereses entre los diversos actores involucrados (Long 2007; Ferguson 2007). El dirigente es aquel que se encuentra investido para actuar y hablar en nombre de su organización (ante el Estado) y que cuenta con el poder simbólico de hacer grupos (Bourdieu 1996), en los que enseña y transmite saberes a sus allegados.

La selección de la Corriente Campesina Nacional (COCAN) como objeto empírico para este estudio obedece a que muestra la manera en que los referentes de una organización se involucran en actividades técnicas y políticas. La perspectiva teórica seleccionada se aleja de las concepciones normativas sobre las organizaciones campesinas o indígenas que sostiene que estas son democráticas, horizontales y apolíticas (Gledhill 2000; Borrás 2009; Brass 2002). Pretendo, entonces, mostrar los dilemas y ambigüedades que viven los dirigentes de las organizaciones al hacer su trabajo como mediadores, explicando cómo circulan por diferentes territorios. Para ello, empleo una metodología cualitativa, que consistió en recolectar información a través de observación participante (de reuniones nacionales y asambleas comunitarias) y, en menor medida, entrevistas en profundidad (a técnicos, funcionarios y dirigentes campesinos y sus bases) durante el periodo 2012-2015. Para garantizar la confidencialidad de los informantes, utilizo pseudónimos en lugar de nombres. Esto incluyó, en algunos casos, modificar variables de identificación como el género.

Participando en las políticas públicas de desarrollo rural y agricultura familiar

La COCAN se conformó durante el conflicto entre la Mesa de Enlace (que agrupaba a las grandes entidades agropecuarias) y el Gobierno de Cristina Kirchner (por la resolución 125, un proyecto de ley que buscaba subir las retenciones para los grandes productores de soja, en 2008). Esto fue aprovechado por los pequeños productores para posicionar sus demandas y visibilizar “al otro campo”, el suyo, de los indígenas y campesinos (Berger 2018a), que realizan una contribución económica importante a la

agricultura familiar (Schiavoni 2010).¹ En el debate sobre la posibilidad de que convivan la agricultura familiar y el agronegocio, la COCAN fue, junto con otras organizaciones argentinas, partícipe de una serie de espacios promovidos por Brasil en el Mercosur, como la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) y el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF). Así, buscó promocionar la importancia de la agricultura familiar y pugnó por un cambio en el modelo agropecuario (Berger y Ramos 2014). Sus dirigentes participaron en la formulación de leyes de gran envergadura a nivel nacional, como la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014.

En 2011 organizaron una marcha del norte del país hacia la capital, con el lema “Por un nuevo modelo agropecuario”. Ante el Congreso de la nación, entregaron un pliego petitorio donde exigieron las siguientes acciones para indígenas y campesinos: la titularización de la propiedad social de las tierras; el apoyo técnico y económico para la producción y comercialización; la ley para la suspensión de los desalojos y la ley de propiedad de la tierra, para poner freno a su concentración y extranjerización (*La Capital* 2011).

La COCAN es una organización de segundo grado, que nuclea diversas organizaciones de base en diferentes provincias del país. Reivindica la participación e incidencia en las políticas públicas, la seguridad jurídica de la tierra de las poblaciones rurales, su acceso al agua y a insumos productivos (para la producción), así como la ayuda en la comercialización de sus productos. La estructura directiva de la organización está compuesta por un presidente, vicepresidente, tesorero y secretarios, que viven en diferentes provincias. Estos son los principales referentes de la organización y se encargan de difundir y visibilizar sus problemáticas con diferentes actores (Gobierno nacional, provincial, académicos); gestionar proyectos y recursos para las organizaciones y miembros adherentes; ayudar a coordinarlos e implementarlos (junto con funcionarios y técnicos); y movilizar a sus adherentes, para hacer reclamos a las autoridades correspondientes.

El conflicto entre el Gobierno y el campo, durante 2008, trajo aparejados cambios importantes; entre ellos, la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), la elevación del rango de la Exsecretaría de Agricultura a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). En 2014, dirigentes de diferentes organizaciones lograron negociar cargos en la SAF con Jorge López, director del organismo y dirigente de la Organización Peronista

La COCAN es una organización de segundo grado, que nuclea diversas organizaciones de base en diferentes provincias del país.



¹ En efecto, esta representa el 24% de las superficies cultivadas en el país. Su valor bruto de producción para el año 2004 fue de \$ 64.478 millones (Obschatko 2009, 33).

del Pueblo (OPP).² A pesar de que la COCAN había obtenido una dirección en la SAF,³ Emiliano (su dirigente) comentaba que esto no había cambiado mucho su relación con los funcionarios del Ministerio. “No hemos pasado de tener buen diálogo, lo que yo llamo sentarse a tomar mate sin tener ninguna respuesta concreta hacia los problemas del territorio”. En sus discursos en la REAF reclamaba a los funcionarios que “los proyectitos burócratas de tres años no resuelven los problemas de la población rural y que se necesitan políticas de Estado para el sector”. En diversas conversaciones que sostuvimos, noté a Emiliano presionado y preocupado debido a los retrasos de los depósitos de fondos para los proyectos (por parte del Ministerio). Explicó que el grueso del presupuesto de la SAF estaba destinado al armado político electoral; Jorge López apoyaba a una compañera suya de la OPP para que se lanzara como candidata a la presidencia.

Desde hacía algunos meses el MAGyP le había aprobado a la COCAN lo siguientes proyectos: i) fondo rotatorio para garantizar la alimentación animal, que contempla la instalación de cinco silos y su correspondiente carga para el acopio de granos destinados a la alimentación animal (ovinos, caprinos, suinos); ii) sala de desposte de productos cárnicos, equipamiento para montar una carnicería y iii) sala de faena móvil. Los proyectos comenzaron a implementarse en diversas localidades del Impenetrable,⁴ teniendo como población objetivo los pequeños productores (criollos e indígenas) que viven en esas zonas (MAGyP 2014).

Recorriendo el territorio

Unos meses después, me encontré con Emiliano y María en Castelli, localidad conocida como la puerta de entrada del Impenetrable. De ahí nos dirigimos hacia Laderas,⁵ municipio ubicado a 440 km de Resistencia, la capital del Chaco.⁶ Eran alrededor de las diez de la noche cuando el ómnibus nos dejó a un costado de la ruta de terracería. El cielo estaba estrellado. Nos esperaba Rodolfo, marido de María y dirigente de Criollos Unidos por el Impenetrable Chaqueño (CUIC), organización de base adherida a la COCAN. De ahí,

2 Este proceso político ha sido ampliamente documentado en Argentina. Para un análisis macro y comparativo de la diversidad de las organizaciones y movimientos sociales y su alianza con Kirchner, ver Pérez y Natalucci (2010).

3 La Mesa Directiva de la COCAN resolvió que el cargo sería ocupado por Andrés, una persona con perfil técnico que los asesoraba desde hacía algunos años.

4 Es una región de bosque, localizada al noroeste de la provincia del Chaco. Su nombre obedece a la dificultad para atravesarlo, por su agreste y tupida vegetación (árboles de quebracho, cactus, algarrobo, etc.). Se caracteriza por tener un clima semiárido; sufre sequías e inundaciones frecuentes. Los municipios en los que se implementó el proyecto tienen una población promedio de 2000 habitantes (MAGyP 2014).

5 Los nombres de las localidades han sido cambiados, con la finalidad de garantizar la confidencialidad de los informantes.

6 El 23,1% de la población de la provincia del Chaco vive con necesidades básicas insatisfechas. Es la segunda provincia con mayor porcentaje de pobreza en el país (INDEC 2010). La agricultura familiar tiene una presencia importante en la provincia: el 40% del total de las Explotaciones Agrícolas Agropecuarias (EAP) (Obschatko 2009).

caminaamos hacia una casa de adobe. En el patio de tierra había una mesa rectangular con pollo asado, tortas parrilleras y gaseosas. Estaban presentes los dueños de la casa y jóvenes de diferentes organizaciones de base del Impenetrable: Humberto, Genaro, María y Rodolfo, quienes forman parte círculo íntimo de Emiliano y lo mantienen informado sobre las problemáticas del territorio y los acontecimientos del día.

Al día siguiente comenzó la asamblea, en Coquitos. Una vez que llegaron las diez personas que asistieron, Emiliano comenzó hablando del proyecto de represas.⁷ Explicó la importancia de que abastezca a varios pobladores y de que les sea útil a los productores ganaderos. Dijo que es necesario adquirir el equipamiento (máquina, tanque de agua y los caños) y que, los productores que quieran aprender el manejo, se capaciten. Enfatizó en la necesidad de pagarle al capacitador, pero no a la persona que se quiera capacitar. “Hay que hacer bien los deberes porque si no, va a haber consecuencias. Si te dan una vaca lechera y te la comes, no haces bien los deberes. Es importante gestionar y administrar y pensar cómo elegir los lugares donde hacer las represas comunitarias. No vamos a hacer de apurados las cosas, porque salen mal”.

Durante el transcurso de la asamblea, varios pobladores habían planteado su preocupación por la relocalización de la Reserva Grande.⁸ Dicho proyecto (impulsado por el Gobierno provincial y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo) buscaba relocalizar a las familias criollas a otras tierras, con la finalidad de otorgar un título de propiedad comunitaria a la población indígena. Los pobladores estaban preocupados porque temían que se repitiera la experiencia del Teuco Bermejito, un proyecto en el que varias familias criollas fueron relocalizadas a tierras de menor calidad y lejos de espejos de agua, afectando su principal actividad económica, la ganadería extensiva (Ramos 2012).

En las diferentes asambleas, Emiliano dijo que la postura de la COCAN hacia la Reserva Grande era estar junto a los indígenas y no pelearse; y que acompañará a todos los que sean “claros y transparentes y defiendan su mejora”. Criticó a las personas que se dedican a “vender el algarrobo de su campo y, encima, sacan el del vecino” (en referencia a los pobladores que pactan con los madereros y contribuyen así al negocio de la tala ilegal de madera). El temor de los pobladores de vivir en tierras fiscales radica en que no saben cuándo pueden perder la tierra en la que han vivido sus antepasados y en la que trabajan día a día. Eustaquio aprovechó para preguntarle a Emiliano cómo obtener la propiedad de parte de su campo. Le explicó que tiene la propiedad histórica, mejoras⁹ y que ya hizo la mensura de gran parte del terreno. Quería saber si le conviene alambrar el terreno y las represalias

7 Uno de los principales problemas donde se localizan estos municipios es la deficiencia hídrica. La única fuente potencial viable de producción primaria es la recolección de agua de lluvia (MAGyP 2014).

8 Es la reserva aborígen más grande de América Latina. Consta de 300 000 hectáreas al sur del río Bermejito, con un codiciado oasis ambiental rico en fauna, flora y biodiversidad (Aranda 2016).

9 Las mejoras se refieren al trabajo realizado por las familias criollas en las parcelas individuales: árboles frutales, represas, potreros y hectáreas destroncadas. En el equipamiento comunitario, incluye caminos abiertos, puentes, escuelas, iglesias y puestos de salud (Barrios 2005).

que podría tener, pues todavía no tiene el título. El dirigente le recomendó alambrrarlo y le aseguró que la COCAN puede hacer la parte política del trabajo, que consiste en sentarse a negociar con el gobernador del Chaco. Después de la asamblea, Emiliano visitó el predio de Eustaquio, lo asesoró con algunas cuestiones productivas y le propuso llevar productores para que hicieran capacitaciones en manejo de monte con pastura, un programa que está organizando con el jefe de gabinete del MAGyP. En la asamblea de Ojuelos había alrededor

En la asamblea de Ojuelos había alrededor de 15 personas: productores cabriteros, un profesor de la Escuela de la Familia Agraria, señores de la tercera edad y otros jóvenes.



de 15 personas: productores cabriteros, un profesor de la Escuela de la Familia Agraria, señores de la tercera edad y otros jóvenes. Más tarde se incorporaron las mujeres de los señores presentes, acompañadas por niños.

Emiliano se dirigió a los señores y les dijo: “Parece el día del hombre porque no hay ninguna mujer”. Comenzaron a reírse y exclamaron que era feriado y que la última reunión, “las mujeres no los dejaron hablar”. Conversaron sobre lo lindo que se puso el monte con la lluvia y el fresco de ayer por la noche. Después de esta cálida entrada, el dirigente les dijo: “Ustedes nunca traen un papelito para anotar, ¿verdad? y luego, cuando llegan a la casa, se olvidan de los compromisos que asumieron. Hoy cada uno se va a llevar deberes para hacer. Los veo más contentos y más gordos. Cuando hay agua, se puede hacer

muchas cosas, cuando no, no se puede hacer nada. Esta es una buena época para hacer changas, alambrado, ¡hay que hacer algo!”. Luego, Emiliano continuó:

Estamos apretados de tiempo, como organización. Ustedes tienen que decidir si se usa la plata o si la devolvemos al Estado (en referencia a los fondos de los proyectos que llegaron del MAGyP). No los estoy retando, nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer. La idea es instalar silos en varias localidades. Para esto, necesitamos contar con un terreno adecuado y una base de cemento para hacer el contrapiso (donde se instalará el silo y se construirá la carnicería). Poner el terreno en condiciones es tarea de ustedes, las organizaciones tienen que poner el trabajo. Cuando terminemos la parte seria, jodemos. Hagan la parte que a ustedes les toca, yo creo que yo estoy haciendo mi parte. Voy a decirles cuáles son las tareas para hacer: la tarea número uno es limpiar el terreno. Ahí se va a instalar un galpón para llevar y traer producción, cámara y carnicería.¹⁰ Si no hacemos los silos, no podemos seguir haciendo lo demás. Es como el almacenero, si al primer mes no le pagas, al segundo ya va a ser más chico el crédito y luego, ya no te va a fiar. Ustedes son los únicos que tienen plata y no la

10 Las familias de las localidades donde se hicieron los proyectos se dedican a la crianza de ovinos y caprinos, cuyo principal producto lo constituye el cabrito. El manejo de los hatos lo realizan las mujeres, mientras que los hombres realizan las tareas forestales (MAGyP 2014).

usan. Ustedes tienen que decidir si lo hacen juntos o quiénes quieren participar. El plan del proyecto contempla una camioneta con “frío”, para distribuir los pedidos de carne, explicó Emiliano mientras las personas bromeaban y se reían.

– A ver, Santiago, ¿usted me está escuchando?

– Sí, don Emiliano, le respondió Santiago (un señor de la tercera edad vestido con traje de gaucho,¹¹ sombrero negro, bombachas color marrón y botas negras).

– Dígame, ¿para qué es la camioneta con frío?, preguntó el dirigente.

–Para recoger al borracho tirado sobre la ruta, dijo Santiago (mientras se escuchaban las risas de fondo). –Tenemos que agitar nuestro laburo, dijo otro señor.

Yo sé que ustedes están tranquilos porque llovió, pero yo no estoy tranquilo, les respondió Emiliano. Yo no duermo mucho, quisiera que ustedes le pongan la importancia que tienen las cosas. El movimiento económico para los proyectos va a ser hasta junio, julio. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte. Si se organizan, el trabajo va a ser rápido y fácil, si se lo dejan a dos personas, es más pesado.

Luego, Emiliano instó a los señores presentes a que hablaran. El señor Lisardo (tío de Rodolfo) le dijo que él no sabe hacer ese trabajo (refiriéndose a la plancha de cemento para el contrapiso) y que hay que contratar a una persona que sepa. En un momento, Emiliano se paró del círculo y les dijo a las personas que se pusieran de acuerdo para ver cómo organizar el trabajo. Rodolfo comenzó a formar grupos de seis o siete personas y le pidió a María que anotara en la libreta lo que cada uno tenía que ir haciendo. Después de pasados unos minutos, el dirigente regresó y preguntó quién iba a hacer las cosas. Pidió que lo llevaran a ver el terreno. Para su sorpresa, (ninguno de los presentes en la asamblea había dicho nada) estaba limpio. María comentó que, desde hacía unas cuantas semanas, se habían organizado para limpiarlo.

Mientras algunos miembros de la asamblea se llevaron a Emiliano a ver el terreno, yo me quedé charlando con Nico. Cuando le expliqué que estaba estudiando la organización, me dijo: “Todavía estamos muy flojos en eso. Aquí no supo haber proyectos”. María asintió ante el comentario y me dijo que cuesta que la gente se anote para trabajar o se comprometa.

Cuando llegamos a Cerezos, hubo una nueva asamblea, en el patio de la casa de Memo (almacenero y tesorero de la CUIC). Mientras pasaban el mate, Humberto iba entregando a los presentes unos recibos de la organización, comprobantes del pago de su cuota mensual. María siempre cargaba con la computadora portátil, donde iba guardando y registrando toda la información. Cada vez que Emiliano le pedía algo, abría cuidadosamente los archivos que se necesitaban. También guardaba las planillas donde registraban la asistencia de los pobladores a las reuniones y la lista de los que participaban en los proyectos. Emiliano ya me había dicho que estas planillas eran muy importantes porque “siempre hay gente que quiere engañar y robar”.

11 La COCAN trabaja con familias indígenas y criollas. En la historia argentina, la criolla se representa como una población sacrificada, desprotegida y perseguida por el Gobierno. Esto se muestra en *El Gaucho*, de Martín Fierro (Barrios 2005).

Luego de hablar de los proyectos, comenzaron a planear las acciones que cada uno tenía que llevar a cabo para el Festival del Cabrito: venta de boletos para la rifa, concurso de hacheros, etc. “El festival, propongo que lo organicen y que inviten al Gobierno de la provincia, para darle propaganda a las organizaciones cabriteras. Ustedes deben apuntar a vender el día de la fiesta. El año pasado, muchos vendieron muy bien. Yo quisiera que, para esa fecha, esté el matadero (que se contemplaba dentro del proyecto)”, exclamó Emiliano. Les advirtió que los políticos iban a estar en campaña y había que estar alerta “porque nosotros no necesitamos de los políticos”. “Hay que evitar que lo que nosotros hacemos se mezcle con la política local, nosotros tenemos que jugar para los productores”. Cuando el dirigente dijo esto, Memo le respondió: “Claro, don Emiliano, hay que jugar limpio”.

Después de que finalizó la asamblea, nos reunimos en el galpón para tomar mate y conversar. Mientras hablaba con Emiliano, llegaron Rodolfo y Memo, muy contentos. Habían logrado negociar con Victoria (la esposa del intendente) que el municipio les donara materiales de construcción para la base de cemento del silo, además del préstamo de una camioneta para llevarnos a Arboledas. Cuando nos lo contaron, Emiliano rió y me dijo: “Si un trotskista de izquierda se entera de esto, nos diría que cómo el oprimido se alía con el opresor”. Ahí destacó la importancia de las alianzas estratégicas que tiene su organización con funcionarios a nivel local, provincial y nacional.

El dirigente como mediador de dos mundos sociales: análisis de los relatos

Los relatos anteriores muestran la complejidad de resolver las problemáticas territoriales en función de que nos encontramos ante una doble interfaz social (Long 2007): entre los funcionarios y técnicos del MAGyP y Emiliano; y entre este y sus bases. Por interfaz social me refiero a puntos críticos de intersección entre actores con diferentes mundos de vida, basadas en discrepancias de valores, intereses, conocimiento y poder (Long 2007). Es importante tomar en cuenta que las interfaces deben analizarse como procesos de negociación continuos, en los que los actores se articulan y confrontan según las situaciones que atraviesan (Long 2007).

Como mediador, Emiliano tiene un trabajo complejo de articulación múltiple con actores en diferentes niveles (Wolf 1956). Por un lado, representa la voz y las problemáticas de los miembros adheridos a la COCAN, en reuniones con los funcionarios nacionales. Por otro, propone alternativas para resolver los problemas territoriales. Para ello, requiere capital político, definido como el conocimiento del mundo político y su funcionamiento y como la habilidad para movilizar gente (Gledhill 2000).

En su experiencia como dirigente, Emiliano ha participado en diferentes proyectos de desarrollo rural, en los que ha adquirido conocimientos concretos sobre diversos temas productivos, presupuestales y administrativos; lo que Borges (2009) llama pedagogía política.

Por ejemplo, Emiliano sabe qué se requiere para hacer una perforación de agua, conoce la práctica del manejo silvo-pastoril y los ciclos reproductivos de ciertos animales. Además, está familiarizado con las diferentes fases de la cadena de proyectos y todos los trámites burocráticos que pide el MAGyP para que puedan ejecutarse. En esta interfaz, dirigentes y funcionarios luchan por definir los problemas rurales y las alternativas para solucionarlos. El Estado tiene un discurso oficial, un “discurso divino” que asigna una identidad a los indígenas y campesinos y les da directivas y órdenes sobre lo que deben hacer (Bourdieu 1996). Emiliano, como portavoz político de su organización, confronta ese discurso y muestra que los avances pregonados (por los funcionarios que aluden a la gran cantidad de proyectos para el desarrollo rural) están muy alejados de solucionar las problemáticas territoriales. Por ello, aunque se le concedió una dirección a la COCAN, insiste en que “hay que dar la pelea interna en la SAF”.

Así como Emiliano tiene la capacidad para ascender territorialmente (Berger 2018b), es decir, sabe con qué funcionarios hablar, a qué oficinas gubernamentales acudir ante distintas problemáticas, también sabe descender territorialmente, vinculándose con la población de las comunidades rurales del Impenetrable. Para ello, precisa del poder simbólico, lo que Bourdieu (1996) define como el poder de hacer grupos.

La interfaz entre Emiliano y los pobladores que viven en diferentes comunidades rurales del Impenetrable resulta compleja, porque se trata de diferentes comunidades morales, con valores y formas de vida distintas, donde cada uno construye su reputación en función de las opiniones de otros (Bailey 1971). En efecto, el Impenetrable puede ser descrito como un territorio multiétnico y pluricultural (Balazote y Radovich 2004) donde habitan indígenas de diferentes etnias; descendientes de europeos y criollos. Estos son aquejados por problemáticas comunes como la falta de infraestructura, agua y la inseguridad jurídica de sus tierras. Más del 90% de la población del Impenetrable vive con alguna necesidad básica insatisfecha (NBI). Aquellas con mayores porcentajes fueron la falta de retrete, de agua potable y la vivienda precaria¹² (Fantin y Meichtry 2001). Si bien Emiliano también es de origen campesino e incluso tiene raíces indígenas, su historia de vida difiere de la de muchos de estos pobladores, pues desde joven tuvo la oportunidad de formarse en diversas actividades y proyectos (de fundaciones y de la Iglesia católica), que lo llevaron a viajar por distintas provincias del país y, posteriormente, a ocupar lugares importantes en organizaciones sindicales (Berger 2014).

Las asambleas muestran a los pobladores como tímidos y silenciosos; predomina la voz de Emiliano. Una primera lectura podría intuir que a las personas no les interesan los proyectos del MAGyP; sin embargo, esto contrasta con la cantidad de asistentes a todas las asambleas (recordemos que se trata de zonas donde es difícil transportarse y con caminos de tierra) y los diferentes aportes que hacen a la organización (ya sea en términos de pago

12 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina solo realiza censos con conglomerados urbanos, por lo que no hay datos oficiales sobre las condiciones socioeconómicas de la población rural. Utilizo un censo de Fantin y Meichtry (2001) en un área del Impenetrable como proxy para los lugares recorridos.

de cuotas o aporte de recursos para el sostenimiento de los integrantes de la COCAN, aspecto que analizaré más adelante). De la misma manera, es interesante cómo las personas no dicen nada cuando Emiliano pregunta si el terreno está en condiciones.

Los silencios de la población criolla y su dificultad para organizarse, así como la escasa experiencia que tienen en el manejo de proyectos, tienen que ver con un trasfondo histórico. “El criollo vivió aislado del Estado por mucho tiempo, su principal enemigo. Fue utilizado por el Gobierno para pelear en las diferentes guerras civiles y sometido por los dueños de las estancias como peones rurales. De aquí viene la cultura del criollo fugitivo que buscaba su independencia”, afirma Emiliano. Esta historia del criollo y su sistema de vida aislado hicieron que desde el Estado y el tercer sector no se les brindara asistencia, pues a diferencia de la población indígena, no tienen una organización comunitaria y generalmente se organizan en clanes de familias que viven dispersas (Raque reconoció los derechos de los pueblos indígenas,¹³ tuvo como consecuencia un gran número de políticas focalizadas hacia esta población, en detrimento de los criollos. Mientras que a los indígenas se les garantiza el acceso gratuito a la tierra, los criollos deben pagar por ella.¹⁴

El contexto anterior explica las dificultades que Emiliano y su equipo enfrentan al intentar articularse con la población criolla. Aunque su equipo esté compuesto por personas que provienen de estas comunidades, también se distancia de ellas, en el sentido de la formación que ha tenido (a través de la educación formal terciaria o secundaria, de capacitaciones diversas y viajes nacionales e internacionales, que han realizado como miembros de la COCAN).

El vínculo de Emiliano con su círculo íntimo del Impenetrable data de 2009, cuando conoció a Rodolfo, en un conflicto de tierras en Formosa. Este joven me comentó que le interesaba “ver el movimiento” y que, cuando le propuso a Emiliano que fuera al Impenetrable, este le puso como condición que se organizaran. Así nace la CUIC. Esto es central y muestra que la reputación de Emiliano con la población se basa, en parte, en su capacidad para apoyarlos con sus reivindicaciones en torno a la tierra.

La asamblea de Coquitos ilustra cómo Eustaquio y varios de los pobladores hablan de su preocupación por el proyecto de relocalización de la Reserva Grande y piden que Emiliano los instruya y asesore sobre el tema. De hecho, uno de los grandes logros de la COCAN fue que Capitanich (gobernador del Chaco) frenara la entrega del título de tierra a la asociación indígena MOWITOB, logrando un consenso entre pobladores indígenas y criollos, para que estos últimos pudieran quedarse en la Reserva Grande, sin necesidad de relocalizarse. Varios pobladores consideran que este hecho contribuyó a legitimar a la COCAN y su dirigente ante las comunidades.

13 La provincia del Chaco cuenta con una población total de 1 055 259 personas, de las cuales 41.304 son indígenas (INDEC 2010). Es una de las provincias con mayor porcentaje de población indígena en el país.

14 Kay (2007) sostiene que uno de los grandes errores de los programas de desarrollo rural ha sido creer que solo los indígenas son pobres, lo cual ha excluido a muchos campesinos de los programas de desarrollo rural. Además, esto ha hecho que las políticas que lidian con población indígena sean más populares y adquieran más recursos.

En 2013 Capitanich firmó un acta de acuerdo con la CUIC, donde se comprometió, entre otras cosas, a ejecutar un plan de regularización dominial; realizar perforaciones de agua; financiar proyectos de infraestructura; asistir con forraje a la ganadería campesina y construir viviendas rurales.¹⁵ El liderazgo de Emiliano en las comunidades tiene que ver con que “recorre el territorio”; esto significa que busca comprender su forma de vida. A diferencia de un técnico, no solo va a promocionar proyectos o a darles seguimiento, sino que se toma el tiempo de visitar a las familias, conocer sus modos de vida, actividades reproductivas y darles recomendaciones diversas. Así, tiene un rol pedagógico y didáctico (Berger 2009), que busca capacitar a las personas y que estas, a su vez, capaciten a otras, como cuando le plantea a Eustaquio que puedan ir otros campesinos para que aprendan el trabajo de manejo silvo- pastoril que hace en su chacra. Además, a Emiliano le interesa informarse sobre la política local y proponer o incentivar que las personas busquen alternativas para solucionar sus problemas (abuso de los intermediarios, que les compran el ganado a bajo precio, connivencia entre los políticos municipales y las autoridades encargadas de la sanidad agropecuaria; robo de maquinaria de proyectos públicos, etc.).

También es interesante ver la manera en que Emiliano manipula los símbolos para generar organización o para mantener unidos a los miembros de un grupo. Apela a lenguajes y rituales cercanos a los miembros de la comunidad moral (Bailey 2001, 1971) y busca entender sus valores y tradiciones (Bailey 1975). Por ejemplo, en todas las asambleas hay ritos de comensalidad. Si bien las personas tratan al dirigente con mucho respeto y distancia (le hablan de usted y le llaman don Emiliano o don Medina, por su apellido) él los llama “compañeros” o por su nombre de pila. Esto forma parte del lenguaje de amor que utiliza el dirigente para crear una sensación de equivalencia entre él y sus seguidores (Bailey 2001).

El lenguaje utilizado es variado; por un lado, Emiliano busca generar empatía con los pobladores. Esto es visible cuando logra romper el silencio de las asambleas a través de las bromas, ligadas a los usos y costumbres de las personas del campo (por ejemplo, cuando dice que parece el día del hombre porque no hay ninguna mujer o que los ve más gordos). Por otro, se conduce con seriedad cuando busca explicar el sistema de merecimientos y derechos (Quirós 2011) que adquieren los pobladores al participar en los proyectos del MAGyP. Así, él y su equipo buscan transmitir que los proyectos “no son regalos”, sino que implican “un ida y vuelta”, como solía decir el dirigente. Es por ello que utiliza metáforas cercanas a la gente del campo, para explicarles los compromisos y responsabilidades que implica participar en los diferentes proyectos. Por ejemplo, cuando les dice que “el que se come la vaca lechera no hace bien los deberes”, quiere decirles que los recursos destinados por el MAGyP deben ser utilizados para las actividades propuestas para el proyecto. La metáfora sobre el crédito que uno saca con el almacenero refiere a que todo proyecto tiene un orden lógico a seguir: no se puede instalar un silo sin que haya terreno y contrapiso. Al

15 Así puede constarse en el “Acta acuerdo entre el gobernador y la CUIC”, de 2013.

decirles que, si uno no le paga al almacenero, este no le volverá a prestar, busca enfatizar que la forma en que gasten y administren los fondos de los proyectos, es clave para su sustentabilidad en el tiempo y para volver a obtener fondos del Gobierno, a futuro.

Emiliano también distingue con claridad las tareas que le corresponden a él, como dirigente de la COCAN, y las de los pobladores. Cuando decía “yo ya hice mi parte, hagan ustedes la suya”, se refería a que él fue el encargado de gestionar los fondos y los proyectos ante los funcionarios y ahora las personas debían encargarse de que el proyecto caminara. Al igual que la burocracia, las organizaciones también utilizan tecnologías para organizar a la población: tienen que ver, principalmente, con la distribución de tareas que se hace para los proyectos y con el control de la participación de las personas en las asambleas, así como con el pago de sus cuotas de asociado. Esto último es central para el sostenimiento de diferentes actividades de la organización (pasajes, viáticos, trámites burocráticos, pago al contador para los balances, etc).

Sin embargo, Emiliano no solo genera organización a través de los proyectos del Estado, sino fomentando la identidad criolla. Más que para ser un mediador entre los proyectos que se gestan desde el MAGyP, esto lo habilita para incentivar a las personas de las comunidades a que tengan la iniciativa de crear sus propios proyectos o idear proyectos para luego conseguir financiamiento. Es por ello que en la asamblea de Cerezos trata el tema de la Fiesta del Cabrito y aunque en esa narración hable de la venta, el propósito, en realidad, es unir y contribuir a apaciguar los conflictos de la población, como me lo dijo alguna vez. La fiesta reivindica varias tradiciones gauchas: el concurso de hacheros, bailes y canciones típicas y la comida artesanal. Es importante, también, notar cómo se busca invitar al gobernador a la fiesta: de ese modo, el criollo busca reconocimiento de sus tradiciones por parte del Gobierno.

Los relatos muestran el recorrido de Emiliano por cinco localidades distintas del Impenetrable, donde existe una distancia promedio de 150 kilómetros entre una y otra, además de ser caminos de terracería. La circulación del dirigente por esos lugares sería imposible sin el trabajo organizativo que realiza su equipo íntimo y la ayuda que le brindan varios pobladores. El rol que cumplen sus seguidores y los pobladores del territorio en los proyectos es sumamente complejo. Sobre todo, en el sentido de que no estamos hablando de un solo proyecto, sino que cada territorio tiene un aluvión de varios, con diferentes requisitos e interlocutores del Gobierno nacional y provincial. Estos se ejecutan de manera simultánea y, aunque todos hablan de la importancia de la participación de la población y el fomento del asociativismo entre los pobladores, subestiman el tiempo, las capacidades y las tareas requeridas, más allá de las labores y actividades reproductivas de su vida diaria.

El equipo de Emiliano debió encargarse de hacer un relevamiento de las personas interesadas en participar de los proyectos; conseguir el terreno (para la instalación de los silos, el galpón y la carnicería); pedir presupuestos para la compra de insumos, distribuir

el trabajo entre los destinatarios y hacer un seguimiento. Los proyectos involucran una serie de capacidades y habilidades que tienen que ver con la esfera técnica, económica (administración y rendición de gastos) política (negociación con autoridades), social y burocrática (llenado de formularios y presentación de expedientes). También involucran insumos de diferente tipo: GPS, computadoras, internet, camionetas, teléfonos, electricidad y gasolina; que escasean en las comunidades rurales y tienen un alto costo. Esto hace que el dirigente deba generar organización y conocer los talentos de sus allegados.

Entre los seguidores de Emiliano hay quienes han cursado nivel terciario o actualmente son estudiantes universitarios. Estos jóvenes se dedican a coordinar la comunicación de las organizaciones en el territorio con la Mesa Directiva de la COCAN, a nivel nacional. Son letrados y usuarios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como María y Daniel, y se comunican con los técnicos y funcionarios a cargo de los programas. Aunque también haya seguidores que no tuvieron educación formal porque nunca asistieron a la escuela, estos se dedican a hacer otro tipo de tareas. Por ejemplo, Baldo, que tenía experiencia en albañilería, supervisaba que estuvieran bien hechos los contrapisos de cemento para la instalación del silo.

Las tareas sociales (el trato con los socios de la organización) y de logística (organización de asambleas y viajes) también requieren esfuerzos. Rodolfo destaca que él sabe “cómo tratar con los miembros de la organización y resolver disputas cuando un socio está molesto.” De la misma manera, se encargó de toda la logística del viaje. En nuestro recorrido visitamos cinco localidades distintas, donde tuvimos alimentos y hospedaje, así como diferentes personas que nos trasladaron en vehículos particulares de un lugar a otro. Esto fue gracias a la extensa red de parentesco y amistades que tiene Rodolfo. Cada vez que le preguntaba si quería que le contribuyera con algo de dinero, se negaba rotundamente y me decía: “No se preocupe por nada, usted es nuestra invitada”. Además, se ocupó de anunciar y convocar a través de la radio las diferentes asambleas y ver que llegaran los principales pobladores con los que el dirigente quería hablar.

La última idea que me gustaría resaltar es que, a pesar de que el dirigente instó a no mezclar la política con el trabajo de la organización, en la práctica, él y su equipo tienen una idea de cómo la política afecta los programas y proyectos del MAGyP, en diferentes niveles. Esto tiene que ver con cómo piensan el mundo político y su funcionamiento (Vommaro 2015), al igual que con la manera en que interpretan las reglas del juego político (Bailey 2001). Para Emiliano, el contexto electoral afecta a nivel nacional, porque el secretario de

**Las tareas sociales
(el trato con los socios
de la organización)
y de logística
(organización de
asambleas y viajes)
también requieren
esfuerzos.**



la SAF está apoyando a una compañera de la OPP, que se va a lanzar como candidata a la presidencia. Por su parte, pide que los pobladores se apuren a ejecutar los recursos y negociar con autoridades locales, antes de que vengan las elecciones, pues es una manera de aprovechar la coyuntura política para pedir y exigir a las autoridades locales.

El dirigente y su equipo también saben usar la política, o las negociaciones con los políticos, para fortalecer el trabajo de la organización en el territorio. Memo logró que la mujer del intendente le cediera un terreno para la construcción del silo y que le dieran material para la construcción. De la misma manera, consiguió que un empleado municipal nos transportara en un vehículo del municipio hacia otras localidades. Esto fue esencial, pues como era época de lluvias, todos los caminos estaban inundados y no había manera de salir de la localidad en transporte público. El dirigente también me comentó que estaba negociando con los funcionarios provinciales para que contrataran jóvenes de la CUIC como técnicos de los programas.

Conclusiones

En la interfaz proyectos del MAGyP- comunidades rurales del Impenetrable, Emiliano juega un rol como “emprendedor político” (Wolf1956). Debe prestar atención tanto a las expectativas de los funcionarios (a cargo de los proyectos de desarrollo rural y agricultura familiar) como a las preocupaciones de la población del Impenetrable, que ciertamente exceden los objetivos de los proyectos. En este sentido, se convierte en un mediador de dos rostros: debe conocer los patrones de comportamiento a seguir con la burocracia estatal y con las personas de las comunidades, conociendo su sistema cultural, valores y creencias.

El primer dilema que enfrenta Emiliano es apoyar y promover proyectos que fueron formulados “desde un escritorio”. Mientras recorrimos el Impenetrable, destacó que la tecnología y los insumos de los proyectos no están adaptados a esa realidad. Por ejemplo, la sala de faena móvil es difícil que circule y opere en caminos de barro, frecuentemente inundados e intransitables. Además, requiere buenas fuentes de electricidad y agua, las cuales escasean. No obstante, hay diversos pobladores que participan en los proyectos. Esto evidencia que existe un Estado en movimiento (Borges 2009) en el que el trabajo de los miembros de la COCAN resulta clave, no solo para implementar los programas del Gobierno, sino para resignificarlos y articularlos con las problemáticas del territorio. Es de ese modo que Emiliano y sus seguidores logran resolver, en parte, el dilema planteado.

Lo que el Estado presenta como proyectos para cubrir déficits hídricos y productivos, los mediadores lo transforman en recursos que pueden generar un uso compartido del territorio. Por ello, en las asambleas no solo se toca el tema de los proyectos, como planes que deben ejecutarse, sino que trata de verse cómo estos pueden aportar a las problemáticas comunitarias.

La inseguridad jurídica que viven varios pobladores busca resolverse a través de diversas prácticas organizativas: negociaciones políticas con el gobernador y búsqueda de consensos con la población indígena, así como concientizar a la población criolla para que luche por su tierra y las mejoras. De tal manera, las perforaciones de agua, los silos y la carnicería se resignifican para ser planteados como insumos de uso compartido, que ayuden a construir un territorio conjunto, donde criollos e indígenas desarrollen sus actividades productivas.

Bibliografía

- Aranda, Darío. 2016. "Una reparación que es despojo." *Página 12*, 10 de octubre. <https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-311419-2016-10-10.html>
- Bailey, Frederick. 2001. *Stratagem and Spoils: A Social Anthropology of Politics*. Oxford: Basil Blackwell.
- _____. 1975. "The peasant view of the bad life". En *Peasants and peasant societies*, compilado por Theodore Shanin, 299 -322. Middlesex: Penguin Books.
- _____. 1971. "Gifts and poison". En *The Politics of Reputation*, compilado por Frederick Bailey, 1-25. Oxford: Basil Blackwell.
- Balazote, Alejandro, y Juan Carlos Radovich. 2004. "Multiculturalidad y economía: El caso del interfluvio Teuco-Bermejito". *RUNA* 24: 103-122. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/1266/1222>
- Barrios, Gabriela 2005. "Aborígenes y criollos: armándose de la identidad necesaria". En *Conflictos centrales en la periferia de la globalización*, compilado por Jorge Prospero Roze y Ana Rosa Pratesi, 243-266. Resistencia: Fundación Ideas.
- Berger, Matías. 2014. "“Apenas bicicleta teníamos”: El proceso de organización del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR) en perspectiva histórica". *Cuadernos de Antropología Social* 40: 127-147. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-275X2014000200006&lng=es&tlng=es
- _____. 2009. "Formas de interacción y participación política en el proceso de organización del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR)". Tesis de Doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires.
- _____. 2018a. "En busca de reconocimiento: Las organizaciones de la AF, Campesina e Indígena ante el conflicto por la resolución 125". En *Actores, políticas públicas y conflicto agropecuario: a 10 años de la Resolución 125*, compilado por Marcelo Panero. Buenos Aires: Universidad Nacional de Villa María. [En prensa].
- _____. 2018b. "Unificar al sector un análisis etnográfico de los vínculos entre las organizaciones campesinas y las agencias estatales en Argentina." En *La producción de prácticas políticas colectivas: estudios etnográficos en Argentina y Brasil*, compilado por Nashieli Rangel Loera. [En prensa].

- Berger, Matías, y Jimena Ramos. 2014. "La disputa por la participación y las prácticas organizativas en el marco de la implementación de las políticas de desarrollo rural en la provincia del Chaco, Argentina". *Ruris* 8: 176-211. <http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ruris/article/view/1992>
- Borges, Antonaida. 2009. "O emprego na política e suas implicacoes teoricas para uma antropología da política". En *Estado y movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil*, compilado por Mabel Grimberg, María Inés Fernández Álvarez y Marcelo Carvalho Rosa, 15-36. Buenos Aires: Antropofagia.
- Borras, Saturnino. 2009. "Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges-an introduction". *The Journal of Peasant Studies* 36: 5-31.
- Bourdieu, Pierre. 1996. *Cosas dichas*. Barcelona: Gedisa.
- Brass, Tom. 2002. "Latin American Peasants: New Paradigms for Old?". *Journal of Peasant Studies*, 29: 1-40.
- Cowan Ros, Carlos, y Beatriz Nussbaumer. 2011. *Mediadores sociales: en la producción de prácticas y sentidos de la política pública*. Buenos Aires: Ciccus.
- Fantin, María Alejandra, y Norma Meichtry. 2001. "Demografía de aborígenes y criollos: el Chaco del Teuco- Bermejito". Ponencia presentada en el *Congreso Nacional sobre Problemáticas Sociales Contemporáneas*, Universidad Nacional del Litoral, 15 y 16 de agosto.
- Ferguson, James. 2007. *The antipolitics machine. Development, depoliticization and bureaucratization in Lesotho*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gledhill, John. 2000. *Power and its disguises. Anthropological perspectives on politics*. Londres: Pluto Press.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina). 2010. "Censo de población y vivienda", http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135
- Kay, Cristobal. 2007. "Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina". *Íconos, Revista de Ciencias Sociales* 29: 31-50
- La Capital. 2011. "La marcha del Frente Nacional Campesino llegó a Santa Fe y hoy seguirá hasta Rosario". 11 de junio. <https://www.lacapital.com.ar/politica/la-marcha-del-frente-nacional-campesino-llegoacute-santa-fe-y-hoy-seguiraacute-rosario-n397112.html>
- Long, Norman. 2007. *Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor*. México: CIESAS.
- MAGyP (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca). 2014. "Formularios de proyectos para el Impenetrable". Documento de trabajo interno.
- Obschatko, Edith. 2009. *Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina: un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002*. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca/ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura/ PROINDER. <http://www.proinder.gov.ar/Productos/Biblioteca/>

- contenidos/estinv.23.las%20eap%20familiares%20en%20la%20republica%20argentina.pdf
- Pérez, Germán y Ana Natalucci. 2010. “La matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista”. *América Latina Hoy* 54: 97-112.
- Quirós, Julieta. 2011. *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Ramos, Jimena. 2012. “La incidencia de los conflictos en el acceso y la gestión de los recursos naturales: el caso de dos proyectos de desarrollo rural implementados en el Interfluvio Teuco-Bermejito en El Impenetrable, Chaco”. *Miriada* 4 (8): 25-55. <http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/1413/1795>
- Schiavoni, Gabriela. 2010. “Describir y prescribir: la tipificación de la agricultura familiar en Argentina.” En *Las agriculturas familiares del Mercosur. Trayectorias, amenazas y desafíos*, compilado por Mabel Manzanal y Guillermo Neiman, 43-61. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
- Vommaro, Gabriel. 2015. “Interés, identidad, arreglos morales: notas para pensar la participación política popular en Argentina”. En *Ni punteros ni piqueteros. Organizaciones populares dentro del Kirchnerismo*, compilado por Pablo Forni y Luciana Castronuovo, 215-241. Buenos Aires: Edulp.
- Wolf, Eric. 1956. “Aspects of Group relations in a complex society: Mexico”. En *Peasants and peasant societies*, compilado por Theodore Shanin, 50-69. Middlesex: Penguin Books.

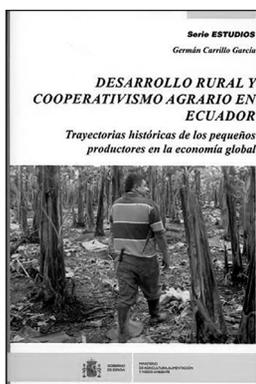


Reseñas

Desarrollo rural y cooperativismo agrario en Ecuador. Trayectorias históricas de los pequeños productores en la economía global*

Esteban Daza**

DOI: <http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.13.2018.3476>



Este libro ha sido publicado en la *Serie Estudios* del *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España* (2014) y se sitúa en medio de la coyuntura generada por la declaración¹ del “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, a la cual el autor interpela por el carácter determinista y reductor que esta hace de la complejidad del sector campesino latinoamericano. Se trata de un trabajo compuesto por ocho capítulos desarrollados en dos grandes bloques: el primero, titulado *Metamorfosis del mundo rural*, expone los momentos de continuidad y ruptura de la cuestión agraria e involucra el análisis los discursos de “verdad” que reflexionan sobre esta realidad. El segundo, denominado *Trayectorias históricas*, introduce la lectura sobre la modernización de la agricultura en el Ecuador a partir de la segunda mitad del siglo XX, período en que se despliega la estrategia cooperativista de organización campesina.

Dos ejes importantes componen la parte inicial del su estudio. El primero se centra en la enmarañada estructura material y simbólica de producción y reproducción del campesinado, que disputa su existencia a lo largo de un proceso histórico gobernado por diversos regímenes de fuerza, que parten de la eliminación del tributo indígena hasta la consolidación de la hacienda serrana para la región andina y las plantaciones para el litoral. El texto resalta la importancia durante todo el periodo de las estrategias subalternas que *asedian* dichas formas de expresión de poder.

Al mismo tiempo, da cuenta de la articulación de los cambios suscitados en las dinámicas agrícolas locales con las transformaciones del mundo rural, señalando cómo las transformaciones registradas en el mercado mundial de materias primas para la alimentación, terminan induciendo los usos de la tierra en el país, por ejemplo, el cacao durante finales

* Carrillo, Germán. 2014. *El Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario en Ecuador. Trayectorias históricas de los pequeños productores en la economía global*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

** Ecuador. Maestría de Filosofía y Pensamiento Social en FLACSO-Ecuador. Miembro del Grupo de Trabajo de “Desarrollo Rural, estudios críticos” de CLACSO. Correo: dazaesteban@gmail.com

1 Esta declaración la realizó la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el 25 de febrero de 2014.

del XIX, el banano a mediados del XX o el brócoli a finales del XX e inicios del XXI. Para el autor esta conexión de lo global con lo local no representa una lógica determinista de incidencia de lo externo sobre las dinámicas agrarias del país, sino que dichas influencias se conectan con las particularidades y diversidades de formas de administrar el poder sobre los recursos en las haciendas vinculadas al mercado de alimentos y las plantaciones emparentadas a los rubros de exportación. En otras palabras, cada hacienda y plantación utiliza sus propios mecanismos de control y disciplinamiento para generar un “estado de excepción” que les garantice el poder político y el aumento de sus ganancias.

Carrillo señala que las relaciones de fuerza en el agro entran en acelerados cambios desde inicios de la década del 50, periodo de emergencia del proceso de modernización conservadora. Dos son las prácticas que definen durante esta fase los cambios en la agricultura, por un lado, la “revolución verde”, y por otro, la promulgación de las dos leyes de Reforma Agraria (1964 y 1973). Bajo este contexto de transformación del paisaje agrario, hace su apareamiento el cooperativismo como acto de “respuesta del campesinado a la arremetida de la agricultura capitalista que circunda sus prácticas colectivas”. El cooperativismo se convierte para los agricultores, campesinos y comunidades en una estrategia de “resiliencia al despojo” provocado por la modernización agraria (Carrillo 2014, 137).

Haciendo un paréntesis sobre la narrativa histórica del agro en Ecuador, el autor propone un segundo eje de discusión, el cual se inscribe en la problematización de toda una tradición de estudios agrarios que han hegemonizado la comprensión de la realidad agraria y su influencia en la elaboración de instrumentos de intervención política y económica. Señala con detalle que ha sido el pensamiento “economicista” el predominante en las reflexiones y los diagnósticos sobre el mundo agrario, y dentro de este, las tesis del liberalismo político y económico han impuesto el factor “productividad antes que la sostenibilidad, la sobreexplotación antes que la conservación” (Carrillo 2014, 57). Al mismo tiempo, reconoce en las políticas agrarias la influencia del historicismo de Rostow, en tanto que considera que tales políticas fueron orientadas por las nociones de desarrollo, progreso, modernización, avance tecnológico, propuestas que señalan el camino para superar el subdesarrollo. Además, dichas nociones durante la segunda mitad de siglo XX, se encontraban en medio de la disputa ideológica con el “espectro del socialismo” que había instalado en el continente por la Revolución Cubana.

En lo que respecta, específicamente, el caso ecuatoriano, el autor sostiene que entre las décadas del 60 y 70 será la sociología la disciplina que produzca la mayor cantidad de estudios sobre la realidad agraria. Define a estos estudios como aportes valiosos e interesantes para la reconstrucción de un pensamiento agrario, sin embargo, manifiesta que en muchas ocasiones estas “investigaciones viajaban más por abstracciones que por hechos concretos” (Carrillo 2014, 82). Además, encuentra en algunos de estos análisis sobre el carácter político del campesinado ciertos “reduccionismos” que clasifican a las luchas campesinas de un frente anticapitalista.

A partir de esta crítica, Carrillo se instala en la querrela sobre la re-significación del papel que las movilizaciones sociales agrarias —sindicatos, partidos políticos y gremios— jugaron en la negociación de su incorporación a la modernización capitalista. Para ello señala oportuno “renovar el interés por las micro-historias y los estudios de caso” (Carrillo 2014, 82), en tanto que posibilitan iluminar la singularidad del acontecimiento y permiten identificar, al mismo tiempo, elementos de la estructura material y simbólica de la sociedad de mercado, evadiendo por esta vía las interpretaciones demasiado teóricas e ideologizadas.

La primera parte del libro cierra con la discusión sobre las reformas agrarias y el cooperativismo rural. En esta sección, el autor sostiene la importancia de la transferencia de la tierra a manos de agricultores. Las haciendas debían pasar por efecto de la reformas a núcleos de “campesinos organizados en cooperativas o pre-cooperativas” (Carrillo 2014, 128). La cooperativa jugará un rol importante en el Ecuador y en el resto de la región latinoamericana, al constituirse en una “forma de organización social y de empresa como método de integración nacional de las masas campesinas y como estructura de canalización de servicios asistenciales del Estado” (García 1970 citado en Carrillo 2014).

La segunda parte del texto inicia su discusión a partir de la premisa que el cooperativismo sirve de andamiaje organizativo para los campesinos en tiempo de reforma agraria. Bajo el título de *Trayectorias históricas*, el autor enlaza la primera parte reflexiva del texto, con el análisis de un estudio de caso sobre la experiencia cooperativista del litoral desarrollada al clamor de la demanda productiva de banano y las transformaciones de la agricultura en general.

Con el enfoque histórico de fondo, el relato sobre el cooperativismo en el Ecuador aborda el proceso de constitución y persistencia de la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL). El estudio de esta cooperativa va desde el momento en que fue colonia agrícola asentada en el caserío Shumiral, luego aborda los conflictos que mantuvo con la *United Fruit Company* por el derecho a la tierra, su relación con la teología de la liberación y los sindicatos agrarios, hasta los modestos beneficios que obtuvo de la segunda Ley de Reforma Agraria de 1973, que le permitiría el acceso a la tierra. Durante los primeros años de constitución de la UROCAL esta se ve sujeta a las drásticas transformaciones del paisaje agrario.

El autor destaca dos momentos clave durante este periodo: primero, la arremetida y persecución del Estado a dirigentes y líderes a través de sus cuerpos represivos; y segundo, aquel ambiente en el que los campesinos dependían de lo que produce su tierra se verá drásticamente modificado hasta el punto de una cuasi desaparición de la agricultura tradicional. El recorrido histórico de la UROCAL da cuenta que la cooperativa se integra, años posteriores a la reforma agraria, a los proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI). Son épocas de inicio de las políticas de ajuste estructural que abandona el proceso reformista que impulsó el cooperativismo. En su lugar se instala una serie de políticas que desregulan el acceso a la tierra por parte de sectores campesinos. La promulgación de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 es el síntoma del momento neoliberal que cierra la etapa de la reforma agraria en el país.

En medio de este contexto, Carrillo (2014) desarrolla una serie de descripciones acerca de los logros que la UROCAL consigue a través de su historia, incluso llegando hasta la primera década del siglo XXI. El primer momento de consolidación da cuenta de la experiencia crediticia de la cooperativa con el Fondo de Desarrollo Rural Marginal, el primer proyecto de producción y comercialización de cacao, la participación de la UROCAL en el paro cacaotero, la respuesta al fenómeno del Niño entre 1982-1983 que desplegó una serie de programas de atención a la población, hasta la orientación de la cooperativa hacia la actividad de extracción minera. Mientras, el segundo momento de consolidación se centra en la producción y comercialización de productos orgánicos, primero banano y después cacao, a pesar de la ola agroindustrial que concentra capitales, recursos productivos y mercado.

Ahora bien, la constatación en terreno que hace el autor al visitar los territorios de incidencia de la UROCAL, le permitirán definir el carácter organizativo, que hasta la actualidad, sostiene esta organización. La propuesta de la cooperativa intenta, por un lado, fortalecer la apuesta de producción orgánica del sector bananero a nivel regional; y por otro lado, consolidar una agenda agraria para la región de la costa. Esta segunda parte del texto finaliza con la reflexión que hace el autor acerca del recorrido histórico y coyuntural que vivió la UROCAL, que ha pasado de una etapa reformista a una etapa empresarial y “productivista”; sin embargo dichos cambios no implicaron el abandono de los principios políticos y socioeducativos adquiridos en su trayectoria histórica, sino que han sido principios esenciales que coadyuvan a definir un tipo de organización campesina “exitosa” que correlaciona su carácter campesino con la disponibilidad financiera para sus proyectos.

A manera de conclusión, podemos señalar tres contribuciones que el presente estudio de caso, realizado por Germán Carrillo, aporta a las discusiones sobre la cuestión agraria. Primero, retoma con interés la lucha por la tierra llevada a cabo por campesinos provenientes de pisos altos y cejas de montaña que se ven inmersos en una “historia de coyunturas en la que el Estado primero, el mercado después, delimitara la vida de estos campesinos y campesinas” (Carrillo 2014, 335). Segundo, explora un periodo de tiempo poco profundizado por los análisis agrarios e historiográficos contemporáneos, y lo hace a través del estudio de aproximadamente 40 años de una organización campesina que “colige con gran parte de las transformaciones de la historia nacional” (Carrillo 2014, 335). Tercero, sitúa los espacios locales incididos por dimensiones globales, aunque como constata el autor, también dichos espacios generan sus propios espacios sociales y democráticos, además de sus actividades económicas.

Política editorial

EUTOPIA es una revista nueva dentro de las ciencias sociales de la región y busca, tal como su nombre lo evoca, la reflexión sobre lo que sucede en nuestra sociedad tomando como eje de análisis el territorio. Eu-topia proviene del griego: eu, bueno y topos lugar, literalmente significaría buen lugar y es justo sobre lo que buscamos reflexionar tanto a nivel de Ecuador como de América Latina. No basta con la teoría de moda del “buen vivir”, si no se dispone de un “buen lugar” para implementar una nueva forma de hacer economía, de recrear las relaciones de reciprocidad, de hacer política participativa, en concreto de construir una sociedad más justa y solidaria. La construcción de un “buen lugar”, no como una Utopía sino como algo real y viable es un reto en el cual es necesaria la incorporación activa del pensamiento social de avanzada en la región.

Los esfuerzos de esta revista buscan mostrar, tanto a académicos como a los *policy makers*, las nuevas reflexiones que existen sobre el territorio, el desarrollo, y las interpretaciones que provienen desde la economía, la sociología y las demás ciencias sociales. Al mismo tiempo, estos esfuerzos también están orientados hacia rescatar lo que hace la gente en los territorios, para revalorizar su rol no solo económico, sino también su potencialidad de cambio. En un mundo cada vez más globalizado, existe la tendencia a pensar que las soluciones nos llegarán algún momento desde fuera y seguimos con el sueño de construir una sociedad similar a la de los países avanzados, cuando justamente estos se encuentran en crisis y miran los senderos por lo que transitamos lenta y difícilmente en la construcción de territorios más vivibles, es decir, eutópicos.

La presente es una publicación de la Maestría de Desarrollo Territorial Rural, de la FLACSO-Sede Ecuador.

Contenidos:

- *Dossier*: esta sección está dedicada a desarrollar un tema específico previamente aprobado por el Comité Editorial de la revista.
- *Estudio de Caso*: esta sección está dedicada a presentar investigaciones sobre territorios particulares.
- *Contra-punto*: esta sección está dedicada a un tema de debate (pueden ser respuestas u observaciones a los artículos anteriores)
- *Reseña*: sección de crítica bibliográfica, provee información sobre las últimas publicaciones en el campo de los estudios del desarrollo económico y territorial.

Las personas interesadas en publicar artículos en la revista Eutopía deberán ingresar a la página <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/index> seguir las instrucciones y normas de publicación y edición.

Selección de artículos

- 1.1 Los artículos deberán ser originales, inéditos y no estar aprobados para su publicación en otras revistas.
- 1.2 El autor interesado deberá enviar su artículo a la Revista Eutopía a través de la página <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/index> donde deberá registrarse en la página y llenar el formulario solicitado; al final de éste, marcar la opción AUTOR y guardar.
- 1.3 El título del artículo no debe exceder las 15 palabras y debe estar en español o portugués y en *inglés*. Podrá ser modificado por los editores de la revista, previo acuerdo con los autores.
- 1.4 Los artículos deben estar precedidos de un resumen, en español o portugués y en *inglés*, no mayor a 800 caracteres con espacios (100 a 150 palabras).
- 1.5 Los autores deben proporcionar de cinco (5) a ocho (8) descriptores o palabras clave que reflejen el contenido del artículo.
- 1.6 La extensión de los artículos deberá considerar tanto el cuerpo del artículo como sus notas al pie y bibliografía, de modo que el número total de caracteres con espacios (cce) será el siguiente:

<i>Dossier:</i>	30.000 a 40.000 cce
<i>Estudio de caso:</i>	20.000 a 30.000 cce
<i>Contrapunto:</i>	20.000 a 30.000 cce
<i>Reseña:</i>	7.000 a 9.000 cce

- 1.7 Los artículos serán presentados en letra Times New Roman tamaño 12, márgenes 2,5 cm, a espacio sencillo y sin ningún tipo de sangrías o marcas de texto.
- 1.8 Los artículos podrán ser enviados en idioma español o portugués.
- 1.9 Para su evaluación y selección final, los artículos serán enviados a lectores anónimos, quienes emitirán un informe bajo el sistema de doble ciego o revisión por pares.
- 1.10 Eutopía se reserva el derecho a decidir sobre la publicación de los trabajos, así como el número y la sección en la que aparecerán.
- 1.11 Eutopía se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo.
- 1.12 Los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados como “recibidos” y notificados de su recepción al autor; los que no, serán devueltos a sus autores/as y serán declarados como “no recibidos”.

Norma editorial

Las normas editoriales de la revista Eutopia están disponibles en: <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/about/submissions#authorGuidelines>

Bibliografía

[caso un solo autor]

Apellido, Nombre (año). *Título del libro en letra cursiva*. Ciudad o País donde fue impreso: Editorial.

[caso dos autores]

Apellido, Nombre y Nombre Apellido (año). *Título del Libro en cursiva*. Ciudad o País donde fue impreso: Editorial.

[caso cuatro o más autores]

Apellido, Nombre, Nombre Apellido, Nombre Apellido y Nombre Apellido (año). *Título del libro en letra cursiva*. Ciudad País donde fue impreso: Editorial.

[caso capítulos de libros]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo en comillas dobles”. En *Título del libro en letra cursiva*, Nombre Apellido (Comp.): número de página. Ciudad País donde fue impreso: Editorial.

[caso de artículos de revista impresa]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre de la revista* y número: número de página.

[caso de artículos de revista digital]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre de la revista* número, dirección electrónica (visitada en mes día año).

[caso de artículo en revista popular]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre de la revista*, fecha de publicación

[caso de artículo en periódico]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del artículo”. *Nombre del periódico*, mes día, Sección. (en caso de utilizar varios artículos de periódico en los que no consten autor, ubicar en la sección DOCUMENTOS)

[caso de tesis]

Apellido, Nombre (año). “Nombre de la tesis”. Disertación doctoral (o el grado respectivo), Nombre de la Universidad.

[caso de ponencia o seminario]

Apellido, Nombre (año). “Nombre de la ponencia”. Ponencia presentada en Nombre del Congreso, mes días, en Ciudad, País.

[caso de documentos electrónicos en página web o blog]

Apellido, Nombre (año). “Nombre del documento”. Disponible en Dirección electrónica, visitado en mes día año.

[caso de no contar con la fecha del documento]

Apellido, Nombre (s/f). “Nombre del documento”. Disponible en Dirección electrónica, visitado en mes día año.

[caso de no contar con un autor y la información sea responsabilidad de alguna organización o similar]

Nombre de la organización (fecha). “Nombre del documento”. Disponible en Dirección electrónica, visitado en mes día año.



ÍCONOS 61

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Año 22
No. 61
Mayo de 2018
Cuatrimestral

DOSSIER

Hacia una reapropiación de la geografía crítica en América Latina

Presentación del dossier

Sofía Zaragocin Carvajal, Melissa Moreano Venegas y Soledad Álvarez Velasco

Las "otras" geografías en América Latina: alternativas desde los paisajes del pueblo Chatino
Gerónimo Barrera de la Torre

Geografías de la cocaína: trayectos de mujeres colombianas encarceladas por drogas en Ecuador
Ana María Cerón Cáceres

El mapa son los otros: narrativas del viaje de migrantes centroamericanos en la frontera sur de México

Rodrigo Parrini Roses y Edith Flores Pérez

Cartografía social de Chapiquiña: reivindicando los derechos territoriales indígenas en los Altos de Arica, Chile

Joselin Leal Landeros y Alan Rodríguez Valdivia

Ideologías geográficas y producción de la naturaleza: elementos para pensar la resignación de los bosques frente a la crisis del capital

Luis Fernando De Matheus y Andrei Cornetta

Pueblo de papel: la producción social del territorio en el poblado industrial de Atenquique, México
Alejandro Ponce de León Pagaza

ENSAYO

Evocación a Jorge León Trujillo (1948-2017)
Hernán Ibarra

ENSAYO VISUAL

Cuerpo / territorio
Sofía Acosta "La Suerte"



Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador

Información y colaboraciones: (revistaiconos@flacso.edu.ec)
Revista Íconos: www.revistaiconos.ec

TEMAS

Saber hablar: construcción del capital militante en movimientos populares en Argentina
María Mercedes Palumbo

Prácticas políticas de los sectores populares en Río de Janeiro: urbanización de la favela Santa Marta
Maximiliano Duarte Acquistapace

RESEÑAS

UNASUR: poder y acción en Suramérica
de Fabio Sánchez Cabarcas
César Augusto Niño González

The Crisis of Multiculturalism in Latin America
de David Lehmann, editor
Luis Fernando Gutiérrez Domínguez

Indígenas de la nación. Etnografía histórica de la alteridad (Milpa Alta, siglos XVII-XXI)
de Paula López Caballero
Charlyne Curiel

Número anterior:
ÍCONOS 60: El trabajo político en América Latina: actores, recursos y trayectorias

Número siguiente:
ÍCONOS 62: Economía popular: entre la informalidad y la reproducción ampliada

Íconos. Revista de Ciencias Sociales está incluida en los siguientes índices científicos: *Academic Search Premier*; *Directory of Publishing Opportunities* (CABELLS); Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC); Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales (CLASE); DIALNET; *Directory of Open Access Journal* (DOAJ); *Emerging Source Citation Index* (ESCI) Web of Science; FLACSO Andes; Fuente Académica Plus; *Hispanic American Periodical Index* (HAPI); *International Bibliography of the Social Science* (IBSS); Informe Académico Thompson Gale; *International Institute of Organized Research* (IIZOR); LatAm-Studies, LATINDEX- catálogo; MIAIR; *Political Science Complete*; REDALYC; REDIB; Scielo Ecuador; *Sociological Abstracts*; *Social Science Journals. Sociology Collection*; *Ulrich's Periodical Directory*; *Worldwide Political Science Abstracts* (WPSA).
Página web: www.revistaiconos.ec
Correo electrónico: revistaiconos@flacso.edu.ec

No. 22

ISSN: 1390-4299
1390-3691

URVIO

Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Estudios estratégicos

Tema central

Raúl Salgado Espinoza y Daniela Barreiro

Estudios estratégicos: entre la rigurosidad y la subjetividad

María Fernanda Noboa González

Transdisciplinariedad investigativa: una apuesta en construcción para las Relaciones Internacionales e inteligencia

Anita Cecilia Mancero García y Oscar Eduardo Múnera Perafán

Los Estados fallidos: una visión desde la Geopolítica

Michael Daniel Revelo Arellano

Securitización como supervivencia, securitización como actos del habla: crítica a la Escuela de Copenhague

Miguel Antonio González Martínez y Manuel Alexander Betancourt Montoya

La transformación del Ejército Nacional de Colombia: una interpretación teórica

Misceláneo

Andrés Rincón Morera

Abordajes teóricos sobre la relación entre seguridad ciudadana y violencia urbana en Colombia: una lectura crítica

Entrevista

Brenda Focás: Entrevista a Lucía Dammert

Miedo al crimen, prevención del delito y narcotráfico: desafíos para las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina.

Urvio No. 21: **Inteligencia militar** • Urvio No. 23: **Migraciones**

URVIO forma parte de las siguientes indexaciones: • Emerging Sources Citation Index (ESCI) • Actualidad Iberoamericana • SciELO Ecuador
• CLASE, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades • Directorio LATINDEX • DIALNET • EBSCO • FLACSO-ANDES
• REDIB • MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) • LatAm Studies. Estudios Latinoamericanos • Google académico.

Encuéntrela en: <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/index>

La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito-Ecuador. Teléfono: (00593) 2 3238888

Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (RELASEDOR)
FLACSO Sede Ecuador

No. 23

LetrasVerdes

REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES FLACSO - ECUADOR

ISSN 1390 - 6631

ARTE Y NATURALEZA

EDITORIAL

Introducción: Arte y Naturaleza

Teodoro Bustamante

DOSSIER

Arte e ideas sobre Naturaleza

Alejandro Jaime Carbonel

Narrativas del cine ambiental en Buenos Aires:

¿discursos expertos o enfoques alternativos?

Soledad Fernández Bouzo

Allpa Mama: relaciones sociedad-naturaleza, procesos sociales y agencialidad

Natalia Catalina Valdivieso Kastner, Anna Premauer Marroquín

ENSAYO

¿Por qué se debe considerar al marxismo ecológico en la era del capitaloceno?

Alejandro Escalera-Briceño, Manuel Ángeles-Villa, Alejandro Palafox-Muñoz

La confianza absoluta en la ciencia, o de cómo la geoingeniería sostiene la salvación del planeta

Vera Sanoja Zerpa

Almacenamiento energético frente al inminente paradigma renovable:

el rol de las baterías ion-litio y las perspectivas sudamericanas

Martin Ariel Kazimierski

Movimientos sociales populares frente el Tercer Sector: estudio comparado de organizaciones campesinas de Brasil, Argentina y México

Lucas Henrique Pinto

El acceso a espacios verdes en escuelas públicas y privadas en Curridabat, Costa Rica

Carolina Castillo Echeverría

Turismo basado en naturaleza y conservación biológica: decisiones de uso de suelo en Mindo

Jorje Ignacio Zalles

Disponible en: revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/index

Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales
FLACSO Sede Ecuador

EUTOPÍA-13

N.º 13 - junio 2018

TEMA CENTRAL

- Continuidad y renovación en la acción colectiva de los ganaderos familiares del litoral noroeste de Uruguay
Virginia Courdin y Eric Sabourin
- Mujeres y organización comunitaria. El caso de las palmeadoras de Tlaxiaco, Oaxaca, México
Tomás Ortega Ortega, Juan Felipe Núñez Espinoza, Verónica Vázquez García, Ivonne Vizcarra Bordi, Paola Ma. Sesía y Diego Flores Sánchez
- La producción de líderes políticos situados en dos comunidades políticas mexicanas
Brenda Griselda Guevara Sánchez y Francisco Javier Verduzco Miramón
- Gestión del agua en Azuay: base de la organización rural y la trascendencia hacia la incidencia nacional
Paola Pila Guzmán
- Territorialidades campesinas en Loja, Ecuador: análisis de sus dinámicas organizativas a partir de tres casos
Marco Alvarado Torres

CONTRAPUNTO

- Fortalecer los colectivos campesinos en los Andes ecuatorianos. Análisis desde las provincias de Chimborazo y Cotopaxi
Nasser Rebaï

ESTUDIO DE CASO

- Contracercar, producir y resistir. La defensa de los bienes comunes en dos comunidades campesinas (Argentina)
Andrea Gómez Herrera, Cristián Jara, María del Huerto Díaz Habra y Ana Villalba
- El rol de Emiliano como mediador: prácticas organizativas de los campesinos en los proyectos estatales
Jimena Ramos Berrondo

